

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**Alcances y límites de la acción del Estado a través del
artículo 50 de la Constitución política de la República de
Costa Rica**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Ovelio Rodríguez León

DIRECTOR:

Luis Sánchez Agesta

Madrid, 2015



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5327102544

TE

1742

ALCANCES Y LIMITES DE LA ACCION DEL ESTADO
A TRAVES DEL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

OVELIO RODRIGUEZ LEON

DEPÓSITO

DEDICATORIA

A mis queridos Padres Ovelio e
Iris; a mi querida esposa María
Inmaculada y a nuestro hijo
por nacer.

AGRADECIMIENTO

Al Profesor Director de esta Tesis,
Dr. Don Luis Sánchez Agesta, a quién
el presente trabajo como su autor le de_
ben mucho.

INTRODUCCION

En general, es conocido el prestigio internacional de que goza nuestro país dentro de los países latinoamericanos a causa de la estabilidad de su régimen político, por su democracia, por la evolución estable y permanente de su sistema jurídico y por el respeto a las instituciones y derechos propios y ajenos.

A través de la historia institucional de país, se podría decir — que han predominado en la lucha política dos tendencias de pensamiento bastante definidas.

Por un lado, está el pensamiento o concepción liberal, que considera que el desarrollo social y económico del país debe encaminarse por los cauces de la libertad de las personas y empresas tendientes a favorecer el desarrollo de sus fines particulares, con las naturales limitaciones que establece el derecho y propiedad de los demás y la acción mínima del Estado que garantiza una serie de derechos necesarios para la formación de la personalidad humana y de la participación económica de la iniciativa privada.

Por otro lado, dentro de las limitaciones propias que imperan — en nuestro sistema político, existe la tendencia a creer que la intervención del Estado en la vida social de los ciudadanos es necesaria para garantizar la realización de los derechos y principios Constitucionales de la democracia liberal, que muchas veces no logran hacerse efectivos a través de la ideología del "laissez faire, laissez passer".

Se hace necesario entonces la participación coercitiva de un ente capaz de regular la vida social y económica. Dicho ente es - el Estado y realiza tal función a través de todos los medios a su - alcance: el ordenamiento jurídico, su potestad impositiva, etc. En dos palabras, por medio de sus potestades de imperio.

El particular desarrollo de nuestras instituciones jurídico-políticas, a partir del establecimiento de las Garantías Sociales en el año 1942 durante la administración del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, han dado lugar a una profusa legislación y participación reguladora del Estado Costarricense en todos los ámbitos - de la vida del ciudadano, especialmente en lo económico y social.

Es importante analizar, por lo tanto, la participación que han tenido los diferentes partidos políticos en dicho proceso de intervención estatal en las esferas de los particulares.

En el desarrollo histórico de nuestros procesos políticos - electorales, se han distinguido dos tendencias ideológicas bien definidas: La de Liberación Nacional y la de los partidos que en las distintas elecciones se han agrupado como oposición al citado partido. La primera de esas agrupaciones ha tomado como lema el de que es necesario una mayor intervención por parte del Estado en los diferentes ámbitos del desarrollo social, económico y político del país para garantizarle a los ciudadanos un mínimo de bienestar social y económico, de acuerdo con los postulados democráticos - que señala la Constitución Política en el capítulo respectivo de las Garantías Sociales.

La otra tendencia coincide con los principios filosóficos del

liberalismo político, equivalente a la política económica del "laissez faire--laissez passer", según la cual las personas más inteligentes y capaces tendrán mejor status social, ya que en una sociedad libre, según los seguidores de ésta tendencia, rige la ley de la oferta y la demanda. Como es bien sabido, una sociedad cimentada sobre dichas bases económicas, sólo puede producir desigualdades y una gran marginación de los estratos sociales más necesitados.

Bien conocido es a través de los estudios de los distintos técnicos nacionales en las ciencias sociales y económicas, que dichas teorías liberales no han logrado desarrollar integralmente al país, ya que estas agrupaciones políticas han carecido de una orientación teórica y programática que defina con claridad su acción política. Dichos grupos, más bien se han caracterizado por medidas aisladas, de solución a casos concretos.

Por su parte, la tendencia "liberacionista" fundada en ideas de varios planificadores políticos nacionales como el Padre Jorge Volio, Alfredo González Flores y Rodrigo Facio, en cambio, ha intentado sentar las bases de un desarrollo permanente e integral, tratando de orientar al país conforme a un plan nacional de desarrollo.

Por otro lado, el país no está inmune a los problemas económicos y políticos mundiales que padecen los países subdesarrollados, debido a los conflictos de naturaleza económica que existen y proceden de los países desarrollados, principalmente de las grandes potencias y que repercuten en nuestros problemas internos, lo cual tiene enorme influencia en los precios en el mercado interna-

cional de los productos tradicionales, arrendamientos de nuestras tierras para la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, el costo de los fletes en los transportes de los productos de exportación, la penetración del capital extranjero de tipo monopolista, la inflación, etc.

Todos estos fenómenos, hacen imprescindible el establecimiento de un equilibrio político, y racional explotación de nuestros productos naturales junto con un plan de bases jurídicas para la inversión extranjera y nacional que hagan posible el desarrollo socio-económico del país en forma armónica y equilibrada.

Analizando el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, se observan diferentes elementos que me parecen bastante adecuados para orientar la acción política, social y económica del país, de acuerdo con los principios democráticos occidentales.

Me parece que dicho artículo da base para el establecimiento de una política dirigida al bien común dentro de los marcos de la democracia representativa.

Desde un punto de vista axiológico, dicha norma tiene un honrado contenido político, social y económico ya que dirige la acción estatal hacia la satisfacción del interés general de los particulares, estimulando y organizando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Con ello, el Estado puede lograr un equilibrio sano en el bienestar de los particulares y de las fuerzas sociales en conflicto, lo que obviamente no se consigue por medio del mecanismo de la oferta y la demanda.

Somos un país pobre, que posee dignidad. Por ello, considero necesario que las decisiones políticas fundamentales que nos —
atañen, independientemente de las influencias de las dos fuerzas —
ideológicas antagónicas mundiales, deben ser tomadas de acuerdo —
con nuestros propios intereses a fin de que no cedamos nuestra so—
beranía, es decir, el derecho auténtico que tenemos de escoger —
nuestro particular desarrollo sin intervención extraña. En realidad
considero necesaria la participación del Estado en los aspectos so—
ciales y económicos del país. Sin embargo, creo indispensable que
todos los ciudadanos tengamos una mayor participación en la solu—
ción de los problemas nacionales y no debemos pensar que la maqui—
naria del Estado lo puede todo sino que somos nosotros mismos los
encargados de construir una patria mejor, para ello, resulta indis—
pensable que todos pensemos en que la política es una ciencia y me—
dio necesario para buscar el bien común de todos los ciudadanos.

Nuestro análisis, por lo tanto, se dirigirá a determinar si el
Estado Costarricense ha intervenido efectivamente organizando y —
estimulando la producción y repartiendo la riqueza entre los distin—
tos sectores de la población, según los términos del artículo 50 de
nuestra Constitución Política, con el fin de lograr la plena vigen—
cia de nuestros principios que fundamental nuestro régimen demo—
crático.

Por otro lado, también se analizará y determinará la actua—
ción legitimadora del artículo 50 como fundamento de ciertas medi—
das sociales y económicas por parte del Estado. A la vez, la posi—
bilidad de calificar a Costa Rica simultáneamente como un Estado —

- 6 -

de Derecho y un Estado Intervencionista con base en el artículo 50 de la Constitución de Costa Rica, objeto del presente estudio.

**PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DEL ARTI
CULO 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE COSTA RICA.**

CAPITULO I:

**ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ARTICULO 50
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA.**

A) EVOLUCION DEL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION HASTA EL AÑO 1942

El Derecho Constitucional Costarricense, tuvo su origen en la Constitución de Cádiz de 1812 (1). En efecto, el Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, primera Constitución de nuestro país, según el historiador Hernán Peralta, es "hijo de la Constitución de Cádiz y luego padre de las cartas fundamentales sucesivas" (2).

A partir de la Independencia de España en 1821, el desarrollo constitucional del Estado costarricense se ha caracterizado por una legislación que va a regular los derechos y deberes de los ciudada-

-
- (1) Es conveniente señalar las diferencias entre la Constitución de Cádiz y la Constitución de los Estados Unidos de América.
- CADIZ: a) Gobierno de una Monarquía. Es decir, fué creada para regir una Monarquía constitucional.
- b) Gobernada por un Rey constitucional.
- c) Siguió la tradición del Derecho francés, sobre todo del Derecho Napoleónico.
- d) Constituyó un sistema unicameral.
- e) Se usa el sistema de delegación en el sufragio, o sea, no hay voto directo, es indirecto.

ESTADOS UNIDOS: a) Regirá una República Federal.

b) Tendrá un Presidente Constitucional.

c) Siguió la tradición del Derecho Inglés.

d) Constituyó un sistema bicameral.

e) Cada ciudadano participa directamente en el sufragio.

JIMENEZ, Mario Alberto. Desarrollo Constitucional de Costa Rica, 2ª ed. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1973. P. 28, 29, 30, 44.

- (2) PERALTA, Hernán. Las constituciones de Costa Rica, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1962, p. 9.

nos solamente en el aspecto político y meramente jurídico, de acuerdo con la concepción liberal, política y económica del siglo XIX, sin tomar en cuenta las bases del contenido social y económica como función del Estado. Así, podría observarse que las diferentes Constituciones del país de fecha posterior a 1821, consignaron formalmente los derechos y deberes de los ciudadanos, propios de la democracia liberal Costarricense posterior.

La Ley fundamental de 1825 de Costa Rica era una copia de la Constitución Federal Centroamericana, que estaba sustentada en los ideales de la Revolución Francesa y de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Una de las disposiciones de mayor trascendencia política para el desarrollo socio-económico del Estado Costarricense fue su configuración como República libre y soberana, porque con ello, sin intromisión extraña, nuestro país empezará a darse sus propias características democráticas, sociales y económicas.

Así, por medio del decreto de 15 de noviembre de 1838 dictado por la Asamblea Constituyente, Costa Rica asumía la plenitud de su soberanía, formando un Estado libre e independiente (3).

Creo importante citar esa disposición porque con ella Costa Rica empieza a desligarse definitivamente de la Unión Centroamericana y comienza también a dar sus primeros pasos como Estado libre, determinando sus propios destinos políticos.

(3) ZELEDON, Marco Tulio. Lecciones de Ciencia Constitucional y Constitución Política de Costa Rica, Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1945. p. 82.

Con la Ley de Bases y Garantías nos separamos de la Confederación Centroamericana, pero Francisco Morazán, siguiendo su afán unionista declaró nula dicha Ley y restituyó constitucionalmente la Ley Fundamental de 1828, mientras se promulgaba una nueva y declaró que Costa Rica con base en esa ley seguiría formando parte de la República Centroamericana.

Luego, de la caída de Morazán, una Asamblea Constituyente — emitió el 9 de abril de 1844 el primer texto que lleva el título de Constitución Política del Estado libre y soberano de Costa Rica (4)

Con la Constitución del 22 de noviembre de 1844, se cambia el título de Estado por el de República y se logra la separación definitiva de la Unión Centroamericana (5).

Durante el lapso histórico del desarrollo Constitucional de Costa Rica, a partir de la ley Fundamental de 1825 hasta la Constitución de 1917, se observa que no existía una política de contenido económico y social por parte del Estado, más bien como dijimos anteriormente, se tendía a regular exclusivamente los derechos y deberes del ciudadano en el plano político. Tampoco se incluía en ella un capítulo de Garantías Sociales. La corriente social en ese entonces, tendía a proteger al individuo del Estado.

En ese entonces, el Profesor Cerdas Cruz expresa lo siguiente con relación a esa situación: "mientras que en nuestro país se alcanzó un florecimiento de las libertades democrático-burguesas clásicas

(4) Ibid.

(5) Ibid.

sicas, completándose así en esa etapa, desde el ángulo nacional - económico y social, quedaron pendiente de realización las tareas de la revolución democrática-burguesa" (6)

A partir de la Constitución del 8 de junio de 1917, en su artículo 10 del capítulo I, se incluyó una importante innovación tendiente a proteger a la clase trabajadora.

Esa actitud, se debió a varias causas: a) las influencias del marxismo que empezaba a tener influencias en el mundo; b) el ambiente que desató el reformismo del Padre Volio y c) finalmente, a las ideas de justicia tributaria de Don Alfredo González Flores.

En ese artículo 10 se establecía: "la obligación del Estado - de velar por el bienestar de los trabajadores, emitiendo para ello las leyes necesarias, y que a falta de iniciativa colectiva, el Estado debía promover y en todo caso apoyar en la medida de sus recursos las instituciones que tuvieran por objeto armonizar sobre bases de justicia las relaciones entre patronos y obreros, y las - que tendieran a mejorar las condiciones económicas de éstos". (7)

En dicho artículo resulta, la necesidad de la intervención — del Estado para armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo. Se nota ya la inclinación del Estado a proteger a las clases

(6) CERDAS CRUZ, Rodolfo. La Crísis de la democracia liberal - en Costa Rica. Editorial Universitaria Centroamericana, - San José, Costa Rica, 1972. p. 174.

(7) Artículo 10 Constitución de Costa Rica de 1917 (derogada por Decreto Ejecutivo número 1 del 3 de Septiembre de 1919).

trabajadoras, como reacción a la explotación del trabajador que prevalecía entonces como producto de la Revolución Industrial.

Con la introducción de ese artículo, se comienza a vislumbrar la política del Estado a buscar el bien común, dando mayor contenido social a los principios de la democracia liberal.

Al respecto, con relación a ese importante cambio, el Profesor Marco Tulio Zeledón expresa que "esta es sin duda uno de los pasos más avanzados de nuestra historia Constitucional para mejorar las condiciones de los trabajadores a base de una mayor justicia y equidad sociales, y constituye la fuente originaria de todo el arsenal de leyes tendientes a resolver la cuestión social que se han emitido posteriormente" (8).

En la legislatura ordinaria de 1943, a iniciativa del Presidente Calderón Guardia, se reformó la Constitución y se introdujo en la Carta vigente de 1871, el Capítulo de Garantías Sociales. En el artículo 19, aunque se declaraba la inviolabilidad de la propiedad privada, sin embargo, se señalaba su función social en caso de utilidad pública o social.

Así, durante la administración del Doctor Calderón Guardia, lo que se hizo fue plasmar positivamente una serie de derechos que venían a proteger los intereses de la clase trabajadora tendientes a lograr una efectiva justicia social mediante el equilibrio de los factores de producción.

(8) ZELEDON, Marco Tulio. Op. cit. p. 99.

Es importante señalar que en el artículo 22 de la Declaración de los Derechos del Hombre, se establece una relación equivalente al artículo 50 de nuestra Constitución vigente y anteriores, en el sentido de que habla de la seguridad social y de la necesidad de establecer un mínimo de bienestar indispensable, de contenido socio-económico, para el desarrollo de la personalidad del individuo. Se nota también que dicho artículo parte del análisis de la concepción individual de la persona influenciada por la Revolución Francesa de 1789 y que tiene un hondo espíritu liberal.

El artículo 22 de la Declaración dice lo siguiente: "Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" (9)

Las fuentes motivadoras de la iniciativa Presidencial, fueron las filosofías Cristianas de Justicia Social de la Iglesia enmarcadas en las Encíclicas Papales de León XII y Pío XI, *Rerum Novarum* y *Quadragesimo Anno* respectivamente, las corrientes marxistas universales y los principios adoptados por las Constituciones de América en el sentido de darle protección a la clase trabajadora (10). Se puede decir que la población de la Iglesia tendía a con-

(9) Declaración de los Derechos del Hombre, art. 22.

(10) Estas afirmaciones se pueden probar por las diferentes conductas entrelazadas y sucesivas que históricamente se han dado en los diferentes movimientos sociales y religiosos tales como:

trarrestar el movimiento marxista ateo, justificando la tesis "ni - socialismo marxista ni capitalismo liberal" por medio de los principios Cristianos de la Justicia Social.

En el campo interno, la influencia del partido Vanguardia popular, que había nacido en el año 30, sobre todo luego de su alianza con el Bloque Calderonista, por entonces en el poder.

Podrían citarse otras influencias internas que fueron madurando en los Costarricenses un nuevo despertar en la forma de re

(cont. pág. ant.)... a) La conducta de la Iglesia Católica ante el movimiento marxista. b) La revolución bolchevique con el - Marxismo en 1914; o sea que están englobadas en conductas - universales que se fueron introduciendo y asimilando a nivel regional, el Presidente de entonces se inspiró en ello, por su formación basada en los principios del Social Cristianismo, - contenido en las Encíclicas. VEASE: a este respecto. MALA VASSI, Guillermo. Fundamentos del Social Cristianismo en Costa Rica, San José, Costa Rica, 1974, p. 34.

Discursos del Doctor Rafael Angel Calderón Guardia, de Mayo de 1942 y Mayo de 1943. Asamblea Legislativa de Costa Rica (Archivo).

LASCARIS, Constantino. Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica, Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1973.

AGUILAR BULGARELLI, Oscar. Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. Editorial Costa Rica, San José Costa Rica, 1969

STONE, Samuel. Dinastía de los Conquistadores. EDUCA. Colección Seis, San José, Costa Rica, 1976.

BLANCO-SEGURA, Ricardo. Monseñor Sanabria. 2ª ed. Editorial Costa Rica. San José. Costa Rica 1971.

GAMBOA, Francisco. Ensayo histórico. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica, 1976.

ACUÑA VALERIO, Miguel. El 48. Imprenta Lehmann, San José, Costa Rica, 1974.

solver la cuestión social. Me refiero al espíritu reformador y de justicia social que imprimieron el Padre Volio y su partido Reformista y de Don Alfredo González Flores, con las reformas tributarias de corte progresivo y la nueva orientación del Estado.

Consideramos necesario, aunque sea apenas someramente — explicar la reforma al artículo 29 de la Constitución Política de 1871 que proclamaba la "inviolabilidad de la propiedad", pero a la vez le asignaba una función social y pública cuando el interés colectivo así se lo exigiera.

Aunque no se vincula directamente con el artículo objeto de nuestro estudio, si es indispensable, sin embargo, establecer limitaciones a la propiedad privada para lograr el bienestar general de los habitantes de la República. Bien podría tratarse de expropiación de los medios de producción como también de la propiedad inmueble.

En el mensaje Presidencial al Congreso Constitucional en el año 1942, el Doctor Calderón Guardia cita una expresión de León XIII, de la Encíclica Rerum Novarum, justificando el sentido de la función social de la propiedad "el derecho de propiedad individual emana no de las leyes humanas sino de la naturaleza humana; la autoridad pública no puede, por tanto, abolirla, sólo puede atemperar su uso y conciliarlo con el bien común (11).

(11) CALDERON GUARDIA, Rafael Angel. Mensaje del Presidente de República al Congreso Constitucional, Imprenta Nacional Mayo, de 1942. San José de Costa Rica, p. 4.

En los fundamentos introductorios para el establecimiento de las reformas a la Constitución, el Doctor Calderón Guardia, expresa lo siguiente: "Nos hemos inspirado en la necesidad de dar un — moderno sentido a la Constitución en el hecho indiscutible de que — Costa Rica no debe quedar rezagada del ritmo evolutivo que hoy sa cude al mundo, sin que por ello se deban tocar ninguno de los preceptos fundamentales que han sido base de su estabilidad democrática.

Negar que el mundo vive un momento trascendente y que la — humanidad busca con anhelo una mayor justicia social para retornar a la paz duradera que no puede basarse sino sobre ella, equivale a ir contra la evidencia. Costa Rica no puede sustraerse del influjo de las corrientes universales" (12).

En el artículo 51 del Proyecto de Reforma presentado durante la administración de Calderón Guardia en 1942, equivalente al 50 actual de nuestra Constitución, decía lo siguiente: "El estado Costarricense tiene una función que consiste en procurar a todos los habitantes del país un mínimo de bienestar compatibles con — las libertades políticas de que disfrutaban, la que cumplirá racionalizando la producción, distribución y consumo de las riquezas, dando al trabajador la especial protección a que tiene derecho, protegiendo a la madre, al niño y al anciano desvalidos, y adoptando aquellas medidas que aseguren el progreso y la tranquilidad colectiva".

(12) IBID.

Es interesante observar que este artículo, a la vez que reconoce los derechos políticos formalmente consagrados en la Constitución, exige el logro de un mínimo de bienestar socio-económico de los ciudadanos, con lo cual le da al Estado la facultad de intervenir en la economía nacional, organizándola y estimulando la producción y procurando racionalizar la distribución y el consumo de la riqueza. En dicho artículo, se observa que ya nuestros gobernantes se interesaban en darle contenido real a los principios de la Democracia representativa en el sentido económico y social.

Por otro lado, se nota que se quería darle amplia protección a los individuos, como función primordial protectora del Estado, pero sin diferencia de ninguna clase. Sin embargo, se observa que la materia relativa a la seguridad social se incluye en ese artículo, cuando en realidad debió haberse consignado aparte.

Vale la pena recordar que dentro de las reformas a las Garantías Sociales, además de los fines orientadores del Estado, estaba el establecimiento del salario mínimo, la jornada de 8 horas diurnas, derecho de sindicación, derecho a la huelga, seguros sociales, etc.

El Presidente Calderón Guardia, en el citado mensaje Presidencial al Congreso Constitucional, en 1942, decía: "el artículo 51 es la base del nuevo concepto del Estado, que ya no puede limitar su acción a una gestión administrativa, pura y simple, ni a permitir el libre juego de factores que no pueden vivir ni progresar sin un cabal ordenamiento de los mismos. La armonía social, exige, antes que la abierta competencia de las grandes fuerzas económicas, la intervención del Estado a fin de evitar que unas se impongan sobre otras, con detrimento del desarrollo tranquilo de la colectividad". -

(13). De lo anterior, se desprende que la acción del Estado debía ampliarse, debía dársele un mayor marco de acción para coordinar y armonizar los diferentes factores de la producción que participan en la vida social.

Para establecer un equilibrio justo entre los factores del capital y del trabajo, ya se hacía necesario la intervención del Estado para establecer el equilibrio social, ante el peligro de que una clase se impusiera y sojuzgara a la otra.

El Estado, debía sobrepasar su simple función policiaca y administrativa para organizar el caos social de las diferentes fuerzas en conflicto.

Otra fuente básica para las citadas reformas constitucionales fué la Constitución Política de Colombia, que estaba bastante avanzada en dicha materia.

El título tercero de la Constitución referida, en su artículo - 15 proclamaba la función social del Estado en forma clara y precisa. Luego, en el artículo 28 de la misma, se consagra un equilibrio de la intervención del Estado en la economía, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas. o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho.

Es obvio que existe cierto paralelismo entre el citado artículo y el 51 del "Proyecto de reformas constitucionales" del Doctor Calderón Guardia, en el sentido de que hablan ambos de "distribución y consumo de las riquezas y de dar al trabajador la especial -

(13) IBID.

atención a que tiene derecho" (14)

El dictámen de la Comisión Especial encargada de establecer observaciones y variaciones al Proyecto del Presidente Calderón Guardia en el capítulo relativo a las Garantías Sociales decía lo siguiente:

TITULO III DE LAS GARANTIAS SOCIALES

Artículo 51: "El Estado procurará el mayor bienestar de los Costarricenses, protegiendo de modo especial a la familia base de la nación; asegurando amparo a la madre, al niño, y al anciano y al enfermo desvalido; estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" (15).

En el informe de la Comisión Especial del Congreso, expresaba que "sus miembros han estudiado bien el proyecto enviado a iniciativa del Ejecutivo y que luego de haberlo analizado y estudiado lo someten a consideración del pleno del Congreso con ciertas variaciones de forma, pero que, en cuanto al contenido sustancial, permanecen inalterables los nobles propósitos de mejora social que impulsa la acción del Jefe de Estado" (16).

Finalmente, el artículo 51 quedó igual a como lo formulara el dictamen, anteriormente citado, de la comisión Formuladora, con

(14) Constitución Política de Colombia de 1942. Arts. 15 y 28. Art. 51 del Proyecto de Reforma Constitucional de 1942.

(15) Art. 51 Dictámen Comisión Especial del Congreso 1942.

(16) IBID.

la salvedad de que a última instancia se le agregara, luego de "enfermo desvalido", los términos "y organizando y estimulando la producción" (17)

B) DESDE LAS REFORMAS DE 1942 HASTA EL PRESENTE

Posteriormente a esas reformas, al término de la administración Calderón Guardia, el no reconocimiento del triunfo de Don Otilio Ulate por parte del Congreso y la corrupción de las administraciones de Calderón Guardia y de Don Teodoro Picado, trajeron como consecuencia la guerra civil de 1948.

Como producto de los sucesos de la revolución del 48, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, con el objeto de dar nuevas directrices socio-económicas al Estado y de restituir el orden constitucional.

En la nota explicativa que acompaña al proyecto de Constitución, elaborado por la Junta Fundadora de la Segunda República, se expresaba: "Una buena Constitución Política debe ser un todo orgánico, armonioso, cuyos diferentes capítulos guarden relación lógica entre sí, y respondan a un mismo criterio fundamental sobre cuáles sean los fines del Estado y cuál sea la forma en que éste deba organizarse para cumplirlos mejor. Para lograr esa finalidad, es indispensable que el Cuerpo Político, necesariamente numeroso que vaya a promulgar la Carta Fundamental, tenga frente así un proyecto que le proporcione una visión de conjunto sobre la nueva

(17) IBID.

organización que se aspira darle al Estado. Dentro de ese criterio que nosotros sustentamos, creíamos necesario, presentar a esa - Asamblea un proyecto de Constitución que, resumiendo los más avanzados principios jurídicos, económicos, políticos y sociales adaptables a nuestro medio, sirviera de base a nuestros debates sobre lo que en definitiva habrá de ser la Constitución Política de la Segunda República de Costa Rica" (18).

Aunque las bases de la reforma social habían quedado plasmadas en el 43 con el Doctor Calderón Guardia, en 1949 se volvió a - hacer hincapié en la necesidad de ampliarlas y consolidarlas.

En realidad, al igual que en el año 1942, ahora también se hacía notar por parte del Proyecto de Constitución originado de la Junta de Gobierno, defendido por la fracción democrata en el seno de la Constituyente, la necesidad de ampliar el radio de acción del Estado dejando su mera función administrativa para buscar de una manera más real su participación decidida en los ámbitos sociales y - económicos del país.

En cuanto al artículo 51, en el Proyecto original de la Junta, se le confería una amplia intervención al Estado, fijándole claras - metas a su participación.

De todas las innovaciones que se pretendieron introducir en - el proyecto de la Junta de Gobierno, las que más temor despertaron

(18) AGUILAR BULGARELLI, Oscar. "La Constitución de 1949". Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1973, p. 72.

en la Asamblea Constituyente, fueron aquellas que autorizaban al - Estado para intervenir de manera decisiva en las actividades privadas de los Costarricenses. Así, por ejemplo, el artículo 54 reconoce la propiedad privada pero dejaba abierta la posibilidad de que - el Estado interviera directamente sobre ella, cuando los interes de la colectividad así lo demandaren. Luego el artículo 59 decía textualmente: "El estado orientará la economía nacional en beneficio de la colectividad, tratando de asegurarle a cada actividad económica los medios adecuados para incrementar la riqueza y hacerla accesible al pueblo". (19)

"Son de utilidad pública la producción y la distribución de los artículos de primera necesidad".

Se observa en ese que el Estado debía interferir directamente en la actividad económica del país, productora de las divergencias sociales, y con ello tratar de disminuir las diferencias que fueran surgiendo en el camino espontáneo de la producción de la riqueza - nacional. Para el logro de esos fines, el mencionado artículo declaraba de utilidad pública la producción y distribución de los artículos de primera necesidad, con lo cual se pretendía la buena alimentación de toda la población sin diferenciación alguna.

En otras reformas, contenidas en el mencionado proyecto de la Junta de Gobierno, a la Constitución de 1871, podemos citar las siguientes:

(19) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Antecedentes, proyectos y reglamentos". Imprenta Nacional, San José, Costa Rica 1951.

En el párrafo, segundo del artículo 60, se estipulaba que la empresa privada debía destinar un porcentaje de sus ganancias, el cual sería fijado por ley, para constituir un fondo de ahorro en beneficio de los trabajadores.

Por otro lado, el proyecto estipulaba la prohibición de los monopolios de carácter particular, la regulación de la banca y los seguros por parte del Estado, así como la fijación de 30 años como plazo máximo para la explotación de las riquezas nacionales por una compañía particular.

El artículo 67 era todavía más revolucionario en el ambiente nacional. En él se especificaba que el Estado tenía el dominio eminente sobre todos los bienes existentes en el territorio nacional.

Al efecto, se le confería, entre otras facultades, las siguientes: a) Imponer limitaciones a la propiedad privada; b) intervenir o reservarse la explotación de aquellas actividades económicas en que fuera indispensable hacerlo; c) decretar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública o de necesidad social, previa indemnización justa; d) dar Leyes que impidieran los monopolios y autorización para expropiarlos y e) finalmente la autorización a las instituciones autónomas para intervenir en el mercado para regular científicamente la producción y los precios (20).

La reacción al proyecto se dejó sentir en el ambiente nacional por parte de los representantes conservadores.

(20) IDEM. Arts. 60 y 67.

En realidad, era inútil pensar siquiera que en un país que se había desarrollado dentro de un ambiente "paternalista" donde imperaba la ideología del "laissez faire", se aceptara de primer momento la intervención directa del Estado en los asuntos económicos principalmente.

Por otra parte, los diputados que apoyaban el proyecto, tenían nuevas ideas, nuevas soluciones a los crecientes problemas socio-económicos que ya por entonces sufría el país.

Como miembro de esa tendencia, el Profesor Don Fernando Fournier Acuña, expresaba lo siguiente: "pero hoy la situación es muy distinta. Ya Costa Rica, descrita magistralmente por nuestro máximo escritor, Manuel González Zaledón. Ya han desaparecido los dorados tiempos de Don Cleto González Viquez. Nuevas exigencias se hacen sentir. Las necesidades del Estado son mayores. Los deberes de los ciudadanos se han multiplicado. Las necesidades del pueblo han crecido. El Estado no puede permanecer al margen, como simple guardián del orden público. No es — que pretendemos implantar el Estado Totalitario, monopolizador, Pero si estimamos que las obligaciones y deberes del Estado han crecido. Tratar de gobernar a Costa Rica con las viejas fórmulas de don Cleto y de don Ricardo, es cerrar los ojos a la realidad contemporánea, es volver la espalda al mañana para abocarnos a la muda contemplación de los tiempos idos. Hemos dicho en muchas ocasiones que la etapa de los gobiernos patriarcales, al — estilo de don Ricardo y don Cleto ha sido superada. Después de la revolución es extemporáneo pensar en un retorno al pasado. Para solucionar todos los grandes problemas que afectan al país hay

que pensar en términos modernos con nuevas fórmulas, con nuevos planes de gobierno" (21).

Ese texto de fundamento a la tesis de proyecto que proponía - la Junta de Gobierno, se asemeja a las mismas justificaciones que había dado el Presidente Calderón Guardia en el año 1942, o sea, siete años antes, para fundamentar la introducción del capítulo de Garantías Sociales y más concretamente el artículo 51 de la Constitución Política. Se hacía necesario que el Estado tomara mayor - participación directa en todos los ámbitos de la vida nacional, tanto en el aspecto social como en el económico abandonando la posición eminentemente administrativa, para entrar a tomar parte en la organización y estímulo a la producción repartiendo la riqueza en la forma más equitativa posible.

Sin embargo, podría decirse que hay una diferencia entre esas dos innovaciones a nuestra Carta Política. Las reformas del 42, tendían principalmente a proteger al trabajador y a darle Seguridad Social, a la vez que se creía necesario que el Estado interviniera más activamente en la vida del país. En cambio, el proyecto de la Junta de Gobierno que fuera rechazado por la Constituyente en su versión original, se fundamentaba en un concepto más moderno de Estado Intervencionista. Veían al Estado, formulando normas programáticas, de acción, para orientar toda la estructura social y económica del país. Al aspecto social le dieron mayor amplitud en el sentido de - que el objetivo del bien común no se concentraba básicamente en la clase trabajadora sino que a toda la población.

(21) AGUILAR BULGARELLI, Oscar. Op. cit. p. 86.

Dice el maestro Marco Tulio Zaledón, que el Constituyente - del 49 fue sin titubeos más allá, en la concepción social del Estado que el legislador del 43 (22).

Esa nueva posición encarnada en la fracción parlamentaria - del Social Demócrata, sería contrarrestada por aquellos que se - apegaron a la idea de tomar como base para la nueva Constitución la Carta de 1871. Básicamente, los oponentes al proyecto de Constitución argumentaban su fuerte tendencia social, la intervención - del Estado y ser excesivamente reglamentista.

En realidad, la posición era bastante conservadora y reaccionaria contra el verdadero sentido democrático e intervencionista - que quisieron darle los miembros de la "Junta de Gobierno", quienes no tenían la intención de implantar un Estado marxista. Sus medidas eran de orientación social democráticas y basadas en los estudios realizados por el "grupo de Estudios para los problemas Nacionales" y tendientes a encauzar al país por las nuevas exigencias socio-económicas que reclamaba la época.

Ya en la Asamblea Constituyente, ante el temor de que los grupos opositores mayoritarios rechazasen el proyecto, la fracción - social Demócrata instó a los Constituyentes para que se aprobara el capítulo de las Garantías Sociales tal y como estaba en la Carta de 1871.

Sin embargo, esa tesis tuvo una afortunada oposición ya que -

(22) Citado por AGUILAR BULGARELLI, Oscar. Op. cit. p. 113.

lograron que se estableciera un debate acerca del referido capítulo, aunque considerando que debía adaptarse a la realidad socio-económica nacional.

Los Constituyentes se opusieron definitivamente al proyecto presentado por la fracción Social-Demócrata por considerarlo de corte socialista.

Rechazado el proyecto de la Junta de Gobierno, preparado por la fracción parlamentaria antes mencionada, los Constituyentes procedieron a elaborar el Capítulo de las Garantías Sociales, tomando como base la Carta Política vigente de 1871.

A pesar del espíritu conservador que reinaba en el seno de la Constituyente, y de haber sido rechazado el proyecto presentado por el "Gobierno de Facto", es posible afirmar que todos los diputados estaban de acuerdo con el establecimiento de las Garantías Sociales, aunque más de alguno quiso reaccionar pero ya el paso estaba dado y terminó absorbiéndolos las realidades históricas del momento.

En ese sentido, Aguilar Bulgarelli expresa: "a pesar de este temor al conservadurismo de los Constituyentes debemos reconocer que al tratar el capítulo de las Garantías Sociales, los Constituyentes en su mayoría trabajaron más con sentido nacional que particular en el resguardo de sus intereses. Incluso muchos actuaron en contra de su propia ideología y evitaron con eso que se malograron muchas conquistas que se había dado en la legislación social". (23).

En general, todos estaban imbuidos de los principios cristiau

no de justicia social y terminaron aceptando por unanimidad la introducción del capítulo en mención, el cual se adaptaba a las tendencias universales del momento.

Empezado el debate en relación con el artículo 51 de la Constitución, que es objeto del presente estudio, se hizo ver que no tenía sentido el que en un artículo como ese, tal como estaba consignado en la Constitución de 1871, se hablara de la familia, ya que la médula del citado artículo se refería principalmente a los fines del Estado en relación directa con la organización y estímulo de la producción para repartir equitativamente la riqueza. Al consignar asuntos ajenos a ese tópico lo que se quería era darle protección social a los ciudadanos en el renglón de enfermedad, vejez, riesgos profesionales en general y protección especial a la familia, - con lo cual no se justificaba que se incluyeran dentro de ese artículo. Lo mejor era que tales derechos quedaran estipulados en -- otro artículo aparte tal y como se encuentra hoy día.

El diputado Don Rodrigo Facio aclaró que "la fracción Social Demócrata había venido empeñada en que se autorizara la intervención del Estado en materias tan importantes como la organización de la producción nacional. En este sentido el proyecto del 49 traía una serie de disposiciones nuevas. Sin embargo, al quedar como base de discusión la Carta del 71, pensamos incluir en un nuevo - capítulo aparte todo lo relacionado con la economía del Estado, pero a falta de seguridad en cuanto a su aprobación por la Cámara,

(23) AGUILAR BULGARELLI, Oscar. Op. cit. p. 113.

consideramos que un concepto de la importancia del artículo 51 en ninguna forma debe desecharse, razón por la cual preferimos votar el mencionado artículo tal y como lo trae la vieja Constitución" (24)

En relación con el mismo tema, el diputado Volio Sancho dijo que ese artículo equivalía a toda una política de gobierno, orientada a buscar el bienestar general de todos los habitantes sin distinciones de ninguna clase. (25)

El diputado Vargas Fernández, abogó para que se separara el asunto de la familia y de las protecciones sociales al enfermo y al anciano en un artículo aparte, y posteriormente propuso la redacción del mismo de la siguiente manera: "El Estado procurará el mayor bienestar de los Costarricenses, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" (26)

Luego se sugirió que se cambiara el nombre de "Costarricenses" por el de "habitantes de la República", con lo cual la protección enunciada en ese artículo 51, alcanzaba a todos los residentes extranjeros del país.

En un artículo aparte, 51 de la Constitución Vigente quedó lo referente a la familia, quedando esta bajo la protección del Estado, lo mismo que la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.

(24) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, acta número 110.

(25) IDEM.

(26) IDEM.

En definitiva, el artículo 50 de la Constitución vigente de Costa Rica reza igual a como está en la nota anterior salvo el mencionado cambio.

Finalmente, a manera de conclusión, de este capítulo se puede decir que a partir de la Colonia, nuestro país se desarrolló bajo - Constituciones que simplemente formulaban los derechos y deberes de los ciudadanos. Esa época fué estacionaria en cuanto a la participación activa del Estado, tanto en lo formal como en el plano real.

Se puede decir que, a partir de la Constitución de 1917 se empieza a notar el interés Estatal por luchar por el bienestar general de los trabajadores, brindándoles adecuada protección.

Ello dice el maestro Marco Tulio Zeledón, fue fuente de los - cambios ocurridos en materia social en el país (27)

Es durante la época de los años cuarenta que el país empieza a sufrir una transformación Constitucional, pasando de aquella actitud despreocupada en el Gobierno, a otra de mayor conciencia de — los problemas nacionales.

Así, en el año de 1942, vimos que durante la administración del Dr. Calderón Guardia, se establecieron las Garantías Sociales, con lo que se buscaba la protección de la clase trabajadora y realizar un equilibrio entre la posición ventajosa del patrono y la desventajosa del trabajador. También con esa innovación, vimos que se pretendía una mayor intervención del Estado para lograr transformar en algo

(27) ZELEDON, Marco Tulio. Op. cit., p. 100.

las injustas estructuras socio-económicas del país.

Finalmente, en la Constitución de 1949, se quisieron mantener las Garantías y hasta ampliarlas. No obstante, en sustancia el artículo 50 de la Constitución vigente, en sus líneas generales, es similar al 51 de la Constitución de 1871.

CAPITULO II:

ANALISIS DOGMATICO DEL ARTICULO 50
DE LA CONSTITUCION POLITICA

Dentro de los Estados democráticos Occidentales, el poder soberano pertenece al pueblo, quien lo ejerce fundamentalmente a través del voto.

Así, la democracia moderna es básicamente una democracia representativa, en donde el pueblo delega sus poderes a los gobernantes, legitimándolos para tomar las "decisiones fundamentales" en nombre de todos los ciudadanos. Las autoridades públicas, por lo tanto, actúan como simples depositarios temporales del poder soberano que les ha sido conferido para velar por los intereses del pueblo.

Desde el siglo XVIII y como garantía fundamental de los ciudadanos frente a las autoridades públicas, los diferentes Estados han adoptado textos jurídicos que recogen los derechos y garantías de los particulares frente al Estado (parte dogmática), lo mismo que el conjunto de competencias (conjunto de deberes y poderes jurídicos) que tienen a su disposición los órganos estatales para satisfacer sus cometidos (parte orgánica).

Dichos documentos reciben el nombre de CONSTITUCIONES aunque es conveniente señalar que Inglaterra se rige por una Constitución no escrita.

En realidad, existen diversas concepciones de lo que es la Constitución y que parten de diferentes premisas. Lo que sí es irreversible es que "es necesario acoger el principio de que todo Estado tiene Constitución, porque no es dable pensar siquiera un Estado que no esté constituido de alguna manera" (1)

El Profesor don Luis Sánchez Agesta, define la Constitución diciendo que es: "el derecho fundamental de organización. Este concepto alude a su manifestación jurídica; al carácter es pecífico fundamental que la singulariza dentro del Derecho; y a su objeto o contenido, la organización" (2).

Un concepto sociológico de la Constitución lo encontramos en Sismondi, quien define a la Constitución como "la manera de existir de una sociedad, de un pueblo o de una nación" (3).

Stein, por su parte la define como "La forma en la que la pluralidad de la voluntad del pueblo se configura en voluntad — unitaria del Estado" (4)

La concepción racional normativa la concibe como un sistema de normas establecidas para regular la organización interna del Estado. Modernamente, sin embargo, se considera que — existen dos clases de Constituciones: la material y la formal. La primera está constituida por todo el conjunto de las relaciones y fuerzas políticas que en cada momento le confieren unidad al Estado. La segunda, por su parte, es el conjunto de normas que regula la organización estatal, sus funciones y sus relaciones con

(1) BIDART CAMPOS, GERMAN J. "Filosofía del Derecho Constitucional" (Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1969) P. 71.

(2) SANCHEZ AGESTA, LUIS. "Principios de teoría política". Editora Nacional, Madrid, 1976, p. 329.

(3) GARCIA PELAYO, M. "Derecho constitucional Comparado". (Edición mimeografiada, Facultad de Derecho, U. de C. R. San José, Costa Rica, 1970) p. 13.

(4) Ibidem, p. 16.

los particulares.

Por ello, el profesor Hernández Valle define la Constitución "como una unidad dialéctica de dos momentos: uno normativo y otro existencial" (5)

En dicha concepción se engloban unitariamente los conceptos de Constitución formal y material respectivamente.

Desde el punto de vista normativo la Constitución es "el derecho fundamental que define un régimen político, por la distribución de esferas de poder y la definición de fines" (6). O sea, es la norma superior del ordenamiento que organiza toda la estructura interna del Estado, distribuyendo las competencias públicas entre los diferentes órganos estatales y entes públicos.

Por ello, como dice Schindler, "la Constitución está directamente vinculada al problema de la organización y del ejercicio de la soberanía, entendiendo por tal afirmación suprema del poder estatal en la vida social" (7).

Al respecto, nos dice el profesor Don Luis Sánchez Agesta que: "Una constitución comprende dos grandes partes: la Organización del poder y la definición más general de los objetivos del gobierno que delimitan la acción del poder público y de la libertad — de las personas y los grupos"(8)

(5) HERNANDEZ VALLE, RUBEN. Lecciones de Derecho Constitucional Costarricense. San José, Costa Rica 1974. P. 8.

(6) SANCHEZ AGESTA, LUIS. "Curso de Derecho Constitucional Comparado". Sección publicaciones, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid, 1976, p. 49.

Esto viene a concebir la Carta Fundamental como la norma superior del ordenamiento estatal, ya que es la encargada de ordenar toda la organización interna del Estado y de otorgarle al Estado las potestades de imperio suficientes para regular toda la vida social dentro de un marco territorial determinado.

Es conveniente hacer notar que la Constitución que todo Estado tiene como positiva, se ubica en el orden de la realidad de las conductas. Por lo tanto, es una Constitución vigente que se realiza y actualiza constantemente.

Con base en lo anterior podemos afirmar que el ordenamiento constitucional no se agota en la Constitución Formal, ya que - la material es siempre y necesariamente más amplia y rica que la escrita vigente.

Si la Constitución escrita tiene vigencia, puede afirmarse que coincide ampliamente con la Constitución material. Tiene vigencia cuando sus postulados programáticos y la estipulación de derechos y deberes se cumplen efectivamente con la conducta de las personas.

No obstante, en nuestro país y en la mayoría de los países regidos por Constituciones de corte liberal, esos mandatos generalmente no se cumplen y, en consecuencia, no adquiere plena vigencia en los campos económico y social.

(7) Citado por GARCIA PELAYO, M. Op. cit., p. 52.

(8) SANCHEZ AGESTA, LUIS. "Principios de Teoría Política". Editora Nacional, Madrid, 1976, sexta edición, p. 399.

En otros términos, normalmente se da una escisión entre la normalidad (Constitución material) y la normatividad (Constitución formal) de la Constitución, sobre todo en relación con la materia económica y social.

Finalmente, recordemos que la Constitución no se agota en normas formalmente escritas, ya que el ordenamiento Constitucional es más amplio y abarca también conductas reales sumamente dinámicas, que generalmente superan el límite de la propia Constitución escrita.

A) LA MODERNA CONCEPCION DE LA CONSTITUCION

El desarrollo constitucional moderno, nos permite afirmar que la Constitución es un símbolo integrado de valores, tales - como la libertad, la democracia y el bienestar social y han dejado de ser simples documentos garantizadores de las libertades políticas, individuales y colectivas. O sea, las normas constitucionales se han convertido en verdaderos instrumentos de - cambio, que deben actualizarse a la altura de los tiempos a fin de que no obstaculicen el desarrollo social y económico requerido.

Debido a las presiones de las grandes mayorías menesterosas, los gobernantes han comprendido la necesidad de intervenir activamente en los campos económico y social, muchas veces para lograr que el sistema democrático liberal pueda sobrevivir y en otras para consolidarlo.

Dentro de esta perspectiva, el Estado ha ensanchado su radio de acción en el campo económico y social con el objeto de - efectivizar los principios y valores socio-económicos contenidos en la Constitución.

Aún dentro del concepto moderno de Constitución, sigue teniendo plena vigencia la escisión entre la constitución formal y material.

La constitución formal muchas veces enuncia principios que en la realidad no se llevan a cabo. Así ocurre, que en algunos casos las situaciones sociales y económicas no coinciden con - los postulados democráticos; por lo tanto, las conductas fácticas

ó materiales sufren un gran desvío respecto del contenido de los principios constitucionales. Recordemos por otra parte, que las diversas constituciones son el producto de la voluntad de las clases dominantes. Por lo tanto, reflejan los valores jurídicos, sociales, económicos, políticos, etc. de esa clase dominante.

En este mismo orden de ideas, el profesor Rubén Hernández Valle expresa que "La Constitución traduce al plano jurídico los valores fundamentales del régimen político vigente" (9).

En consecuencia, los valores de nuestra sociedad se encuentran consagrados en nuestra Carta Fundamental tanto en el plano político como en el terreno económico, tales como la democracia y la libertad.

La concepción moderna de la Constitución tiende a entenderla básicamente como un "proyecto o plan", en el sentido de que tiene una serie de "normas programáticas" y directrices de carácter socio-económico que posteriormente deberán ser desarrolladas por los gobernantes y legisladores.

Las constituciones, por tanto, ya no se limitan hoy día a establecer el orden de las conductas de los individuos sino que establecen programas y directrices políticas a seguir por el Estado sobre todo en el campo socio-económico, como sería el caso del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica.

(9) HERNANDEZ VALLE, RUBEN. Op. cit. p. 8

B) NATURALEZA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

Dada la generalidad de las normas Constitucionales, estas tienen un alto grado de imprecisión, lo que hacen que puedan ser interpretadas de modo diverso, de acuerdo con las circunstancias y con las influencias sociales, políticas y económicas del momento.

Dentro de las normas Constitucionales, se distinguen unas llamadas preceptivas y otras programáticas.

Entre las primeras, tenemos como ejemplo el artículo 108 de la Constitución Política de Costa Rica que señala que para ser Diputado se requiere: a) ser ciudadano en ejercicio; b) ser Costarricense por nacimiento o naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad y c) haber cumplido 21 años de edad.

Las normas programáticas, en cambio, son más amplias, no regulan desde el principio e inmediatamente las relaciones y situaciones a que se refieren, sino que ordenan comportamientos públicos destinados a su vez a incidir sobre tales materias; establecen lo que los gobernantes deberán o podrán hacer respecto a determinados objetos.

En consecuencia, son programáticas aquellas normas Constitucionales que en relación con los órganos estatales y fundamentalmente con los encargados de la función legislativa, prescriben ciertos comportamientos a seguir principalmente en el campo socio-económico.

Bidart Campos expresa que "las normas programáticas representan la fijación, en la Constitución del Estado, de determinados objetivos políticos que habrían podido, en hipótesis, ser establecidos de vez en cuando por los órganos competentes, pero que por su importancia han sido sustraídos a cualquier oscilación eventual y mutación de criterios de los mismos órganos. Es decir, son una dirección política traducida en términos de normas Constitucionales" (10).

En Costa Rica, podemos citar el artículo 50 de la Constitución Política como ejemplo de norma programática, al disponer que "El Estado procurará el mayor bienestar de los habitantes de la República, organizando y estimulando la producción y el equitativo reparto de la riqueza" (11)

Se desprenden que esa norma se dirige a los órganos estatales encargados de regular y dirigir todo lo relativo a la producción, (Consejo Nacional de Producción, Poder Ejecutivo, etc.) y a la distribución del Ingreso Nacional. También, por medio de esa norma el Estado puede promulgar una serie de leyes que promuevan la producción en general como la de Incentivos Fiscales (Ley de Protección de Desarrollo Industrial), leyes bancarias y impuestos sobre la Renta con el objeto de distribuir el Ingreso Nacional, etc.

(10) supra nota 1, p. 206.

(11) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Constitución Política de la República de Costa Rica". 1949. (Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1971).

Así, tanto las normas Constitucionales como las demás disposiciones normativas, son el resultado de un proceso político, sea de una valoración político-ideológica. En nuestro país (Costa Rica) todo el ordenamiento jurídico es de tipo liberal-burgués porque toda la estructura jurídica se adapta a los principios democráticos de libertad jurídica y a la iniciativa privada de la producción y que a través de las clases dominantes han sostenido la continuidad de ese ordenamiento que resulta ser un medio eficaz para la defensa de sus intereses.

El profesor Hernández Valle expresa que: "los principios — fundamentales Constitucionales, son establecidos por el sujeto que tiene el poder político y jurídico de determinar o modificar las líneas basilares de la estructura del ordenamiento" (12)

En Costa Rica, el poder político siempre lo han tenido las clases dominantes, comenzando desde los cafetaleros hasta la moderna clase gerencial e industrial, quienes se han encargado de gobernar en su propio beneficio.

Además, de las normas formalmente Constitucionales, tenemos los principios institucionales que son la expresión jurídica de las valoraciones políticas que constituyen la estructura fundamental de un ordenamiento jurídico determinado.

Esos principios institucionales, representan los pilares fundamentales de un sistema jurídico-político determinado. En Costa Rica, por ejemplo, estarían el principio de libertad jurídica, pre-

(12) HERNANDEZ VALLE, R. Op. cit., p. 25.

visto en el artículo 28 de la Constitución Política (13) según el cual los particulares pueden hacer todo aquello que quieran siempre y cuando no invada la esfera de terceros y de todo lo que no está prohibido; el principio de la libre contratación; el principio de legalidad regulado en el artículo 11 de la Constitución (14) según el cual el Estado puede realizar las conductas y actos expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico; el principio de igualdad jurídica del artículo 33 de la Constitución (15), etc.

En realidad, esos principios institucionales tienen naturaleza jurídica y no simplemente política, ya que forman los elementos constitutivos del ordenamiento constitucional. Además, todos los principios fundamentales de la constitución tienen carácter normativo porque, estén o no positivados, tienen carácter vincu

(13) Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

No se podrá sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas" (artículo 28)

(14) "Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública" (artículo 11)

(15) "Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana" (artículo 33)
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Constitución Política de la República de Costa Rica". 1949. (Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1971)

lante para todos los sujetos del ordenamiento.

Así, por ejemplo, aunque el Constituyente lo omitiera, principios como el derecho a la vida, igualdad ante la ley, libertad de contratación, etc. automáticamente se incorporarían al ordenamiento constitucional costarricense, podemos señalar la rigidez de la Constitución, la alternabilidad del poder, la continuidad del ordenamiento y todos aquellos derivados de los postulados del Estado de Derecho, además de los ya mencionados anteriormente.

Sintetizando todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica (17) desde el punto de vista dogmático, es una norma programática, dirigida fundamentalmente a los órganos legisladores y planificadores del Estado (Poder legislativo y poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas) para que estos, mediante su intervención en el ámbito económico y social de los medios de producción y distribución de la riqueza, puedan lograr una justa distribución del producto de la comunidad costarricense. Dicha norma en consecuencia, autoriza a los órganos estatales para regular y dictaminar diversos medios tendientes a lograr que la igualdad formal contemplada en el artículo 33 de la Constitución Política, se traduzca en una igualdad real y operante. Ello nos permite afirmar que Costa Ri-

(16) HERNANDEZ VALLE, RUBEN, op. cit., p. 31 y 32.

(17) "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" (artículo 50). ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Constitución Política de la República de Costa Rica", 1949. (Imprenta Nacional, 1971, C.R.)

ca, conforme a su ordenamiento y pr xis constitucional, puede -
ser considerado simult neamente como un Estado de Derecho y -
como un Estado Intervencionista.

C) POSIBILIDAD DE CALIFICAR A COSTA RICA SIMULTANEA
MENTE COMO ESTADO DE DERECHO Y ESTADO INTERVEN
CIONISTA CON BASE EN EL ARTICULO 50 DE LA CONSTI-
TUCION POLITICA.

Costa Rica se caracteriza por ser un Estado liberal de Derecho por la permanencia de sus instituciones democráticas a través de su vida Republicana.

Todo el ordenamiento jurídico costarricense está estructurado sobre las bases del sistema económico capitalista, que modula sus formas jurídicas y por el sistema jurídico-político propio del régimen de Derecho.

Con la Revolución Francesa, los movimientos democráticos-liberales lograron positivizar los postulados de la democracia liberal en forma escrita, entre otros, la división de poderes, la libertad individual y de comercio, la igualdad jurídica, etc., como producto del liberalismo político y económico predominante por entonces. Estos principios jurídicos y políticos se fueron perfeccionando paulatinamente, no obstante, con el tiempo se hicieron insuficientes debido al desarrollo económico y social que fueron alcanzando los diferentes países. Se empezó entonces a sentir una desactualización de esos principios con lo que sucedía en la realidad. Es decir, los postulados se quedaron en el plano formal, sin tener resultados efectivos en la realidad socio-económica del momento.

Hoy en día, las corrientes socialistas y marxistas reclaman ese defecto e ineficacia del sistema liberal burgués para solucionar los problemas sociales de las masas oprimidas de los países

subdesarrollados y del tercer mundo, alegando el factor de depen-
dencia total de esos países a las grandes potencias económicas y
políticas del mundo.

Sobre el particular nos dice Karl Lowenstein que "las va--
cías fórmulas de libertad e igualdad tenían que ser rellenas con
el contenido material de unos servicios públicos que garantizaran
a las clases bajas un mínimo de seguridad económica y justicia so-
cial" (18).

Dada la presión de la clase trabajadora, la libre empresa no
tuvo otro paso que seguir ofreciendo cumplir con las pretensiones
de las masas trabajadoras, producto de la revolución industrial.

Desde entonces, a los trabajadores se les permite participar
por medio de Sindicatos en el proceso productivo en defensa del -
factor trabajo. También, el Estado empieza a dirigir y a orientar
la economía en una forma más directa.

En Costa Rica, podemos afirmar que esos postulados formales
se han efectivizado en forma relativa, gracias a su estabilidad
política y a la sensibilidad social de algunos de sus Gobernantes.

Sin embargo, debido a la explosión demográfica mundial, a -
los Estados contemporáneos se les ha ido haciendo cada vez más
difícil lograr una justa distribución de la riqueza entre sus habi-
tantes, o sea, la realización de una verdadera justicia social.

En la mayoría de los países Hispanoamericanos el crecimien

(18) LOWENSTEIN, Karl. "Teoría de la Constitución". Ediciones
Ariel, Barcelona, 1965. p. 399.

to en forma de progresión geométrica de la población en relación con los alimentos existentes y la imposibilidad de las sociedades actuales de satisfacer todas las necesidades de sus miembros, ha ocasionado que las minorías dominantes monopolicen los medios de producción y obtengan grandes concentraciones de capitales, lo que les ha permitido también influir de manera decisiva en el terreno político.

Esa situación hace pensar en la posibilidad de que se cumpla la famosa Ley de Malthus, lo cual ha hecho que los juristas y políticos de mentalidad positiva empezaran a buscar las soluciones al problema, creyendo necesario la intervención del Estado en los campos económico y social, mediante la planificación de la producción y su mejor distribución entre los distintos sectores de la población.

El Estado moderno, para cumplir con la multitud de cometidos que se le vienen presentando, ha sentido la necesidad de ampliar su esfera de acción para satisfacer las crecientes necesidades de la población. Una solución ha sido la distribución de -- nuevas competencias a entes públicos, como ha sucedido en Costa Rica con la descentralización administrativa, realizada a partir de 1949, con la creación de las Instituciones Autónomas. (19)

Lo que realmente ha sucedido en Costa Rica es que algunos gobernantes, palpando las necesidades sociales del momento, y -

(19) "Artículos 188, 189 y 190, Constitución Política de Costa Rica, 1949, (Imprenta Nacional, 1971) San José, Costa Rica.

por medio de los instrumentos jurídicos del Estado de Derecho, han visto la necesidad de la función social del Estado, adaptando su acción a las circunstancias históricas del momento.

Por el mismo marco de libertades políticas y comerciales que ofrece el sistema, resulta natural que se produzcan diferencias sociales inaceptables en las que se hace necesario la intervención y fiscalización del Estado en bien del interés general de los particulares. El Estado, por consiguiente y a través del ordenamiento jurídico confiere zonas de libertad a la actuación de los particulares a la vez que los protege por medio de garantías individuales y sociales de los abusos de los gobernantes y de los demás particulares.

El Estado moderno, por lo tanto, participa activamente organizando y estimulando la producción a través de los mecanismos jurídicos del sistema político y mediante leyes concretas distribuye equitativamente el ingreso nacional, de tal forma que las clases más necesitadas obtengan mejores niveles de vida. Es decir, otorgan a los particulares igualdad de oportunidades para el desarrollo y promoción de sus cualidades naturales.

Las Constituciones modernas, como lo expresamos en páginas anteriores, han dejado de ser meras enunciatoras de las libertades políticas, individuales y colectivas para convertirse en instrumentos adaptables a los cambios del momento, promulgando en su cuerpo los derechos sociales requeridos de la época.

Por consiguiente, se ha pasado del Estado meramente policial a un Estado preocupado por los problemas de la Comunidad (20)

Así, por ejemplo, hoy día la propiedad sobre los medios de producción y de los grandes inmuebles tienen una función social. Mediante ella se ha logrado una mejor distribución del producto social, ya que los impuestos territoriales, sobre la Renta y otras medidas que constituyen limitaciones al derecho de propiedad, son instrumentos jurídicos que han permitido que la riqueza se distribuya mejor entre los sectores de la población.

El profesor Hernández Valle dice que "la administración ha recibido, por lo tanto, nuevas funciones y poderes discrecionales de planificación y de decisión necesariamente amplios y que no tiene parangón alguno, con lo que sucedía a principios de siglo. El Estado Intervencionista es fundamentalmente un Estado administrativo" (21).

Lowenstein, expresa que "actualmente, desde la mitad del - siglo XX, el resultado es que el Estado ha asumido la función de planificar, regular, controlar y supervisar la vida socio-económica. Las intervenciones de la autoridad pública en la vida privada de los ciudadanos se han elevado en grado máximo, en lugar de limitarse a un mínimo como quería el capitalismo clásico del *laissez faire*. La distribución más igualitaria de la riqueza y de la renta nacional ha influido profundamente en el alcance y en la importancia de las libertades individuales clásicas" (22)

(20) LOWENSTEIN, Karl. Op. cit. p. 399

(21) HERNANDEZ VALLE, Rubén. Op. cit. p. 43.

(22) LOWENSTEIN, Karl. Op. cit. p. 308.

En nuestro medio constitucional, concretamente en el artículo 50 y los del Capítulo de Garantías Sociales, se puede decir que equivalen propiamente a normas del Estado Intervencionista porque mediante ellas se canalizan muchas leyes de beneficio social y de distribución del ingreso por medio de la racional organización de la producción mediante la justa distribución y equilibrada aplicación de los diversos factores de la producción.

Por medio de esas, podrían realizarse innovaciones en las leyes de planificación, incentivos a la industria, ley de asignaciones familiares, estabilización de precios, etc. lo cual permite llevar a cabo un verdadero programa nacional de desarrollo.

Finalmente, se ha observado claramente que el Estado costarricense constitucionalmente hablando, ha venido adaptándose a los cambios que exigen las circunstancias actuales por medio de una serie de medidas propias del Estado social moderno, realizadas a través de los nuevos derechos sociales, a partir del año 1.942.

Además, consideramos importante señalar que nuestros gobernantes, principalmente los de tendencia progresista, han tomado la iniciativa para la realización de labores sociales de beneficio general por medio de leyes de gran contenido social.

Sin embargo, consideramos que esos logros junto con la actitud de los gobernantes protectores de las clases oligárquicas, no han sido suficientes como para conseguir una verdadera consolidación efectiva del sistema en el plano social y económico, realizadores de la verdadera justicia social.

Resumiendo, hemos de llegar a la conclusión que desde el - punto de vista de los medios jurídicos usados, el ensanchamiento de los cometidos estatales ha dado lugar a la transformación necesaria del Estado de Derecho en Estado Intervencionista o Social, con lo que es posible considerar a Costa Rica simultáneamente como Estado de Derecho y Estado de Bienestar o Social.

1) Postulados del Estado de Derecho y su consagración positiva en la Constitución Política de Costa Rica.

Históricamente con anterioridad al surgimiento del Estado de Derecho (23), en el mundo occidental imperaba un absolutismo político total, según el cual el Rey era, por delegación divina el soberano del Estado. La voluntad del Rey por lo tanto era la Ley Suprema (24).

En consecuencia, durante la época y bajo ese régimen, no - existían garantías mínimas para salvaguardar la dignidad del hombre.

Los funcionarios eran simples delegados del Rey y actuaban en nombre suyo. En otros términos, no existían límites precisos para la acción de los agentes públicos, ni formas procesales obli

(23) "El liberalismo es el suscitar de la forma de organización y concepción del Estado que Robert von Mohl denominó Estado de Derecho". CONESA, FERNANDO. "Libertad de Empresa y Estado de Derecho". Ediciones Rialp S. A. Madrid, 1978 p. 31.

(24) Ibid., p. 48.

gatorias para el ejercicio de sus atribuciones. Tampoco se reconocía ningún derecho a los particulares contra las decisiones judiciales injustas y los tratos arbitrarios de las autoridades administrativas.

Al contrario, en el moderno Estado de Derecho (25), todos los actos de los Poderes Públicos y de los particulares han de ajustarse a normas jurídicas positivas y vigentes. Es decir, las relaciones entre el Estado y los particulares deben realizarse dentro de los marcos del derecho.

Posteriormente a la Independencia de los Estados Unidos de

-
- (25) Entrena Cuesta define el estado de Derecho como "aquella — forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos — públicos subjetivos de los ciudadanos mediante el sometimiento de la Administración a la ley". ENTRENA CUESTA, RAFAEL, "Curso de Derecho Administrativo", tercera edición, Madrid, Tecnos, 1970, p. 33. Por su parte, el Profesor Don Luis Sánchez Agesta nos dice al respecto: "El Estado de Derecho, como perspectiva contemporánea de las relaciones entre política y Derecho, debe concebirse como la respuesta a un problema ético general: la necesidad de someter el poder público al Derecho.
- El Derecho es connatural a la existencia misma del Estado y — debe considerársele incluso como uno de los elementos que de finen su concepto. Un régimen de Estado es entre otras cosas, un régimen jurídico del poder público. Pero esta naturaleza jurídica no agota el concepto del Estado, ni es el único elemento de su organización, sino que el Derecho está en equilibrio con otros factores que integran el orden estatal. Todo Estado, por consiguiente, no es per se Estado de Derecho, sino sólo aquel en que se ha producido un equilibrio entre el impulso del poder y la libertad (de la acción política subjetiva), y el orden regulador del Derecho (orden político institucionalizado); esto es, aquel en que el Derecho positivo encarna de una forma satisfactoria los valores de justicia y seguridad que

Norteamérica y a la Revolución Francesa de 1789, el Estado absolutista se transforma en el moderno Estado de Derecho, dando con ello lugar al nacimiento del Principio de Legalidad y por consiguiente a la NO arbitrariedad.

Dicho principio se fundó en los postulados de la Revolución Francesa, a su vez tomados de las ideas de Rousseau, según el cual la ley es la expresión de la voluntad general.

Algunos autores opinan que la transformación del Estado absolutista en el "Estado de Derecho", señala la aceptación de un nuevo orden establecido por la mayoría del pueblo, sobre la convicción de que ese orden era justo, adecuado y benéfico (26).

Según el postulado de que la ley es la expresión de la voluntad general, el Poder legislativo, por ser su existencia el producto de la voluntad general o popular, se convierte en el primero de los poderes y la ley dictada por ella, en consecuencia, tiene su premacía sobre los demás actos de los otros poderes estatales.

En la actualidad, el Principio de legalidad se funda en el principio de la seguridad jurídica, según el cual, tanto las autoridades públicas como los particulares, independientemente de la posición o rango que ocupen, están sometidos en sus conductas al —

(cont. pág. ant.)...son función del Derecho y encuentra en estos valores la fuerza necesaria para contener el poder y la libertad". SANCHEZ AGESTA, LUIS, "Principios de Teoría Política", sexta edición revisada, Editora Nacional, Madrid, 1976, p. 150-151.

(26) BODENHEIMER, EDGAR, "Teoría del Derecho", Fondo de cultura Económica, México, 1971, p. 9.

ordenamiento jurídico (27). Por lo tanto, el principio de legalidad significa la conformidad con el Derecho, o lo que es igual, la regularidad jurídica de las actuaciones de todos los órganos del Estado. Los órganos del Estado sólo pueden actuar, pues, en virtud, de una regla de Derecho que les atribuya la competencia para el acto de que se trate y con arreglo a las normas jurídicas relativas al mismo (28).

Los particulares, en cambio, pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, en tanto que las autoridades públicas sólo pueden válidamente hacer lo que el orden jurídico les autoriza a realizar.

En los tiempos modernos, el fundamento del Principio de Legalidad y por lo tanto del Estado de Derecho, se encuentra no so

(27) El recién desaparecido maestro Fernando Conesa nos dice que "pore su carácter general, la ley es la misma para todos los ciudadanos, sin dar cabida a privilegios, ni excepciones, por que su mandato obliga a todos por igual. Ella representa el poder supremo, en sustitución del poder personal propio del Antiguo Régimen". Luego añade que "en definitiva, se tiene la autoridad que la ley concede, porque la concede y sólo en la medida que la concede. Por tanto, también los representantes del Poder Público son servidores de la ley, al igual que los demás ciudadanos". CONESA, Fernando. Op. cit. p. 34, - 35 y 36.

(28) El profesor Don Eduardo García de Enterría, dice que: "La Ley otorga, y a la vez limita la autoridad de los agentes, que como tales, son sólo servidores de la ley". GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. "La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo" (Poderes discrecionales, poderes de Gobierno, poderes normativos). En "Revista de Administración Pública", num. 38. Mayo-agosto, 1962, p. 162.

lo en el interés de garantizar la protección de los particulares - contra las arbitrariedades de los gobernantes sino también en el propio proceso de creación del Derecho.

En el proceso de creación jurídica, la norma de jerarquía más elevada, sea la Constitución, determina el valor de los diversos actos estatales. Así, por ejemplo, la ley (acto legislativo por excelencia) es superior a los actos emanados del Poder Ejecutivo. Los actos administrativos, para ser válidos, tienen que estar autorizados al menos por una norma de rango legal.

Fundamentalmente, cuando se habla de Estado de Derecho se quiere significar que las relaciones entre los particulares y el Estado están disciplinadas por el ordenamiento jurídico.

Ello implica que a los particulares les atribuye una serie de derechos subjetivos privados, entre los más importantes, se encuentran el derecho a la vida, a la integridad personal, derechos de propiedad en general, derechos de familia, etc.

En Costa Rica, esos derechos se encuentran regulados en la Constitución Política en los siguientes artículos:

El derecho a la vida en el artículo 21 cuando expresa: "La vida es inviolable" (29)

Los derechos a la integridad personal, equivalen al artículo 20 que prohíbe la esclavitud en la República (30). Todas esas

(29) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Constitución - Política de Costa Rica". Op. cit. artículo 21.

(30) Ibid., artículo 20.

disposiciones protegen la acción del individuo dentro del marco de la legalidad y tienden al desarrollo de su personalidad en -- cuanto sus acciones se desarrollen en la esfera privada.

El derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 45 de la Constitución (31). Los derechos relativos a la familia se encuentran consagrados en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 de la Constitución (32).

Estos derechos fundamentales, si bien están sujetos a diferentes interpretaciones según el momento histórico de cada pueblo, son el pilar fundamental del Sistema Constitucionalista Occidental y constituyen los principios superiores del orden jurídico positivo, aún cuando no estén formulados en normas Constitucionales expresas.

Los derechos públicos subjetivos (33), en cambio, competen a los sujetos cuando intervienen en algún tipo de relación -- con el Estado. Esta clase de derechos abarca:

a) Las libertades civiles (34); b) Las libertades sociales y

(31) *ibid.* artículo 45.

(32) *ibid.* artículos 51, 52, 53, 54 y 55.

(33) CONESA, FERNANDO. Op. cit. p. 37 y siguientes. Aquí dicho autor nos hace una exposición bastante clara de los derechos públicos subjetivos. Véase también al respecto, GIL ROBLES QUIÑONES, JOSE MARIA. "Libertad de Emisión del Pensamiento", en nueva Enciclopedia Jurídica, t. XV, Barcelona, SEIX 1974, p. 346, en donde indica y desarrolla las características de dichos derechos.

c) Los derechos políticos y constituye el primer postulado del Estado de derecho.

a) Las libertades civiles representan la manifestación más sobresaliente del Estado de Derecho, y equivalen a la esfera privada de acción dentro de los cauces legales.

Dentro de este mismo orden de ideas, el profesor Hernández Valle expresa, que "el llamado derecho de libertad civil, es la manifestación más sobresaliente del Estado de Derecho y representa la proyección sobre el terreno del Derecho Público de la garantía concedida a la autonomía del particular, en tanto que

-
- (34) SANCHEZ AGESTA, LUIS. Principios de Teoría Política. - Op. cit. p. 527 y 528, expone con claridad las libertades civiles diciendo "Estos derechos no sólo se especifican por la naturaleza peculiar de su protección frente al Estado, como una exención o inhibición, sino más fundamentalmente por el contenido de bienes que protegen. Los derechos civiles, como derechos de la vida individual - protegen:
1. La intimidad de la vida personal (el domicilio, la correspondencia, la conciencia, la residencia), como una esfera - de vida privada, en la que ni el Estado, ni los demás miembros de una comunidad política deben inmiscuirse.
 2. La seguridad personal y económica (no ser privado arbitrariamente de su libertad personal ni de sus propiedades), en cuanto son bienes inmediatamente vinculados al ser humano como individuo corporal dotado de libertad moral y esos bienes constituyen el más sólido soporte de su independencia. Representan pues el primer umbral del respeto a la persona como individuo, sin que tengan una inmediata trascendencia social, pública, ni política. Son, en sentido estricto, un límite de la acción del poder público ante la intimidad y la seguridad individual de los miembros de la comunidad política"

ser humano: es el derecho subjetivo público del individuo frente al estado de mantener la inviolabilidad, dentro de los límites fijados por la ley, de su propia esfera jurídica privada. El particular, puede actuar de cualquier forma pero siempre que lo haga dentro de lo que ordena el ordenamiento jurídico y el Estado debe darle protección a sus derechos y los órganos estatales, - no pueden rebasar la esfera de los particulares" (35).

Según el mismo autor, las manifestaciones más importantes del derecho liberal civil son: 1) La libertad personal; 2) libertad de domicilio; 3) libertad de tránsito; 4) inviolabilidad de correspondencia; 5) garantías contras las detenciones ilegales, todos enmarcados en los artículos 20, 22, 23, 24, 37 y 56 respectivamente de la Constitución Política de Costa Rica.

Libertad de manifestación de pensamiento:

La manifestación del pensamiento puede ser mediante palabra, escrito o cualquier otro medio de difusión del pensamiento.

Entre ellas, se encuentran la libertad de conciencia, regulada en el artículo 76 de la Constitución Costarricense, (36) y — que es equivalente a la libre elección de religión; la libertad de asociación, inscrita en el artículo 25 de la Constitución y dice — que: "los habitantes de la República tienen derecho a asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de — asociación alguna" (37).

(35) HERNANDEZ VALLE. R. Op. cit. . p. 39.

(36) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, op. cit. art. 76.

(37) Ibid. art. 25.

La libertad de reunión, se encuentra en el artículo 26, que expresa que "los ciudadanos pueden reunirse pacíficamente, sin armas para tratar asuntos relacionados con los negocios privados, públicos y para enjuiciar la conducta pública de los gobernantes" (38).

La libertad patrimonial, consiste en poder disfrutar libremente de los propios bienes, y están previstos en los artículos 45 y 36 de la Ley Fundamental de Costa Rica (39).

b) Una segunda categoría de derechos subjetivos públicos - está integrada por los derechos sociales, que son los derechos a obtener del Estado, determinadas prestaciones (40) Dentro de estos, tenemos el derecho de acción, o sea el de dirigirse a los medios jurisdiccionales del Estado para entablar una demanda en defensa de los derechos generales o particulares, enmarcados - en los artículos 27 y 41 de la Constitución de Costa Rica (41). Entre otros, el derecho de usufructuar los servicios públicos, el - derecho de admisión en la enseñanza pública, etc.

c) La tercera categoría está integrada por los derechos políticos, que tienen como contenido la pretensión del ciudadano de participar activamente en la vida del Estado (42). Un ejemplo de -

(38) Ibid. art. 26.

(39) Ibid. art. 45 y 36.

(40) SANCHEZ AGESTA, LUIS. Op. cit. p. 531.

(41) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Op. cit. arts. 27, 41

(42) SANCHEZ AGESTA, LUIS. Op. cit. p. 530:

lo anterior es el derecho al voto; también lo es el derecho de elegir y ser electo, y de ocupar cargos públicos, enmarcados en los artículos 90 y 93 de la Carta Política Costarricense (43)

El segundo postulado del Estado de Derecho está constituído por la sujeción del Estado a la Ley, que modernamente se conoce con el nombre de Principio de legalidad, el cual fue analizado en líneas anteriores. Su fundamento positivo se encuentra en el artículo II de la Constitución Costarricense, cuando establece: "los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede... (44).

El tercer postulado, es la igualdad jurídica, regulada en nuestra Constitución, el artículo 33, e implica que no pueden haber leyes discriminatorias en favor ni en contra de determinadas categorías de individuos o grupos (45). Dicha norma, es fundada en la dignidad humana (46) como producto de la presunta igualdad natural de los hombres.

El último postulado, está constituido por la existencia de un sistema jurídico administrativo (47). En Costa Rica, dicho pos

(43) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Op. cit. arts. 27 y 41.

(44) Ibid. art. 11.

(45) Ibid. art. 33.

(46) Jellinek, dice que: "Al Estado de Derecho pertenece, además la existencia de unos derechos fundamentales, es decir, una esfera de la existencia individual en la cual el Estado no puede penetrar, como la dignidad humana...". JELLINEK, WAL-

tulado encuentra fundamento en el artículo 49 de la Constitución, cuando crea la jurisdicción contencioso-administrativa, que tiene como fin proteger los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares frente a la actividad administrativa del Estado (48)

Como se ha expresado reiteradamente en el presente estudio la actividad del Estado democrático contemporáneo, no se circunscribe a la simple protección y respecto de los derechos y libertades individuales clásicas, sino que, dadas las necesidades económicas y sociales apremiantes de la época actual, el Estado ha comenzado a intervenir directamente en la esfera de los particulares, especialmente en los campos citados, campos social y económico.

Con ello, el Estado de Derecho, al tener que ensanchar su esfera de acción, y con sus propios medios jurídicos fundamentales, se ha convertido en el Estado intervencionista o de bienestar (49).

(cont. pág. ant.)... TER. "Alemania como Estado de Derecho" en Revista de Administración Pública, núm. 6. Septiembre-diciembre 1951, p. 348.

(47) CONESA, FERNANDO. Op. cit. p. 43.

(48) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Op. cit. art. 49.

(49) El profesor Sánchez Agesta nos dice al respecto: "Un Estado de Derecho concebido sobre esos supuestos éticos y con técnicas que tiendan a asegurar esos fines no es incompatible en absoluto con la intervención del poder público en el ámbito social y económico, no solo con fines de "policía", por emplear este término clásico de la doctrina administrativa que apunta

Concomitantemente a la permanencia de las libertades individuales clásicas propias del Estado de Derecho, en las sociedades modernas se ha hecho necesario buscar un equilibrio que permita el desarrollo integral y justo para todos los sectores de la población, realizando una verdadera justicia social, sin el detrimento de los derechos fundamentales. El problema radica en el buen uso de las libertades individuales dentro del campo socio-económico, sin que la plena vigencia de esas, cause perjuicio a la efectiva realización de los nuevos derechos sociales.

En suma, se persigue combinar la libertad y la seguridad social de los particulares.

Así, el Estado moderno interviene activamente en los campos económico y social para lograr una verdadera justicia social por medio de la producción y una justa distribución del ingreso

(cont. pág. ant.)... a definir la acción preventiva de la Administración, sino para realizar un fin más amplio de bienestar social o de justicia social. Más bien diríamos que concuerda más exactamente con este régimen de cuanto se propone una más profunda realización del principio de justicia que anima este régimen. Por ello, un Estado de derecho es perfectamente compatible con aquellas prerrogativas del poder público, que son exigencia de su propia función o de misiones históricas contingentes. Lo que importa es definir el fin para el que se conceden esos poderes o prerrogativas y ajustarlos al fin previsto". SANCHEZ AGESTA, LUIS. "Principios de Teoría Política". Op. cit. p. 152 y 153.

(49 bis) Con respecto al estado de Derecho, es importante ver - "Estado de Derecho y sociedad democrática", de Elías Díaz Quinta edición. Cuadernos para el diálogo. Madrid, 1973. Además de los citados al pie de página.

nacional y también permitiendo a todos los sectores la participación en la toma de las decisiones políticas.

2) Principios del Estado intervencionista y su consagración en la constitución política de Costa Rica.

El desarrollo de las libertades políticas permitió que se lograra una adecuada protección de los derechos fundamentales del individuo frente a los abusos de poder de los gobernantes, imperante durante el absolutismo político. Conforme avanzó la industrialización, la burguesía, como grupo político dominante, vió su poder político amenazado por las corrientes filosóficas políticas antagónicas, como el socialismo utópico y principalmente por el socialismo científico.

La explotación de los trabajadores por los dueños de los medios de producción durante la revolución industrial, produjo la reacción de los primeros, sobre todo movidos por las ideas socializantes de la época. Al reaccionar contra el orden establecido por el capitalismo liberal, lograron obtener la igualdad de los derechos políticos, mediante la obtención del (50) "sufragio igualitario". Ello le permitió participar en el proceso político para buscar la realización efectiva de sus derechos. Posteriormente los trabajadores tampoco se contentaron con la formulación teórica de los derechos fundamentales de la igualdad y la libertad contenidos en las constituciones liberales. Entonces, comenzaron a exigir -

(50) CONESA, FERNANDO. Op. cit.. p. 83.

que esos derechos tenían que materializarse en las realidades concretas, para que los trabajadores pudieran disfrutar de un mínimo de seguridad socio-económica (51).

Como resultado de esa presión enorme, el capitalismo de libre empresa se vió obligado a ceder paso a paso a las pretensiones de las masas trabajadoras.

Actualmente, todo ese proceso histórico ha dado como resultado que el Estado haya asumido la función de planificar, regular, dirigir, controlar y supervisar la vida socio-económica. (52)

Expresa Tallada, refiriéndose al Estado moderno, que "De intervenir quiere pasar a dirigir. La política económica se convierte en economía dirigida y con ella, quiere el Estado moldear con arreglo a las puras conveniencias colectivas, el organismo todo de la economía nacional" (53).

(51) El profesor Sánchez Agesta nos dice: "Contra el capitalismo, y en parte también contra el marxismo, viene produciéndose -- desde mediados del siglo XIX un derecho obrero o social, en -- que se trata de remediar la situación de miseria y desamparo en que el obrero quedaba frente a la potencia del capitalismo industrial.

Este Derecho del trabajo nace como un derecho público tutelar de clase, para regular las condiciones en que el trabajo se -- presta, protegiendo la salud, la libertad y una justa remuneración del trabajador". SANCHEZ AGESTA, Luis. "Principios -- de Teoría Política". Op. cit. p. 578 y 579.

(52) LOWENSTEIN, K. Op. cit. p. 308.

(53) TALLADA, citado por Borrell J. y Maciá, "El intervencionismo del Estado en las actividades económicas". Bosch, Casa -- Editora, Barcelona, 1946, p. 12.

Como resultado de la intervención y dirección del Estado en la producción nacional, la esfera privada de los particulares se ha visto sumamente restringida en lugar de limitarse apenas un mínimo, tal y como lo preconizaba el liberalismo clásico del "laissez-faire" (54).

Por la ampliación del radio de acción estatal, este se ha visto en la necesidad de restringir las libertades individuales clásicas del liberalismo para lograr una mejor distribución de los recursos y del ingreso nacional entre todos los sectores de la población.

Las intervenciones gubernamentales en el proceso económico han limitado la libertad de contrato e incluso restringido el derecho básico del sistema capitalista liberal, como es la libre disposición de la propiedad, dándole una función social.

La nueva idea del control social de la vida del hombre en interés de la comunidad penetra también en otros campos de los derechos fundamentales además de los ya citados.

Dice el maestro Lowenstein, que "bajo la nueva filosofía social, el Estado se ha convertido en el amigo que está obligado a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad. El colectivismo ha dejado de ser el monopolio de la doctrina socialista y ha de-

(54) Por ejemplo, para Robbins, citado por Borrell J. y Maciá, supra nota 53 p. 6, "se supone que el fundamento de la filosofía social liberal es la creencia ingenua de que el interés propio conduce necesariamente al beneficio público y de la colectividad".

jado de ser también incompatible con el individualismo" (55).

Se interpreta en ese párrafo la nueva función a que estaba llamado a cumplir el Estado liberal de Derecho en el campo social y para ese entonces se observó que el monopolio aparente de que el marxismo era el único medio solucionador de los problemas empezaba a ceder ante el nuevo concepto de Estado social.

En nuestro medio constitucional, el artículo 50 permite al Estado intervenir directamente en la economía nacional con el fin de lograr una mejor distribución de la riqueza, que constituye el objetivo propio del Estado intervencionista.

Por otro lado, en el capítulo de Garantías Sociales, el Estado para asegurar un mínimo de bienestar social y económico regula los derechos sociales (56); los cuales como dice Georges Burdeau, son "los que contribuirán al desarrollo del hombre real" (57). Al respecto nos dice el Profesor Don Luis Sánchez Agesta que "los derechos sociales suponen prestaciones del go

(55) LOWENSTEIN, K. op. cit. p. 400.

(56) Entre los derechos sociales "se encuentran el derecho al trabajo, a un salario digno, a la vivienda, el acceso a todos los niveles de la enseñanza, la protección en caso de desempleo, el derecho al descanso, etc.". CONESA, FERNANDO. "Libertad de Empresa y Estado de Derecho". Ediciones Rialp S. A. Madrid, 1978. p. 86.
Véase "Principios de Teoría Política". Sánchez Agesta, Luis Op. cit. p. 534.

(57) BURDEAU, GEORGES. "La Democracia" Tercera edición. Barcelona, Ariel, 1959. p. 60.

der público o la creación de condiciones para el desenvolvimiento de la personalidad.

Podríamos llamarles derechos a la plenitud humana, al pleno desarrollo de la persona de todos y cada uno de los miembros de una comunidad política, con la ayuda de la acción del Estado" (58). En el artículo 56 el Derecho al trabajo; en el artículo 72 da protección al desempleo; los salarios mínimos están contemplados en el artículo 57; la jornada máxima legal en el 58; el derecho de sindicalización está en el artículo 60; el derecho a una mejora recibiendo vivienda adecuada en el artículo 65, etc. (59)

También ese complejo que se conoce como legislación social comprende la protección en caso de accidente de trabajo, asistencia a la vejez, a la maternidad y beneficios para familias numerosas (60).

-
- (58) SANCHEZ AGESTA, LUIS. "Principios de Teoría Política". Op. cit. p. 530 y 531. Añade el maestro Sánchez Agesta que "Este sentido les da un valor diverso, no sólo por su contenido, sino por el tipo de acción que exigen del poder público que no sólo es permisiva o de inhibición de las actividades - que puedan limitarles, sino que supone una ayuda y una prestación activa y supletoria de las condiciones necesarias para ese desenvolvimiento personal, bien bajo la forma de servicios públicos, bien mediante una transformación del orden social".
- (59) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Constitución Política de la República de Costa Rica". Título V. Derechos y Garantías Sociales. Capítulo Único. 1949. (Imprenta Nacional, 1971) San José, Costa Rica.
- (60) "Estos derechos, por otra parte, tienen un perfil histórico inconfundible que les da un preciso sentido. Nacen en función de situaciones de desequilibrio social y con el propósito

Ese cambio de actitud, que ha dejado atrás las ideas del Estado liberal, se ha logrado consolidar en el siglo XX, sin el detrimento de las libertades individuales fundamentales del sistema liberal-burgués, que son las que garantizan al individuo el desarrollo de sus cualidades naturales (61).

Esos nuevos derechos, no tienden a darle protección a los individuos frente al Estado, que representa la etapa del Constitucionalismo Clásico, sino que más bien representan las pretensiones de los particulares ya organizados frente al Estado.

Todos esos derechos sociales son en la actualidad instituciones bien conocidas del Estado Bienestar o Intervencionista.

El Estado de Derecho, tal como surge en la segunda mitad del siglo XVIII, está profundamente impregnado del sentimiento liberal, en el sentido de que la traducción jurídica de los princi-

(cont. pág. ant.)... to de realizar un nuevo equilibrio o reajuste de la sociedad. Son predominantemente derechos de las clases menos dotadas económicamente para defender su subsistencia y su desarrollo físico y espiritual, o para dotarlos de una seguridad económica e incluso para reordenar la distribución de los bienes económicos y culturales en la sociedad. Normalmente implican, pues, una reforma del orden económico y social como proyección de los principios de seguridad económica y justicia social, que operan un proceso de redistribución de los bienes económicos y culturales" SANCHEZ AGESTA, LUIS, "Principios de Teoría Política" Op. cit. p. 531.

- (61) Para LOWENSTEIN, Op. cit. p. 400, "el resultado visible de este proceso político es que las exigencias de una mayor seguridad económica y justicia social quedan concretados en los derechos fundamentales de contenido social y económico"

pios fundamentales de la Revolución Francesa se dirigen a la búsqueda de la dignidad del hombre, o sea, el Estado de Derecho significó originalmente la traducción jurídica de la democracia liberal.

En nuestro tiempo, en cambio, podemos afirmar que es el producto jurídico de la democracia social.

Consideramos que hoy día, más que un buen ordenamiento jurídico actualizado hacia el bien general de la colectividad, es la actitud positiva y franca de los gobernantes y de los diferentes sectores de interés de una sociedad organizada lo que cuenta para lograr una verdadera justicia social.

El poder coactivo superior en manos del Estado en su forma jurídica es lo que permite a este la realización de planes políticos concretos, ya que si bien en la mayoría de los casos el acto político está fuera del control jurídico, es importante que el ordenamiento lo permita mientras respete sus principios fundamentales.

Dentro de las diversas clases de intervencionismo del Estado, tenemos a las doctrinas marxistas con su planificación total de la economía, mediante la regulación del nivel de producción y de precios.

Por otro lado, se encuentra el intervencionismo del Estado social estructurado con los medios jurídicos del Estado liberal, en el sentido de que este tipo de intervencionismo actúa sobre las esferas privadas de los particulares para organizar mejor el orden social y económico, pero manteniendo incólumes las libertades individuales y la propiedad privada de los medios de producción.

ción, los cuales, sin embargo, pueden sufrir diversas clases - de restricciones. Bajo esta modalidad, el Estado interviene regulando la justa distribución de la riqueza y de la renta nacional.

Paralelo a las luchas por los derechos sociales que se encuentran enmarcados en el Capítulo de Garantías Sociales, se encuentra la nueva actitud de justicia social de los gobernantes en materia impositiva a fin de lograr una mejor distribución del producto social. Ello ha venido obviamente a restringir el ámbito de las libertades individuales clásicas de la democracia liberal.

En Costa Rica, sin embargo, según lo analizaremos en otro capítulo el régimen de impuestos resulta injusto, ya que los impuestos indirectos hacen que las cargas tributarias repercutan más en las clases pobres.

Además, de las clases de intervencionismo mencionados, debemos aceptar que el Estado liberal de Derecho también interviene en el ámbito social y económico, pero en un grado mínimo. Su característica ha sido más que nada la de actuar para mantener el orden público, es decir, una función meramente policiaca.

Por su parte, el Estado social de Derecho interviene en diversas formas en los aspectos sociales, políticos, económicos, y financieros del Estado. En lo social lo hace por medio de los impuestos progresivos, la legislación social y otros; las medidas políticas podrían ser aquellas tendientes a otorgar mayores po-

deres al Poder Ejecutivo (62); la intervención económica (63) resulta de las leyes sobre monopolios, ley sobre incentivos fiscales, etc. Por último, los controles financieros por parte del Estado son aquellos que supervisan las inversiones públicas, política monetaria antiinflacionista, regulación del crédito, etc.

Si bien es cierto que se pretende que el país progrese dentro del auge económico de las inversiones a la par de la realización de la justicia social, dentro de la libertad, no es posible, creemos, realizar esa meta.

El empresario costarricense por lo general lucha por el máximo de utilidades en sus negocios, razón por la cual nunca se ha preocupado de que esas tengan un sentido social, aunque bien sabido es que pregonan el "capitalismo con responsabilidad social", -- con la única intención de practicar el llamado reformismo dentro -- de la democracia y nunca para realizar una verdadera transformación.

En la actualidad, esos problemas y divergencias tendrán que superarse con el pesar de muchos que piensan diferente, ya que la justicia social y el funcionamiento y la supervivencia de nuestro sistema así lo exigen.

(62) SANCHEZ AGESTA, LUIS. "Principios de Teoría Política". Op. cit. p. 577 y 578. Ver las páginas antes apuntadas, ya que el maestro Sánchez Agesta, desarrolla ampliamente ese aspecto.

(63) CONESA, FERNANDO. "Libertad de Empresa y Estado de Derecho". Op. cit. p. 81 a 122. Ver dichas páginas, ya que se desarrolla dicho aspecto muy bien y ampliamente.

El dilema es buscar el punto de equilibrio en el cual nuestras decisiones políticas internas, no se vean influenciadas por las fuerzas ideológicas mundiales antagónicas. En otros términos, el problema a resolver es el de encontrar un equilibrio en el cual buscando la realización del bien común, no se eliminen las libertades individuales.

Dentro de la democracia representativa, es ese orden de ideas, si el Estado liberal de Derecho con sus mismos instrumentos jurídicos se convirtiera en el Estado intervencionista, preocupado por los problemas sociales, y logrando la realización de los principios de la democracia liberal, tendríamos una actitud más positiva para la verdadera justicia social.

En los próximos capítulos, analizaremos en forma crítica los verdaderos alcances y aplicación en la praxis política nacional de las diferentes medidas legislativas de tipo social y económico dictadas con fundamento, directo o indirecto, en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica.

SEGUNDA PARTE: LA APLICACION Y ACTUACION DEL ARTICULO 50 EN NUESTRA PRAXIS CONSTITUCIONAL.

INTRODUCCION

El artículo 50 de la Constitución Política establece que el Estado procurará el bienestar general de los habitantes de la República, organizando y estimulando la producción y el equilibrio reparto de la riqueza (1).

El problema central, por lo tanto, es precisar el concepto de bienestar general aquí utilizado. En términos generales, dicho término representa un status mínimo de condiciones sociales y económicas justas para los particulares.

El Estado, como organización jurídica unitaria y exclusiva dentro de un determinado territorio, es el ente jurídico mayor por excelencia.

Por su propia naturaleza, el fin político del Estado siempre será la búsqueda del bien general de los particulares lo cual lo—gra mediante la realización de una serie de actividades de índole material y jurídica. En última instancia, los fines estatales consisten en satisfacer, de la mejor manera posible, los intereses de sus habitantes. En otros términos, el Estado, por su propia naturaleza, aunque no existan formalmente normas que le impongan —perseguir una política de bien general, siempre estará en la obligación de encaminar toda su actividad hacia la satisfacción de los intereses generales de la comunidad.

(1) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, op. cit. . art. 50

Dentro de este mismo orden de ideas, el Estado costarricense, por medio de sus diversos órganos, trata de procurar el bienestar de todos los habitantes de la República, a la vez que organiza y estimula la producción y el adecuado reparto de la riqueza a través de leyes específicas de obligatoriedad general.

Los términos "organizar y estimular" la producción que forman parte del artículo 50 de la Constitución, en sentido jurídico, corresponden a las medidas o leyes obligatorias que dicta el Estado tendentes a restringir y estimular la producción de ciertas actividades productivas por considerarlas negativas o beneficiosas para el país.

En realidad, el término "organizar" la producción equivale a toda la estructura productiva o comunidad nacional.

En síntesis, el Estado organiza la producción por medio de medidas concretas, de tipo restrictivo o estimulativo hacia determinadas actividades, para lograr así, el desarrollo de la economía y de la producción nacional.

En las siguientes páginas, analizaremos con detalle, alguna legislación específica, sobre todo relacionada con asuntos económicos y sociales, que ha sido dictada con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política y cuyo fin es lograr una efectiva realización del bienestar general del pueblo costarricense; tal es el caso, de la Nacionalización bancaria; la Planificación Económica; el Régimen Jurídico de los Impuestos; la Ley de Asignaciones Familiares y la Ley de Protección y Desarrollo Industrial.

Dicho análisis tendrá por objeto determinar si tal legislación ha desarrollado en forma adecuada el precepto programático contenido en el precitado artículo 50, o si, por el contrario, nuestro legislador se ha separado, en algunos casos y en otros desconocidos totalmente, los principios filosóficos y políticos que contiene la mencionada norma.

CAPITULO III:

LA NACIONALIZACION BANCARIA EN COSTA
RICA.

A) ANTECEDENTES HISTORICOS

Para analizar los fines, alcances y proyecciones de la Banca Estatal en Costa Rica, se hace necesario realizar un breve desarrollo histórico del papel de la banca en nuestro país.

En el período que va de 1863, con la creación de la segunda entidad bancaria en Costa Rica, el Banco Anglo Costarricense, - hasta el año 1914, privó el funcionamiento de los bancos particulares (2).

Para entonces existía la Ley de Bancos de 1900, la cual no contenía reglamentación alguna sobre la operación de créditos de los bancos comerciales privados existentes en la época. Durante ese período, la emisión del dinero estaba al alcance de todos los bancos comerciales, los cuales funcionaban libremente sin ninguna limitación de tipo jurídica, pues aunque la ley dejaba a cargo del Secretario de Hacienda "la Superior vigilancia de todos los bancos", se hacía prácticamente imposible su vigilancia y fiscalización por parte del Estado.

No es sino a partir del año 1914, durante la Administración - del ilustre ciudadano costarricense, Don Alfredo González Flores y por iniciativa propia de éste, que el Estado comienza a interesarse por el desarrollo nacional, entrando a competir en la emisión de moneda con los bancos particulares, lo cual se realizó - con la creación del Banco Internacional.

(2) FERNANDEZ GUARDIA, Ricardo. La Cartilla Histórica. Imprenta Lehmann. San José, Costa Rica, 1944.

El Banco Internacional logró su consolidación, a pesar de la intención de algunos que deseaban volver a la situación imperante en el año 1900, logrando el monopolio absoluto de la emisión de dinero en el año 1922.

El fundamento para dicho monopolio era que "las cantidades de dinero que se pongan en circulación y el criterio que se emplee para emitirlo, afectan profundamente la capacidad relativa de los diferentes sectores y clases sociales para comprar mercaderías, servicios y capitales, para consumir, ahorrar e invertir, y, por lo tanto, son factor determinante tanto de la producción de la riqueza, como distribución de la misma y del bienestar social de la comunidad. Es decir, por sus efectos y consecuencias generales, la emisión del dinero tiene un sentido público (3).

Vino el año 1936, bajo la administración de Don León Cortés Castro, en la cual dictó la "Ley General de Bancos", número 15 de 5 de Noviembre de 1936, mediante la cual se les dió a los bancos particulares una organización diferente, en el sentido de contribuir en forma más eficaz y segura, al desenvolvimiento de todas las actividades económicas del país, reafirmandose de esta manera la tesis de que la actividad bancaria reviste naturaleza jurídica.

El Banco Internacional, durante el período que va de 1922 a -

(3) NACIONALIZACION BANCARIA EN COSTA RICA. "Antecedentes Históricos, fundamentos doctrinarios, procedimientos, realizaciones y posibilidades", S. C. E. ANONIMO. San José, Costa Rica, 1951, p. 15.

1936, además de banco emisor de moneda había venido ejerciendo las mismas funciones comunes de los bancos comerciales, aunque como es obvio, con un criterio más social.

Durante ese lapso, el Estado, a través del Banco Internacional que había cambiado de nombre por el de Banco Nacional "no sólo continuará realizando la mayor parte de sus funciones bien - que dentro de una estructura más técnica y adecuada, sino que explotaría con éxito creciente otros campos de actividad, logrando llevar a un grado muy avanzado la democratización del crédito, - por medio de las Juntas Rurales de Crédito, instituciones defensoras y estimulantes de los pequeños productores nacionales y de la producción de artículos de consumo nacional, en cuyo mantenimiento y desarrollo el Banco trabajará permanentemente a pérdida, dada la baratura de los servicios" (4).

Como producto de la progresiva ingerencia estatal en el campo bancario y de los conflictos que se venían produciendo entre - los bancos particulares con el Banco Nacional del Estado, en 1948 bajo el gobierno de Facto que presidía Don José Figueres, se - produjo la nacionalización de los bancos particulares por medio de un decreto-ley que traspasó todos los depósitos del público a los bancos del Estado.

(4) IDEM. p. 19.

B) FINES Y FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DE LA NACIONALIZACION BANCARIA

"El fin primordial de la Nacionalización fué el de disponer del crédito bancario en forma más democrática, haciéndolo llegar a todos los sectores de la población, principalmente a los pequeños agricultores e industriales, en igualdad de condiciones y oportunidades" (5). Por otro lado, se pensó disminuir el poder financiero de los Bancos particulares, para evitar los grupos de presión que existían y disminuir en lo posible el ligamen del poder económico al poder político (6).

Se quiso darle al crédito una función pública y social poniéndolo en manos de los bancos del Estado, sin interés por el lucro y - las ganancias a corto plazo que era lo que caracterizaba a los bancos privados de entonces.

En el decreto de Nacionalización, se considera que "dentro de la organización moderna de la economía nacional, todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales dependen vitalmente - del crédito bancario, cuya orientación es determinante del progre

(5) GIL PACHECO, Rufino. "Ciento cinco años de vida bancaria en Costa Rica". Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1973, p. 200.

(6) FACIO, Rodrigo. "Estudio sobre economía Costarricense". Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1972.

LIZANO, Eduardo. "Comentarios sobre la Economía Nacional". Universidad de Costa Rica, Sección de Publicaciones, San José Costa Rica, 1971.

ANONIMO, "Nacionalización Bancaria de Costa Rica". Op. cit.

so o estancamiento del país" (7)

Por dicha razón se consideró que los depósitos bancarios por su naturaleza pública y por ser factor de desarrollo integral de los pueblos deberían de estar en manos del Estado a fin de promover las actividades más reproductivas.

En la actualidad, la Ley del Banco Central en su artículo 4 expresa que "éste deberá promover el ordenado desarrollo de la economía nacional para lograr la ocupación plena. Está obligado a evitar la inactividad de los medios de producción cuando esta sea causada por falta de crédito oportuno y a impulsar la diversificación paulatina de la producción nacional. . . " (8).

Se observó, por parte de los proponentes de la nacionalización, las necesidades de impulsar al pequeño agricultor, reducto de la democracia rural de nuestro país, y del impulso de la nascente industria hacia políticas integrales de más beneficio para la economía nacional, aduciéndose que los bancos privados, por la diversidad de metas que cada uno de ellos pudiera tener y por los fines que perseguían, era imposible que llenaran esa función.

El señor Gil Pacheco, expresa que "la nacionalización de la banca en Costa Rica, por ser esta, a nuestro juicio la medida más importante adoptada por la Junta de Gobierno, tendía a estructurar

(7) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Antecedentes, Proyectos y Reglamentos" Tomo I, Actas. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1951.

(8) BANCO CENTRAL. "Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica". art. 4.

la economía del país con más armonía y contribuir así a una mejor distribución de los medios de producción, sobre los cauces de la verdadera reproductividad ayudando a la creación de riqueza a través de las múltiples empresas, hombres de trabajo, pequeños y grandes, que con su laboriosidad dan vida a la Nación" (9).

Se pensó que se hacía necesaria la intervención del Estado en el sentido de que las utilidades realizadas por los bancos particulares con los depósitos del público, volvieran a manos de la Comunidad por medio de la instalación de los Bancos estatales.

Dentro de los especialistas en la materia que han defendido la Nacionalización Bancaria, el criterio general argumentado, ha sido el citado arriba, o sea la mejor distribución del crédito para el impulso integral de nuestra economía. Sin embargo, consideramos importante analizar el criterio sostenido por el señor Eduardo Lizano, que expresara su opinión en una mesa redonda en el año de 1966 en el ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico), a causa de que algunos sectores y personas volvieron a insistir en el establecimiento de la operación de la banca privada, junto a la Nacional, argumentando una serie de factores que luego analizaremos.

Para el señor Lizano, la finalidad de la Banca Estatal en Costa Rica no es simplemente la distribución más equitativa del

(9) GIL PACHECO, Rufino. "Ciento cinco años de vida bancaria - en Costa Rica, op. cit., p. 312.

crédito, sino que representa un problema de poder político, debido que en la sociedad moderna, las instituciones privadas de crédito, para la defensa de sus intereses, procuran el ligamen del poder económico al poder político, constituyendo estos fuertes grupos de presión que atentan o influyen indirectamente en la toma de decisiones por parte de los titulares del poder.

Al respecto, expresa el citado autor que "la historia y la — realidad de muchos países enseña que uno de los principales instrumentos de concentración de poder reside en las instituciones financieras dando origen a lo que se ha dado en llamar el "capitalismo financiero". Es por ello, que en Costa Rica las instituciones aseguradoras son del Estado y los bancos comerciales se nacionalizaron" (10).

Además, el señor Lizano analiza y destruye los argumentos a favor de la banca privada, referente a las deficiencias que se le atribuyen a la banca estatal como son los factores de escasez de recursos, poca eficiencia y la intromisión de la política en — las instituciones bancarias.

Al primer respecto nos referiremos posteriormente, respecto al segundo, no será objeto de análisis en el presente estudio y el tercero, por su parte, será analizado en el capítulo referente a la Planificación y el Plan Nacional de Desarrollo, cuando — nos referiremos a la tendencia actual de concentrar mayor poder político en el Ejecutivo.

(10) LIZANO, Eduardo. Comentarios sobre la economía nacional. Op. cit. p. 10.

Para el señor Lizano, "la razón fundamental de la Nacionalización bancaria se encuentra en la necesidad de tratar de configurar la estructura del poder en el país de acuerdo con la organización social que la Nación se ha impuesto como objetivo fundamental durante las últimas décadas. En este deseo de distribuir el poder económico, de evitar concentración de poder de cualquier tipo para evitar hasta donde sea posible influencias indeseables es lo que constituye el argumento fundamental para justificar medida tan trascendente como la nacionalización bancaria" (11)

Así, con la Constitución Política de 1949, se produce la descentralización administrativa con la creación de las Instituciones Autónomas con el objeto de tecnificar y especializar las funciones y actuaciones estatales, y principalmente para disminuir la concentración de poder que tenía el Ejecutivo, más propiamente el Presidente, producto de la época patriarcal anterior.

Por otro lado, expresa el mismo autor que "los bancos privados serían el germen alrededor del cual se formarían grupos de presión, de carácter económico y político permanente, que por su naturaleza perturbarán el equilibrio de poder, al cual aspira el país" (12)

Así, por ejemplo, las financieras particulares consideran el hecho de ligar el poder económico al poder político para la defen

(11) LIZANO, Eduardo. Op. cit., p. 74.

(12) IDEM. p. 74.

sa de sus intereses como algo natural, con lo cual ejercerían de hecho influencia que obviamente influiría en la libre determinación de las decisiones políticas de los órganos estatales.

Sin embargo, existen argumentos en contra de la banca estatal, en el sentido de que sus beneficios no han alcanzado a todos los sectores productivos del país. Verbigracia, el expresidente de la República, don José Joaquín Trejos Fernández, expresa - que "actualmente, sin embargo, los temas de política crediticia y bancaria del Gobierno no pueden ser tratados separadamente de la política electoral, porque el grupo oduberista ha hecho de la nacionalización bancaria un arma de politiquería y el sistema bancario nacionalizado lo ha constituido ese grupo en su ciudadela, en su fortaleza, desde el cual operan para tratar de esclavizar a los ciudadanos a sus designios" (13).

Consideramos que la posición del señor Trejos Fernández a pesar del respeto que nos merece, peca de parcialidad política. Creemos, que la Banca Nacionalizada, a pesar de los defectos - que se le pueden imputar, es beneficiosa para el país. El sistema y los procedimientos jurídicos de la Banca estatal son modernos y expeditos como instrumentos de desarrollo. El problema fundamental es la carencia del elemento humano necesario, en cuanto a su calidad, para realizar las metas propuestas por la nacionalización bancaria.

(13) TREJOS FERNANDEZ, J. J. "Ocho años en la Política Costarricense". Editorial Hombre y Sociedad, San José, Costa Rica, 1973, p. 115.

Por eso creemos que el asunto básico reside en escoger el mejor criterio para la composición de las Juntas Directivas de nuestras Instituciones Autónomas, a fin de que sus determinaciones sean científicas y de provecho general para el país.

En otros términos, es necesario que tales Juntas Directivas sean organismos bastante tecnificados y descentralizados; a la vez, es conveniente que exista mayor coordinación entre estas y el Poder Central, con base en una determinada política de desarrollo, lo cual analizaremos en forma más amplia en el próximo capítulo. (14).

En resumen, volviendo a los argumentos a favor de la nacionalización bancaria, el señor Lizano, para rebatir a los opositores a la Banca Nacionalizada a causa de la presentación del Proyecto de Ley que abolía el monopolio de los depósitos bancarios en manos del Estado en 1966, señaló que "pretender hacer los bancos nacionales más eficientes mediante la competencia de bancos privados implicaría: A) Quitar personal calificado al Sistema Bancario Nacional; B) eliminar sucursales en las zonas rurales; C) restringir el crédito al pequeño agricultor; D) eliminar brusca y rápidamente deudores bancarios que con frecuencia se encuentran en situación de mora por razones ajenas a ellos mismos, y E) modificar sustancialmente la composición de la cartera" (15).

(14) Vease cap. IV

(15) LIZANO, Eduardo. Op. cit. p. 76.

La nacionalización bancaria, en nuestro criterio, uno de los aspectos que influyó para consolidarla fue posiblemente la comprensión y el sentimiento cristiano de nuestro pueblo, encaminado a buscar un mejor nivel de vida para todos.

En la época de la nacionalización imperaba el criterio de que el Estado debía ir asumiendo una serie de funciones que estaban entonces encomendadas a la iniciativa privada, las cuales varían según las circunstancias históricas de cada país; así, por ejemplo en ese entonces la administración del agua estaba en manos del Estado, lo mismo que los Ferrocarriles, el correo, el telégrafo etc.

Se consideró que las grandes empresas directamente relacionadas con los servicios públicos debían estar encomendadas a entes públicos, ya sean centralizados o descentralizados.

La Junta de Gobierno, de acuerdo con el considerando primero del Decreto de Nacionalización, estimó que la política agropecuaria e industrial que requería el país tenía que encaminarse mediante el control efectivo de los recursos crediticios existentes razón por la cual se imponía la nacionalización bancaria.

La nacionalización de la banca se consolidó a pesar de las pocas posibilidades que auguraban los técnicos bancarios ya que — consideraban que una medida de esa índole era imposible de realizar en un país sub-desarrollado y de escaso capital como Costa Rica, debido a que los depositantes y ahorrantes reaccionarían — sustrayendo los fondos de los bancos nacionalizados por la desconfianza que produce inicialmente esa medida.

A pesar de esos negros presagios, en Costa Rica se logró - afianzar el Sistema Bancario Nacional, gracias al sutil procedimiento con que se introdujo y la poca desconfianza que la nacionalización causó en los depositantes.

En efecto, las colocaciones crediticias de los bancos recién estatificados disminuyeron en el mes de julio de 1948. Durante - los tres primeros meses siguientes, dichas colocaciones se mantuvieron al mismo nivel. No obstante, durante los meses posteriores las colocaciones crecerían en forma considerable según estadísticas conocidas por todos los costarricenses y explicadas por algunos de nuestros mejores economistas, como don Rodrigo Facio (16).

Con posterioridad, a la nacionalización bancaria, en el año de 1950, durante la administración de Don Otilio Ulate Blanco, el Sistema Bancario Nacional terminó por consolidarse con la creación del Banco Central, como instituto independiente y rector de todo el sistema Bancario.

Según el ya mencionado artículo 4 de su Ley Orgánica, el - Banco Central es el que determina la política monetaria y crediticia del país, fijando topes máximos y mínimos, de acuerdo a los recursos de que se disponga mediante un presupuesto crediticio que elabora, tomando en consideración los recursos existentes y que tiende a financiar las actividades más reproductivas. El -

(16) FACIO, Rodrigo. "Estudio sobre la economía costarricense"
Op. cit. p. 289.

artículo 62 inciso 2 indica la forma y condiciones en que se otorgará el crédito. (17).

La Ley número 4.646 de Octubre de 1970, introdujo variantes importantes al obligar al Banco Central a coadyuvar al logro de — las metas del Plan Nacional de Desarrollo, según lo consignado en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Banco Central. Con ello es obvio, se pretendió una mayor coordinación entre el instituto emisor y el Poder Central.

El artículo 5 inciso 7 de la materia que nos ocupa, dispone que son funciones esenciales del Banco "la dirección superior del crédito bancario y la vigilancia y coordinación del Sistema Bancario - Nacional" (18)

(17) BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. Op. cit. arts. 4-62.

(18) IDEM. art. 5.

C) ALCANCES, REALIZACIONES Y PROYECCIONES DE LA
BANCA NACIONALIZADA

Antes de entrar al análisis de los números y de las estadísticas que comprueban las realizaciones y alcances del Sistema Bancario Nacional, es necesario estudiar dos diferentes factores culturales, sociales y político, que han influido en el desarrollo de la banca estatal y en la creciente afluencia de capital extranjero a nuestro país en los últimos años.

En primer lugar, tenemos la estabilidad de nuestro sistema político, que confiere seguridad jurídica y social a los particulares. Por otra parte, las características del mercado interno de iniciativa privada, ha permitido que los depósitos del público circulen en forma de ahorro e inversión, lo cual constituye un poderoso incentivo para la inversión extranjera.

Las cargas tributarias son de poca envergadura y a la vez - existe la "Ley de Protección y Desarrollo Industrial", que confiere grandes exenciones a las empresas extranjeras, a manera de incentivos para la producción.

Así, por ejemplo, tenemos el caso de la Compañía Bananera de Costa Rica, para quien el crecimiento de las exenciones a su favor ha sido superior el monto de los impuestos legalmente obligada a pagar.

Por último, nuestro sistema jurídico referente a las sociedades mercantiles, que es de corte capitalista, permite al inversionista evadir gran parte de los impuestos por medio de las sociedades anónimas con acciones al portador.

Por eso, creemos necesario analizar el proyecto de ley presentado por el diputado señor Genaro Valverde Marín en el sentido de convertir las acciones al portador en nominativas dentro de las sociedades anónimas, con el fin de que el Estado pueda conocer a los propietarios de las acciones de las empresas nacionales y extranjeras instaladas en el país (19)

Consideramos conveniente, en aras de la mejor racionalización de la inversión extranjera y, por lo tanto, de nuestra soberanía, formar una comisión Permanente adscrita a la Asamblea Legislativa y formada por técnicos nacionales, para que estudie y analice los beneficios y perjuicios del mencionado proyecto, lo mismo que el papel que desempeña el inversionista extranjero en nuestro país.

En lo específico, nuestro Sistema Bancario Nacional ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la economía nacional, financiando en forma significativa a los sectores industriales y agropecuarios, según los términos expresados por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Banco Central de la política crediticia hacia el desarrollo industrial y agropecuario.

Como resultado de esa disyuntiva, cabe analizar la dirección del crédito hacia la ganadería e industria. En el período que va de 1966 a 1972, el crecimiento porcentual anual de las colocaciones crediticias de los Bancos Nacionales a esos sectores, ha sido de un 14,5% para la ganadería y un 9,7% para la industria.

(19) Véase apéndice número I

Para el comercio y el crédito personal, durante el mismo período mencionado, el crecimiento porcentual anual fue de un 12,8% y 16,8% respectivamente (20).

Con anterioridad a esa fecha, en el período que va de 1956 a 1972, el crecimiento porcentual anual de las colocaciones de los bancos para los diferentes renglones de la economía nacional fueron los siguientes: (21).

- a) Agricultura: 5%
- b) Ganadería, Caza y Pesca: 13,5%
- c) Industria manufacturera y extractiva: 11,2%
- d) Comercio: 3,4%
- e) Servicios: 7,2%
- f) Vivienda: 5,6%
- g) Crédito personal: 10,9%

Durante el período correspondiente de 1966 a 1972, en el renglón de agricultura, el porcentaje bajó de un 5% a un 1,7% lo cual es digno de tomarse en consideración porque Costa Rica es un país agrícola, y el 60% de sus habitantes viven en las zonas rurales, y además, es la causa de que tengamos que importar productos básicos para la alimentación popular.

Sin embargo, cabe observar que a partir del año 1968, el Sistema Bancario Nacional ha venido estimulando en forma creciente

(20) OFIPLAN, Trabajo mimeografiado, San José, Costa Rica, 1973 p. 60.

(21) IDEM.

al pequeño productor agropecuario por medio del crédito. Así, la tenemos que en el año 1968, en actividades para la producción de granos básicos, hortalizas, verduras, frutas, producción de leche, ganado porcino, etc., el total de financiamiento concedido para estas actividades del pequeño agricultor, fueron de 161,8 millones de Colones, lo que significa aproximadamente 1.618 millones de Pesetas.

Desde entonces, en diciembre de cada año pudo notarse el crecimiento que se manifestó así: 1969: 173,1 millones de Colones, -- aproximadamente 1.731 millones de pesetas; 1970: 191,4 millones de Colones, aproximadamente 1.914 millones de pesetas; 1971: 284,4 millones de Colones, aproximadamente 2.844 millones de Pesetas; y en 1972: 329,8 millones de Colones, aproximadamente -- 3.298 millones de Pesetas (22).

Es posible que el incremento proporcional de los préstamos al pequeño agricultor no haya sido suficiente para obtener la producción diversificada de los granos básicos para la alimentación, dada la escasez palpada en los últimos tiempos.

Una posible solución sería el trueque de productos básicos de alimentación con los excedentes que poseen otros países del istmo.

Según las estadísticas anteriormente citadas, a partir del año 1966, los préstamos a través del Sistema Bancario Nacional se incrementaron principalmente en los renglones de ganadería, créditos personales y comercio. Para el primer renglón, hubo un 13,5% en

(22) Publicado por el periódico "La Nación" del 6 de Marzo de -- 1974, pág. 10-B.

el lapso de 1966 a 1972 en relación con un 5, 0% para el período que va desde 1956 a 1972. Para el segundo renglón, o sea el crédito personal, por su parte creció de un 10,9% a un 16,8% en la misma relación de períodos. También el crédito al comercio subió de un 3,4% a un 12,8%; la Vivienda de un 5,6% a un 7,5%. Es necesario señalar que durante el período que va desde 1966 a 1972, las colocaciones para el comercio y créditos personales acrecieron en forma acelerada, lo que representa en nuestro concepto una tendencia perjudicial para el país, ya que esas son actividades menos reproductivas y el fin de ellas es generar ganancias a corto plazo. Además, dichas actividades, dando el nivel cultural y educacional de los costarricenses, hace que se importen productos suntuarios que implican una fuerte salida de divisas extranjeras.

En relación con los recursos crediticios disponibles para el desarrollo nacional, se observa últimamente una creciente participación, en forma de inversión directa y no por medio de intermediarios financieros, de ahorro externo en el ahorro total.

En el período 1959 a 1962, la inversión directa extranjera representó alrededor del 15% de la formación bruta del capital. Este porcentaje se comenzó a incrementar después de 1962, llegando a representar en 1967 alrededor del 23%. A partir de 1968, aumentó de nuevo. La mayor parte de la inversión se canalizó al sector agropecuario (banano y ganadería), aunque en los últimos años subió de manera apreciable el flujo al sector industrial. Esto plantea la necesidad de que el país fije una política definida respecto al capital extranjero (23).

En relación con los recursos crediticios internos, el señor Don Eduardo Lizano al referirse a los recursos crediticios en general, con motivo de la polémica que se suscitara en 1966 a raíz del hecho de haberse querido abolir el monopolio de los depósitos bancarios en manos del Estado, apuntó las siguientes estadísticas de fecha 31 de Agosto de 1966.

A esa fecha, el recurso total de los Bancos es de 1.400,7 millones de Colones, de los cuales corresponde a los recursos nacionales 1.231,0 millones de Colones y a los recursos extranjeros 169,7 millones de Colones (24).

Con base a esas cifras, se observa que el desarrollo nacional hasta esa fecha no ha necesitado en mayor grado del capital extranjero proveniente de los préstamos que obtiene el Sistema Bancario de bancos privados del exterior o de instituciones internacionales financieras, como el BIRF o del BID, por lo que no se ve la necesidad de que se establezcan bancos privados.

La lógica del desarrollo indica que el mejoramiento social de los países en desarrollo, debe ir paralelo a un fuerte impulso económico, a base de préstamos y de incentivos al producto nacional y extranjero para distribuir la riqueza y los ingresos entre toda la población.

En Costa Rica, a causa de la "política desarrollista" imple-

(23) ARIAS SANCHEZ, O. El sistema bancario y la planificación en Costa Rica. La República, p. 15.

(24) LIZANO, E. Op. cit. p. 67.

mida por la Administración de Don José Figueres, en los años 1970-1974, basada en los principios filosóficos del desarrollo social y económico dentro del marco de las libertades liberales hemos visto incrementarse el crédito en el campo agropecuario y en otros rubros relacionados con la producción. No obstante, ello no ha podido evitar que la inflación importada y los problemas mundiales derivados de la crisis energética, unidas al galopante gasto público del gobierno, hayan producido un aumento del nivel de precios, con el consiguiente encarecimiento de la vida.

Debido a la poca coordinación existente en ese momento entre las Instituciones Autónomas y el Gobierno Central, se ha creado el Plan Nacional de Desarrollo, tendiente a establecer las prioridades del desarrollo futuro.

En el Plan Nacional de Desarrollo, al cual nos referimos en capítulo posterior, se expresa que "la política crediticia del Sistema Bancario Nacional, no orienta al desarrollo económico con un criterio de banca para el desarrollo. En efecto, todavía se le otorga garantía para conceder el crédito, una importancia considerable mayor que la que corresponde a entidades financieras de fomento económico" (25)

Valga decir que la Administración de Don José Figueres ha variado esta política. En efecto, desde el año 1970, primero de la gestión del gobierno del señor Figueres, los toques de crédito

(25) OFIPLAN. Op. cit., p. 63.

para la agricultura y la industria se ampliaron en forma considerable. A partir del año mencionado, los créditos concedidos al pequeño agricultor agropecuario se han venido incrementando.

Los préstamos al pequeño agricultor o productor agrícola en el año 1970, concedidos por el Sistema Bancario Nacional, fueron de 191,4 millones de Colones, aproximadamente 1.914 millones de Pesetas; 329,8 millones de Colones en 1972, aproximadamente 3.298 millones de Pesetas; y finalmente durante el año 1973 alcanzó a 374,6 millones de Colones, aproximadamente 3.746 millones de pesetas (26).

Con relación a los recursos externos para lograr un verdadero desarrollo dentro del marco de los principios de la democracia representativa, es imprescindible analizar los posibles trastornos que pueden incidir en la soberanía nacional, concebida esta como único poder político decisorio nacional sin intromisión extranjera, a causa del incremento de los empréstitos internacionales y de la inversión privada externa fomentados por la Administración de don José Figueres, lo cual podría en el futuro condicionar nuestras decisiones políticas internas y, en consecuencia, acrecentar la dependencia de nuestro país al capital extranjero, lo que lógicamente iría en detrimento de nuestra integridad como nación soberana e independiente dentro de la comunidad internacional.

Si bien es cierto que nuestro país, como miembro del llamado "tercer mundo", debido a su situación geopolítica y económica, es

(26) "La Nación", supra nota, pág. 49.

tá sujeto a una gran influencia de dependencia respecto a las gran des potencias, es bien racionalizador en la mayor medida posible, ya que las fuerzas del capitalismo internacional, actúan en forma deliberada en la búsqueda de satisfacer sus propios intereses. No obstante, últimamente existe mayor conciencia entre los goberna- tes con sensibilidad social de los países del "tercer mundo", en el sentido de que es necesario buscar una política de unida c, neces a ria para dar la lucha contra las fuerzas capitalistas en procura de un mejor nivel de vida para sus habitantes.

Se puede decir que los fondos de los bancos estatales han cam i nado a la par del desarrollo del país, estimulando la producción - más que todo en las zonas rurales, aunque en el período que va - desde el año 1966 a 1972, se observa que las colocaciones en los rubros de la agricultura, bajó de un 5,0% anual a un 1,7% lo que es sumamente censurable, ya que trajo como consecuencia una mar cada escasez de los granos básicos.

En nuestro país, al igual que en otras naciones latinoamerica - nas, la mayoría de la gente quiere trabajar en las zonas urbanas, lo que ha producido un éxodo masivo de campesinos hacia las ciuda des con las lógicas y penosas secuelas que todos conocemos: deso cupación, aumento de la delincuencia, prostitución, insa ubrida d, hacina miento urbano, etc.

Es menester señalar que en los últimos años Costa Rica alcan zó una de las tasas de crecimiento económico más elevadas de la - América Latina. En efecto, en eñ año 1970 dicha tasa alcanzó un 8,5%. Con ello se demuestra que nuestro sistema de banca nacio nalizada ha servido de intermediario, como captador de los recur

tos internos, para canalizarlos hacia los sectores más reproductivos de la economía nacional.

En resumen, se expresa en el "plan Nacional de Desarrollo" que a pesar de las deficiencias que se le pueden apuntar al sistema Bancario Nacional, "por una parte ha servido como intermedio para captar el ahorro nacional y canalizarlo hacia los sectores más reproductivos" (27).

De todo lo expuesto, puede concluirse que los fondos del Sistema Bancario Nacional han jugado un papel muy importante en la distribución del crédito hacia los sectores productivos del país y, en general, se puede afirmar que se ha desarrollado paralelamente a los requerimientos del desarrollo social y económico exigidos por la época.

Si bien es cierto que existe la necesidad de mayores recursos para competir industrialmente con los restantes países del istmo - Centroamericano, creemos que deben sujetarse, tales recursos a controles adecuados, ya que de lo contrario podrían llegar a perjudicar la soberanía del país y eventualmente hasta trasplantar a -- nuestro país los males de las sociedades industriales.

Por todas las razones apuntadas, somos partidarios de la mayor y mejor utilización de nuestros recursos, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha a partir de la nacionalización bancaria.

(27) OFIPLAN. Op. cit., p. 64.

Nuestros recursos, por lo tanto, deben servir para que nuestras empresas se consoliden, sobre todo aquellas dedicadas a las actividades más productivas, sin discriminación alguna para los - otros sectores productivos, los cuales también deberán recibir el estímulo adecuado del crédito público.

CAPITULO IV:

LA PLANIFICACION EN COSTA RICA

INTRODUCCION

Modernamente se considera a la planificación como algo natural e inherente al Estado. Por su propia naturaleza político-jurídico, el Estado requiere una orientación política general para la búsqueda del bien común. El Estado, conforme aparecen una multiplicidad de factores complejos de tipo social y económico, requiere de ciertos criterios de racionalidad unitarios para delinear y poner en ejecución sus planes políticos, ya que en esencia constituye una organización por medio de la cual el hombre persigue la realización de una serie de objetivos sociales y económicos que - están inmersos dentro de su programa de acción.

El Estado moderno utiliza la planificación como un medio idóneo y necesario para el planteamiento y ejecución de las políticas generales. En otros términos, el Estado, además de velar por la seguridad jurídica de los particulares, modernamente debe interesarse por un plan general que oriente su acción política, económica y social a fin de lograr la plena realización del bienestar de la comunidad.

La convergencia de una pluralidad de factores complejos en la vida social moderna y el desarrollo irracional de las estructuras sociales y económicas dentro de las sociedades modernas ha hecho necesaria e impostergable la intervención del Estado para regular las situaciones diversas que se presentan.

Sobre el particular nos dice Gordillo que "partiendo de la - conclusión anterior, si la planificación es un instrumento para la

eficacia del Estado, pues hace más racionales y unitarios sus decisiones y actuaciones, puede afirmarse que ella es inmanente al Estado, o sea, que es una potestad implícita en el Estado, porque el mismo no sólo está autorizado, sino que está obligado a organizarse y actuar en la forma más consciente para la realización de sus cometidos" (1).

Dado que el Estado es titular de potestades de imperio, está en capacidad actual y potencial de elaborar un plan, que la doctrína reputa como obligatorio para el sector público e indicativo o - voluntario para el sector privado. En nuestro medio, por ejemplo con base en el artículo 45 de la Constitución política de Costa Rica (2), el Estado puede establecer restricciones a la propiedad - por motivos de interés social.

El artículo 50, por su parte, es propio del Estado planificador de Derecho (3). Por medio de él, el Estado está en capacidad

(1) GORDILLO, Agustín, La Planificación y el poder legislativo, (en las Perspectivas del Derecho Público en la Segunda mitad del siglo XX, Madrid, 1969) III, p. 250.

(2) Véase artículo 45 Constitución Política de la República de Costa Rica. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 1949. (Imprenta Nacional, San José, 1971)

(3) "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza", artículo 50. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 1949. "Constitución Política de la República de Costa Rica". (Imprenta Nacional, San José, 1971)

de orientar su política económica y social en favor de las clases más menesterosas. Es obvio, que para ello, el Estado tiene que recurrir, en mayor o menor grado, a la planificación de la producción y distribución de la riqueza nacional.

A) ASPECTOS GENERALES

1) Concepto de la Planificación

El término planificación literalmente significa "prever y orientar" (4). En este mismo sentido, "planificar también es prever las insuficiencias que la legislación pueda tener en relación a los objetivos del plan y orientar la sanción de las leyes que sean necesarias al efecto" (5).

-
- (4) El ex-ministro Costarricense Arias Sánchez, nos dice que: - "Planificar es luchar contra la improvisación. La planificación ha de ser un instrumento apto para lograr la participación de todos en las decisiones que los afectan. Debe ser un medio eficaz para movilizar los distintos grupos sociales e inducirlos a colaborar para que se alcancen los objetivos del desarrollo socioeconómico". PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1978-82. Oficina de Planificación Nacional y política económica. San José. Costa Rica, 1977.

El profesor Sánchez Agesta nos dice al respecto: "Planeamiento es, el intento de una concepción activa del poder público, - que con el apoyo de una civilización científica y tecnológica - pretende dominar y dirigir los procesos de cambio". Luego, el mismo autor nos dice: "El planteamiento es, en último término una política que quiere dirigir los procesos de cambio". En la misma obra el Profesor Sánchez Agesta nos dice que: "Desde el punto de vista de la ciencia política, la planificación es una "respuesta" racionalizada del poder público a exigencias sociales latentes o manifiestas y una propuesta incitativa que trata de aunar voluntades para superar y resolver conflictos". Luego continúa diciendo que: "Desde el punto de vista del Derecho Constitucional (la planificación) supone un cuadro límite de normas más fundamentales que definen un tipo de régimen constitucional de la economía y condicionan las decisiones con la definición de metas y valores (igualdad, justicia social, posibilidad de socialización de la propiedad, protección de la iniciativa privada, directrices de política social y económica, etc.). Su

La Planificación da base a un conjunto de actos denominados prospectivos. Estos son de origen legislativo y establecen una serie de lineamientos generales. Es la administración quien regula en detalle este tipo de actos, gozando de un gran poder discrecional. Dentro de estos actos, podemos citar el Plan Nacional de Desarrollo, las Reglas de Urbanismo, etc.

De acuerdo con nuestro sistema político, la planificación implica todo un proceso jurídico de tipo democrático, por medio del cual se establecen ciertas reglas de juego que garantizan a los particulares y a las empresas sus derechos, para evitar que en el curso de la ejecución de un determinado plan estatal puedan verse lesionados. Por ello, "en cada caso, debe analizarse la concordancia y los alcances jurídicos que la aplicación del plan conllevan. O sea, en cada caso es necesario efectuar un análisis total del marco jurídico en el cual habrá de operar, a fin de ver si existen dificultades en el contexto normativo" (6).

(cont. pág. ant.)...pone también un marco de instituciones constitucionales a las que se atribuye una competencia para las decisiones políticas del plan, y las decisiones concretas con un nivel político o jurídico muy diverso, y una delicada ponderación del carácter vinculante de las decisiones y de los márgenes de libertad que deben respetarse". SANCHEZ AGESTA, - LUIS. La antítesis del desarrollo. Constitución, desarrollo y planificación. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1976. Pag 11-12-83.

También al respecto es conveniente ver la opinión de Francisco Guijarro, sobre Planamiento, en "Efectos sociales queridos y no queridos en el desarrollo español". FUNDACION FOESSA Ediciones Euramérica. Colección Síntesis. Madrid, 1968. p. 133

- (5) CARVAJAL HERRERA, MARIO. "La Planificación en Costa Rica". Facultad Derecho, Universidad de Costa Rica, 1969, p. 71.

Se elabora un plan en forma racional, previendo las consecuencias y efectos de las medidas a tomar mediante los ingresos, inversiones y gastos de los sectores públicos y privados, en forma tal que la ejecución del mismo quede sujeto a las modificaciones que vayan aconsejando las circunstancias y la praxis.

Para ello, la Constitución Costarricense otorga al poder Ejecutivo la potestad de reglamentar las leyes dictadas reglamentariamente por el Poder Legislativo (7). En el ejercicio de dicha potestad reglamentaria, el Poder Ejecutivo puede dictar medidas que agilizan el plan y lo hacen más flexible, lo que es propio de la planificación.

En realidad, como se dijo, la planificación asume una naturaleza propia y definida, según la clase de régimen político que lo determine.

En cuanto a su grado, concentración y aplicación, la planificación varía según, se realice en un sistema totalitario o bien democrático representativo. (8)

(6) CARVAJAL HERRERA, MARIO. Op. cit. p. 251.

(7) Al respecto el artículo 140 de la Constitución Política de Costa Rica, dice en su apartado 3, que son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno, sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. (Imprenta Nacional San José, 1971.)

(8) Con respecto a este punto es interesante recordar que existen diversas formas de planificación: "En primer lugar debe distinguirse entre planificación parcial y global. La planificación

No obstante, y como se expresara anteriormente, la planificación es una potestad inherente al Estado y necesaria para la realización de sus fines en forma coordinada y de acuerdo con cri-terios científicos. Por ello, la planificación es considerada como una disciplina neutral, es decir, de mera administración, que es imprescindible dentro de cualquier tipo de Estado ideológico de - que se trate.

(cont. pág. ant.) ...parcial se propone sólo uno o más objeti-vos determinados que pueden aislarse hasta cierto punto en el contexto de una sociedad y de su sistema económico. En prin- cipio... La planificación global trata de comprender un amplio complejo de relaciones que alcance a la estructura básica de la sociedad y de sus procesos económicos". Continúa diciendo el profesor Sánchez Agesta: "Más interés tiene la distinción entre una planificación centralizada y la planificación que se designa como flexible o indicativa. Esta planificación flexible trata de superar con la propia estructura de la planificación - la antítesis entre planificación y libertad. En térmi- nos muy ge- nerales se define como una planificación que no es vinculan- te para el sector privado y que por consiguiente respeta la li- bertad de iniciativa". Continúa diciendo el mismo autor que: "Las técnicas de la planificación indicativa y las de la planifi- cación centralizada soviética, son, como hemos indicado, aná- logas en cuanto a la preparación del plan, aunque tienen nota- bles diferencias en su realización". Luego nos dice que: "Co- mo es natural, en todos los niveles se refleja la distinta es- tructura política de los regímenes en que la planificación se - realiza. En los países occidentales la misma información está canalizada a través de grupos (sindicatos, comisiones con - una representación informal) que tiene carácter abierto y re- presentativo. En un régimen de democracia parlamentaria, las decisiones sobre las directrices la aprobación del plan y el - control de la gestión e inspección se realizará por el Gobier- no en diálogo con el parlamento, de acuerdo con los tradicio- nales poderes financieros que los parlamentos han ejercido en la aprobación del presupuesto. En la Unión Soviética, el So-

Según Muñoz Amato, "resulta también que todo gobierno, no importa cuáles sean sus normas en cuanto al control que debe ejercer sobre los ciudadanos, ha de tener planificación, si quiere esclarecer conscientemente su rumbo, lograr eficiencia en la aplicación de medios para conseguir sus propósitos y pre

(cont. págs. ants.)... viet Supremo tiene más bien una función de registro sin que exista una tradición de poderes de control financiero.

La diferencia más importante de unos y otros regímenes se centra en la gestión. En el régimen soviético está estrictamente vinculado por la estatización o socialización de los medios de producción, de la banca y del crédito, así como por la disciplina que el Partido imprime en los órganos administrativos. En este sentido tiene razón Bettelheim al denunciar - las deficiencias ejecutivas de la planificación indicativa. En los regímenes occidentales sólo hay un pequeño sector nacionalizado y las decisiones económicas de la banca y las grandes empresas pueden ser influidas, pero no son controladas". SANCHEZ AGESTA, LUIS. La antítesis del Desarrollo. Op. cit. p. 64-65-67-68 y 69. Este mismo autor, en otra de sus obras nos dice: "Esta dirección o planificación flexible o indicativa (para distinguirla de la centralizada soviética) marca objetivos económicos nacionales, éticos y sociales al desarrollo económico, orientando y coordinando la iniciativa privada y la libre competencia. Para ello utiliza instrumentos indirectos de distribución de la renta, regulación de mercado y orientación de las inversiones. Los más importantes de estos instrumentos.

Esta planificación en grados distinto, según la medida con - que se aplique, confiere al Estado un poder nuevo: el poder económico, que por recaer sobre los medios puede alcanzar indefinidamente a todos los fines, hasta los que aparentemente parecen más reomotos al proceso económico.

En el Occidente europeo se ha manifestado en los últimos años una tendencia a constituir un cuadro estable de relaciones - económicas supranacionales al servicio de esta idea de un - bienestar social, que están cuajando en ordenaciones institu

ver ñas cpmsecuencias de sus actos" (9).

De lo dicho podemos concluir que la planificación es meramente administrativa, lo cual es susceptible de ser realizada tanto en un régimen socialista como dentro de una democracia representativa. En dos palabras, se debe planificar la acción estatal, lo cual es susceptible de ser realizado en cualquier tipo de régimen político.

Es conveniente señalar que la planificación en los sistemas de democracia liberal-burgués, alcanza un grado de centralización y aplicación sumamente variable.

Un ejemplo de un sistema de planificación muy centralizado y muy amplio en cuanto al marco de acción, sería el caso actual - de Costa Rica en donde se han introducido sustanciales reformas a las instituciones autónomas y elaborado un Plan Nacional de De-

(cont. págs. ants.). ... cionales". SANCHEZ AGESTA, LUIS. Principios de Teoría Política. Op. cit. p. 580 y 581.

También es interesante, al consultar sobre este asunto, ver lo que al respecto dicen: José María García Escudero, Libertad de Empresa y Planificación. En Periódico "YA", sección editoriales y colaboraciones, Madrid, 25 noviembre 1978. p. 7 y 8; también véase Fundación Foessa. "Efectos sociales queridos y no queridos en el Desarrollo español", Ediciones Euramérica, colección síntesis, Madrid, 1968.

Vease MOMIGLIANO FRANCO. "Sindicatos, progreso, planificación económica". Ediciones Península, Barcelona, 1969.

- (9) MUÑOZ AMATO, PEDRO. "Introducción a la Administración - Pública", Fondo de Cultura Económica, cuarta edición, I, México, 1966, p. 106.

sarrollo, tendiente a concentrar y dar mayor poder al Ejecutivo.

Con ello se pretende lograr una mayor coordinación entre el gobierno central y los organismos descentralizados, a fin de que la planificación se centralice en aras de una acción coordinada y unitaria del Estado costarricense.

Se ha considerado necesario que un determinado plan del gobierno tenga la aquiescencia y aprobación de los principales sectores de la comunidad. Dentro de las democracias representativas, es un dogma clásico concebir la participación del mayor número de sectores populares se consigue por medio de la representación parlamentaria. Por tal razón, se conviene en que es necesario la aprobación del plan por parte de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, a veces, para la elaboración del plan y su ejecución, no es indispensable que sea aprobado por ley formal emanada de la Asamblea Legislativa, ya que bastaría con un simple decreto ejecutivo, o bien por disposiciones aisladas, anteriores posteriores o concomitantes al plan.

Sobre el particular nos dice Gordillo que "las leyes que el plan requiere pueden darse o no simultáneamente con él. En otras palabras, el plan necesitaba base legislativa, pero esa base no habrá de ser indispensablemente una ley que lo apruebe. También asegura que una ley para el plan resulta conveniente porque: "da respaldo mayor a la administración para las intervenciones económicas que deberá luego efectuar, previene en mayor grado contra posibles impugnaciones judiciales de aquellos individuos o activi-

dades o empresas afectadas por el Plan" (10)

2) El Procedimiento de la Planificación en Costa Rica

En el proceso de planificación, los poderes ejecutivo y legislativo participan simultáneamente en la elaboración y ejecución del plan; en realidad, se complementan en las diversas etapas del proceso, tomando cada uno las decisiones que le competen.

Así, por ejemplo, nuestro legislador ha propuesto en los artículos 177, 178 y el 140 inciso 15 de la Constitución Política (11) que en materia de presupuesto, le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio de la Oficina de Planificación, enviar el presupuesto ordinario a la Asamblea Legislativa.

En la ley de Planificación, en el capítulo III, artículo 9, se señala que "habrá un departamento encargado de preparar los proyectos de presupuesto por programas. Este Departamento y su jefe tendrán la atribución, potestades y funciones que determina el artículo 177 de la Constitución Política". (12)

Se puede observar que en ambos casos el Poder Ejecutivo ejerce la iniciativa de los planes incluidos dentro del presupuesto nacional mediante su preparación y presentación a la Asamblea

(10) GORDILLO, AGUSTIN, op. cit. p. 254.

(11) Vease los artículos citados en La Constitución Política de la República de Costa Rica", ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 1949, op. cit.

(12) Véase apéndice número II.

Legislativa, para su aprobación. El ejecutivo, con base en dicha aprobación ejecuta el plan por medio de las distintas comisiones de la Oficina de Planificación y demás organismos necesarios para ello.

La planificación, cuando se lleva de la teoría a la práctica mediante la acción, requiere un cierto orden, que se manifiesta a través de etapas a corto, mediano y largo plazo (13).

El proceso de la Planificación es realizado por instituciones especializadas del Estado, a través de las siguientes etapas

a) Formulación del plan

Dijimos que la iniciación del Plan es propuesto a la Asamblea Legislativa por el Ejecutivo, conteniendo un diagnóstico del sector de que se trate, por ejemplo, sector público, sector agricultura, sector salud, etc. El diagnóstico deberá ir acompañado de un pronóstico que nos dirá los resultados que se darán en el futuro si cierta tendencia de comportamiento se reitera en el tiempo. Verbigracia, suponiendo que el gasto público se mantiene en un nivel ascendente, es lógico pensar que si ello no conlleva un aumento en los ingresos públicos, el déficit presupuestario será cada vez mayor.

(13) A este respecto nos dice el Profesor Sánchez Agesta: "...planificación a corto plazo (uno o dos años); a medio plazo (cuatro o cinco años) y a largo plazo (doce a veinte años), a la que puede denominarse también "perspectiva" y que en los planes Franceses y Españoles se ha denominado "horizonte" SÁNCHEZ AGESTA, LUIS. "La Antítesis del Desarrollo", op. cit., p. 53

Con base en los datos estadísticos que muestra el diagnóstico y las futuras tendencias que enseña el pronóstico, se procede a fijar el plan de desarrollo económico y social.

b) Discusión y aprobación del plan

Dijimos que en el "sistema democrático abierto de planificación", o indicativo, es necesario para que el Plan se apruebe y se lleve a ejecución, que se produzca un diálogo entre los diferentes sectores públicos y privados interesados. O sea para que se apruebe, es importante que se discuta entre los diferentes sectores de la comunidad. Expresamos que la planificación democrática representativa difiere de la planificación socialista porque la planificación indicativa, es flexible en el sector privado e imperativa en el público, y la Socialista o centralizada como su nombre lo indica es autoritaria o mejor dicho arbitraria (14).

En otros términos, "el sistema de planificación democrático es flexible porque permite revisiones y ajustes en el curso de su aplicación y ejecución, participa el Estado y las organizaciones económicas y privadas que tienen la representación genuina del empresario, así como los trabajadores organizados, quienes participan a través de sus representantes calificados" (15).

(14) Véase a este respecto MOMIGLIANO, FRANCO. "Sindicato, progreso técnico, planificación económica". Ediciones Península, Barcelona 1969.

(15) Diario LA REPUBLICA, 13 marzo de 1974, p. 13. San José, Costa Rica.

De la cita transcrita se concluye que el Plan es necesario discutirlo con los representantes políticos, Poder Ejecutivo y Legislativo; también es necesario hacer los planteamientos teóricos y prácticos a los organismos especializados y al sector privado tales como las Cámaras de Industria y Comercio, a fin de analizar los diferentes aspectos que benefician o perjudican a la economía nacional.

Según sea el tipo de planificación, la que ejerce forma imperativa para el sector público, impone normas de conducta — obligatorias a los individuos o entidades públicas. Así, por ejemplo, en la Ley de Planificación, en el artículo 14 se indica que en materia de inversiones públicas, las instituciones deberán presentar los proyectos para su aprobación a la oficina de Planificación antes de someter sus presupuestos a la aprobación de la Contraloría General de la República (16). En cambio, de acuerdo con el principio "indicativo" de la democracia representativa, se estipulan formas de regulación dirigidas a producir comportamientos deseados, o sea, se sugiere lo que la gente debe hacer y la técnica de esta planificación consiste en apoyar esas sugerencias con medios que la hagan atractivas (política de incentivos fiscales, crediticia, etc.)

Nuestra ley de Planificación vigente, con el objeto de — darle cabida al sector privado en el proceso de la planificación crea la Comisión Evaluación de Planes, con el propósito de "conocer el criterio del sector privado de la economía nacional respecto a los planes en estudio de la Oficina de Planificación" (17)

(16) Véase Apéndice número II.

Por medio de esa disposición, se le concede a la empresa privada una mayor participación activa y directa en la elaboración del proyecto de planificación.

Se concluye diciendo que el proceso se incluyen los representantes de los sectores patronal y obrero, a fin de que el plan se realice conforme a los principios fundamentales de la planificación democrática anteriormente esbozados.

Discutido el Plan y finalizadas las diferentes negociaciones entre los distintos sectores representativos de la población, el plan debe ser enviado al Poder Legislativo para su aprobación.

c) Ejecución del plan

Aprobado el Plan por la Asamblea Legislativa, todos los órganos e instituciones administrativas deben cooperar imperativamente con el sector público para la ejecución del plan.

Para la buena ejecución del Plan obviamente se requiere una organización y eficiencia administrativa muy calificada por parte de las diferentes instituciones públicas que intervienen en él.

d) Control y Evaluación de los Resultados del plan

El control es la última etapa del proceso de la planificación y está constituida por el conjunto de actividades que se realizan para medir y examinar los resultados obtenidos durante la

(17) Véase apéndice número II, art. 32. Ley de Planificación.

ejecución del Plan en un período determinado.

El control debe darse en forma concomitante con la ejecución, ya que sus principales propósitos son el de exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los organismos ejecutivos.

El control de la ejecución del Plan, debe realizarse por la Asamblea Legislativa a través de una Comisión Especial, nombrada con el fin de que ejerza un control permanente y dedicada exclusivamente a esa labor, y en coordinación con la Oficina de Control de la OFIPLAN (Oficina de Planificación).

Nuestra Ley de Planificación es omisa en el sentido de determinar el organismo encargado de ejercer el control externo de la ejecución del Plan, por lo que consideramos importante incluir un artículo en el Capítulo VIII de la Ley de Planificación dedicado al control (18).

3) Antecedentes históricos de la Planificación en Costa Rica

La necesidad de la planificación en Costa Rica es bastante novedosa, ya que comienza a hablarse de ella hasta la mitad del siglo XX, posiblemente debido a la influencia de la corriente social cristiana de la Iglesia que por entonces comenzó a tomar vigencia en el país en cuanto a la transformación social se refiere. (19). Recordemos que tal doctrina es un verdadero plan racional, razón por la cual los políticos criollos comenzaron a inspi-

(18) Véase apéndice número II

(19) Véase capítulo I de este mismo estudio.

rarse en ella a fin de formular sus programas políticos.

No obstante, podría resultar que la planificación en Costa Rica tuvo su origen en esas funciones ideológicas externas en el incremento desmesurado de la población en relación con la famosa Ley de Malthus que preconizaba que los alimentos crecían en una progresión aritmética mientras que la población lo hacía en forma geométrica; lo mismo que en el impulso de la mentalidad racional y programática de ideario político del Partido Reformista del Padre Volio que entrara en lucha electoral en el año 1923, y posteriormente en los escritos político-económicos de Rodrigo Facio. (20).

En el año 1949, con motivo de la Asamblea Constituyente, la fracción Social Demócrata que corresponde al actual Partido Liberación Nacional (21) presentó un proyecto de Constitución en el que se incluía un Capítulo de Garantías Económicas, en las que se consagraban ciertos lineamientos económicos del Estado (22).

Durante los años cuarenta se concebía a la planificación en nuestro medio como algo propio y exclusivo del sistema socialista; por tal razón, algunos de nuestros economistas más renom

(20) FACIO, RODRIGO. "Estudios sobre Economía Costarricense". Editorial Costa Rica, San José, 1972.

VOLIO BRENES, MARINA. "Jorge Volio Jiménez y el Partido reformista". Editorial Costa Rica 1972. San José.

(21) ARAYA POCHET, CARLOS. "Historia de los Partidos políticos". Editorial Costa Rica, San José, 1973. cap. I y V.

(22) AGUILAR BULGARELLI, OSCAR. La constitución de 1949. Editorial Costa Rica, San José, 1973.

brados como don Rodrigo Facio, José Manuel Salazar y don Wilburg Jiménez, trataron de hacer notar la diferencia existente entre la planificación socialista y la de coste democrático-liberal. (23).

Durante el período posterior a los años cincuenta, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica realizó una investigación que sirvió de base posteriormente para la creación de la oficina de planificación (24).

Durante la década de los años cincuenta, no existía en Costa Rica un plan determinado de fomento económico. Lo único que existía eran oficinas que se encargaban aisladamente de la planificación, tales como el Instituto de Investigaciones Económicas - creado en 1955 por iniciativa de la A. I. D. el cual luego se asimiló al Departamento de productividad y eficiencia.

Además, existían oficinas de planificación en los Ministerios de Obras Públicas (1955) y de Agricultura (1957) (25). Al crearse el I. N. V. U. (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) surgió el concepto y la necesidad de la planificación urbana (26)

La Declaración de "Punta del Este" en 1961, promovía la planificación como un medio importante del desarrollo, decía que

(23) CARVAJAL HERRERA, MARIO. "La planificación en Costa Rica" P. 104. Op. cit.

(24) IDEM. p. 106.

(25) CARVAJAL HERRERA, MARIO. Op. cit. p. 109.

(26) IDEM. p. 110.

"los países latinoamericanos participantes, deberán formular programas de desarrollo a largo plazo, de ser posible dentro de los dieciocho meses venideros" (27).

Dicha declaración dió base para que el Poder Ejecutivo presentara a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre Planificación en el año 1962 (28).

El dictámen de mayoría de la Comisión de Asuntos Sociales expresaba que "creemos que se está en presencia de una Ley importantísima para la supervivencia del régimen democrático de Costa Rica.

Con ella se están dando los instrumentos para un adecuado desarrollo económico y social que, por consecuencia dará mayor bienestar común, y hará imposible la amenaza de regímenes totalitarios" (29).

El proyecto se votó sin mayor discusión en forma positiva y puede decirse que el país obtuvo de esa forma un instrumento juridico necesario para el desarrollo social y económico. (30)

(27) Periódico LA NACION, 11 noviembre 1962. p. 14-a

(28) CARVAJAL HERRERA, MARIO. Op. cit. p. 117.

(29) Dictámen de mayoría de la Comisión de Asuntos Sociales sobre Ley de Planificación número 3087 del 31 enero 1963. p. 5.

(30) Véase apéndice número II.

B) LA PLANIFICACION EN EL DERECHO POSITIVO COSTARRICENSE

1) Planificación-Constitución y Autonomía

El Estado costarricense interviene activamente en la esfera económica y social de los particulares con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Constitución Política (31). Para ello, el Estado, en gran medida, se vale del mecanismo de la planificación, a fin de lograr un aumento de la producción y un mayor y más adecuado reparto de la riqueza nacional.

El sistema democrático representativo tiene la virtud de ser un sistema flexible, porque se adecua más fácilmente a las circunstancias que le exigen las necesidades del momento.

Así, por ejemplo, se puede observar que antes de 1948 existía un régimen presidencialista (32), que concentraba el poder de manera excesiva en manos del Presidente, además de que no existía un adecuado control y contrapeso por parte de los otros poderes estatales. Recuérdese por otra parte, que no existían instituciones como la Contraloría General de la República, el Servicio Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, etc.

Precisamente por la flexibilidad de nuestro sistema político

(31) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Op. cit. arts. 45-50

(32) ZELEDON, MARCO TULIO. Lecciones de ciencia constitucional y Constitución Política de Costa Rica. Imprenta Nacional, San José, 1945.

nuestro constituyente de 1949 creó la descentralización administrativa a fin de tecnificar y descentralizar las labores del Estado y crear un contrapeso al poder político del Presidente (33). En otro término, se quisieron ampliar y especializar ciertas funciones estatales de naturaleza técnica con el objeto de apartarlos de la influencia política directa del poder Ejecutivo.

El artículo 188 de la Constitución Política se encargó de — definir la autonomía institucional, el cual, a pesar de que algunos de sus proponentes dijeron que no implicaba la independencia total de las instituciones autónomas en relación con el Ejecutivo, fué — interpretada en el sentido de consagrar una autonomía absoluta en favor de los entes descentralizados (34).

Posteriormente a la consagración Constitucional de la descentralización administrativa, dada la proliferación de las instituciones autónomas, se ha querido lograr una mayor coordinación — entre ellos y el Poder ejecutivo. Por tal razón en 1968 se reformó la Constitución Política para eliminarles la autonomía en materia de gobierno (35).

(33) AGUILAR BULGARELLO, OSCAR. Op. cit. p. 129.

(34) El artículo en mención decía: "Las instituciones autónomas de Estado gozan de independencia administrativa y de gobierno y sus directores responden por su gestión".

(35) Al artículo 188, en la actualidad dice: "Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y es tán sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores — responden por su gestión. Constitución Política de Costa Rica

Luego por el decreto ejecutivo número 2901 del 5 de marzo de 1973, se creó el sistema conocido como 4-3 para el nombramiento de los directores de las instituciones autónomas (36). Asimismo se estableció una Comisión de Coordinación Interinstitucional (37).

Por medio de tales reformas se ha pretendido coordinar -- las políticas generales del Estado, Poder Central, con las instituciones generales autónomas, primero mediante la sujeción de -- dichas instituciones a través de la "ley en materia de gobierno" y luego por medio de la composición mayoritaria del partido en el -- gobierno de los miembros de las Juntas Directivas, lo cual ha -- provocado en muchos casos la intromisión de la política partidista dentro de las instituciones descentralizadas.

El 19 de abril de 1974, se aprobó la ley para la creación de la figura de los "Presidentes Ejecutivos" en las Juntas Directivas de las instituciones públicas mencionadas. (38). Dicha ley eliminó el sistema conocido como 4-3 y establece en su artículo 4 inciso 1 y 2, que en lo sucesivo el Consejo de Gobierno nombrará a los directores de las diferentes instituciones públicas. Mediante el segundo se aspira a coordinar jurídica y administrati-

(36) Este sistema consistía en que se nombraban 4 miembros de -- parte del Gobierno y 3 de la oposición en las Juntas Directivas de las Instituciones autónomas.

(37) ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Colección de leyes y decretos. San José, Costa Rica.

(38) Véase apéndice número III.

vamente el Plan Nacional de Desarrollo (39).

Hemos juzgado conveniente referirnos al problema de la descentralización administrativa y a las leyes aprobadas ya que mediante estas se confieren al Poder Ejecutivo mayores facultades políticas puesto que con ellas el Ejecutivo mantiene un dominio absoluto sobre las instituciones autónomas en materia de gobierno.

Consideramos que las últimas reformas legales buscan convertir al Estado costarricense en un régimen político de corte presidencialista, posiblemente para que el Poder Ejecutivo conforme al aumento de concentración de Poder, a través de la OFIPLAN (Oficina de Planificación), mantenga un mayor control sobre todas las actividades económicas, las inversiones públicas internas y extranjeras y préstamos al exterior.

Dichos objetivos se pueden entrever en los artículos 1, 9 y 12 respectivamente de la Ley de Planificación, los cuales analizaremos luego. (40).

Finalmente, valga decir, que la forma de gobierno presidencialista o más bien intervencionista por medio del poder Ejecutivo, que gozará el Estado Costarricense, se asemeja al tipo de autocracia de que nos habla Platón en el sentido de que toda la política del Estado en manos de una o un grupo de personas,

(39) Véase apéndice número III

(40) IDEM.

dependen en última instancia de las virtudes y debilidades de --
ellos.

2) Algunos aspectos importantes de la Ley de Planificación

Nuestros gobernantes han afirmado que la OFIPLAN "es --
la estructura de la administración pública costarricense encarga
da de promover el desarrollo económico y social del país del mo
do más eficiente posible " (41).

Dicha finalidad ha sido expresamente acogida en la Ley de
Planificación, como su meta principal. Otros objetivos de la Ley
están dirigidos a crear la necesaria coordinación entre los en--
tes públicos, el sector privado y el Poder Central, a fin de que
puedan alcanzarse las metas propuestas en el Plan Nacional de --
Desarrollo.

La Oficina de Planificación funciona a nivel de oficina mi--
nisterial, y tiene como jefe un Director con rango ministerial, --
quien es nombrado y removido libremente por el Presidente de la
República. (42).

También esta oficina de Planificación asesorará al Presi--
dente de la República en materias de su especialidad y, por en--
cargo de éste, a cualquiera de los otros organismos de la Admi--
nistración Pública. (43).

(41) LEY DE PLANIFICACION. art. 1. Véase apéndice número

(42) IDEM.

(43) art. 3 IDEM.

En el aspecto financiero, dicha ley establece que "los entes descentralizados contribuirán con el uno por ciento de sus presupuestos de gastos totales, excepto inversiones, para formar un fondo de fortalecimiento de las labores tendientes a preparar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo" (44).

Queda bien claro, pues, la necesidad de que dicho organismo cuenta con fondos propios para desempeñar las funciones indicadas, en forma eficiente.

En su capítulo primero, se establecen los objetivos generales de la Planificación Nacional, y lo que se pretende es intensificar el crecimiento de la producción y la productividad del país, promover la mejor distribución del ingreso y los servicios sociales que presta el Estado, y también propiciar una participación cada vez mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y sociales (45).

De lo anterior puede concluirse que el Plan Nacional de Desarrollo, tiende a promover la distribución del ingreso partiendo de una mayor productividad económica. O sea, se parte del hecho de que para la distribución es necesario activar el auge económico ya que no tendría sentido distribuir una riqueza que todavía no se tiene.

En dos palabras, podemos decir que este capítulo primero

(44) Véase el Diario "La Nación", del 9 mayo 1974. p. 6-a. (C. Rica)

(45) Véase apéndice número II.

de la ley en estudio, antes analizado recoge el espíritu del artículo 50 de nuestra constitución Política (46).

Por ello, es necesario que a la vez que se aumente el nivel de vida creando mayor producción, concomitantemente tales mayores ingresos sean distribuidos racionalmente entre todos los sectores de la población.

En el artículo 15, es importante indicar que se establecen células de la mencionada oficina en los diferentes ministerios e instituciones autónomas, Semiautónomas y Municipalidades que servirán como coordinadores de tales oficinas o entes con la Oficina de Planificación (47).

En el artículo 3 se establece que la Oficina de Planificación estará a cargo del Director de Planificación, quién será nombrado por el Presidente de la República. El director tendrá rango de ministro y asistirá al Consejo de Gobierno con voz pero sin voto. (48).

La OFIPLAN, por medio de la Oficina de Planes Anuales será la encargada de preparar y presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto definitivo de presupuesto, (49) conforme lo expresa el artículo 177 de la Constitución Política vigente (50) y -

(46) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Op. cit. art. 50.

(47) Véase apéndice número II

(48) IDEM.

(49) Véase apéndice número II.

(50) ASAMBELA NACIONAL CONSTITUYENTE. Op. cit. art. 177.

correspondiente al artículo 9 de la Ley de Planificación (51).

Entendemos el "presupuesto" como la expresión numérica de los ingresos y gastos públicos para un período fiscal futuro - según los planes elaborados por las diferentes instituciones públicas.

En la Ley sobre la Planificación se observa una nueva modalidad de intervención estatal financiero en relación a las posibles inversiones que quieran realizar todas las dependencias públicas, las cuales, dada la autonomía administrativa, anteriormente se realizaban en una forma más independiente y por lo mismo menos controladas por la OFIPLAN.

En efecto, la mencionada Ley, expresa que corresponde a la Oficina de Planificación velar porque los programas de inversión pública, incluidos los de instituciones descentralizadas y demás organismos de derecho público, sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridades establecido en los planes nacionales de desarrollo. A este efecto, las entidades públicas citadas deberán coordinarse con la OFIPLAN antes de someter a la aprobación de la Contraloría General su presupuesto.

(52)

Ese nuevo tipo de intervención financiero del Estado, exige que cualquier Institución del Estado que quiera realizar una inversión determinada, debe someterla para su aprobación al -

(51) Véase apéndice número II

(52) IDEM.

criterio último de la Oficina de Planificación, antes de someter los presupuestos de inversión a su aprobación, por parte de la Contraloría General de la República.

Se concluye en lo específico, que la aprobación final de los proyectos de inversión de los diferentes organismos públicos, cuando estos requieran total o parcial financiación externa o bien el aval del Estado, será otorgado por la Oficina de planificación, de acuerdo al orden de prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y por el Ministerio de Hacienda, en lo relativo a la política general de endeudamiento externo. Además, con esta medida, se refleja aún más la necesidad de la nueva intervención financiera del Estado, para el desarrollo futuro de nuestra economía (53).

En el capítulo IV se crea el Departamento de Coordinación y Secretaría que servirá de enlace entre el OFIPLAN y las diferentes células representativas de esta oficina en los diferentes organismos públicos del Estado para realizar programas de racionalización administrativa del sector público, con el propósito de mejorar la capacidad de planeamiento y ejecución de las actividades y asegurar el cumplimiento de los planes de desarrollo nacional (54).

En resumen, se puede decir, que el objetivo de la ley de Planificación primordialmente es la de crear los mecanis—

(53) Véase apéndice número II

(54) Véase apéndice número II

mos de coordinación necesarios entre los entes descentralizados y el Poder central para la efectiva realización del Plan Nacional de Desarrollo.

Por otro lado, se pretende una mayor intervención del Poder Ejecutivo en las políticas y planes de todos los organismos - públicos descentralizados, a fin de racionalizar el mejor aprovechamiento de los recursos del sector público que en los últimos años han tenido enorme crecimiento.

3) Plan Nacional de Desarrollo Costarricense

El plan Nacional de Desarrollo es el primer intento serio que se ha realizado en Costa Rica tendiente a dotar al Estado de una política unitaria de desarrollo, principalmente en el campo económico.

A partir del año 1949, con la consagración constitucional de las Instituciones Autónomas, estas comenzaron a proliferar - en forma desmesurada e irracional, lo que provocó una falta total de coordinación entre las políticas particulares de cada ente autónomo o semiautónomo y la dirección política general del Poder Ejecutivo (55).

Pareciera que existe un consenso nacional para la aceptación del Plan, por cuanto este tiene como meta central la promoción de un acelerado desarrollo económico, y como punto de par

(55) REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS. Núm. 29. Universidad de Costa Rica. Mayo-Agosto, 1976. p. 23 y sgtes.

tida elevar el nivel de vida y lograr una mejor y más justa redistribución constituye desde el punto de vista lógico, una etapa — posterior al desarrollo económico que se pretende.

En concreto, el Plan Nacional de Desarrollo para lograr las metas que se ha propuesto en el campo social y económico, — tiende a crear una mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo y las Instituciones Autónomas o Descentralizadas, a fin de lograr una política de desarrollo más unitaria en los campos mencionados.

El entonces Ministro de Planificación, señor Arias Sánchez expresó que "uno de los fenómenos más interesantes y controversiales de las últimas décadas es la expansión del sector — público costarricense. En nuestros días, las funciones del gobierno y de las instituciones inciden prácticamente en todos los campos de la vida nacional, por lo que es de suma importancia — para el desarrollo futuro la eficiencia con que se lleva a cabo — la acción pública, por sus efectos sobre la inversión, la distribución del ingreso y la asignación de los recursos nacionales" (56).

Del anterior párrafo se deduce que es necesario disponer de la mejor manera posible de los recursos nacionales, mediante la elaboración y ejecución de un plan racional.

(56) ARIAS SANCHEZ, OSCAR. "La Planificación y el Sistema Bancario Nacional", Diario La República, 14 diciembre 73. p. 15-a. San José Costa Rica.

El Plan Nacional de Desarrollo comienza con un diagnóstico que se refiere a la evolución de los modelos de desarrollo de nuestra economía y a sus futuras proyecciones. Con ello, se ha querido partir de una base sólida para formular lo que es propiamente la planificación de nuestro crecimiento económico formulados en las versiones "Sectores productivos" y "Estrategia y Plan Global", del Plan Nacional de Desarrollo.

En el capítulo II se analiza el modelo agro-exportador — tradicional que representa la sujeción de nuestros productos — agrícolas tradicionales, principalmente el café, a la variación de los precios del Mercado Mundial.

Drante el período que va de 1950 a 1957 se produjo un — auge económico y social debido a los altos precios del café lo — cual motivó un notable mejoramiento del nivel de vida general en todos los campos, con la consiguiente mejor distribución del ingreso y del empleo entre toda la población (57).

Por otra parte, en ese período mismo, aumentó la participación del Estado en la vida económica del país. La actividad — bancaria, la seguridad social, la administración de los servicios de agua, y la mayor cantidad de los llamados servicios públicos como teléfonos, correos, luz eléctrica, etc. estaban en manos — del Estado.

(57) STONE, SAMUEL. "Los Cafetaleros", En revista de ciencias Jurídicas número 13. Imprenta Lehmann, Junio 1969. San José. Costa Rica.

Es necesario señalar que la prosperidad económica mencionada sin embargo, hizo al país más dependiente del exterior por la práctica y mayor expansión del monocultivo del café, sin preocuparse en absoluto por la diversificación de la producción (58)

En el año 1958, se produjo un bajonazo en los precios de café, lo que sumado a la escasa diversificación de nuestra producción agrícola, produjo una pérdida total en el dinamismo de la economía nacional, repercutiendo fuertemente en las exportaciones que se incrementaron tan solo en un 2% en el período - comprendido entre 1957 a 1962.

Los precios del café se estancaron durante el lapso de - tiempo que va de 1964 a 1969, a causa de la producción interna y de los precios del mercado internacional. Sin embargo, el crecimiento económico se incrementó a causa de la producción de - nuevos rubros, especialmente manufacturados.

Al año de 1971 las exportaciones de bienes manufacturados ascendía a un 27% de las cuales tres cuartas partes correspondían a las exportaciones hechas a Centro América, en comparación con el porcentaje de menos de un 4% correspondiente al año 1962. (59).

En efecto, se observa que a partir del año 1962 con la -

(58) IDEM.

(59) OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo, p. 16.

incorporación de Costa Rica al Mercado Común Centraamericano, se produce una recuperación de la actividad económica interna. (60)

Lo anterior, compensó en parte los bajos precios del café y también a raíz de la competencia industrial del Istmo Centraamericano y a la política de la Sustitución de Importaciones (61), se logró que se diversificara la producción, con lo que nuestra economía daba los primeros pasos en esos campos, y empezaba a desligarse en parte de la dependencia absoluta al Mercado Internacional provocado por el monocultivo del café.

El capital extranjero comienza a incrementarse en nuestro país en el período 1958 a 1962, lo que evitó una restricción aún mayor de las importaciones provocado por la caída de los precios del café y el desmejoramiento de la Balanza de Pagos.

Con la entrada al Mercomún (Mercado Común Centroamericano), el producto interno bruto de nuestro país aumentó a una tasa del 6% anual. Las exportaciones se incrementaron en un 11,3% anual y las importaciones lo hicieron en un 12,6%. (62).

Durante el período mencionado, se amplió el status económico de la clase media y que tenderá a partir de ese momento a irse incrementando hasta consolidar la característica de una fuerza

(60) LIZANO, EDUARDO, "El mercado común y la distribución -- del Ingreso". EDUCA. San José 1970.

(61) Véase capítulo VII de este mismo trabajo.

(62) OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo. p. 31.

te clase media en la Democracia costarricense. Por su parte, las clases altas en el mismo período redujeron sus ingresos y las bajas no variaron su posición económica.

El capital extranjero comienza a ingresar con mayor -- fuerza a partir de 1962, en relación al rubro de inversiones y préstamos al sector público y privado.

Con la nueva fuerza que toma el capital extranjero en -- nuestro país, el factor de dependencia de nuestro país al exterior, que anteriormente se debiera a la práctica del monocultivo y a los precios variables fijados por los países compradores en el Mercado Internacional, ahora se va a manifestar por el papel que las inversiones extranjeras realizarán en nuestro suelo. (63).

En relación a la Industria, se puede decir que aumentó considerablemente en los últimos años. La industria manufacturera se incrementó en un 7,1% anual en el período 1967 a 1972

Entre los factores que han incidido en el progreso industrial, dentro del contexto del Plan Nacional de Desarrollo, se citan: (64)

a) Expansión agro-industria a partir del año 1964. (Caña, carne vacuna, café, etc.)

b) Integración Económica Centroamericana.

(63) LIZANO, EDUARDO. Op. cit. p. 75.

(64) OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo. p. 40.

c) Proteccionismo a la Industria Centroamericana.

1. Arancel Uniforme.
2. Protocolo de San José.
3. Política de Incentivos Fiscales.

Para el desarrollo de la industria nacional, es importante resaltar la participación del Estado en el fomento de ella, mediante la construcción de vías de comunicación y de energía eléctrica, que son los elementos esenciales para el funcionamiento de la producción industrial. También los incentivos y exenciones fiscales y el crédito concedido por el Sistema Bancario Nacional, han sido un factor importante para la evolución de la industria nacional. (65).

Unido a la participación del Estado costarricense, el capital extranjero ha jugado también un papel importante a través de inversiones directas, préstamos del Banco Interamericano para el Desarrollo (B. I. D.) y Banco Mundial de Desarrollo y por el suministro de bienes de capital.

El desarrollo regional es importante puesto que acarrea la realización de un plan integral de todos los factores productivos del país.

En el Plan Nacional de Desarrollo se hace énfasis en la necesidad de toda una política regional, debido a la ausencia — de una política regional que determina metas y planes para un de

(65) Véase capítulo VII de este estudio.

sarrollo más equilibrado del país" (66).

Sigue expresándose en el Plan que "en el sector agropecuario no se ha aprovechado el potencial de desarrollo de algunas regiones, debido entre otras cosas, a la falta de obras básicas de riego y drenaje, de la creación de una red vial y del establecimiento de un complejo urbano que serían necesarios"(67)

Se deduce que el desarrollo del país no ha corrido parejo en todas las zonas del país y que en realidad en los últimos tiempos se nota que este se ha desarrollado en mayor grado en la zona central, o Meseta Central.

En relación a nuestro sistema impositivo, el Plan expresa que este es injusto por cuanto predominan en nuestro país los impuestos indirectos los cuales recaen en mayor grado sobre las clases consumidoras de escasos recursos. (68).

En efecto, las estadísticas indican la baja participación general de los impuestos directos pagados por las empresas privadas en la carga fiscal, que representó una recaudación el año 1970 de un 25,6 % del total de los ingresos tributarios, lo que implica que la mayor parte de los recursos tributarios proceden del resto de la tributación general de tipo indirecto (69).

(66) OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo. p. 52.

(67) IDEM. p. 52.

(68) Véase capítulo V de este mismo estudio.

(69) OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo. p. 59.

El nuevo modelo de desarrollo, por medio de los nuevos factores dinámicos que entraron en juego en la economía nacional promovieron un mejor nivel de vida para los habitantes del país, repercutiendo en todos los sectores productivos de la actividad económica.

El Plan Nacional de Desarrollo, en su última parte, se refiere a los problemas actuales y futuros de la economía nacional.

Entre los factores negativos, se citan el estancamiento o disminución del ritmo de crecimiento de las exportaciones tradicionales. Por un lado, la producción del banano podría disminuir su expansión en los próximos años, debido a que la inversión actual en las plantaciones es inferior que la registrada en 1968 y 1970. El café, por su parte, tiende a estancarse en los próximos años pese a los posibles ingresos de divisas que se obtendrán gracias a los altos precios del mismo.

También se habla de la escasa producción de granos básicos para el consumo popular, producidos en los últimos años a causa del poco interés de lucro que despiertan esas actividades, al poco apoyo estatal, y también porque la gente no quiere trabajar en el campo. Por último, se dice que la dificultad de incorporar tierras adicionales debido a la expansión de la producción ganadera ha provocado un desplazamiento de las actividades agrícolas. Establece el Plan que la fuerza de trabajo crecerá a un ritmo anual superior a un 3,5% en los próximos años. Por otra parte, una serie de actividades que experimentarán —

un notable desarrollo en el futuro, como la minería, la carne, las industrias manufactureras para la exportación, exigirán menos — mano de obra que los sectores productivos nacionales (70).

En relación, el alza de precios, se indica que deben buscarse mecanismos idóneos para controlar los altos precios, ocasionados por causas internas y externas. La Ley de Planificación (71), es omisa en cuanto a la regulación de precios se refiere, ya que dicha función corresponde al Consejo Nacional de Producción según su Ley Orgánica, artículo 4. También la Ley de Protección y de Desarrollo Industrial en los artículos 17, 19 y 47, se refiere a los precios menores para el consumidor (72)

Así, por ejemplo, ha sucedido en varias ocasiones que debido a los altos precios internacionales de la carne, los ganaderos exportan hasta las cantidades destinadas para el consumo interno, ya que a ellos les resulta mucha más rentable. Obviamente tales medidas determinan un alza de precios en el mercado nacional.

El gobierno inicialmente amplió los topes crediticios, con la intención de orientarlo en beneficio del pequeño productor agrícola y otras ramas de la producción, lo que sin embargo, hizo que — mucho dinero se dirigiera hacia la compra de bienes suntuarios — importados. Posteriormente, y en forma progresiva se siguió una

(70) IDEM.

(71) Véase apéndice número II

(72) Véase apéndice número V

política de aumento salarial que repercutió en el alza de los costos de producción y en el funcionamiento de las empresas.

También por otro lado, la administración del Señor Ouber Quirós (Partido Liberación Nacional), estableció impuestos mayores para los bienes suntuarios procedentes de fuera del área centroamericana, con el fin de mejorar la Balanza de Pagos.

Por último se puede decir que el aumento desmesurado en el gasto público, ha provocado un progresivo déficit fiscal.

Consideramos que se pretendió hacer una labor de gobierno a un precio muy elevado para las limitaciones y los recursos que posee el país, dadas las características actuales de nuestra economía.

Creemos necesario buscar un equilibrio tal, que no implique la paralización de la política desarrollista y social del gobierno, ni tampoco llegar al extremo de despilfarrar los dine--ros públicos.

Junto a los aspectos negativos, tenemos también aspectos de buen augurio para el desarrollo económico del país en los —años futuros.

Se expresa en el Plan, que la inversión extranjera encuentra diversas dificultades de muy distinta naturaleza en las dife--rentes regiones del mundo. Por ello, dichas inversiones tratan de trasladarse a los países que brindan estabilidad política y di--namismo económico. Dadas razones posiblemente determinen que se produzca una mayor afluencia de capital extranjero a Costa Rica en los años venideros, ya que ambos factores concurren ven

tajosamente para el inversionista extranjero en nuestro país.
(73).

El monto de las futuras inversiones, unido a las eventuales transformaciones de las estructuras sociales y económicas que dicho fenómeno conlleva, en proyectos tales como el complejo del aluminio, la producción de cemento, el incremento del turismo, la fábrica refinadora de petróleo y la explotación de los recursos nacionales, requerirán una acción activa del Estado, a fin de regular convenientemente dichas actividades.

En el Plan Nacional de Desarrollo se indica que "el aprovechamiento racional de los recursos naturales exige que el Estado cuente con una capacidad de negociación frente a las empresas extranjeras que aseguren la salvaguardia de dichos recursos para las generaciones futuras, la obtención del máximo beneficio posible para el país en el presente" (74)

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo llega a la conclusión de que "los problemas de Costa Rica son característicos de una economía próspera y en pleno proceso de crecimiento, con amplias oportunidades para fortalecer la estructura de producción y proveer condiciones de vida dignas para todos los costarricenses. Esta es la coyuntura en que nos encontramos -
(75).

(73) Véase capítulo VII de este mismo estudio.

(74) OFIPLAN. Plan Nacional de Desarrollo. p. 92.

(75) IDEM. p. 95.

Se puede concluir expresando que el desarrollo social y económico propuesto por el Plan de Desarrollo se encuentra en marcado en los objetivos del Sistema Nacional de Planificación señalados en la Ley de Planificación ya estudiada. (76).

También por otra parte, aunque si bien se hace caso omiso del artículo 50 de la Constitución Política en el Plan Nacional de Desarrollo, para efectos de darle mayor legitimidad, es importante indicar que en la mayoría de las reformas nacionales se procede igual.

El artículo primero de la Ley de Planificación recoge el espíritu del artículo 50 de la Constitución Política en el sentido de que persiguen intensificar el crecimiento de la producción y a la vez promover la mejor distribución del ingreso (77)

(76) Véase el apéndice número II

(77) IDEM.

CAPITULO V:

**LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA
ESTRUCTURA IMPOSITIVA COSTARRICENSE.**

A) ASPECTOS GENERALES DE LOS IMPUESTOS

INTRODUCCION

El Estado como único ente jurídico mayor dentro de un determinado territorio, posee los instrumentos financieros y jurídicos necesarios a fin de lograr las metas de interés público y social requeridos.

Así, por ejemplo, el Estado aplica coactivamente las normas jurídicas para mantener el orden, la seguridad y buscar la realización de la justicia social.

El Estado, para la consecución de los fines públicos y sociales necesita de fondos que obtiene, entre otros medios, de los impuestos (1) directos e indirectos (2) y de negocios en los que el

-
- (1) FACIO, R. Estudio sobre economía costarricense. (ditorial - Costa Rica) San José Costa Rica, 1972, I. p. 272.

En dicha obra Don Rodrigo Facio, nos dice que los impuestos son las exacciones que el Estado percibe con la finalidad de pagar los servicios públicos.

MERSAN. Nos dice que los impuestos son las prestaciones en dinero que el Estado u otro organismo de Derecho Público exige a los particulares en virtud de una disposición legal y normalmente para satisfacer las necesidades financieras o por razones de política económica. "Perspectivas del Derecho Público en la Segunda mitad del siglo XX", Madrid 1969, III, p. 1039

- (2) Es conveniente recordar que dentro de los impuestos directos tenemos: el impuesto territorial; el impuesto sobre la renta; el impuesto sobre la renta que produce el alquiler de una casa ó edificio; el impuesto sobre el interés del capital; el impuesto sobre las utilidades de la empresa; el impuesto sobre los sueldos y el impuesto sobre los honorarios profesionales, y dentro de los indirectos existen en Costa Rica el impuesto sobre

Estado actúa como empresario particular. Por medio de esos fondos llamados "públicos", se construyen carreteras, puentes, parques, muelles, etc.

El Estado, por medio de sus diferentes entes descentralizados presta servicios que procuran la redistribución de la riqueza y el beneficio directo a los pequeños productores y de las clases más menesterosas.

Para los fines públicos y sociales, el Estado cuenta con una pluralidad de prerrogativas jurídicas, como la "potestad de Imperio", que lo autorizan para cobrar tributos coactivamente a los particulares, a fin de obtener los ingresos que le son indispensables para la realización de sus cometidos.

(cont. pág. ant.). . . el tráfico patrimonial (movilización del patrimonio mobiliario e inmobiliario); y los impuestos sobre el consumo. Consideramos conveniente hacer notar, el hecho de las traslaciones de los impuestos, ya que es una de las diferencias que se le achacan a los impuestos indirectos con los directos. Se dice que los impuestos son directos o indirectos según que el contribuyente pueda o no trasladar los efectos del mismo a otras personas o sectores. Por ejemplo, con respecto a la propiedad intelectual; el autor no paga el impuesto ya que la editora por lo general le paga todo sin deducirle el impuesto, por lo tanto se ha trasladado el impuesto del Autor a la Editoria, pues ésta tampoco lo paga ya que lo traslada al lector, quién es el que paga dicho impuesto. Así, el autor y la Editoria no pagan el impuesto sino que es el lector. Por lo tanto, si el impuesto se puede trasladar es indirecto. Otro ejemplo, para aclarar más el hecho de las traslaciones, puede ser el caso en el impuesto de consumo, los comerciantes importadores, para compensar en parte dicho gravámen, lo que hacen es elevar el precio de los artículos de tal manera que el consumidor el que paga el impuesto original.

A través de la potestad de Imperio, puede unilateralmente - dictar normas de carácter tributario y que impone coactiva e in discriminadamente a todos los habitantes de su territorio. La - potestad tributaria encuentra asidero positivo en el artículo 18 de la Constitución Política, que establece en lo conducente: "Los Costarricenses deben observar la Constitución y las leyes para servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos". Por su parte, el artículo 19 *in fine* extiende dicho - principio también a los extranjeros.

Finalmente, el artículo 33 del mismo cuerpo de leyes, consa gra el principio de igualdad, de la distribución de las cargas pú blicas (3).

Conforme al principio de la "reserva de ley", los impuestos sólo pueden ser creados mediante Ley formal de la Asamblea Le gislativa, único órgano estatal, al menos en nuestro Sistema Re- presentativo, autorizado al efecto.

Sobre el particular expresa el profesor Hernández Valle que "conforme a este principio, hijo legítimo de la Revolución Fran- cesa y del concepto de Estado de Derecho que nació al amparo - de sus ideas, sólo por medio de la ley formal emanada de la -- Asamblea Legislativa podían regularse la libertad y propiedad.

Con ello, se trató de garantizar que los derechos originarios del individuo -libertad y propiedad - sólo pudiesen ser afecta-- dos por el órgano depositario de la soberanía popular" (4).

(3) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYETE, op. cit. arts. 18, 19 y 33.

Nuestro Texto Constitucional recoge dicho principio en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, cuando establece que corresponde a la Asamblea Legislativa: "establecer impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales" (5).

Por otro lado, el artículo 140 in fine confiere al Poder Ejecutivo la potestad de reglamentar las leyes emanadas del órgano legislativo (6).

De lo anterior se concluye que los derechos de propiedad y libertad sólo pueden ser regulados por medio de Ley formal, y que el Poder Ejecutivo en estas materias sólo está facultado para precisar su contenido y alcance por medio de los reglamentos Ejecutivos. En consecuencia, un Reglamento Ejecutivo no puede modificar los elementos sustanciales de los impuestos y demás tributos estatales.

El fundamento positivo del principio de "reserva legal", se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, respecto de la libertad y en el artículo 45 en relación con el derecho de propiedad. (7)

(4) HERNANDEZ VALLE, R. Op. Cit. p. 156.

(5) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Op. cit. art. 121.

(6) IBID. art. 140.

(7) IBID, arts. 28 y 45.

PROGRESIVIDAD Y REGRESIVIDAD DE LOS IMPUESTOS

Según el principio moderno de justicia distributiva que orienta la materia tributaria, los impuestos deben ser pagados por el contribuyente de acuerdo con sus capacidades económicas.

En nuestro medio, según el artículo 33 de la Constitución Política, rige el principio de igualdad ante la ley en materia tributaria. Sin embargo, la ley de Impuesto sobre la Renta establece que dicho impuesto debe ser pagado de acuerdo con el monto de la renta percibida por cada contribuyente, con lo cual, en la práctica, quien gana más paga más que quien tiene una renta más baja. Dicho principio, se encuentra consagrado en forma no explícita en el artículo 14 de la mencionada Ley, en el capítulo correspondiente a las Tarifas para el impuesto, las cuales se relacionan directamente con los principios de progresividad y regresividad de los impuestos.

Progresividad de los Impuestos

Es aquél que el deber tributario, y en consecuencia, la cuota del impuesto, aumenta en cuanto se eleva la cuantía de los ingresos o utilidades del contribuyente. Se ha expresado que en este sistema no existe un mecanismo científico idóneo para hacer efectiva la recaudación por lo que la regresividad es aplicada en nuestro medio como un límite a la progresividad de los impuestos.

Regresividad de los Impuestos

Consiste este sistema en fijar un porcentaje máximo para una zona superior de ingresos afectada por la progresión y que es un

Límite a partir del cual, la cuota del impuesto continúa uniforme y hacia bajo del mismo existe un decrecimiento porcentual del impuesto hasta una zona mínima de renta que marca la línea divisoria entre las rentas gravables y las no gravables.

Se puede decir que el sistema regresivo es el que existe en Costa Rica en materia de impuesto sobre la Renta, ya que se gravan las rentas superiores a quince mil colones (15.000) anuales, aproximadamente ciento cincuenta mil pesetas, y se fija un máximo de renta a partir del cual todos los contribuyentes pagan lo mismo, con lo que la regresividad resulta un límite a la progresividad de los impuestos.

Finalmente, se encuentra el principio de la "proporcionalidad". Si bien, como ocurre en los impuestos progresivos, las cuotas - que pagan los contribuyentes resultan desiguales en su cuantía, - ello resulta igualdad de sacrificio entre los contribuyentes, en el sentido de que cada uno debe desprenderse de manera proporcional a sus ingresos. Por ejemplo, a un contribuyente que gana un mil colones anuales se le recargan diez colones (1%), y otro que obtiene cincuenta mil colones se le exigen cinco mil colones (10%) o sea, el que gana diez mil pesetas aproximadamente anuales, debe pagar un mil y el que percibe medio millón de pesetas debe pagar cincuenta mil pesetas.

B) EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS

El problema de cómo se distribuyen los ingresos producidos por una sociedad determinada entre los diferentes grupos sociales, es un asunto tan antiguo como la política misma, o sea la búsqueda — del bienestar general del hombre a partir de la organización de la sociedad civil.

Este problema representa en la actualidad el dilema fundamental de la filosofía social contemporánea.

La distribución de los ingresos, es uno de los asuntos básicos de la economía y de la política moderna, puesto que el objetivo de lograr una mejor distribución de la riqueza atañe al bienestar general, tema inherente a ambas disciplinas.

A nuestro juicio, el tema de la redistribución de la riqueza adquiere más complejidad en los países en vías de desarrollo. En éstos, el problema básico consiste en aumentar el crecimiento económico para elevar el nivel de vida y concomitantemente realizar la distribución equitativa de la riqueza de las personas, como única vía a realizar la justicia social dentro de los marcos de la democracia representativa.

Líneas arriba habíamos mencionado que el Plan Nacional de Desarrollo, parte de la premisa que es necesario acelerar el crecimiento económico para realizar la justicia social en forma paralela.

Según estadísticas recientes, "la distribución del ingreso en Costa Rica diez años después resulta muy diferente a la de 1961. El grupo intermedio, que comprende al 60% de las familias ha vis-

to aumentado la porción del ingreso que corresponde, de un 34 a un 44%; mientras que los grupos más altos la participación relativa en el ingreso ha disminuido de 46 a 34%; y de 35 a 23%; en el 10% de las familias que ocupan el estrato superior y el 5% máximo respectivamente" (8).

Las estadísticas del estudio realizado corresponden al ingreso familiar total sin deducciones por concepto de impuesto.

Además, se observa en el mismo que el grupo más pobre con el 20% de las familias, durante el mismo período bajó los porcentajes de ingreso de 6.0% a 5.4%.

En síntesis, se puede concluir diciendo de dichas estadísticas que en la década de 1961-1971 en Costa Rica, los grupos de altos y bajos ingresos redujeron su participación en los mismos, mientras que los intermedios la aumentaron.

Antes de proceder a analizar las principales leyes tributarias en nuestro país, en el sentido de que ellas son la que en mayor — grado repercuten sobre la producción económica y la distribución de la riqueza, consideramos conveniente y oportuno, examinar las deficiencias de nuestro sistema impositivo.

Lo regresivo del sistema ocasiona que la mayoría de los ingresos tributarios provengan de los impuestos indirectos, que se con-

(8) CESPEDS, S. , VICTOR HUGO. "Costa Rica: La distribución del ingreso y el consumo de algunos alimentos. (Escuela de — Ciencias Económicas, Instituto de Investigaciones Económicas) San José, Costa Rica, S. a.

sideran más injustos debido a que la carga de los mismos, repercute más fuertemente sobre los asalariados con sueldo fijo y sobre las clases más bajas.

Los contratos-ley otorgan en materia de impuestos, privilegios a las empresas extranjeras que rigen su contratación con base en ellos, lo que hace que estas no se vean sometidas a las disposiciones tributarias de carácter general.

Nuestra legislación Costarricense, en el campo mercantil por otra parte, permite la operación de las sociedades anónimas con acciones al portador, lo que hace que se produzcan mayores evasiones de impuestos territoriales y de la renta.

Por último consideramos que la falta de un criterio científico - que ofrezca los mecanismos necesarios para establecer un sistema de progresividad infinitesimal, hace que nuestro sistema impositivo tenga una progresividad relativa a causa de que al existir una tarifa máxima ocasiona que una persona que gana mucho más - pague lo mismo que otra que gana menos que él.

1) EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN COSTA RICA

a) Antecedentes históricos

A pesar de haberse creado en Costa Rica por el Decreto número 73 del 18 de diciembre de 1916, durante la Administración de don Alfredo González Flores, puede afirmarse que su verdadera vigencia se remonta al año 1946, en el cual los problemas fiscales hicieron que las reformas tributarias volvieran al tapete.

La situación deficitaria de nuestro presupuesto para en--

tonces, indujo al gobierno de Don Teodoro Picado, a realizar una nueva ley sobre la renta.

Existiendo un consenso nacional acerca de la necesidad de la nueva ley, el líder comunista Manuel Mora, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, propuso como base del proyecto el estudio realizado por un experto chileno en el año 1938. Dicha proposición, casi sin modificación alguna se convirtió en la ley de la República número 837 de 20 de diciembre de 1946.

b) Evolución de la Aplicación del Principio de Progresividad del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica.

Expresa Don Rodrigo Facio que "históricamente es fácil distinguir un primer período con predominio absoluto de la imposición indirecta, explicable por el interés de mantener intacta la riqueza ahorrada para dirigirla a nuevas inversiones; un segundo período con predominio, ya cuando el capitalismo entra en maduración y comienza a dar los frutos de una productividad creciente, - en el cual se inician las restricciones a la tributación indirecta - sobre el consumo y el desarrollo de la directa sobre las utilidades. Un tercer período, ya plenamente logrado el objetivo de la producción en masa de la industria e institucionalizada la forma de operar las inversiones, en que la imposición directa ya predominante, comienza a emplear, en vez del criterio objetivo de la proporcionalidad, el criterio de la progresividad, con lo que persigue adecuar mejor la carga a la capacidad subjetiva real de los contribuyentes" (9)

(9) IBIDEM, p. 275.

Se puede concluir diciendo que antes del año 1916 predominaba en Costa Rica la imposición indirecta, producto de la época, tendiente a facilitar el desarrollo capitalista del comercio exportador e importador.

El impuesto sobre la renta establecido en el año 1946, contenía escalas progresivas. Así, por ejemplo, en esa Ley el imponible sobre la renta líquida hasta los primeros tres mil colones, aproximadamente treinta mil pesetas, era del uno por ciento anual. Si la renta líquida es mayor, entonces se cobraba el impuesto -- aplicándose una tarifa progresiva.

Es fácil comprender que conforme el país ha venido evolucionando, los gobernantes han palpado la necesidad de la justicia social, razón por la cual en materia de impuestos se ha aplicado el principio de solidaridad social, correspondiente al de la progresividad.

Además de la Ley número 837 de 20 de diciembre de 1946 tenemos las reformas parciales a los Impuestos sobre la Renta de Consumo y Ventas del año 1972.

En el Impuesto sobre la Renta, se establecieron dos escalas de tarifas: una para las personas físicas y otra para las jurídicas. Para las primeras, la escala se inicia con el recargo de un 5% para renta líquidas de cinco mil colones más o menos cincuenta mil pesetas; y en la escala superior un 50% para las rentas superiores a los trescientos cincuenta mil colones anuales, aproximadamente tres millones y medio de pesetas.

En relación a las sociedades, se estableció una escala de

cuatro tramos que se inicia con un 5% para rentas hasta de cincuenta mil colones aproximadamente medio millón de pesetas; y en último tramo que se aplica con un 40% sobre las rentas superiores al millón de colones, aproximadamente a las rentas de más de diez millones de pesetas.

También en dicho impuesto se establecieron gravámenes a los dividendos y a las utilidades con lo cual las utilidades que se capitalicen no quedan sujetas al impuesto.

Con el objeto de restringir el consumo de artículos suntuarios, en las reformas del año 1972, se establecieron tarifas progresivas en el Impuesto de Consumo de 10%, 15%, 20%, 30%, 40% y 50% de acuerdo con el grado de esencialidad de los productos.

En relación con el impuesto de ventas, con las reformas lo que se hizo fué establecer una tarifa única del 5% para facilitar su aplicación y administración.

Estos impuestos de consumo y de ventas se gravan sobre el producto de consumo final, tanto a los nacionales como a los extranjeros, con la salvedad de que se exoneran las exportaciones para no poder en desventaja nuestros productos en los mercados extranjeros.

2) ALGUNOS ASPECTOS JURIDICOS IMPORTANTES DE LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA VIGENTE

Conforme al artículo 3 de la "Ley de Impuesto sobre la Renta", para calcular el gravámen sobre la renta se toman todas las

entradas del individuo o de una empresa, cualquiera que sea su origen, y a esa suma global se restan las deducciones permitidas por ley, o sea, las cargas familiares, gastos necesarios para obtener la renta y otras previstas por ley.

En dos palabras, a la renta bruta se les restan todas las deducciones permitidas por ley, quedando un saldo denominado "renta líquida" sobre el cual se fija el imponible.

En el capítulo tercero, a partir del artículo 5, se fijan los procedimientos pertinentes para la determinación de la renta líquida junto con las posibles deducciones admitidas, los renglones que corresponden a la renta bruta, definición de renta bruta, etc., que, en realidad, no nos interesan para el objeto del presente estudio.

Las personas obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 2, son "las personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica", cuando obtengan las rentas en Costa Rica y las no domiciliadas en nuestro país, "lo pagarán sobre las rentas que obtengan bienes, empresas o negocios situados o realizados en Costa Rica" (10).

En el párrafo final, se indica que "también se aplicará el impuesto a las rentas obtenidas por las sociedades de Hecho". Las tarifas progresivas, están consagradas en el artículo 14 de la ley. Dicho artículo expresa que "una vez determinada la rent

(10) LA GACETA, "Ley de Impuestos sobre la Renta". (Imprenta Nacional, San José, Costa Rica)

ta líquida una persona obligada a pagar el impuesto que esta ley establece, dicho tributo se calculará de la manera siguiente"(11)

Según dicho artículo, las personas físicas que devenguen una renta líquida menor de quince mil colones anuales, aproximadamente ciento cincuenta mil pesetas, estarán exentos de pagar tributos. Arriba de ese mínimo, se establecen escalas progresivas hasta un límite determinado, por encima del cual todas las rentas pagan el mismo porcentaje.

En el inciso 2 del mencionado artículo, se indica que "en el caso de sociedades de hecho o de derecho, así como en el de patrimonios hereditarios indivisos, y en el de fideicomiso o encargos de confianza, se aplicará sobre la renta líquida obtenida la escala progresiva de tasas que sigue".

En dicha escala, se establece un mínimo de cincuenta mil colones, más o menos medio millón de pesetas; gravables con un 5%, sobre el cual las sociedades de hecho o de derecho deberán pagar impuestos en forma progresiva hasta alcanzar un límite máximo, según se analizara anteriormente.

Se observa en ambas escalas que la intención de legislador a través de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo, es la de beneficiar a las personas y empresas de escasas rentas y recursos económicos cuando establece los mínimos de renta debajo de los cuales se establece la exención total.

(11) Ibid.

Se concluye que los cambios introducidos a la Ley de Impuesto sobre la Renta en el año 1972, son un esfuerzo más de la administración de disminuir la brecha social existente entre los sectores de bajos recursos con los otros sectores sociales.

Sin embargo, consideramos que dicha Política de acercamiento se ha realizado principalmente a base de recargar mayores tributos que perjudican más a la clase media que a las clases altas. Ello es comprobable por medio de las escalas de impuesto sobre la renta descritas anteriormente, y que, a través de las cuales se observa la regresividad de nuestro sistema impositivo, que perjudica más fuertemente a los consumidores de ingresos fijos y rentas menores.

Se puede decir que las reformas tributarias del año 1972, conllevaron a la vez un reajuste de los impuestos de venta y de consumo.

La finalidad básica de esas reformas era de obtener mayores recursos fiscales que le dieran contenido financiero a las políticas sociales y económicas de la administración, tomando en consideración que la obtención de esos ingresos debía realizarse sin maltratar mucho a las personas y empresas de escasos recursos.

Aparejada a ella, se estableció a nuestro parecer un impuesto de consumo de bastante justicia y necesidad nacional, en el sentido de gravar los artículos de lujo con escalas mayores que las anteriores, con el fin de mejorar la Balanza de Pagos que para entonces se encontraba desfavorable.

Todas esas reformas tendieron por otra parte a transformar

la estructura impositiva vigente hasta entonces, por una mayor justicia a través del aumento de la tributación directa.

Se puede concluir diciendo que, en buena parte, el sistema impositivo vigente cumple con las directrices señaladas en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica.

Por un lado, los impuestos de consumo organizan o al menos orientan el consumo y por lo tanto la producción hacia el uso y consumo de los bienes más esenciales como alimentos, ropas, medios de transporte, etc. Con ello se logra un aumento de la producción de nuestros productos indispensables, a causa de que se establecen gravámenes progresivos de acuerdo con la no esencialidad de los bienes de consumo.

Por otra parte, el Impuesto sobre la Renta establece cargas diferentes que van en relación con la capacidad económica de cada contribuyente a fin de sufragar los gastos públicos. Si bien el destino de los fondos del Impuesto sobre la Renta no se conoce con exactitud, lo cierto es que los servicios públicos — del Estado, sean para fines ordinarios o de tipo social, son pagados por los contribuyentes de acuerdo con sus recursos económicos, lo cual representa en forma relativa una medida redistributiva de la riqueza.

En síntesis, estas leyes de impuestos cumplen con los preceptos del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica objeto de nuestro estudio, en el sentido de que relativamente — tienden a organizar y estimular la producción y el equitativo reparto de la riqueza, todo con el fin de lograr el mayor bienestar de los habitantes de la República.

**GRAFICO DE LAS ESCALAS PARA CALCULAR EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EN COSTA RICA.**

TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
EN COSTA RICA

		colones		Colones	%anual	excesos	Totales
	De	0	hasta	5 000	5	—	250
el exceso	"	5 000	"	10 000	7	350	600
"	"	10 000	"	20 000	9	900	1,500
"	"	20 000	"	30 000	12	1 200	2 700
"	"	30 000	"	45 000	16	2 400	5 100
"	"	45 000	"	75 000	20	6 000	11 100
"	"	75 000	"	110 000	24	8 400	19 500
"	"	110 000	"	150 000	28	11 200	30 700
"	"	150 000	"	200 000	2	16 000	46 700
"	"	200 000	"	250 000	38	19 000	65 700
"	"	250 000	"	350 000	44	44,000	109,700
"	"	350 000	en adelante		50		

EJEMPLO:

Una renta imponible de 5,500 colones pagará anualmente
 Sobre los primeros 5,000 según la tabla.... 250 colones
 y sobre los 500 restantes, un 7% 35 colones
 Total de impuesto a pagar 285 colones

NOTA: Para calcular el impuesto en Pesetas se debe de multiplicar por diez; es un cálculo aproximado.

CAPITULO VI:

LAS ASIGNACIONES FAMILIARES EN COSTA RICA

A) FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DE LA LEY

Por iniciativa del Poder Ejecutivo se presentó el Proyecto de Asignaciones Familiares a la Asamblea Legislativa durante los primeros meses del año 1974, que fue estudiado y dictaminado con mayoría afirmativa por la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso.

En realidad dicha ley viene a ser la primera de la índole que se intenta implantar en Costa Rica, razón por la cual se han producido numerosos comentarios en contra y a favor suyo por parte de los distintos sectores o grupos de presión existentes en el país.

Consideramos necesario aclarar que en casi todos los Estados Modernos existen hoy en día las Asignaciones Familiares. Dichas asignaciones se otorgan según el número de hijos, fundamentalmente con el fin de lograr una mejor redistribución del ingreso, y en algunos casos, para promover la natalidad.

Así, expresa el Profesor Don Fernando Zumbado que "en algunos países desarrollados, las Asignaciones Familiares han sido instituidas como estímulo para mantener niveles de población satisfactorios" (1)

Producto de la necesidad de las asignaciones familiares como medida de provecho social, se puede decir que estas fueron tomadas

(1) ZUMBADO, FERNANDO. "Asignaciones Familiares en Costa Rica" (Universidad de Costa Rica, CESPO, 1974) p. 10.

do bastante auge en todos los países. Así, "sesenta y cuatro países contaban con programas en 1967, Entre estos estaban los países Europeos, 21 países Africanos, 9 países de Asia y Oceanía y 7 países Americanos". (2)

En nuestro medio, el Constituyente de 1949 consagró en el artículo 57 el salario mínimo a fin de darle protección a los trabajadores contra la explotación de los patronos. En efecto, el salario mínimo es un medio atenuante para evitar que el salario sea fijado exclusivamente por los mecanismos de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo.

El mencionado artículo de la Constitución Política de Costa Rica expresa que: "todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.

Todo lo relativo a fijación de salarios estará a cargo del organismo técnico que la ley determine" (3).

Por su parte, el artículo 177 del Código de Trabajo, indica — que tal salario mínimo debe cubrir "las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural" (4).

(2) IBIDEM, p. 12.

(3) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. "Constitución Política de Costa Rica". 1949. (Imprenta Nacional, San José, 1971)

(4) Art. 177 C. Tra. (Costa Rica)

En nuestro criterio, esa condición mínima de vida podría sintetizarse diciendo que equivale a un nivel en el cual los trabajadores posean los ingresos suficientes para los gastos de ropa y alimentos, diversiones, educación de los dependientes de la familia y una casa o vivienda decente.

El salario mínimo legal en Costa Rica es aproximadamente de trescientos veinte colones por mes, más o menos tres mil doscientas pesetas. No obstante, podrían afirmarse que pueden establecerse diferencias de salarios mínimos legal en diferentes zonas. En las zonas bananeras equivale a quinientos cincuenta colones aproximadamente cinco mil quinientas pesetas mensuales; y en las zonas de cultivos de clima mejor trescientos colones más o menos tres mil pesetas (5).

Actualmente, debido a que la situación socio-económica del país ha cambiado a causa de la inflación de precios, resulta que el salario fijo de los trabajadores, aún con el alza creciente de los salarios, se queda corto para cubrir las necesidades reales de éstos, sobre todo si se toma en consideración que el salario mencionado no guarda relación con el número de dependientes familiares.

Por ello uno de los propósitos fundamentales de esta Ley es el de corregir esas deficiencias por medio de una mayor y justa distribución de los ingresos, ya que el salario mínimo legal se hace insuficiente para proporcionar el mínimo de bienestar nece

(5) FIGUERES F. JOSE. "La pobreza de las Naciones". (Imprenta Nacional, San José, C.R. 1973), p. 114.

sario para una familia.

Según estadísticas, se ha podido comprobar que aproximadamente el 20% de las familias de ingresos bajos en Costa Rica reciben tan sólo el 5,4% del ingreso total, el 60% de las familias en un nivel inmediato superior de ingreso, reciben el 44% del ingreso total; mientras que el 5% más alto recibe aproximadamente una cuarta parte del ingreso total" (6).

Es de reconocer que al inicio de la Administración de Don Daniel Oduber uno de los fines principales de la política de gobierno ha sido la disminución de la brecha social existente entre las clases bajas y los otros estratos sociales. Entre las reformas que sustentan nuestra afirmación se encuentran la política de salarios crecientes, la Universalización de los Seguros Sociales, el Impuesto sobre la Renta, las Asignaciones Familiares, etc.

Por ello, consideramos que la ley de Asignaciones Familiares, es un intento para otorgar salarios más equitativos que estén de acuerdo con el alza actual del costo de la vida, a la vez que fundamentalmente se considera el número de hijos, todo lo cual tiende a cumplir los preceptos del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica (7).

(6) ZUMBADO, FERNANDO. Op. cit. p. 3.

(7) Es conveniente recordar que los beneficiarios de esta ley de asignaciones Familiares son de acuerdo a su artículo 2: "Son beneficiarios de este Fondo los costarricenses de escasos recursos económicos, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley".

El reglamento de la ley número 5662, o sea la que nos ocupa, nos dice en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11; 12, 13 y 14; quienes -

Finalmente, a causa de lo insuficiente del salario mínimo — para cubrir las necesidades reales de las familias, la ley de — Asignaciones Familiares buscar crear un "ingreso mínimo vi— tal", como ingreso adicional y complementario al del salario —

(cont. pág. ant.)... son los beneficiarios y los requisitos — que se deben de cumplir. A saber:

ARTICULO 6: "Los beneficios que se otorguen a las perso— nas con derecho a ingresar en el régimen no contributivo de pensiones, así como los requisitos para tal ingreso, serán — determinados por la Caja mediante la reglamentación corres— pondiente".

ARTICULO 7: "Tendrán derecho a la Asignación Familiar — que en este artículo se establecerá, los costarricenses de escasos recursos económicos, a quienes la Dirección Gene— ral reconozca este derecho, por haber demostrado encontrarse dentro de los presupuestos establecidos por la Ley y por el presente reglamento, de acuerdo con la siguiente tabla — porcentual, referida al menos de los salarios mínimos lega— les que rija oficialmente para las actividades agropecuarias en la Meseta Central.

Ingresos mensuales	Por c/u de los pri— meros 3 hijos	Por c/u de los sgtes. hasta 6
Hasta 50%	10%	5%
De 50. 01 % hasta 75%	9%	4. 5%
De 75. 01 % " 100%	8%	4%
De 100. 01 % " 125%	7%	3. 5%
De 125. 01 % " 150%	6%	3%
De 150. 01 % " 175%	5%	2. 5%
De 175. 01 % " 200%	4%	2%
De 200. 01 % " 225%	3%	1. 5%

La Dirección General confeccionará los formularios que de— berán llenar los solicitantes de Asignaciones Familiares y de— terminará los documentos y demás requisitos que deben ser — aportados para establecer el derecho correspondiente, pudién— do exigir la imposición o presentación de nuevos documentos cuando así lo exigieren las circunstancias.

del trabajador, tendiente a sufragar los gastos de éstos en relación con el número de hijos. Lo anterior, en relación con el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, tiende a pro-

(cont. pág. ant.). . . ARTICULO 8: "Para efectos de la aplicación de la tabla contenida en el artículo anterior, deberán tomarse en cuentas todas las sumas que ingresen al núcleo familiar, provenientes de cualquier fuente.

Para la determinación del monto de las sumas que constituyen los ingresos únicamente se admitirán como deducibles de los ingresos brutos, las deducciones establecidas por ley y las pensiones alimenticias".

ARTICULO 9: "Los menores o estudiantes a que se refiere la Ley, deberá entenderse que han de ser los que dependen directamente del beneficiario indirecto y que no tengan ingresos propios suficientes para su mantenimiento. En cuanto a los inválidos, la determinación de la invalidez será hecha por los médicos de la Caja".

ARTICULO 10: "En los casos en que el mantenimiento y educación de los hijos u otros dependientes del trabajador con derecho a Asignación Familiar se confíen a otra persona o a alguna Institución, el importe de dicha asignación se girará a quien tenga a su cargo a los beneficiarios directos".

ARTICULO 11: "Los giros o cheques a que los beneficiarios tengan derecho por concepto de Asignación Familiar, serán nominativos y se harán llegar a éstos por medio de las empresas en que labore el beneficiario indirecto o mediante las personas u organismos que determine la Dirección General, de acuerdo con la proximidad del domicilio de aquel.

En los casos en que el beneficiario indirecto lo sea una institución, a ésta se enviarán los giros o cheques correspondientes".

ARTICULO 12: "Los beneficiarios del régimen de Asignaciones Familiares que consideren que su solicitud no ha sido resuelta de conformidad con los artículos anteriores, podrán recurrir, dentro de los 30 días posteriores a la notificación de lo acordado por la Dirección General, ante el titular del Ministerio, quien a su vez tendrá un plazo de 30 días para su resolución".

curar el mayor bienestar de los habitantes de la República, mediante el adecuado reparto de la riqueza.

Según los estudios realizados, el ingreso mínimo vital es de sesenta colones, más o menos seiscientas pesetas por hijo para la Costa Rica del año 1971. (8).

(cont. pág. ant.) . . . ARTICULO 13: "El pago de prestaciones - en dinero efectivo se irá aplicando gradualmente, en determinadas comunidades, que serán seleccionadas por la Dirección General, como vía experimental, con el fin de identificar los alcances y modalidades que procuren una mejor sistematización y beneficio del régimen"

ARTICULO 14: "El fondo es patrimonio de todos los beneficiarios por lo que a los recursos que reciban las instituciones en cargadas de programas y servicios no podrá dárseles un destino ajeno a su ejecución.

La Dirección Gral. y la Oficina de Planificación, otorgarán los gastos necesarios para el cumplimiento de tales programas y servicios y no podrán aprobar gastos administrativos que no sean imprescindibles para tal fin".

(8) FIGUERES, F. JOSE. Op. cit. p. 115.

B) ANALISIS DE LA LEY DE ASIGNACIONES FAMILIARES
DE COSTA RICA

En la exposición de motivos de la mencionada ley, se expresa que "debe considerarse la ley dentro del marco de los esfuerzos generales del gobierno por lograr una más justa distribución del ingreso nacional, combatir la pobreza y alcanzar más altos niveles de justicia social para la sociedad costarricense" (9)

En síntesis, este párrafo recoge en parte el espíritu del artículo 50 de nuestra Constitución Política, objeto del presente estudio. Según el artículo 1 de la Ley, el organismo encargado de fiscalizar todo lo relativo a las Asignaciones Familiares sería la Dirección General de Asignaciones Familiares y se declara de interés público todo lo relativo a ese régimen (10).

Conforme al artículo 15, el Plan será financiado mediante el recargo de un diez por ciento sobre el total de los sueldos que los patronos públicos o privados paguen mensualmente a sus trabajadores, exceptuando al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones e Instituciones de Asistencia Médico Social (11).

(9) ZUMBADO, FERNANDO. Op. cit. p. 62.

(10) Art. 1 Ley de Asignaciones Familiares, nº 5662.

(11) Art. 15, Ibid.

Se deduce, aunque la ley no lo diga expresamente, que los organismos obligados a financiar las Asignaciones Familiares son - el Poder Judicial, Las Instituciones Autónomas y la empresa privada.

Asimismo, el artículo 21, establece un impuesto del uno por ciento sobre los sueldos que los patronos públicos o privados paguen mensualmente a sus trabajadores, para financiar al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Es importante señalar que para los gastos de administración - del régimen de Asignaciones Familiares, según el artículo 26, en ningún otro caso, podrán ser mayores del diez por ciento del total recaudado, lo cual deberá someterse para su aprobación a la Contraloría General de la República de acuerdo con los reglamentos y leyes que rigen la materia.

Algo que no consideramos conveniente es que en los artículos 23 y 28 se le atribuyen al Poder Ejecutivo las facultades de variar las escalas básicas de asignaciones, por medio del titular de la - cartera del Ministerio de Trabajo en el primero y por Decreto Ejecutivo en el segundo. Lo importante es que la Asignación representa un impuesto que se determina por medio de escalas, y con ello se le está otorgando al Poder Ejecutivo la potestad de legislar, lo cual es propio del Legislativo según la Constitución Política de - Costa Rica.

Por su naturaleza alimentaria, en el artículo 11, al igual que las cuotas del Seguro Social y del Banco Popular Costarricense, se establece que "las sumas que se paguen por concepto de asignación familiar en ningún caso, ni para efecto alguno se tendrán co-

mo parte integrante del salario, y no podrán ser embargadas, ce
didas ni traspasadas bajo ningún título" (12)

En el artículo 23 se indica que la Dirección General de Asig-
naciones será una dependencia técnica permanente del Ministerio
de Trabajo, cuyo superior jerárquico es el titular de la cartera del
mismo.

Los beneficiarios del régimen, están contemplados en el artí-
culo 2. En los demás artículos de la ley se regulan situaciones
irregulares con sus respectivas sanciones, y otros medios de --
control necesarios para la efectividad del Plan, y que para el pre
sente estudio no tiene ningún significado.

La ley entró en vigencia según el artículo 30, noventa días --
después de su publicación en cuanto a la obligación patronal de --
cotizar el fondo y ciento ochenta días en relación al pago de bene-
ficios.

(12) Art. 11. Ley de Asignaciones Familiares. 9 octubre 1974.

C) OBJETIVOS Y ASPECTOS BASICOS DEL PLAN DE ASIGNACIONES FAMILIARES

El proyecto de Asignaciones Familiares, preparado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a iniciativa del Poder Ejecutivo, tiene como finalidad fundamental lograr una mejor redistribución del producto social entre los diferentes sectores de la población y estimular la escolaridad de la niñez en Costa Rica.

O sea, "amparar a los grupos de población más necesitados -- por su bajo nivel de ingreso y por su numerosa familia y estimular la escolaridad de la niñez en nuestro país. El propósito primordial es aliviar parcialmente las cargas familiares de aquellas familias de salario individual relativamente bajo" (13).

El régimen de Asignaciones Familiares abarcará en una primera etapa a todos los trabajadores adscritos al Sistema Nacional de Seguro Social de la Caja Costarricense de Seguro Social para facilitar su aplicación, utilizando sus mecanismos de recaudación. O sea, los beneficiarios serán los trabajadores cubiertos por el régimen de enfermedad y maternidad del seguro con salarios mensuales menores de un mil doscientos colones, aproximadamente doce mil pesetas.

La intención es que conforme se amplíe la universalización de los seguros sociales, el sistema de Asignaciones Familiares cubra también a toda la población activa y no sólo a los asegurados

(13) ZUMBADO, FERNANDO. Op. cit. p. 5.

de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Como expresaremos, los beneficiarios del Plan recibirán una asignación proporcional al número de dependientes menores de — dieciocho años, de acuerdo con la escala de Asignaciones establecida (14)

Otro de los fines fundamentales que busca la Ley de Asignaciones Familiares es fortalecer al Instituto Nacional de Aprendizaje (I N A) por medio del recargo del uno por ciento (1%) mensual sobre las planillas de sueldos de los patronos públicos y privados designados a sufragar los gastos del Plan lo cual se encuentra estipulado en el artículo 15 de la ley (15).

Por otra parte, el artículo 3 señala que "una vez satisfechas las asignaciones en efectivo, la Dirección General destinará partidas para programas de nutrición y otros para atender a los marginados o inválidos sin ingresos, así como para programas educativos y de mejoramiento social para el trabajador y su familia, por medio de los mecanismos estatales, existentes como el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (I. M. A. S.) y la Dirección Nacional de Seguro Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" (16).

Se observa que el plan busca fundamentalmente fortalecer tres aspectos a nivel nacional. Por un lado, mejorar la escolaridad —

(14) Supra nota número 7 p. 6.

(15) Ley de Asignaciones Familiares nº 5662.

(16) Art. 3 de Ley de Asignaciones Familiares. 9 Oct. 1974. en — La Gaceta.

de los jóvenes a través de una mejor nutrición, a causa de que se ha comprobado que el bajo rendimiento y promoción escolar en los primeros ciclos se debe a la falta de buena alimentación y a la situación socio-económica del hogar.

También se persigue beneficiar a los indigentes o inválidos sin ingresos por medio del I. M. A. S. , mediante el otorgamiento de casa o habitación y alimentos financiados con dineros provenientes de dicha ley.

Por otra parte, se pretende que el Plan sea complementario del Plan Nacional Educativo, pues según el artículo 4 expresa que para tener derecho a recibir la Asignación correspondiente a los hijos de edad escolar, salvo los inválidos, será indispensable que los beneficiarios presenten semestralmente a la entidad administrativa del Plan, los documentos que los acrediten como estudiantes regulares o activos.

Por último, se quiere fortalecer los créditos a la educación en todo el país por medio de un instituto crediticio a nivel estatal, en el sentido de democratizar y darle efectividad al principio de igualdad de oportunidades a todos.

Para concluir y como se expresara inicialmente, el fin primordial del Plan de Asignaciones Familiares en Costa Rica es - la redistribución de los ingresos de los habitantes de la República, lo cual será analizado posteriormente.

D) PROBLEMAS Y OBJECCIONES AL PLAN DE ASIGNACIONES

El Plan, como es lógico, ha despertado una serie de inquietudes y comentarios por parte de los diferentes sectores productivos del país.

Fundamentalmente, compartimos la orientación política que confiera beneficios sociales a la Comunidad por medio de leyes específicas.

Sin embargo, creemos conveniente revisar algunos puntos de vista que se han emitido por la prensa costarricense, que saca a colación algunas observaciones a la ley de asignaciones, paralela o simultáneamente que otras reformas sociales, contenidas en el llamado "paquete social", tales como la reunificación cambiaria, la ley de Planificación, la Ley de Seguro de Desocupados, traspaso de la cuota que corresponde pagar al Estado de la Caja costarricense de Seguro Social a la empresa privada, etc.

Entre las opiniones vertidas por la prensa se encuentran las de algunos organismos más connotados del país y de mayor prestigio, tales como el poder Judicial y el Banco Central, los cuales se pronunciaron en contra de la citada ley. El primero de ellos, porque maltrata su presupuesto, lo cual atenta contra su autonomía constitucional consagrada.

En relación a la opinión del Banco Central, la cual se emitió poco antes de entrar dicha ley en vigencia, consideramos importante transcribirla por cuanto estamos enteramente de acuerdo con su pronunciamiento y por considerarla la más objetiva y explícita de las expuestas.

Expresó el instituto emisor, por medio de su sub-gerente, don

Alvaro Vargas, que "no obstante el sentido eminentemente social del proyecto en estudio y que el banco comparte plenamente considera que no es el momento más oportuno para establecer - en el país un régimen de asignaciones Familiares, cuyos costos repercutirán en los sectores productivos del país, lo que unido a la inseguridad de los mercados internacionales de las principales materias primas, vendrán a reforzar aún más el clima de incertidumbre en que hoy en día se desenvuelven". Sigue expresando el Banco Central que por otra parte "no puede olvidarse que juntamente con el Proyecto de Asignaciones Familiares, se produjo un reajuste general de salarios mínimos y se aprobó un recargo del cuatro por ciento (4%) en la cuota patronal del Seguro Social y además, están en estudio nuevas cargas sociales (proyecto de cesantía: 4%), cuyos costos totales serán trasladados a los consumidores mediante un aumento en los precios finales de los bienes y servicios fortaleciendo, aún más su proceso de crecimiento".

Por otro lado, "tampoco puede ignorarse que la inflación es eminentemente regresiva, con lo cual se estaría desvirtuando todo el sentido social de los nuevos programas en estudio, en apoyo de una mejor distribución del ingreso nacional".

Para concluir, expresa el comunicado que "finalmente quizás resulta más conveniente antes de introducir este nuevo proyecto, consolidar aquellas instituciones creadas para atender - problemas nacionales con grandes repercusiones sociales, asegurándoles los recursos necesarios para cumplir a cabalidad - con las funciones encomendadas. En ese sentido, sería conve-

niente completar la universalización de Seguros Sociales, los programas de viviendas, acueductos, alcantarillados, ampliar las posibilidades de educación superior a un mayor número de habitantes, etc. En los casos citados, las respectivas instituciones se han visto imposibilidades de cumplir con los objetivos asignados en sus respectivas leyes de creación, por falta de recursos o por el atraso en el pago por parte del gobierno central (17).

Consideramos que las reformas son necesarias para el país por su contenido humano y social. Sin embargo, debemos señalar que es necesario realizar dichas reformas en forma sistemática y progresiva para lo cual se necesita mayor paciencia.

El gobierno tiene la oportunidad de analizar racionalmente en las medidas que oportunamente serán convenientes para el país. Por ahora consideramos que varias de las reformas propuestas son inconvenientes e inoportunas por las razones apuntadas por el Banco Central.

En concreto, se puede decir que la tesis de todos los organismos serios y especializados del país es la de que el Plan de Asignaciones Familiares como medida social es de beneficio nacional, pero que no era oportuno introducirlo en esa época, dada la situación mundial inflacionista y la crisis presupuestaria nacional.

(17) LA NACION, 16 de abril de 1974. p. 42-a (San José, Costa Rica)

Concluimos diciendo que los principales prolemas y objeciones del establecimiento de las Asignaciones Familiares en Costa Rica en el año 1974, fueron entre otras, la imposibilidad de pago de alguna de las instituciones llamadas a cotizar para el fondo de las asignaciones, que produjo un aumento en la desocupación y una elevación de precios motivada por un aumento en los costos de la producción de las empresas, lo cual es inconveniente para la política de empleos anunciada por el Plan Nacional de Desarrollo, además de que en última instancia fueron los consumidores los que se vieron afectados por la elevación de los precios en el mercado.

Concluyendo, consideramos que el presupuesto nacional está inflándose fuera de los límites controlables debido a las elevadas cargas sociales que se han impuesto, lo cual es sumamente peligroso para la estabilidad política y económica del país.

E) LAS ASIGNACIONES COMO MEDIDA REDICTRIBUTIVA

La intención básica de la citada Ley de Asociaciones Familiares de Costa Rica es la redistribución del producto social.

En efecto, el Plan persigue establecer un ingreso adicional al salario mínimo, que varía según el número de hijos, por lo que el fondo ayudará a aquellas familias numerosas y con sueldos menores a los un mil doscientos colones por mes, aproximadamente doce mil pesetas; lo cual representa una buena medida de distribución, debido a que las familias que dependen de un sueldo y que tienen muchos dependientes han visto disminuida su capacidad económica.

En efecto, "dado un ingreso fijo, un hijo más representa un descenso en el ingreso real por persona, lo cual a su vez constituye una reducción en la inversión posible por hijo, y por consiguiente, un descenso en la calidad del capital humano que puede resultar del ambiente familiar" (18).

Además, como buena política distributiva, se tiene el propósito de que el alza real en los salarios no repercuta en el costo de la vida, aunque consideramos que ello siempre sucederá puesto que repercute en los costos de producción de las empresas, mediante la determinación de que parte de los fondos se distribuyen en especies, como útiles escolares, ropa y alimentos (19).

(18) ZUMBADO, FERNANDO. Op. cit. p. 10.

(19) Citado por MORALES FRANCISCO, en el periódico de La NACIÓN, 12 de marzo 1974, p. 16-a.

Por otra parte, el artículo 3, indica que con los fondos de las Asignaciones, se destinarán a medidas de beneficio social a los - marginados e inválidos, planes educativos y de mejoramiento social para el trabajador y su familia.

En síntesis, la ley en mención representa una carga más de tipo impositivo para las empresas privadas y públicas llamadas a - gravar sus planillas lo cual producirá que se aumenten los costos de producción de las empresas particulares afectadas y por lo tanto los productos del mercado. Entonces, realmente la ley como meda impositiva que es no estimula la producción ni la organiza, - más bien tiende a cumplir el precepto Constitucional del artículo 50, en el sentido de buscar "el más adecuado reparto de la riqueza", de acuerdo con los fines expresados arriba y que si bien representa una carga impositiva para la producción por otro lado a través del mismo busca la mejor distribución de la riqueza entre los diferentes estratos sociales, por lo que consideramos conveniente la vigencia de dicha ley sobre Asignaciones Familiares ya que la democracia representativa en su forma funcional implica - mayores sacrificios por parte de todos los sectores productivos del país a fin de lograr la justicia social.

CAPITULO VII:

**LA LEY DE PROTECCION Y DESARROLLO
INDUSTRIAL EN COSTA RICA.**

INTRODUCCION

Las economías latinoamericanas se formaron esencialmente alrededor de los productos de exportación, desde la época colonial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta región se convirtió en el principal proveedor mundial de café, banano, cacao, estaño, nitratos y bauxita, y posteriormente se convirtió también en un importante abastecedor de caña de azúcar, algodón, aceites vegetales, carne, petróleo y diamantes.

Tales productos fueron enviados a los países industrializados del Hemisferio Norte, a cambio de aquellos productos manufacturados que la pequeña clase consumidora de esta región decidió importar. Así (hasta 1929) en tanto que Europa y Norteamérica prosperaron, las economías latinoamericanas florecieron artificialmente.

Hoy día, son bien conocidas las desventajas estructurales de este tipo de sistema comercial. La guerra, la superproducción, la pérdida de una cosecha o una serie de factores extraños, pueden llevar al borde de la quiebra a una economía que se base en la producción de un solo producto para explotarlo, aún en los casos en que los precios de exportación se mantuvieron firmes, los beneficios se distribuyeron desigualmente en la economía. Un buen año siempre favorecía al terrateniente o hacendado, con sus inmensas extensiones de terreno y fuerza laboral de peones. Para los obreros agrícolas sin tierra, la prosperidad económica no garantizaba otra cosa que su sostenimiento durante una temporada más.

Fue inevitable que los pensadores latinoamericanos progresistas intentasen idear una nueva fórmula para su intercambio con el resto del mundo, que permitiera a la región eliminar su susceptibilidad a los precios cíclicos y hallar un sistema más equitativo de distribución de ingresos.

Los esquemas de la política que adoptaría América Latina — se definieron en forma clara durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Estando la industria norteamericana orientada hacia la producción de material de guerra, y con la interrupción de su comercio en Europa, los países latinoamericanos más grandes iniciaron espontáneamente programas de industrialización basados en el concepto de sustitución de sus importaciones. En base a un mercado moderadamente grande, y con ciertas materias industriales, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Venezuela, comenzaron a fabricar artículos que antes importaban de Europa o de los Estados Unidos de Norteamérica.

El profeta y apologista de la industrialización por medio de la sustitución de importaciones fué Raúl Prebisch, un famoso economista argentino. Su argumento fué, esencialmente que América Latina nunca podría lograr un verdadero crecimiento económico — mientras dependiera su economía del éxito en los mercados de exportación, porque tales mercados habían resultado inseguros.

Congestionados con productos idénticos provenientes de — Africa, América Latina y Sudasia y amenazados por nuevos productos sintéticos provenientes de países industrializados, los mercados mundiales se encontraban en perenne depresión y con precios rígidos. Además, los países desarrollados no permitían que

los países que comerciaran con ellos se aprovecharan, por medio de menores precios, de los enormes aumentos de la productividad que habían logrado. Más bien, los precios de las manufacturas importadas por los países subdesarrollados se vieron sujetos a alzas constantes. En vista de este estrangulamiento desfavorable, Prebisch arguyó que América Latina debía imitar a la Europa de hace un siglo y desarrollar una base manufacturera independiente. La industrialización serviría además a importantes fines sociales. Fue visualizada como un medio de combatir la ocupación precaria del sector agrícola y la creciente desocupación de las zonas urbanas, ambas propulsadas por una tasa de aumento demográfico que figura entre las más altas del mundo.

El esfuerzo de industrialización sudamericano se ha orientado principalmente hacia dentro, desde sus comienzos, salvo la magra liberalización comercial lograda por la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). Cada uno de los países participantes trazó un plan de desarrollo ideado para transformar su economía en una unidad industrial autárquica, sin prestar atención a los acontecimientos en los países vecinos ni a los productos que comenzaban a producirse en la región. Las elevadas barreras aduaneras, que excluyeran productos sudamericanos así como no regionales que podrán competir con productos locales, evitaron la competencia entre países. La compartamentalización artificial y antieconómica que tipifica la industrialización sudamericana se evitó en Centro América. Después de más de seis años de argumentación por parte de técnicos de las Naciones Unidas y de algunos de sus propios pensadores

más avanzados, esta región creó el Mercado Común Centroamericano en 1958. Usando como modelo de filosofía básica del Mercado Común Europeo, el MCCA fué ideado para promover la industrialización regional dando a los productores de los países miembros (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y en 1962 Costa Rica), la oportunidad de vender dentro de un área protegida de doce millones de habitantes.

Tal mercado no es muy grande conformidad con las normas mundiales pero ofrece posibilidades para una industrialización más diversificada que la que podría contemplar cualquiera de los países miembros individualmente.

Una vez que un Estado subdesarrollado con una economía - agrícola o de exportación resuelve fomentar el desarrollo de un sector industrial, casi invariablemente adopta una "ley de incentivos fiscales". Tal ley se formula para vencer el temor natural de los inversionistas de colocar su capital en una economía subdesarrollada ofreciendo beneficios especiales que les compensarían los riesgos adicionales que corresponden a tal empresa.

Los tipos de "incentivos" disponibles generalmente incluyen la exoneración parcial o total, durante un lapso limitado de tiempo, de derechos aduaneros e impuestos a la renta normalmente tasables y puede abarcar también disposiciones tributarias especiales, para una depreciación rápida o para la reinversión del capital. El otorgamiento de incentivos puede ser automático o a opción del Estado. Si fuesen otorgados automáticamente, el beneficiario adapta sus formularios de impuestos al momento de su presentación para mostrar lo que está obligado a pagar y no requie-

re realizar ningún otro acto para reclamar tal beneficio.

En cambio, deben solicitarse los incentivos fiscales que que dan a opción del Estado, los cuales sólo serán concedidos mediante una resolución afirmativa del organismo administrativo señala do por la ley. Ya que los incentivos han sido ideados para estimu lar la inversión, su otorgamiento normal corresponde a un organismo especializado dedicado a la promoción industrial, más bien que a la Dirección Tributaria. De conformidad, con la mayoría de las leyes, el organismo de promoción industrial puede tomar dos tipos de decisiones: resolver qué líneas de actividad industrial pueden solicitar incentivos y también decidir cuáles de los solicita ntes percibirán beneficios y en qué medida.

El meollo del concepto de "incentivos fiscales" es la noción de que los beneficios tributarios otorgados atraerán inversiones locales y extranjeras, que no se hubieran hecho de otra manera, debido a las desventajas institucionales del país oferente. Esta premisa supone que las consideraciones tributarias son básicas en la decisión de invertir y sugiere que exista una relación proporcional entre la reducción de impuestos y la tasa de inversión. Eso es, una empresa resulta más atractiva cuando las exoneracio nes permitan una más elevada tasa de ingresos y una recuperación del capital. En segundo lugar, los países oferentes esperan que la disponibilidad de exoneraciones mejorará su clima de inversiones o creará tal clima. Este dispositivo representa un esfuerzo tangible para superar las actitudes de sospecha y antagonismo con que anteriormente fueron recibidos en América Latina los grandes inversionistas, Asegura al inversionista, tanto extranjero como nacional, que no sólo es deseado sino que el gobierno se preocu-

pa especialmente de ayudar a su establecimiento. Asimismo, los -
ineentivos permiten a un Estado dado competir favorablemente pa
ra nuevas inversiones con algunos de sus vecinos, que han esta-
blecido previamente un programa similar de incentivos fiscales.

En la mayoría de los países, el otorgamiento de incentivos -
fiscales queda regulado por normas establecidas por ley o por la
política seguida por el organismo de promoción industrial. Los be-
neficios generalmente se otorgan de conformidad con tres crite-
rios: el producto, la capacidad de mantener una norma deseada de
rendimiento y el ánimo de cumplir con los requisitos de aplicación.

Al considerar el producto contemplado, se plantearán las si-
guientes preguntas: si es nuevo para la economía o preexistente,
si es un producto de consumo o semielaborado, si es producido en
el principal centro de fabricación o en las provincias y si usa ma-
teria prima nacional o importada.

No se concederá ningún contrato a ningún inversionista que
se considere incapaz de mantener una norma dada de rendimiento.
Estas normas incluyen: demostración de viabilidad económica del
producto, prueba de la responsabilidad financiera de los promoto-
res, prueba del buen empleo de maquinaria eficiente y de técnicas
industriales modernas, demostración de la buena fe y del carácter
permanente de la inversión, prueba de la capacidad de mantener
normas de calidad que sean iguales a las de productos importados
y demostración de la intención de adiestrar y emplear nacionales
en la medida que sea posible.

Por último, un beneficiario debe cumplir con los requisitos -
de trámites y de información. Debe llevar sus cuentas en la forma

prescrita, presentar periódicamente sus datos de producción y permitir inspecciones ocasionales de las materias primas beneficiadas y del equipo, para verificar que están siendo usadas - de la manera fijada en la exoneración.

El hecho de que más de sesenta países subdesarrollados - del mundo han adoptado algún tipo de programa de incentivo fiscal tan pronto como comenzaron su esfuerzo de industrialización debería indicar que la base teórica de los incentivos fiscales (es decir, que una reducción de impuestos es el paso necesario para impulsar a los inversionistas potenciales a establecerse en el país oferente) ha probado ser más o menos universalmente válida.

A) OBJETIVOS DE LA LEY DE PROTECCION Y DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Los objetivos principales de la ley quedan claramente establecido en su artículo primero:

"La presente ley tiene como objetivo fundamental contribuir, mediante el desarrollo de las industrias que se indicarán, a la diversificación y fortalecimiento de las actividades económicas del país procurando canalizar el ahorro nacional y atraer inversiones procedentes del exterior, para crear nuevas fuentes de ocupación mejor remuneradas como un medio esencial de obtener el bienestar general del pueblo" (1)

Como puede observarse, el criterio que orienta ese artículo es de tipo desarrollista y liberal laiseferiano como medio de estimular la producción nacional y el nivel ocupacional mejor remunerado a través de la diversificación de la industria, la canalización del ahorro nacional y de las inversiones extranjeras, de lo cual disentimos diametralmente debido a que el desarrollo puramente económico no implica desarrollo global y por lo tanto social.

Se relaciona este artículo primero, con el artículo cincuenta - de la Constitución Política Costarricense en el sentido de que ambos buscan estimular la producción nacional. No obstante, el 50 - de la Constitución es más progresista a causa de que a la vez que habla de estimular la producción, sin mencionar los medios, indica que se debe procurar el adecuado reparto de la riqueza, lo cual

(1) Véase apéndice número V.

representa la factibilidad de imponer cargas sociales a los sectores productivos propias de la "justicia distributiva", moderna, a fin de disminuir la brecha social existente.

A pesar de que esta es la única manifestación explícita de objetivos, la ley de protección y desarrollo industrial contiene otro grupo de los que podrían llamarse objetivos "implícitos" y que se desprenden de otras disposiciones importantes de la ley. Entre los mismos están:

- a) el estímulo a la producción interna de materias primas y productos semi-elaborados.
- b) el crecimiento del ingreso nacional;
- c) el mejoramiento de la balanza de pagos;
- d) la mayor eficiencia de la industria local;
- e) el mejoramiento de la distribución geográfica de la industria dentro de Costa Rica; y
- f) precios menores al consumidor (artículos 17, 19 y 47) (2)

(2) Véase apéndice número V

**B) PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION
Y DESARROLLO INDUSTRIAL**

Después de casi 7 años de presión esporádica para que sea aprobara dicha legislación, la República de Costa Rica promulgó una ley de incentivos fiscales, el 3 de septiembre de 1959. Al igual que sus antecedentes en otros países dentro de la región la ley se basa en la creencia de que el desarrollo industrial puede conducir a una diversificación de la economía del país y a la creación de nuevas fuentes de empleo para la población creciente. Con tal propósito, ha sido ideada para movilizar el ahorro nacional y atraer nuevo capital extranjero de inversión (3).

La ley divide a la actividad industrial en dos categorías (industrias nuevas e industrias establecidas) y ofrece una escala distinta de beneficios para los solicitantes de cada grupo. Las actividades industriales nuevas son aquellas que producen artículos que no han sido fabricados en cantidades que representan menos del 10%. Todos los solicitantes que no satisfacen esta prueba quedan clasificados en la categoría de industrias establecidas.

Así, si una fábrica de baterías para linternas existía en el momento en que una gran firma decidió establecer una fábrica en Costa Rica, el inversionista sería clasificado como "participante en una industria establecida" para los efectos de la ley de incentivos fiscales" (4)

(3) Véase apéndice número V.

(4) Véase apéndice número V.

Una vez que una línea industrial ha sido clasificada como "nueva" permanece en esta categoría por el término del contrato industrial de la primera empresa que comience a fabricar dentro de tal línea industrial que puede ser otorgado posteriormente, pero sólo después de que se demuestre que el mercado tiene suficiente tamaño como para sostener a dos productores (5). Si fuera considerado factible conceder un segundo contrato, el beneficiario adicional recibiría también el status de "industria nueva". La única desventaja que sufriría como participante tardío dentro del mercado es que su contrato sería redactado para que expirase al mismo — tiempo que el del primer productor. En tal forma, la ley evitar el estimular una carrera hacia la ventana de solicitudes antes de que hayan madurado los planes (6).

La calidad de los beneficios otorgados y el plazo de tiempo durante el cual pueden ser concedidos queda determinado por la utilidad de los solicitantes a la economía nacional, tomando en consideración las siguientes normas del artículo 17: (7):

1) El aporte al ingreso nacional; 2) La medida en que se utilicen materias primas nacionales o productos semielaborados; 3) El mercado que pueda asegurar para productos agrícolas; 4) Sus — efectos sobre la balanza de pagos; 5) Las ventajas del plan financiero del solicitante, el monto de la inversión prevista y la medida en que participe capital costarricense en la empresa; 6) La eficien

(5) ibid.

(6) ibid.

(7) ibid.

del equipo, el tamaño del mercado que abastecería, sus repercusiones sobre la ocupación y sus aportes socio-económicos semejantes; 7) Ubicación de la planta en zonas donde pueda adquirir electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad.

En la práctica, estas normas han sido modificadas en alguna medida como resultado de los reglamentos posteriormente emitidos por el Ministerio de Industrias, que es el organismo encargado de la aplicación de la ley. De conformidad con el artículo 28 del Reglamento (8), se dará preferencia a los solicitantes de conformidad con el siguiente sistema de prioridades:

1) El ahorro de divisas extranjeras debido a la producción de sus titutos de importación o de productos para la exportación. 2) La relación entre el valor de las materias primas de origen nacional utilizadas en el proceso de producción y el valor total de produc ción. 3) Su contribución al ingreso nacional, medida por la pro ductividad por hora-hombre trabajada, usando como base de com paración la productividad promedio hora-hombre de las industria existentes. 4) El número de obreros, particularmente especializa dos, que serán empleados.

De importancia secundaria, de conformidad con el reglamento, pero que también figura entre los factores que serán sopesa dos, están los siguientes: 1) La relación de la industria propues ta a las otras industrias en funcionamiento; 2) La solidez de la fi nanciación y lo moderno que sea el equipo propuesto para la plan ta; 3) Todos los otros factores que puedan ser mencionados como

(8) Véase apéndice número VI

necesarios para determinar si el solicitante efectuará una contri-
bución al desarrollo industrial. (9)

La ley costarricense ofrece tres clases de incentivos: exonera-
ciones de derechos aduaneros, varios tipos de exoneraciones-
tributarias y diversas clases de protección. Para la mayoría de
los inversionistas hasta ahora, los más importantes incentivos -
han sido aquellos que les han exonerado los derechos de aduana
que deberían haber pagado de no gozar de franquicia. Se otorga
automáticamente una exoneración del 99% de los derechos en cinco
categorías de importaciones a las inversiones que puedan cla-
sificarse como "industrias nuevas". Los productos que puedan -
ser importados virtualmente libres de derecho en tales casos i
cluyen: 1) Materias primas o productos semielaborados utilizados
en el proceso de producción; 2) Motores, maquinarias y herra-
mientas; 3) Lubricantes (pero no gasolina); 4) Materiales de constru-
cción utilizados para la planta o para la vivienda de bajo cos-
to para empleados; 5) Empaques y envases para el producto termina-
do (10). Pueden otorgarse exoneraciones ligeramente menos amplias
a las empresas clasificadas como "industrias establecidas".
Sin embargo, no se conceden los incentivos automáticamente sino
que tienen que ser específicamente aprobados para cada solicitan-
te. Además, el monto de exoneraciones de derechos aduaneros para
las industrias establecidas se fija en el 90% del arancel. (11).
El término durante el cual puedan gozarse éste y otros beneficios

(9) Véase apéndice número VI

(10) Véase apéndice número V.

deben ser especificados en el contrato celebrado por el beneficiario con el Ministerio de Industrias. La mayoría de los contratos industriales de otorgan por diez años (12).

Además de las exoneraciones de derechos aduaneros, las industrias nuevas y establecidas que tengan contratos industriales están exonerados del impuesto a la renta sobre aquella porción de sus utilidades que reinviertan en la planta o fábrica; también quedan exoneradas del pago de impuestos de exportación. Se les otorgará asimismo una exoneración por cinco años de pago de impuestos municipales y del impuesto sobre las utilidades y el activo fijo por el monto del 100% durante la primera mitad del período contractual y del 50% durante la segunda mitad (13).

La ley prevee un tercer grupo de incentivos de diversos tipo que pueden describirse en forma general como de naturaleza proteccionista. Originalmente se iba a imponer un elevado arancel sobre los productos importados que compitieran con productos nacionales (artículo 5) con la probabilidad de triplicar el arancel si se considerase necesario una protección adicional (artículo 12) (14). Estas secciones fueron eliminadas por el Convenio Centroamericano de Equiparación de Gravámenes suscrito por Costa Rica en 1962 que fija un arancel aduanero uniforme a los productos que se originan fuera de la región y prohíbe a los países miembros -

(11) Ibid.

(12) Ibid.

(13) Véase apéndice número V

(14) Ibid.

que varíen unilateralmente tal arancel. La estructura arancelaria vigente otorga una fuerte protección a los productos centroamericanos. Asimismo, la responsabilidad por la protección a la producción local contra el dumping y otras prácticas de competencia desleal, establecidas en los artículos 10 y 11 de la ley en estudio, (15) fué trasladada al Consejo Ejecutivo de Integración Centroamericana de 1962 (Tratado de Managua de 1966). El grado de protección contra las prácticas permanece inmutable de conformidad con el tratado.

Aunque los reajustes arancelarios han sido sacados de la esfera de la acción nacional por los convenios centroamericanos - de integración, la ley de Protección Industrial mantiene el espíritu proteccionista en las políticas que establece para ciertos organismos nacionales. Cuando existe un tipo de cambio múltiple, al Banco Central (todos los bancos de Costa Rica son estatales) se le prohíbe vender divisas al tipo oficial para la importación - de materias primas y productos manufacturados que se produzcan en el país (artículo 7) (16). Asimismo, cuando reciba instrucciones en ese sentido, el Banco garantizará por adelantado el porcentaje de ingreso por exportación que convertirá al tipo oficial durante un número estipulado de años (artículo 26) (17). Todas las instituciones y organismos estatales quedan obligadas a comprar productos nacionales cuando sean comparables en precio y calidad al artículo importado (artículo 6) (18).

(15) Véase apéndice número V

(16)

(17) Ibid.

(18)

De conformidad con el artículo 25 de la Ley (19), el que percibe los incentivos industriales debe celebrar un contrato con el Estado. Esta disposición asegura al contratante que su convenio será tomado en serio y que si fuese revocado podrá reclamar indemnización. Para mantener la ley costarricense en un plano competitivo, el artículo 18 dispone que los beneficios nuevos o más amplios que puedan ser otorgados posteriormente en otros países — centroamericanos o Panamá deben ser sometidos inmediatamente a la Asamblea Legislativa Costarricense en forma de una modificación a la ley de 1959 (20).

Por último, la ley prevé una serie de incentivos en forma de ayuda técnica y financiera. Para asegurar la disponibilidad del capital de desarrollo, el Banco Nacional queda obligado a aplicar una política favorable de crédito para las nuevas industrias. (21) Al Ministerio de Industrias se le encarga mantener un organismo especializado que preste ayuda técnica a la industria nacional — (artículo 8) (22). Este organismo, el Centro de Cooperación Técnica Industrial, sirve como biblioteca de datos técnicos de interés para los inversionistas y como un centro de diseminación de instrucción técnica. Celebra conferencias y seminarios periódicos conjuntamente con los especialistas de la Universidad de Costa Rica y de la Industria Privada y, cuando se le solicite, traza

(19) Véase apéndice número V.

(20) Ibid.

(21) Ibid.

(22) Ibid.

programas especiales de adiestramiento para una industria que -
necesite obreros con especialidades que no existan actualmente
en Costa Rica.

El firmante de un contrato industrial está obligado a cumplir
sus compromisos de buena fe. Se le prohíbe utilizar los materia-
les y el equipo que han sido importados libres de derechos para
fines diferentes a los especificados en su contrato y no puede va-
riar el uso o propiedad de su planta ni cambiar sus planes de -
producción, sin la aprobación previa del Ministerio de Industrias
(artículos 35 y 36) (23). Los artículos producidos bajo un contra-
to de incentivos fiscales deben cumplir con las normas de control
de calidad y sanitarias y deber ser vendidos a precios razona-
bles (artículos 13 y 14) (24). Cuando, por condiciones extraordi-
narias, tienden a subir los precios el Ministerio de Hacienda que
da facultado para fijar las utilidades máximas y los precios má-
ximos de venta, particularmente en los artículos de primera ne-
cesidad (artículo 47) (25). Asimismo, en los casos en que la pro-
ducción en una industria dada puede conducir a la creación de -
monopolio de hecho, el Ministerio de Hacienda queda autorizado
para supervisar los costos de producción y señalar los precios
de venta (artículo 34) (26).

(23) Véase apéndice número V.

(24) *ibid.*

(25) *ibid.*

(26) *ibid.*

La administración de la ley es responsabilidad del Ministerio de Industrias, por intermedio de la Comisión Consultiva y de — Coordinación para el Fomento Industrial. La Dirección de Industrias sirve como una especie de secretariado, recibe las solicitudes para contratos de incentivos fiscales y ordena la preparación de los estudios necesarios. Para determinar los problemas — de calidad (es decir, si una materia prima obtenible en el país — reemplaza adecuadamente a una importada), recurre a los servicios de un panel especializado conocido como el Comité de Nor— más. El Comité está integrado por representantes de la comunidad industrial y del Gobierno.

Las decisiones sobre solicitud de contrato las toma la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, con base en los estudios que le haya preparado la Dirección de Industrias. Los contratos deben ser ratificados por el Ministerio de — Industrias, lo que es normalmente un asunto de rutina. Esta comisión se compone de siete personas escogidas por el Gobierno y la industria; y posee facultades generales para orientar la política industrial. En la práctica, es el organismo más poderoso en el — trámite de incentivos fiscales. (27).

Consideramos que en el futuro, será necesario la revisión — del régimen de exenciones existentes en nuestro país a causa de que se han presentado casos concretos de grandes compañías extranjeras, principalmente, establecidas en las cuales las exen— ciones han progresado a un ritmo mayor que la obligación tribu—

(27) Véase apéndice número V.

taria, principalmente en materia de impuesto sobre la renta.

El análisis de estos temas nos permite estudiar, aunque sea de manera rápida, la relación entre el artículo 50 de la Constitución Política (28) de Costa Rica que autoriza una política intervencionista del Estado en materia económica y el artículo 46 del mismo cuerpo de leyes (29) que consagra la libertad económica privada.

En realidad no existe ninguna contraposición entre los artículos 46 y 50 de la Carta Política. Recordemos, en todo caso, - que las normas y principios de la Constitución deben interpretarse de manera sistemática, es decir, analizando su relación con las otras normas y principios también consagrados por la Carta Política.

(28) Artículo 50. "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la - producción y el más adecuado reparto de la riqueza". Const. Pol. 7 de noviembre de 1949. Imprenta Nacional, 1971. San José, Costa Rica.

(29) Artículo 46. "Son prohibidos los monopolios de carácter - particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ~~ser~~ sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa"

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Op. cit. art. 46.

En este orden de ideas, es posible afirmar que el artículo - 46, de coste más liberal, sirve de límite a la acción del Estado autorizada en el artículo 50. Por su parte, este último artículo también constituye un límite importante a la libertad económica consagrada en el artículo 46 de la Constitución de Costa Rica.

En síntesis, la Ley de Protección y de Desarrollo Industrial es aplicación del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, en el sentido de que organiza y estimula la producción a través de las exenciones fiscales y otras disposiciones implícitas en la misma.

Con respecto a la ley analizada en el presente capítulo, es interesante ver: LIZANO F. Eduardo. "El mercado común y la Distribución del ingreso". EDUCA. San José, Costa Rica, 1970. Y - WEISENFELD, Lorin. La Ley de Protección Industrial. En Revista de Ciencias Jurídicas, número 14 diciembre 1969. Universidad de Costa Rica.

CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, el Estado moderno, sea de Derecho o de tipo autocrático, interviene activamente organizando y estimulando la producción.

La participación del Estado costarricense en los medios productivos ha ido creciendo en forma progresiva a través de los años.

En primer término, consideramos importante referirnos a los servicios públicos y medios productivos que por su naturaleza se han considerado propios de la función estatal porque en última instancia, es a través suyo que el Estado ha intervenido estimulando y organizando la producción.

Antes de la década del 40, apenas existían algunos servicios públicos en manos del Estado. Entre ellos, estaban la administración de los servicios del agua, correos, telégrafo, algunos ferrocarriles, etc. Por ello, es posible afirmar que el Estado en esa época solo tenía en sus manos la administración de algunos servicios públicos clásicos. En el fondo, nuestra economía estaba alimentada por los principios del liberalismo "laissez-faire".

El legislador del año 1942, dando un giro de ciento ochenta grados, empezó a interesarse más por los problemas sociales y económicos al introducir en el capítulo referente a las Garantías Sociales el artículo 51, equivalente al artículo 50 de la Constitución Política actual. Dicho artículo rezaba: "El Estado procurará el mayor bienestar de los costarricenses, protegiendo de modo especial a la familia, base de la nación; asegurando amparo a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido; estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza".

El artículo 50 de la Carta Política actual es el germen de la actual política intervencionista del Estado, basada en gran parte sobre la idea de la planificación. Hace relativamente pocos años, la planificación era concebida como algo propio del sistema socialista, a pesar de las explicaciones de varios de nuestros mejores economistas en el sentido de que su implantación era algo innato e imprescindible para cualquier tipo de Estado moderno.

Por tal razón, el artículo 51 de la Constitución costarricense de 1871, que posteriormente dió origen al artículo 50 de la Carta Política vigente, abrió las puertas, desde el punto de vista constitucional, a la intervención estatal en la economía de los sectores privados.

También es conveniente señalar que las demás garantías sociales incluidas en la Constitución en 1942, al igual que la creación del Seguro Social, vinieron a quebrar la concepción liberal del Estado costarricense hasta entonces sustentada por nuestros hombres públicos. A partir de entonces, se inició una nueva etapa del Estado costarricense.

Por otra parte, en el año 1949, durante la corta administración de la Junta de Gobierno presidida por José Figueres, se instalaron en el país una serie de instituciones autónomas mediante el proceso llamado de "descentralización administrativa", que obedece a la necesidad de delegar funciones del ejecutivo a otros entes técnicamente especializados para el fin encomendado. Con ello se pretendió especializar algunas funciones del Estado, a fin de - que los entes encargados de ejercerlos, participaran activamente en el proceso de organizar y estimular la producción y lograr una

distribución más adecuada de la riqueza, cosa que es bien conocida en la exposición de motivos de los proyectos mencionados.

Entre las instituciones creadas en ese período, pueden citarse el I. C. E. (Instituto Costarricense de Electricidad); la Banca Nacionalizada, el I. T. C. O. (Instituto de Tierras y Colonización), etc. lo mismo que la reorganización del Consejo Nacional de la Producción.

A través de la Banca Estatal se persiguió orientar el crédito hacia las zonas rurales y la industria con el fin de estimular las actividades económicas más reproductivas y de beneficio nacional. Con ello se logró que pequeños agricultores y empresarios generaran nuevas fuentes productoras de riqueza para el país con lo cual se logró además, una cierta redistribución de la riqueza entre los distintos sectores de la población. Es digno mencionar que en el año 1970 los bancos comerciales expandieron el crédito por encima de los toques fijados tradicionalmente por el Banco Central con el objeto de financiar a todos los productores agrícolas nacionales, principalmente al pequeño productor. Ello se hizo por medio de créditos garantizados con las cosechas y con el aval del Consejo Nacional de Producción.

Recordemos que con anterioridad a la nacionalización bancaria, la banca privada financiaba únicamente aquellas actividades que resultaban lucrativas, tales como el comercio y los préstamos hipotecarios y fiduciarios.

El I. C. E., por su parte, empezó a expandir el servicio de energía eléctrica a todo el país. Con ello, los estratos sociales más necesitados se vieron beneficiados con la energía eléctrica,

a la vez que pudieron surgir numerosas industrias que crearon - nuevas fuentes de trabajo.

El I. T. C. C. , desde su fundación, se le encargó mejorar - el siste productivo de la agricultura a través de la diversifica-- ción de los productos, asistencia técnica externa, financiación - externa, aplicación de las maquinarias modernas, etc.

El Consejo Nacional de la Producción, creado en 1943 y re organizado en el año 1949, según el artículo 4 de su Ley Orgáni ca, "el Consejo tendrá como finalidad específica, el fomento de la producción agrícola e industrial y la estabilización de los pre cios de los artículos requeridos para la alimentación de los habi tantes del país. . . "

Esta institución surgió, por lo tanto, como un ente estatal directamente vinculado con la organización y estímulo de la pro ducción nacional.

Junto a este organismo dijimos que el Sistema Bancario Na cional tiene un plan de créditos tendientes a fomentar la produc ción de granos básicos de consumo popular, los cuales han esca seado a causa de la falta de una política estatal que estimule la - producción masiva.

Otra modalidad por medio de la cual el Estado costarricen se ha intervenido estimulando la producción y el equitativo repar to de la riqueza, es a través de nuestro Sistema Impositivo.

El Impuesto sobre la Renta vigente se aplica conforme al - principio democrático de solidaridad, según el cual "cada cual - paga según sus posibilidades económicas". Así, el impuesto so--

bre la Renta establece diferentes escalas de obligación tributaria para las personas físicas y jurídicas de acuerdo con el monto de sus rentas líquidas anuales.

La anterior disposición, por el solo mecanismo de escalas de pago, implica una medida redistributiva de la renta, aunque a ciencia cierta no se sabe exactamente hacia qué sectores o actividades se destinan los fondos recaudados. Se supone, en todo caso, que las entradas que percibe el Estado en razón de las exacciones fiscales que realiza a los particulares, se invierten en obras que benefician a toda la colectividad.

El impuesto de consumo ha sido también reformado en el año 1972 con la finalidad de que todos los artículos suntuarios paguen mayores impuestos de acuerdo a su "grado de esencialidad". Se indica que los artículos pueden ser nacionales o extranjeros, ya que lo que interesa es su esencialidad, la cual se mide con tarifas que oscilan del 10%, 15%, 20%, 30%, 40% y hasta 50% de su valor.

La Ley de Asignaciones Familiares extiende básicamente a otorgar salarios de acuerdo al número de dependientes familiares y no según el salario mínimo que en la actualidad resulta insuficiente. Con ello, se logra distribuir el ingreso salarial tomando en consideración a las necesidades reales de la familia.

A la par de las exacciones fiscales, se encuentra la Ley de Protección y de Desarrollo Industrial, la cual contiene una serie de prerrogativas tendientes a favorecer el desarrollo industrial mediante exoneraciones de toda clase de impuestos que se otorgan a las industrias nuevas y establecidas.

Por último, en el año 1963, se promulgó la Ley de Planificación, mediante la cual se busca promover el desarrollo social y económico del país en la forma más eficiente posible. La Ley de Planificación establece que los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Planificación son: intensificar la productividad y la producción nacional; promover la distribución del ingreso y de los servicios sociales por parte del Estado y propiciar una participación mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas sociales y económicos del país.

En términos generales, podemos afirmar que el Estado costarricense interviene en diferentes aspectos para organizar y estimular la producción nacional y buscar el equitativo reparto de la riqueza. En dos palabras: en la búsqueda del bienestar general de los habitantes de la República.

En el aspecto social lo hace mediante la legislación social, especialmente los seguros sociales, los impuestos de tipo progresivo como el de la Renta dirigidos a contribuir con los gastos públicos del Estado de acuerdo con las capacidades económicas de cada cual y de tipo redistributivo como el de Asignaciones Familiares, etc.

En lo económico, por medio de impuestos de Aduana, de ventas, de consumo, de leyes sobre monopolios según el artículo 46 de nuestra Carta Fundamental, Ley de Planificación, exenciones tributarias, etc.

El Estado interviene políticamente cuando a través de la legislación tiende a concentrar mayor poder en el Poder Ejecutivo. En nuestro medio, como ejemplo de ello, tenemos la reforma la-

madras del 4-3 y la ley de "Presidentes Ejecutivos", etc.

Otra medida de tipo político serían las expropiaciones por parte del Estado por motivos de utilidad social, de acuerdo con el artículo 45 de nuestra Constitución.

En el aspecto financiero, el Estado interviene a través de los impuestos recaudados y destinados al gasto público, los empréstitos al exterior, la política monetaria, la intervención en los mercados de cambio, el monopolio de divisas, las medidas antiinflacionarias, la regulación del crédito, etc.

En nuestro medio, la más novedosa intervención de tipo financiero se encuentra en la Ley de Planificación cuando se señala que para los programas de inversión pública y empréstitos al exterior, todas las instituciones públicas deberán tener el visto bueno de la Oficina de Planificación antes de someter sus presupuestos a la aprobación de la Contraloría General de la República.

Se puede observar que en mayor grado el Estado costarricense a través de todas esas leyes específicas, interviene activamente para organizar y estimular la producción y lograr el equitativo reparto de la riqueza. En síntesis: el bienestar general de los costarricenses.

También puede concluirse diciendo que el artículo 50 de la Constitución Política es una norma poco actuada, a pesar de que al amparo suyo se han dictado una serie de medidas legislativas que han venido a colocar a nuestro país en las líneas de las democracias sociales. En efecto, la nacionalización bancaria, la crea

ción del Consejo Nacional de Producción, las reformas del régimen tributario, la ley de Planificación, la legislación social, la ley de Asignaciones Familiares, etc. son todas las normas que han venido, por una parte a organizar y estimular la producción y por la otra, a lograr un más adecuado reparto de la riqueza entre todos los habitantes de la República.

Desde hace algunos años, el Estado costarricense se ha convertido en partícipe de grandes proyectos económicos entre los — que se encuentran la producción de bauxita a través de una empresa que participa el Estado, el Banco Mundial, la Unión Soviética y ALCOHA (compañía explotadora); la Fábrica de cemento; el complejo petroquímico con Venezuela; etc. Posiblemente todos estos proyectos transformarán las estructuras sociales y económicas — del país debido a que lo que se busca es el desarrollo económico acelerado y la transformación social a través de las instituciones democráticas, para lo cual es necesario otorgarle mayores poderes de control económicos a los titulares del Poder Político, a — fin de resguardar nuestra soberanía.

Consideramos también, que en el futuro se debe de controlar el aumento desmesurado del gasto público, lo mismo que se debe de revisar el régimen de exenciones existente y el Presupuesto Nacional; ya que como se expuso, se ha provocado un déficit fiscal muy fuerte, lo mismo que el presupuesto se está inflando fuera de los límites controlables y todo esto es vital para la estabilidad política, económica y social del país.

Por lo tanto, consideramos que se debe de buscar el punto de equilibrio, el cual debe permitir que se continúe la política de

sarrollista y social que existe pero también dicho equilibrio debe de cuidar que no se llegue al extremo del despilfarro.

En síntesis, podemos afirmar qcon base en todo lo expuesto a través del presente estudio, que Costa Rica es hoy día simultáneamente un Estado de Derecho y un Estado Intervencionista, ya que a la par de la existencia de un vigoroso régimen de libertades públicas, existe también una profusa legislación de corte social-demócrata. Asimismo, el Estado costarricense interviene organizando y estimulando la producción a través de las leyes concretas que se han dictado al correr de los años lo cual produce que nuestro sistema cada vez se asemeje más a los modelos de las llamadas democracias sociales.

A P É N D I C E S

- I. Proyecto de Ley presentado por el Sr. Diputado Genaro Valverde Marín, a la Asamblea Legislativa para la reforma de unos artículos del Código de Comercio.
- II. Ley de Planificación.
- III. Ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas.
- IV. Reglamento de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas.
- V. Ley de Protección y Desarrollo Industrial.
- VI. Reglamento de la Ley de Desarrollo Industrial.
- VII. Encuesta realizada a 20 Empresas Costarricenses.
- VIII. Comentario a las encuestas.
- IX. Cuadros Económicos.

Proyecto de ley de reformas a varios artículos del Código de Comercio, Ley número tres mil doscientos ochenta y cuatro de treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, presentado a conocimiento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por el Diputado Licenciado Jenaro Valverde Marín. Dicho proyecto trata de la transformación de las acciones al portador en acciones nominativas.

PROYECTO

EXPEDIENTE Nº 5350

REFORMA A VARIOS ARTICULOS DEL CODIGO DE COMERCIO
LEY Nº 3284 DE 30 DE ABRIL DE 1964

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este proyecto de ley fue redactado gracias a la participación de los distinguidos señores profesores de la Universidad de Costa Rica, Licenciado Walter Antillón Montealegre, Licenciado Mauro Murillo Arias y Doctor Fernando Mora Rojas.

Como exposición de motivos, he decidido utilizar el magnífico artículo del Doctor Mora Rojas, que de manera clara y contundente viene a demostrar la necesidad de establecer en Costa Rica el cambio de acciones al portador, por acciones nominales. El trabajo del Profesor Mora dice:

NOMINATIVIDAD OBLIGATORIA EN LAS ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS:

"La sociedad anónima se caracteriza por la representación de su capital en títulos fácilmente negociables y por la responsabilidad limitada de sus socios que a su vez significa una insensibilidad del patrimonio del socio frente a las deudas de la sociedad.

La sociedad anónima - ha dicho Tulio Ascarelli - es el ele

mento fundamental que permitió el desarrollo del capitalismo moderno. Podríamos decir que la sociedad anónima es el ejemplo - por excelencia de la sociedad capitalista. El descubrimiento de la vía del Cabo hacia el Oriente y el del continente americano, - abrieron en el siglo XVI a la mirada de la economía europea un - mundo descomunal cuya explotación requería medios económicos e instrumentos jurídicos por encima de las posibilidades de la - época. La solución a ambos requerimientos lo dió una interesan- tete mezcla de antiguas instituciones italianas y de novedosas in venciones holandesas, francesas e inglesas y que hoy conocemos en su versión más sofisticada, como sociedad anónima.

El capital que se necesitaba para poner en funcionamiento la Compañía de las Indias Orientales sólo podía obtenerse a tra- vés del recurso al ahorro público y la gran masa no estaba dis- puesta a invertir en algo menos líquido que una mercancía corrien- te, ni estaba dispuesta a correr la aventura, con su patrimonio personal, de inversiones en ultramar. Muy distinta fué la situa- ción cuando lo que se ofreció fue una participación en el negocio sin más responsabilidad que pagar el monto de la acción, la que a su vez era tan fácilmente negociable como un cerdo o una bue- na pintura. Muy pronto aparecieron las bolsas de Comercio (la - primera surge en Brujas y se perfecciona luego en Amberes y en Amsterdam) y la salida del título se facilita aún más.

Hoy en día el capital mundial está manejado a través de la sociedad anónima o de sus versiones locales: sociedades por ac- ciones, corporations, compañías (organizadas éstas en inmensas holdings) y la empresa, como célula básica de la economía moder-

na y como organismo productivo desconocido hasta antes del industrialismo, es la materia prima sobre la cual extiende su manto la sociedad anónima. Y es por todo ello que no puede seguirse viendo la institución en primer lugar a través únicamente del prisma del derecho privado (no debemos olvidar que la sociedad anónima nació como una institución de derecho público y no ha dejado prácticamente nunca de ser un ente vigilado muy de cerca por el Derecho Público) y en segundo lugar, como en sus orígenes, como un esquema organizativo de personas (en el que prevalece el interés de los socios sobre todo otro interés). Hoy en día en cambio, vemos la sociedad anónima como un esquema organizativo de la empresa, (en el que prevalece el "interés social" sobre cualquier otro). A su vez siendo, la empresa, como concepto económico, una organización de los factores de la producción tendente a la producción o al cambio de bienes o servicios, el concepto de "interés social" significa el interés de todos y cada uno de los factores de la producción.

Es un sistema tradicional, por ejemplo, al prevalecer el interés de los socios sobre otro interés, producidas las utilidades el socio adquiere un derecho a que se comprueben dichas utilidades y a que se le pague el dividendo que le corresponde según sus acciones y el estatuto social. En un sistema basado en el "interés social", en cambio, el derecho del socio al dividendo no nace sino cuando, la Asamblea General acuerda la distribución por solo la medida en que la Asamblea acuerda hacer esa distribución porque lo primordial es la persistencia de la empresa, su supervivencia y la defensa del "interés social", - que comprende el interés de los socios, de los trabajadores, de

los proveedores, de los consumidores, del Estado y del sistema del "interés social" ha alcanzado en la práctica en Italia, Francia, Alemania y España, por ejemplo.

La misma teoría del "interés social" nos lleva a sistemas -- cada día más perfeccionados de control de fundación y funcionamiento de las sociedades anónimas así como a sistemas amplios de publicidad en beneficio de los terceros, concepto que incluye a los socios. Y nos lleva también a la afirmación de que la estructura jurídica de la sociedad anónima debe ser tal que permita -- evitar que se convierta en medios de estafas colectivas, de negocios fraudulentos, de burla de leyes tributarias, de control y dirección de la economía interna por fuentes externas de financiamiento, de control y dirección de la economía interna por fuentes internas de financiamiento escandalosamente amparadas en -- el anonimato.

A todas estas ideas y a otras como la defensa nacional la política económica, la política legislativa en defensa de los mismos tenedores de acciones y la política fiscal, obedecen las normas con respecto a acciones nominativas y al portador se han dictado en diversas latitudes. Es interesante constatar después de un detallado estudio de derecho comparado, que son muy pocas las legislaciones que de una manera u otra no han limitado o eliminado totalmente el uso de las acciones al portador, instrumento óptimo para caer en todos los vicios apuntados contra la economía de un país, contra un sistema fiscal y contra la buena fe de los terceros.

No voy aquí a enumerar exhaustivamente la solución pormenorizada que en las diversas legislaciones se ha dado al proble-

ma pero sí haré la siguiente generalización:

- a. - Se ha optado por eliminarlas (Italia, Chile, en los Estados Unidos no han existido salvo algunos estados)
- b. - Se ha restringido su uso en ciertas empresas de valor estratégico o por especiales consideraciones económicas (España).
- c. - Se ha empleado el camino de dar mayor número de votos a las acciones nominativas en comparación con las acciones al portador (Francia)
- d. - Se ha decidido imponer un tributo a la acción al portador (Venezuela)
- e. - Se ha acordado permitir las acciones al portador sólo — previa autorización especial (Suecia)

"Numerosos estados - escribía Serick en 1955 (Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles) -, especialmente los países de capital débil que procuran atraerse capitales extranjeros, han adoptado por dicha razón ciertas medidas contra la posibilidad de que pasen a depender del extranjero las personas jurídicas nacionales". A este tipo de medidas pertenecen aquellas que limitan o eliminan el uso de las acciones al portador puesto que la acción al portador no permite llevar a cabo controles oficiales necesarios para saber quién es el dueño del capital de la sociedad y constatar si las normas que obligan a mantener una cierta mayoría de accionistas nacionales dentro de la sociedad se cumplen o no.

A este conjunto de ideas ya expuestas pertenecen también las normas que respecto a acciones nominativas y al portador fueron

dictadas en Italia poco antes de la promulgación del Código de 1942, y las dictadas poco después de dicha promulgación.

Creo que el ejemplo italiano puede ilustrarnos acerca de la actual propuesta que un sector intelectual del país desea hacer a la Asamblea Legislativa para que ésta elimine las acciones al portador en las sociedades anónimas.

El real decreto ley italiano de 25 de octubre de 1941, nº 1148 estableció que "las acciones de las sociedades con sede en la República deben ser nominativas". El real decreto de 16 de marzo de 1942, con el que se promulgó el Código Civil, estableció en su artículo 2355 que "las acciones pueden ser nominativas o al portador a escogencia del accionista si el acto constitutivo no establece que deben ser nominativas". Finalmente, el real decreto de 29 de marzo de 1942, nº 239 estableció que "las acciones emitidas por las sociedades con sede en la República deben ser extendidas a nombre de una determinada persona física o jurídica".

El argumento italiano para la eliminación de las acciones al portador es bastante simple: las acciones al portador implican una desigualdad ante la ley tributaria: aquellos que logran colocar su capital en acciones al portador o que obtienen sus rentas de acciones al portador estarán en condiciones de manipular los títulos en modo tal que deban pagar menos impuestos que aquellos que no puedan hacer desaparecer o que no puedan dividir al menos parte de sus ingresos tras el anonimato que — las acciones al portador permiten. Debo aclarar que el anonimato que las acciones al portador dan es total pues en el acta —

de la asamblea no se debe decir a quién pertencen las acciones o quién se presentó con ellas. Sobre este aspecto la doctrina y la jurisprudencia comparada contienen una avalancha de opniones que defienden el total anonimato.

Sin embargo, a pesar de que el argumento contra las acciones al portador fué un argumento constitucional de igualdad ante la ley, el fondo del asunto es muy otro: se trató evitar que los inversionistas, principalmente extranjeros, dominaran o manipularan por una parte; por otra, se pretendía saber quién es quien en el mundo de los negocios; y finalmente, hubo fuertes razones de orden tributario, es decir, se intentó eliminar las evasiones de impuestos que se pueden realizar a través de sociedades anónimas con acciones al portador, principalmente evasiones del impuesto sobre la renta y como en otros países, las de los impuestos sucesorios.

Creo que lo interesante radica en lo siguiente: es evidente que el inversionista se sienta atraído por la acción al portador que le permite interesantes manipulaciones tributarias y el anonimato. Desde este dato se partió en Italia en lo que podríamos llamar la segunda etapa del proceso. Si el inversionista es tá interesado en el anonimato y en otras ventajas que las acciones al portador le dan, un modo de atraer las inversiones a ciertas zonas es permitir dentro de ellas el uso de las acciones al portador. En esta filosofía se basaron las leyes italianas para el uso de las acciones al portador en las regiones subdesarrolladas, Sicilia, Cerdeña, Trento, Alto Adige y Valle de -- Costa, permitiendo el uso de acciones al portador en aquellas

sociedades que se formaran, bajo ciertas condiciones (industrias nuevas principalmente para la construcción de naves en Sicilia; igualmente en Cerdeña; industrias y comercios nuevos; especialmente en cuanto a turismo y para renovar y dar mayor vitalidad a las actividades industriales o comerciales ya existentes en Trento - Alto Adige) se pensó que muchos inversionistas buscarían establecer sus inversiones en esas regiones lo que ayudaría a su - desarrollo económico.

Pero los resultados han demostrado una cosa bien distinta de lo que se había pensado. El inversionista no está interesado - tanto en el anonimato como en la productividad de su empresa; no está interesado tanto en el menor volumen de obligaciones tributarias como en la posibilidad de encontrar buena y eficiente mano de obra, buen mercado, buenas condiciones de transporte de materias primas y de otros servicios, etc. Ciertamente, el inversionista está interesado en pagar menos impuestos y en muchos casos en mantenerse tras el biombo del anonimato producido por - las acciones al portador, y cuando el sistema jurídico se lo permite se ampara tras éstas. Pero tales elementos vienen a ser secundarios frente a otros de mayor trascendencia y de índole económica más productiva.

A tal propósito, creo que resulta interesante transcribir - los siguientes datos estadísticos. Diez años después de introducidas las leyes que permiten el establecimiento de acciones al - portador (es decir, al final de 1968) "solamente el 4,2% del capital total de las sociedades italianas era al portador...; si se - tiene en cuenta que la población total de la región de Sicilia, de

la región de Cerdeña; y de la región de Trento-Alto Adige es de siete millones ciento noventa y un mil seiscientos seis habitantes, es decir, del 7,5% de la población total italiana, tal porcentaje confirma que el anonimato accionario no constituye un incentivo eficaz para llenar la diferencia entre norte y sur...; se ha hecho notar que las previsiones de los tres ordenamientos regionales hoy vigentes... han sido cada una de ellas más liberales que la anterior (permitiendo un mayor número de empresas y más diversificadas, acogerse al beneficio). A tal ampliación cualitativa, no ha correspondido, como se ha notado, una correspondiente ampliación cuantitativa, probablemente también porque la acción al portador no interesa al inversionista extranjero... — (LANZA Amilcare Brevi note sulle azioni al portatore nelle regioni, Riv. Soc. 1969, 1108).

A tal punto la acción al portador no ha tenido importancia en la determinación de las inversiones nacionales o extranjeras que las nuevas leyes tributarias que se pretende establecer en Italia tienen entre sus directivas fundamentales eliminar definitivamente las acciones al portador en las Regiones a estatuto especial (Sicilia, Cerdeña, Trento-Alto Adige y Valle de Aosta en donde no se permitió su introducción por razones constitucionales).

Espero que las consideraciones anteriores sirvan para hacer alguna luz aunque sea mínima, en la discusión que se provocará próximamente alrededor de la eliminación de las acciones al portador, por razones fiscales y de política económica.

Por otra parte, creo que la labor legislativa no debería

detener aquí: nuestro país ha entrado por el camino de un desarrollo económico acelerado de orientación básicamente capitalista y en ese proceso jugarán un papel preponderante las sociedades mercantiles, particularmente las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima y principalmente esta última. Es conveniente que antes de que los problemas se presenten con mayor fuerza que ahora, se legisle en cuanto a la estructura de las sociedades anónimas fundamentalmente. Una investigación que acabo de terminar y en vías de publicación, sobre las sociedades mercantiles en Costa Rica, de 1962 a 1972, arroja datos muy interesantes y reveladores.

Del 17 de febrero de 1962, al 7 de febrero de 1964, prácticamente un período de dos años, se inscribieron en Costa Rica un total de setecientos sesenta y nueve sociedades comerciales de las cuales seiscientos veinticuatro eran de responsabilidad limitada (81,39%) y ciento cuarenta y cinco eran anónimas (18,61%). En ese mismo período se inscribió solamente una sociedad en comandita simple y una sociedad colectiva. Una década después, del 19 de enero de 1971 hasta el 31 de octubre de 1972, un período un poco menor de dos años se inscribieron en Costa Rica un total de dos mil doscientas cincuenta y nueve sociedades comerciales, de las cuales cuatrocientas veinticinco son sociedades de responsabilidad limitada, (18,84%) y mil ochocientas treinta y cuatro son sociedades anónimas (81,16%). Durante este período no se inscribió una sola sociedad colectiva ni una sola sociedad en comandita. Esto nos indica dos cosas interesantes. El inversionista, por ningún concepto desea ya comprometer todo su patrimonio en sociedad a responsabilidad como la colectiva

y la sociedad en comendita y por otra parte, el inversionista de sea emplear cada vez con mayor frecuencia la sociedad anónima y no la sociedad de responsabilidad limitada. Los papeles se invirtieron en una década. Al principio de los sesenta las sociedades a responsabilidad limitada eran el 81,31% del total inscrito y al principio de la década del setenta son solamente el 18,84%. Las sociedades arónimas, en cambio, al inicio de la década del sesenta son el 18,61% mientras que al inicio de la década de los setenta alcanzan un nivel que en década anterior tenían las sociedades a responsabilidad limitada: 81,16%.

Tengo en vías de realización otra investigación que llevaré a cabo con la ayuda valiosa de mis alumnos de Derecho Comer--cial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica con la que, entre otras cosas, intentaremos medir la curva de - crecimiento de las acciones al portador en las sociedades anónimas durante la misma década ya investigada en forma explorato--ria.

Asimismo mediremos el volumen de capital de las sociedades que emplean el sistema de acciones al portador y detectare--mos si se trata principalmente de sociedades familiares o no. Esto nos permitirá adelantar nuevas hipótesis acerca del comportamiento del inversionista nacional y extranjero en relación con - la sociedad anónima.

Pero, al margen de los resultados que en tales investiga--ciones logre alcanzar, creo que esta es la oportunidad de reali--zar una reforma total de la estructura de la sociedad anónima - que le permite al país controlar las inversiones internas y ex--

ternas, establecer las responsabilidades del caso y desarrollar una sana política tributaria.

Debemos fundamentalmente establecer límites de capital para el empleo de diferentes tipos de sociedades, limitaciones en cuanto a la descripción del objeto social; establecer normas y entidades de control de fundación de sociedades anónimas, así como de control de funcionamiento y de control de veracidad de informes contables. Por otra parte, el sistema de publicidad de nuestras sociedades de capital es prácticamente nulo, en perjuicio -- del Estado y de los terceros. Se hace imprescindible establecer también una normativa y una organización institucional que obliguen a un mínimo de publicidad de las sociedades de capital y que permitan un control sobre el contenido de esa publicidad.

Podríamos ocupar muchas cuartillas más analizando el problema y describiendo los desperfectos estructurales de nuestra sociedad anónima, principalmente. Bástenos decir que la estructura actual de nuestra sociedad anónima es la misma prácticamente que hace cien años o más y obedece a un esquema económico y político que nada tiene que ver con la realidad de Costa Rica hoy en día y mucho menos con la realidad de nuestro país dentro de -- una década más.

Es nuestra esperanza que la Asamblea Legislativa, con verdadero fervor patriótico y al margen de toda presión y de todo interés creado, lleve a cabo la reforma de la sociedad anónima en Costa Rica".

En consecuencia, señores Diputados, me permito someter a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ETC.

Decreta:

ARTICULO 1. - Derógase el artículo nº 132, y refórmense los artículos nºs. 120, párrafo 2; 125, 134, inciso 3; 137, 138, párrafo 1; 140, 149, 226 y 713 del Código de Comercio, Ley nº 3284 de 30 de abril de 1964, para que se lean así:

Los artículos 2, 3 y 4 de este proyecto exponen como se deberán de leer dichas reformas.

ARTICULO 5. - Esta ley rige a partir de su publicación.

TRANSITORIO. - Las sociedades, socios y tenedores de bonos, deberán ajustarse a las disposiciones de esta reforma dentro del plazo de tres meses. Caso de incumplimiento se aplicará la sanción prevista en el artículo 137 de esta ley. Las acciones al portador que no hubieren sido convertidas en nominativas dentro de dicho plazo dejarán de surtir efectos legales.

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO

Jenaro Valverde Marín
DIPUTADO

Mayo 28 de 1973

ROM- Comisión de Asuntos Económicos

LEY DE PLANIFICACION

Nº 3087 del 31 de Enero de 1. 963.

CAPITULO I - De la Oficina de Planificación

Artículo 1º. - Para lograr el desarrollo económico y social de Costa Rica en la forma más eficaz, créase la Oficina de Planificación - como en una dependencia directamente subordinada al Presidente - de la República.

Artículo 2º. - El Presidente de la República ejercerá las funciones que esta ley le confiere conjuntamente con el Ministro que él designe.

Artículo 3º. - La Oficina de Planificación estará a cargo del Director de Planificación, quién será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. El Director podrá asistir al Consejo de Gobierno con voz, pero sin voto, a aquellas sesiones en que se discutan asuntos concernientes a la Oficina a su cargo, cuando así lo disponga el Consejo de Gobierno; asesorará al Presidente de la República en materias de su especialidad y por encargo de éste, a cualquiera de los otros órganos de la Administración.

Artículo 4º. - La Oficina de Planificación tendrá los siguientes departamentos: a) De planes de Largo y Mediano Plazo; b) De Planes Anuales; c) De Coordinación y Secretaría; d) De evaluación de Proyectos; e) de Financiación; f) De Productividad y Eficiencia Administrativa; y g) De Control de Programas.

Artículo 5º. - El Personal Técnico de la Administración Pública, -

estará obligado a prestar sus servicios a la Oficina de Planificación cuando ésta así lo requiera por conducto del Presidente de la República.

CAPITULO II - Del Departamento de Planes de Largo y Mediano Plazo

Artículo 6º. - El Departamento de Planes de Largo y Mediano Plazo, tendrá a su cargo la investigación de la realidad económica y social del país.

Artículo 7º. - Para la resolución de los problemas nacionales, que se pongan de manifiesto a través de la investigación a que se refiere el artículo anterior, el Departamento de Planes de Largo y Mediano Plazo elaborará un plan decenal (o plan General de Largo Plazo) y un plan cuatrienal (o Plan de Mediano Plazo), con el detalle suficiente, este último, para cumplir los programas correspondientes a los primeros cuatro años del Plan Decenal; cada año que transcurra se agregará y suprimirá un año a cada uno de los planes mencionados que estén en ejecución.

Artículo 8º. - Además, el Departamento de Planes de Largo y Mediano Plazo llevará a cabo un estudio permanente sobre la oferta y la demanda de mano de obra que requiere el Plan General de Largo Plazo.

CAPITULO III - Del Departamento de Planes Anuales

Artículo 9º. - El Departamento de Planes Anuales tendrá a su cargo la preparación anual de los proyectos de presupuesto bajo dos formas: a) a base de la clasificación funcional acostumbrada de los

gastos y de las fuentes de ingreso tradicionales ("Presupuesto - Fiscal") y b) según los programas a desarrollar en el curso del - año siguiente ("Presupuesto Económico")

Este Departamento y su Jefe tendrán las atribuciones, potestades y funciones que determina el artículo 177 de la Constitución Política.

Artículo 10. - El Departamento de Planes Anuales deberá preparar cada año un estudio acerca del probable desenvolvimiento del sector privado de la economía nacional. Para este efecto el Departamento pedirá la cooperación de las Cámaras Patronales.

Artículo 11. - Una vez confeccionado el estudio a que se refiere el artículo anterior, el Departamento de Planes Anuales preparará las recomendaciones de política económica necesarias para - que el Estado, a través de sus diversos órganos, tome medidas aconsejables para que la iniciativa particular sea estimulada a al canzar sus metas.

Artículo 12. - Las recomendaciones de política económica a que se refiere el artículo anterior, serán presentadas por el Departamento de Planes Anuales al Director de Planificación, a más - tardar el 31 de enero de cada año; el Director de Planificación - deberá remitirlas al Presidente de la República antes del 1º de - marzo siguientes, para que éste les dé el trámite que considere pertinente.

Artículo 13. - Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 9º de esta Ley, se trasladará el personal necesario de la actual Oficina del Presupuesto a la de Planificación.

CAPITULO IV - De Departamento de Coordinación y Secretaría

Artículo 14. - El Departamento de Coordinación suministrará a las Unidades SEctoriales normas de programación y recibirá los planes parciales elaborados por cada Ministerio o Institución Au_tónoma, a efecto de integrarlos en un solo esquema de acción debidamente coordinado. Servirá asimismo de medio para remitir a la Oficina de Planificación los proyectos específicos de inversión para que sean evaluados en el Departamento correspondiente.

Artículo 15. - En cada Ministerio y en las Instituciones Autónomas Semiautónomas y Municipalidades, que voluntariamente se vinculen al proceso de planificación contemplado en esta ley, y si su economía lo permite, se establecerá una Unidad Sectorial sujeta, en cuanto a la materia y a sus relaciones, al Departamento indicado en el artículo anterior. Todas las Instituciones Autónomas, Semiautónomas y las Municipalidades, están obligadas a enviar copia de sus planes al Departamento de Coordinación y Secretaría.

Artículo 16. - La Sección de Secretaría tendrá a su cargo la atención de la correspondencia, de los archivos, la preparación de instructivos y otras labores similares de asistencia administrativa de la Oficina de Planificación, del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos y de la Comisión Consultiva de Planes, así como lo referente a relaciones públicas de todos esos cuerpos.

CAPITULO V - Del Departamento de Evaluación de Proyectos

Artículo 17. - El Departamento de Evaluación de Proyectos será el encargado de estudiar los proyectos específicos de inversión de -

los organismos públicos, y cuando lo crea del caso - de acuerdo con su importancia - aquéllos de personas privadas, físicas o jurídicas que deseen alguna clase de beneficio estatal para llevar a cabo la función de una nueva empresa o la ampliación de las - existentes. Para los efectos de este artículo no se considera beneficio estatal la concesión de créditos bancarios.

Artículo 18. - Los estudios a que se refiere el artículo anterior deberán poner de manifiesto la contribución del respectivo proyecto al ingreso nacional; su impacto sobre la balanza de pagos; su contribución a la solución del problema del desempleo; su importancia para el desarrollo de las actividades económico-sociales del país, y todo otro efecto relacionado con los fines de la Oficina de Planificación.

Artículo 19. - El Departamento de Evaluación de Proyectos está obligado a pronunciarse acerca de la prioridad de cada proyecto de inversión, de acuerdo con las disposiciones anteriores y con los planes de desarrollo confeccionados.

Artículo 20. - Los informes de ese Departamento sobre proyectos, serán conocidos por el Comité Técnico de Evaluación de Proyectos a que se refiere el artículo 29 de esta Ley.

CAPITULO VI - Del Departamento de Financiación

Artículo 21. - El Departamento de Financiación tendrá como finalidad examinar y sugerir las diferentes posibilidades de financiar en el interior del país o en el extranjero todo proyecto del sector público y aquellos del sector privado que voluntariamente se sometan, para efectos de su financiación en el exterior y que hayan si

do aprobados por el Comité Técnico de Evaluación de Proyectos para los que preparará los estudios correspondientes, a efecto de demostrar la capacidad de pago de cada proyecto dentro del plan y condiciones bajo las cuales se solicite la operación, pudiendo asimismo rectificar los cálculos originales, si las negociaciones preliminares de financiación así lo requieren.

Artículo 22. - El agente financiero en lo interno y en lo externo, lo será el Banco Central de Costa Rica, o la institución en que éste delegue tal función para cada proyecto.

Artículo 23. - El Departamento de Financiación deberá remitir copia de los estudios, análisis y cálculos mencionados en el artículo 21 de esta ley, a la institución nacional que definitivamente se encargue de las gestiones relativas a un proyecto.

CAPITULO VII - Del Departamento de Productividad y Eficiencia Administrativa

Artículo 24. - El Departamento de Productividad y Eficiencia Administrativa, tendrá a su cargo dos clases de labores: a) estudiar sistemáticamente los métodos y organización administrativa de todo el sector público, a fin de que se eliminen los empleos innecesarios, de que se haga un uso más efectivo de los recursos humanos y materiales de la Administración, de que se erradiquen trámites dilatorios en los procedimientos oficiales, de que se equiparen tasas de salarios y beneficios de funciones similares y de que se eviten duplicaciones de actividades. Tales estudios los realizará el Departamento de Eficiencia Administrativa y Productividad con la colaboración de otras dependencias de la Administración Públi

ca, de conformidad con el artículo 5º de esta ley. b) Preatar, a juicio del Director de Planificación, asistencia técnica a la empresa privada para elevar su productividad, cuando ésta lo solicite, en cuyo caso atenderá las peticiones según la prelación de las actividades de la empresa solicitante, dentro de cada plan anual.

Artículo 25. - El Departamento de Planes Anuales no dará curso a peticiones de nuevas plazas de parte de los Ministerios, sin el correspondiente visto bueno del Departamento de Productividad y Eficiencia Administrativa.

Artículo 26. - Las recomendaciones generales de este Departamento para mejorar las dependencias públicas, serán presentadas al Presidente de la República por medio del Director de Planificación, a efecto de que se les dé el trámite que corresponda.

CAPITULO VIII - Del Departamento de Control de Programas

Artículo 27. - El Departamento de Control de Programas será el encargado de observar permanentemente la ejecución de los programas aprobados y en vigencia.

Artículo 28. - El Departamento de Control de Programas deberá rendir trimestralmente al Presidente de la República, un informe por conducto del Director de Planificación sobre el estado de ejecución de los programas, con la finalidad de que aquél tome la acción que corresponda cuando exista incumplimiento o atraso en la atención de lo dispuesto en cada programa anual.

Artículo 29. - Para el señalamiento de la prelación de los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, que se mencio—

nan en el capítulo V de la presente ley, se instituye con carácter permanente y ad-honorem, un Comité Técnico de Evaluación de Proyectos de Inversión, asesor del Presidente de la República, integrado por : los Ministros de Economía y Hacienda, de Industrias, de Agricultura y Ganadería, de Obras Públicas, el Director de Planificación, el Gerente del Banco Central, un Gerente de los Bancos Comerciales del Estado, un Gerente de las otras Instituciones Autónomas, un representante de las Municipalidades del país, un representante de las Cámaras Patronales y uno de las confederaciones Obreras.

La Asamblea Legislativa podrá nombrar tres delegados suyos ante este Comité, en calidad de observadores.

A juicio del Presidente de la República podrán asistir, con voz pero sin voto, los Ministros ó Gerentes de Instituciones Autónomas que no sean miembros permanentes de este Comité, cuando se discuta algún proyecto específico que pueda interesarles. El Ministro que por excepción no pueda concurrir a una o varias sesiones del Comité, deberá acreditar un delegado que lo represente.

Los delegados que no sean ex-oficio, durarán en su cargo un año, pudiendo ser reelectos.

En el reglamento de la presente ley se dispondrá el mecanismo de selección y suplencias de los miembros que no son ex-oficio.

Artículo 30. - Con base en los informes presentados a la consideración de este Comité Técnico, por el Departamento de Evalua--

ción de Proyectos, éste deberá pronunciarse dentro de un plazo no mayor de un mes, a partir de la fecha de recibo del informe, sobre la prioridad de cada proyecto de inversión.

Artículo 31. - El Comité Técnico de Evaluación de Proyectos de Inversión, someterá las recomendaciones sobre prelación de tales proyectos al Presidente de la República, quien deberá consultar al Consejo de Gobierno antes de presentar a las instituciones relacionadas con el desarrollo de los mismos, la opinión del Poder Ejecutivo.

Artículo 32. - Para conocer el criterio del sector privado de la economía nacional respecto a los planes en estudio de la Oficina de Planificación, funcionará una Comisión consultiva de Planes de integración variable y nombramiento a término, excepto en lo que se refiere al Director de Planificación y a los Jefes de los Departamentos de Planes de Largo y Mediano Plazo y de Planes Anuales, quienes serán miembros permanentes de dicha comisión Consultiva; además de los tres miembros permanentes ya mencionados, se designarán por decreto ejecutivo, seis representantes de los organismos privados que tengan relación con el plan que se someta a su conocimiento.

Artículo 33. - Los seis miembros de la Comisión Consultiva de Planes a que se refiere el final del artículo anterior, ejercerán su función ad-honorem y serán escogidos de las ternas que presenten a la Oficina de Planificación, a requerimiento escrito de ésta, los organismos particulares a que se alude en dicho artículo, entre los que necesariamente deberán incluirse por lo menos una organización obrera.

Artículo 34. - La Oficina de Planificación podrá incorporar en sus planes las sugerencias que se le hagan en el seno de la Comisión Consultiva, durante la discusión de los mismos.

Artículo 35. - Una vez concluido el examen detallado de cada plan los miembros temporales de la Comisión Consultiva cesarán en sus cargos.

CAPITULO IX - De los términos para el proceso de Planificación

Artículo 36. - Para efectos de elaboración de los planes, establécense las siguientes fechas límites referentes a cada etapa del proceso de planificación: el 1º de abril, para que el Jefe del Departamento de Coordinación gire instrucciones a las Unidades Sectoriales, acerca del modo de confeccionar cada plan sectorial; el 1º de junio, para que las Unidades Sectoriales remitan a la Oficina de Planificación, los anteproyectos de planes sectoriales; el 1º de agosto, para que el Director de Planificación entregue al Presidente de la República un plan anual para el próximo año, presentado según se estipuló en el Capítulo III de esta Ley, después de oír el criterio de la Comisión Consultiva de Planes; el 1º de septiembre para que el Ministro de Economía y Hacienda, presente el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa.

Artículo 37. - Refórmase el artículo 14 de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, nº 2426 de 3 de septiembre de 1959, para que en lo sucesivo se lea así:

"Artículo 14. - Con el objeto de asesorar al Ministerio de Industrias en la aplicación de esta ley y en los demás aspectos relacionados con el desarrollo industrial, se crea una Comi-

sión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial la cual estará integrada en la siguiente forma: el Director de Industrias, el Director de Economía, dos representantes del Sistema Bancario Nacional, uno nombrado por el Banco Central, y otro por los Bancos Comerciales, un representante del Consejo Nacional de Producción, dos delegados de la Cámara de Industrias de Costa Rica, un delegado de la Cámara de Agricultura y un delegado de la Oficina de Planificación.

Los miembros de esta Comisión devengarán dietas por sesión pero no podrán recibir más de cuatro por mes. Esos estipendios serán pagados por el Poder Ejecutivo con los fondos a que hace referencia al artículo 38 de esta ley.

Los nombramientos se harán por períodos de dos años prorrogables indefinidamente. Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a la industria, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo oirán previamente el parecer de esta Comisión.

Sus facultades y atribuciones, además de las que fije el Reglamento serán:

- a) Coordinar las actividades de las diversas instituciones - que propician el desarrollo industrial del país;
- b) Sugerir toda medida que directa o indirectamente favorezca el progreso de la industria o que contribuya a su planeamiento integral;
- c) Analizar y dictaminar acerca de las solicitudes que para obtener los beneficios de la presente ley se planteen ante el Ministerio de Industrias;

- d) Asesorar al Ministerio de Industrias en la preparación de los reglamentos que la presente ley demande y en la vigilancia del estricto cumplimiento de la misma;
- e) Sugerir toda medida que sea pertinente, a efecto de fijar y controlar los precios de venta de los productos nacionales; y
- f) Coordinar las actividades industriales con las de las diversas instituciones que propician el desarrollo agrícola del país".

Artículo 38. - Esta ley es de orden público y deroga o modifica las normas anteriores que a ella se opongan en lo concerniente y rige desde su publicación.

Artículos Transitorios

Transitorio I - Podrán ser trasladados a la Oficina de Planificación los servidores calificados de otras dependencias, sin demérito de las funciones encomendadas a éstas y conservando dichos servidores todos los derechos adquiridos conforme a las disposiciones laborales vigentes.

Transitorio II - Los funcionarios o empleados que prestaren sus servicios a la Oficina de Planificación, estarán regidos por el Estatuto del Servicio Civil, excepto el personal técnico extranjero que se requiera para su organización y salvo lo dispuesto en el caso del Director.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

Artículo 1º. - A fin de que los Ministros de Gobierno dediquen to do su tiempo a las funciones propias de su Cartera, no se les nom bará representantes del Poder Ejecutivo en las directivas de las instituciones autónomas, salvo lo que luego se indicará para el - Banco Central de Costa Rica.

Artículo 2º. - Derógase el artículo 26, y se reforman los artículos 22, 25 y 36 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, nº 1552 de 23 de abril de 1953, reformada por ley nº 4646 de 20 de Octubre de 1970, que se leerán así:

"Artículo 22. - La Junta Directiva del Banco Central de Cos- ta Rica, estará integrada de la siguiente manera:

- 1) El Ministro de Hacienda;
- 2) El Ministro de Economía, Industria y Comercio;
- 3) El Director de la Oficina de Planificación;
- 4) Dos representantes de los bancos comerciales del Estado, escogidos por el Consejo de Gobierno entre los nombres - que esos mismos bancos sometan a su consideración. Para esos efectos cada banco comercial designará tres persona de las cuales una deberá ser el gerente; y
- 5) Dos personas de amplios conocimientos o de reconocida ex periencia en el campo de actividades de la Institución, nom brados por el Consejo de Gobierno; de los dos últimos di-

rectores se escogerá, dentro del seno de la Junta Directiva, por simple mayoría, un Presidente Ejecutivo, cuya gestión se regirá por las siguientes normas:

- a) Será el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la Institución y le corresponderá fundamentalmente velar porque las decisiones tomadas por la Junta se ejecuten, así como coordinar la acción de anco - con la de los demás entes del Estado. Asimismo, las funciones que por ley están reservadas al Presidente de la Junta Directiva, así como las otras que le asigne la propia Junta;
- b) Será un funcionario de tiempo completo y de dedicación exclusiva; consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, ni ejercer profesiones liberales;
- c) Podrá ser removido de su cargo de Presidente Ejecutivo por simple mayoría de los miembros de la Junta Directiva y en caso de remoción tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en su cargo, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo. La remoción adecuada por la Junta Directiva implica también la de Director de la Institución, en cuyo caso el Consejo de Gobierno procederá a llenar la vacante de conformidad con el inciso 5)".

"Artículo 25). - El cargo de miembro de la Junta Directiva es incompatible con:

- 1) Los miembros y empleados de los Supremos Poderes, con excepción del Ministro de Hacienda, el Director de la Oficina de Planificación, los funcionarios que los sustituyan en sus ausencias temporales y los que desempeñaren cargos temporales no remunerados;
- 2) Los Gerentes, personeros y empleados del propio Banco;
- 3) Quienes durante los tres años anteriores hayan sido miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de Sociedades financieras privadas o la fecha de su nombramiento tengan a sus padres, cónyuges o hijos con esa calidad;
- 4) Los accionistas o funcionarios de esas Sociedades.

Cuando con posterioridad a sus nombramientos se comprobare la existencia previa de una de estas incapacidades, caducará la designación de miembro de la Junta".

"Artículo 36. - La Junta Directiva elegirá de su seno, por mayoría de votos, un Vicepresidente, que durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelecto".

Artículo 39. - Refórmase el artículo 4º de la Ley nº 4646 de 20 de Octubre de 1970, para que se lea así:

"Artículo 4º. - Las Juntas Directivas del Consejo Nacional - de Producción, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto de Tierras y Colonización, Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de Administración Portuaria y de De-

sarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Instituto Nacional de Seguros, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal e Instituto Mixto de Ayuda Social, estarán integradas de la siguiente manera:

1) Presidente Ejecutivo de reconocida experiencia y conocimientos en el campo de las actividades de la correspondiente institución, designado por el Consejo de Gobierno cuya gestión se regirá por las siguientes normas:

- a) Será el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución y le corresponderá fundamentalmente velar porque las decisiones tomadas por la Junta se ejecuten, así como coordinar la acción de la entidad cuya Junta preside con la de las demás instituciones del Estado, asimismo, asumirá las demás funciones que la ley le reserva al Presidente de la Junta Directiva, así como las otras que le asigne la propia Junta;
- b) Será un funcionario de tiempo completo y de dedicación exclusiva; consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público ni ejercer profesiones liberales;
- c) Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno, en cuyo caso tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en el cargo. Para la determinación de esa indemnización, se seguirán las reglas que fijan los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo con las limitaciones en cuanto al --

monto que ese articulado determina.

2) Seis personas de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de actividades de la correspondiente institución, o con título profesional reconocido por el Estado, de — nombramiento del Consejo de Gobierno.

En las Juntas Directivas de Instituciones cuya ley orgánica no establece la representación del Poder Ejecutivo, los siete miembros de la Junta serán nombrados por el Consejo de Gobierno con iguales requisitos a los señalados en el inciso anterior".

Artículo 4º. - Refórmase el artículo 7º de la Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, nº 4716 de 9 de febrero de 1971, para que se lea así:

"Artículo 7. - La Junta Directiva estará constituida por siete miembros en la siguiente forma:

a) Por un Presidente Ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno cuya gestión se regirá por las siguientes normas:

1) Será el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la Institución y le corresponderá fundamentalmente velar por que las decisiones tomadas por la Junta se ejecuten, así como coordinar la acción de la entidad cuya Junta presiden, con la de las demás instituciones del Estado. Así mismo, asumirá las demás funciones que por ley le están reservadas al Presidente de la Junta Directiva, así como las otras que le asigne la propia Junta.

2) Será un funcionario de tiempo completo y de dedicación

exclusiva; consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, no ejercer profesiones liberales;

- 3) Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno, en cuyo caso tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en el cargo de acuerdo con las disposiciones de los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo; y

- b) Por seis personas de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de actividades de la correspondiente institución, o con título profesional reconocido por el Estado, de nombramiento del Consejo de Gobierno"

Artículo 5º. - Refórmase el artículo 18 de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, nº 4760 de 4 de mayo de 1971, para que se lea así:

"Artículo 18. - La Dirección del IMAS estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por:

- a) Un Presidente Ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno, cuya gestión se regirá por las siguientes normas:
 - 1) Será el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno, de la Institución y le corresponderá fundamentalmente velar porque las decisiones tomadas por la Junta se ejecuten, así como coordinar la acción de la entidad cuya Junta preside con la de las demás instituciones del Estado. Asimismo, asumirá las demás funciones que por ley le están reservadas al Presidente de la

Junta Directiva, así como las otras que le asigne la propia Junta;

- 2) Será un funcionario de tiempo completo y de dedicación exclusiva; consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, ni ejercer profesiones liberales;
- 3) Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno, en cuyo caso tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponde por el tiempo servido en el cargo, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo; y

b) Seis personas de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de actividades de la correspondiente Institución, o con título profesional reconocido por el Estado, de nombramiento del Consejo de Gobierno".

Artículo 6º. - Los Gerentes de la Institución continuarán siendo — los principales funcionarios administrativos.

En las instituciones indicadas, las ausencias temporales del Presidente Ejecutivo serán suplidas por un Vicepresidente, que — tendrá las mismas facultades; de designación de la Junta Directiva de la respectiva institución.

Artículo 7º. - Derógase el artículo 1º y se reforman los artículos 2º y 3º de la ley nº 3065 de 20 de noviembre de 1962, para que se lean así:

"Artículo 1º. - Derogado.

"Artículo 2º. - Los miembros de las Juntas Directivas de las -

Instituciones autónomas serán remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión a la cual asistan.

Las dietas, en cuanto a su monto, serán determinadas en el presupuesto de cada institución autónoma, pero no podrán exceder de cuatrocientos colones (400) por sesión".

"Artículo 3º. - Las Juntas Directivas de las Instituciones autónomas no podrán celebrar más de ocho sesiones remuneradas por mes, incluyendo ordinarias y extraordinarias, éstas -- cuando sean absolutamente necesarias.

Los Presidentes Ejecutivos, de las instituciones autónomas tendrán derecho a devengar dietas como miembros de la Junta Directiva, sino que devengarán únicamente un salario fijo, determinado por la Junta Directiva".

Artículo 8º. - ~~Reformase~~ el artículo 9º de la Ley de Creación del Instituto Nacional de Aprendizaje nº 3506 de 21 de mayo de 1965, para que se lea así:

"Artículo 9º. - El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez por semana; y en forma extraordinaria cada vez que sea necesario. Las sesiones serán convocadas por el Presidente o por el Director Ejecutivo, de oficio o a solicitud de cuatro miembros, por escrito y con doce horas de anticipación, -- por lo menos. En las sesiones extraordinarias sólo se conocerá de los asuntos contenidos en la convocatoria oficial. Por cada sesión completa, los miembros asistentes devengarán una dieta que no podrá ser superior a los cuatrocientos colones y sólo podrán celebrar ocho sesiones remuneradas cada mes, incluyendo ordina

rias y extraordinarias. El quórum se formará con cuatro miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos, excepto en la designación del auditor".

Artículo 9º. - La presente ley es de orden público, rige a partir del 1º de junio de 1974, y deroga cualquier otra disposición que se le oponga; no obstante el Consejo de Gobierno deberá efectuar los nombramientos que son de su competencia en la segunda quincena del mes de mayo.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Asamblea Legislativa. - San José, a los ocho días del mes de --
abril de mil novecientos setenta y cuatro.

LUIS ALBERTO MONGE ALVAREZ
Presidente

ROMILIO DURAN PICADO
Primer Prosecretario

OSCAR CAMPOS OROZCO
Segundo Prosecretario

Casa Presidencial. San José, a los diecinueve días del mes de
Abril de mil novecientos setenta y cuatro.

Ejecútese y Publíquese

JOSE FIGUERES

FERNANDO BATALLA ESQUIVEL
Ministro

"La Gaceta" nº 87 de 10 de mayo.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

y

EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

En uso de las facultades que les confiere el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política,

DECRETAN

El siguiente

REGLAMENTO A LA LEY DE PRESIDENTES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Y DEMAS INSTITUCIONES AUTONOMAS Y SEMIAUTONOMAS NO BANCARIAS.

Artículo 1º. - Ambito de aplicación. El presente Reglamento regula las funciones y atribuciones de los Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas del Banco Central de Costa Rica y demás instituciones autónomas y semiautónomas no bancarias, cargos creados por la ley nº 5507 de 19 de abril de 1974.

Artículo 2º. - Nombramiento. Salvo la excepción que establece el inciso 5) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, los Presidentes Ejecutivos son de nombramiento y remoción del Consejo de Gobierno. En caso de remoción con justa causa, no tendrán derecho a indemnización alguna.

Artículo 3º. - Ministros de Gobierno no podrán ser nombrados en Instituciones Autónomas salvo las excepciones de ley. Para los efectos de la citada ley nº 5507 y de este Reglamento, los Ministros de Gobierno dedicarán todo su tiempo a las funciones propias

de su carteras. No podrán ser nombrados como representantes - del Poder Ejecutivo en las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas y Semiautónomas mencionadas en el artículo 3º de la ley que se reglamenta, salvo en la Junta Directiva del Banco Central.

Artículo 4º. - Incompatibilidades. Quien desempeñe el cargo de - Presidente Ejecutivo en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este Reglamento, no podrá ejercer ningún otro cargo ni actividad profesional alguna. Se exceptúan la prestación de servicios como profesor horario en alguna institución de Enseñanza Superior, hasta un máximo de cuatro horas semanales y la atención de asuntos personales o de su cónyuge, padres o hijos.

Artículo 5º. - El Presidente Ejecutivo y la Representación del Poder Ejecutivo. El Presidente Ejecutivo será en enlace directo entre el Poder Ejecutivo y la institución que representa y será - él quien lleve a conocimiento de la Junta Directiva, para su aprobación, las iniciativas de aquel Poder relacionadas con la definición, formulación y adopción de la política de Gobierno de la entidad.

Artículo 6º. - Funciones y atribuciones. El Presidente Ejecutivo es el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la respectiva institución.

En este carácter tiene a su cargo las siguientes funciones:

- a) Presidir la Junta Directiva; convocar sus sesiones ordinarias y extraordinarias, con no menos de doce horas de anticipación, elaborar la agenda de tales sesiones y velar por la pronta y - eficiente ejecución de las resoluciones y acuerdos de dicha Junta Directiva.

- b) Programar las actividades que se requieran para realizar las políticas y alcanzar los objetivos de la institución, dentro de los lineamientos de la política general del Estado dictada por el Poder Ejecutivo y el Plan Nacional de Desarrollo.
- c) Llevar a cabo una labor sistemática de modernización de la en tidad y racionalización del uso de sus recursos, en coordinación con la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica de la Presidencia de la República.
- d) Coordinar la Presidencia de la República y de acuerdo con los lineamientos que esta última establezca, las negociaciones ten dientes a obtener asistencia técnica y financiamiento, a efecto de cubrir las necesidades que demande la institución.
- e) Coordinar con las demás Instituciones Autónomas y Semiautómas y con el Gobierno Central las políticas, objetivos, planes y programas de la entidad que preside.
- f) Dirigir y supervisar la unidad de planificación de la respectiva institución y representar a ésta en los órganos asesores y coor dinadores que establece el artículo 27 y concordantes de la Ley de Planificación Nacional n° 3087 de 31 de enero de 1963.
- g) Formar parte del Consejo de Coordinación Interinstitucional a que se refiere la mencionada ley de Planificación Nacional.
- h) Supervisar y evaluar periódicamente los programas de la enti dad y, conforme a sus resultados, recomendar a la Junta Directi va lo que estime pertinente para el fortalecimiento, reajuste o terminación de los mismos.
- i) Otorgar el visto bueno a los proyectos de presupuesto anual y extraordinarios que se eleven a la Junta Directiva para su

conocimiento y aprobación, así como vigilar su correcta ejecución, todo con el fin de asegurar la congruencia de dichos proyectos con la política de la institución.

- j) Presentar oportunamente a la Oficina de Planificación y Política Económica, previa aprobación de la Junta Directiva los proyectos de presupuesto y programas de inversión, así como las solicitudes de financiamiento externo, de conformidad con los establecido por la Ley de Planificación Nacional.
- k) Establecer, en ejercicio de sus funciones superiores de gobierno, la organización técnica y administrativa de la institución, a fin de garantizar la eficiente ejecución de sus políticas. Para tales efectos, el Presidente Ejecutivo solicitará la asistencia del Gerente o Director Ejecutivo de la institución.
- l) Reunirse las veces que sean necesarias con el Presidente de la República o el Consejo de Gobierno, cuando fuere convocado - al efecto.
- II) Las demás que le correspondan como funcionario de mayor jerarquía de la institución en materia de Gobierno, así como las que le encomiende la Junta Directiva en uso de sus atribuciones y las que le sean impuestas por mandato de las leyes y reglamentos pertinentes.

Artículo 7º. - Informes del Presidente Ejecutivo. Cada tres meses el Presidente Ejecutivo deberá rendir informes escritos al Consejo de Gobierno, sobre la marcha general de la institución.

Artículo 8º. - Relaciones del Presidente Ejecutivo y el Gerente ó Director Ejecutivo. El Presidente Ejecutivo formulará un proyecto

de reglamento en el que se definan las funciones y atribuciones - del Gerente o Director Ejecutivo de la Institución. Para ello solicitará la asistencia de este último. El proyecto deberá contener las normas necesarias para que las funciones de gobierno y administración se realicen con eficiencia y armonía. Una vez elaborado, dicho proyecto se someterá a la consideración de la Presidencia de la República, a efecto de que ésta le haga las observaciones del caso. Con tales observaciones, el proyecto será conocido, aprobado y puesto en vigencia por la Junta Directiva, a más tardar dos meses después de publicado este Reglamento.

Artículo 9º - El Presidente Ejecutivo y el Auditor. Las auditorías internas son órganos auxiliares de la Junta Directiva para el control contable y financiero de las operaciones de las instituciones autónomas y semiautónomas. El Presidente Ejecutivo tendrá a su cargo la supervisión directa de dicha dependencia.

Artículo 10. - De la Representación Judicial y Extrajudicial. La Junta Directiva de cada una de las entidades autónomas deberá otorgar al Presidente Ejecutivo, a más tardar un mes después de publicado este Reglamento, la representación judicial y extrajudicial de su respectiva Institución con las facultades que a los apoderados Generalísimos señala el artículo 1253 del Código civil, - sin límite de suma. El Presidente Ejecutivo ejercerá esta representación en el ámbito de Gobierno de su representada.

Artículo 11. - Ausencias temporales del Presidente Ejecutivo y Vicepresidentes. En cada una de las entidades autónomas indicadas en la ley, habrá un Vicepresidente nombrado por la Junta Directiva, cuya elección será por un año, pudiendo ser reelecto -

y quien sustituirá al Presidente Ejecutivo durante sus ausencias temporales.

Cuando las ausencias del Presidente Ejecutivo deban prolongarse por más de un mes, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno a efecto de que éste decida si designa a un Presidente Ejecutivo interino, hasta por el tiempo que dure la ausencia del titular.

Artículo 12. - Conservación de Derechos y Beneficios. Si el Consejo de Gobierno o la Junta Directiva del Banco Central en su caso, designare como Presidente Ejecutivo a un funcionario de la misma institución, o de otra entidad estatal, éste no perderá por esa razón derechos o beneficios que le correspondan conforme a las leyes laborales, reglamentos de trabajo y disposiciones internas de la institución de donde procede.

Artículo 13. - Rige a partir de su publicación.

Dado en la Casa Presidencial, San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cuatro.

Daniel Oduber

El ministro de la Presidencia

Carlos Ml. Castillo M.

"LA GACETA", nº 192, de 10 de octubre.

LEY DE PROTECCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Nº 2425 del 3 de Septiembre de 1959

CAPITULO I - Objetivos de la Ley

Artículo 1º. - La presente ley tiene como objetivo fundamental contribuir, mediante el desarrollo de las industrias que se indicarán, a la diversificación y fortalecimiento de las actividades económicas del país, procurando canalizar el ahorro nacional y atraer inversiones procedentes del exterior, para crear nuevas fuentes de ocupación mejor remuneradas como un medio esencial de obtener el bienestar general del pueblo.

Artículo 2º. - El Estado velará porque se mantenga un libre desarrollo industrial, evitando la concentración de capitales industriales en función monopolística.

Artículo 3º. - La Ley protegerá únicamente las industrias manufactureras y de servicios, siempre que estas últimas cumplan en alto grado con las disposiciones que contempla el artículo 17.

Artículo 4º. - La ejecución y reglamentación de esta Ley corresponderá al Ministerio de Agricultura e Industrias.

CAPITULO II - De la Protección Industrial

Artículo 5º. - El Estado dará adecuada protección arancelaria a -- aquellas industrias cuya actividad sea considerada conveniente para el país con base en el criterio establecido en el artículo 17 de esta misma ley.

Al efecto establecerá un nivel bajo de aforos para las materias primas, los envases y materiales de empaque que sea indispensable importar. Asimismo fijará un aforo más alto para las mercancías iguales o que sustituyan a las de producción nacional, todo con el fin de garantizar el desarrollo y la estabilidad de la industria.

Artículo 6º. - Al efectuarse cualquier compra por parte del Gobierno de la República, las Instituciones Autónomas, las semiautónomas las Municipalidades o cualesquiera otras entidades oficiales, se dará obligatoriamente preferencia a los productos manufacturados por la industria nacional, cuando la calidad sea equiparable y el precio igual o inferior al de los importados. En caso de discrepancia respecto a calidades, se procederá a consultar al Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial, el cual decidirá ese aspecto privativamente. Para efectos de comparación de precios se agregarán al precio de la mercancía de fabricación extranjera, los derechos de aduana y todo otro gasto de internación, aun cuando la entidad compradora esté exenta de pagarlos. Para convertir a colones tanto los derechos de aduana como el precio C. I. F. de los productos extranjeros, se tomará el tipo de cambio libre.

Artículo 7º. - El Sistema Bancario Nacional fomentará por medio de una adecuada política crediticia y dentro de las disposiciones legales pertinentes, los programas de desarrollo industrial.

Con el mismo propósito, el Banco Central no autorizará divisas oficiales para la importación de aquellos productos fabricados y materias primas para los cuales existan sustitutos domésticos -- adecuados a juicio del Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial.

Así mismo, procurará conceder los tipos preferenciales de cambio en divisas para la importación de materias primas, mate
riales semielaborados, equipos y accesorios que la industria re
quiera y que no se produzcan en el país.

Las solicitudes formuladas por los industriales para que -
se cumpla lo estipulado en el párrafo anterior, deberán ser re-
sueltos por el Banco dentro de los diez días hábiles siguientes
contados a partir de la presentación de la solicitud. Las resolu
ciones deberán fundamentarse en un estudio debidamente razona
da.

Artículo 8º. - El Gobierno de la República brindará por medio -
del organismo correspondiente, la asistencia técnica necesaria
para el desarrollo industrial del país. Para este fin contará con
la colaboración de las instituciones nacionales y procurará obte
ner la ayuda de los organismos internacionales especializados -
en la materia.

Artículo 9º. - El Gobierno de la República promoverá el esta-
blecimiento de escuelas de capacitación industrial, técnicas y de
artes y oficios. Con es e propósito, dará apoyo económico a los
colegios vocacionales establecidos ya o que se establezcan en el
futuro.

Las empresas industriales que soliciten los beneficios de es
ta ley, están obligadas a procurar el adiestramiento de su perso-
nal endichas instituciones y a dar preferencia en sus empresas a
los estudiantes, egresados y autorizados por dichos establecimientos
educativos.

Artículo 10. - El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Hacienda tomará todas las medidas que seas necesarias para contrarrestar prácticas de comercio que causen o amenacen causar perjuicios a la producción industrial del país, especialmente cuando se trate de la importación de mercancías a un precio inferior a su valor normal, ya sea por el uso de subsidios o de cualesquiera otras ventajas otorgadas en el país de origen a dicha mercancía.

Artículo 11. - Para efectos del artículo anterior, se considerará que una mercancía extranjera ha sido importada a un precio inferior a su valor normal, cuando el precio de dicha mercancía fuere menor:

- a) Que el precio comparable, en condiciones normales de comercio, de una mercadería similar destinada al consumo del mercado interno del país exportador.
- b) Que el precio comparable más alto, en condiciones normales de comercio, de una mercancía similar, destinada a la exportación a un tercer país; o
- c) Que el costo de producción de esa mercancía en el país de origen más un aumento razonable por gastos de venta y utilidad.

En caso de que se dificulte la obtención de los datos a que se refieren los incisos anteriores, se tomará como precio normal el promedio de las cotizaciones de precios para ese artículo, de otros países exportadores. En el caso de que se presente una denuncia ante el Ministerio de Economía y Hacienda, éste, previo informe de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, procederá a realizar en forma inmediata los estudios e inves

tigaciones que sean necesarios para determinar la veracidad de la misma. Si la comprueba, el Ministerio, según la gravedad del caso, aplicará recargos arancelarios o prohibirá, concretamente, la importación de la partida o partidas objeto de la denuncia.

La prohibición para importar la aplicará el Ministerio por el término máximo de un año, previo dictamen favorable de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial. Si se requiere prorrogar dicha medida por un plazo superior, deberá obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Artículo 12.- Se establece el impuesto igual al triple del aforo arancelario que grave la importación de la mercaderías extranjeras similares a las de producción nacional, o que vayan a producirse en el país dentro de un plazo razonable bajo las previsiones o el estímulo de esta ley. Este triple aforo arancelario nunca será inferior al 75 por ciento del valor CIF del producto importado. Dicho impuesto se aplicará, únicamente, cuando el Ministerio de Economía y Hacienda, mediante un estudio y dictamen favorable de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial y de la Comisión Arancelaria, lleguen a determinar que es indispensable la protección de dicho impuesto para lograr el establecimiento, la estabilidad o el progreso de la industria nacional.

El estudio en el cual se fundamentará la aplicación del impuesto, deberá comprender, necesariamente: un análisis del mercado, los costos de producción local, la relación de tanto por ciento entre los aforos existentes y el precio CIF de la mercadería extranjera, un análisis acerca de la conveniencia económico-social del

establecimiento, un análisis sobre el mantenimiento o desarrollo de la industria, y finalmente, la argumentación relativa al significado de la aplicación del impuesto en el desarrollo de la industria.

Determinada la desaparición de los factores que la motivaron por los organismos antes dichos, se suspenderá la aplicación del impuesto.

(Reformado por Ley Nº 3038 del 25 septiembre de 1962)

Artículo 13. - El Gobierno de la República velará porque los productos de la industria nacional reúnan los requisitos exigidos en los reglamentos sanitarios y en las normas oficiales que se hayan dictado al efecto.

Si hubiere discrepancia en cuanto a la buena calidad de un producto, el punto será resuelto en única instancia por el Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial de acuerdo con los reglamentos sanitarios y normas oficiales a que se refiere el párrafo anterior, o con base en los estudios que realice, si en cuanto a la mercancía de que se trate, no hubiere disposiciones aplicables. Lo estipulado en este artículo se exigirá también para todo producto o mercancía similar o sucedánea de las nacionales, que se importe para su expendio en el país.

CAPITULO III - Del Desarrollo Industrial

Artículo 14. - Con el objeto de asesorar al Ministerio de Agricultura e Industrias en la aplicación de esta ley y en los demás aspectos relacionados con el desarrollo industrial, se crea una Comisión

Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, la cual estará integrada en la siguiente forma: El Director de Industrias el Director de Economía, dos representantes del Sistema Bancario Nacional, uno nombrado por el Banco Central y otro por los Bancos comerciales, un representante del Consejo Nacional de Producción, dos delegados de la Cámara de Industrias de Costa Rica, un delegado de la Cámara de Agricultura y un Delegado de la Oficina de Planificación.

Los Miembros de esta Comisión devengarán dietas por sesión pero no podrán recibir más de cuatro por mes. Esos estipendios serán pagados por el Poder Ejecutivo con los fondos a que hace referencia el artículo 38 de esta ley.

Los nombramientos se harán por períodos de dos años prorrogables indefinidamente. Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a la industria, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo oirán previamente al parecer de esta Comisión.

Sus facultades y atribuciones, además de las que fije el Reglamento, serán:

- a) Coordinar las actividades de las diversas instituciones que propician el desarrollo industrial del país;
- b) Sugerir toda medida que directa o indirectamente favorezca el progreso de la industria o que contribuya a su planteamiento integral;
- c) Analizar y dictaminar acerca de las solicitudes que para obtener los beneficios de la presente ley se planteen ante el Ministerio de Agricultura e Industrias;

- d) Asesorar al Ministerio de Agricultura e Industrias en la preparación de los reglamentos que la presente ley demande y en la vigilancia del estricto cumplimiento de la misma;
- e) Sugerir toda medida que sea pertinente, a efecto de fijar y controlar los precios de venta de los productos nacionales; y
- f) Coordinar las actividades industriales con las de las diversas instituciones que propician el desarrollo agrícola del país.

(Reformado por Ley N^º 3087 del 31 enero de 1963)

Artículo 15. - En ningún caso se concederán exenciones de impuestos sobre la importación de artículos que, a juicio del Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial, sean similares o puedan ser sustituidos por los que produzca la industria nacional en calidad y cantidad suficiente. Igual criterio se aplicará a la importación de materias primas. No obstante, cuando se produzca un faltante de materia prima nacional debidamente comprobado por el Ministerio de Agricultura e Industrias, se podrá conceder la exoneración, pero únicamente en las cantidades necesarias para llenar dicho faltante, previa recomendación del referido Ministerio.

Artículo 16. - Para los efectos de esta Ley, las industrias se clasificarán en nuevas y establecidas.

Se considerarán como industrias nuevas aquellas que se propongan manufacturar o montar artículos no producidos en el país, o que, si se produce, lo sea en cantidades inferiores al 10% del consumo nacional.

Se considerarán como industrias establecidas aquellas que no

estén comprendidas en el párrafo anterior.

Artículo 17. - Los beneficios de esta ley, y el plazo durante el --
cual se otorgarán a una planta industrial, serán determinados to-
mando en cuenta el grado y número en que concurren los siguien-
tes factores:

- a) El aporte al ingreso nacional y la forma en que se distribuirá entre los factores de la producción;
- b) Las materias primas o productos terminados o semiterminados nacionales que utilice, así como aquéllas para cuya futura producción en el país sea un estímulo.
- c) El mercado que pueda asegurar para una actividad agrícola;
- d) Sus efectos sobre la balanza de pagos;
- e) El plan financiero, la cuantía de las inversiones, su distribución y la participación que tenga la empresa el capital costarricense.
- f) Eficiencia del equipo, mercado que abastecerá, repercusiones sobre la ocupación y cualesquiera otros que concurren a determinar la conveniencia económico-social de la industria; y
- g) Localización de la industria. Al efecto se tomarán en cuenta las facilidades que brinde la zona donde se ubicará la empresa, y - de manera especial el que el fluido eléctrico sea suministrado, - sin interrupción, sin intermediarios, por el Instituto Costarricense de Electricidad o las entidades municipales.

La ponderación de estos factores se fijará en el Reglamento que al efecto decretará el Poder Ejecutivo.

Artículo 18. - Todo beneficio que se conceda a la industria en las legislaciones de Centro América y Panamá no contemplado en la presente ley, será inmediatamente comunicado por la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, si ésta lo juzga conveniente, al Ministerio correspondiente, en forma de proyecto de ley, para que éste lo someta al conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Artículo 19. - El Poder Ejecutivo podrá conceder a las plantas industriales que sean clasificadas como industrias nuevas, los siguientes beneficios:

- a) Franquicia aduanera del 99% sobre materiales de construcciones que se necesiten importar, para construir el edificio de la fábrica, sus dependencias y obras necesarias, así como viviendas anexas para sus trabajadores, previa presentación de planos y presupuestos debidamente aprobados por el INVU, cuando de viviendas para los trabajadores se trate. Para obtener dicha franquicia aduanera, el o los interesados, deberán presentar ante la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, planos de las obras a realizar, con detalle de los materiales e implementos que se van a consumir, debidamente aprobados y firmados por un ingeniero civil o arquitecto incorporados.
- b) Franquicia aduanera del 99% sobre la importación de motores, maquinaria, herramientas, equipo y accesorios que se requieran en la fabricación de los productos en la planta industrial beneficiaria por esta ley, así como de los instrumentos de laboratorio necesarios para la investigación, fabricación y control de calidad de esos productos.

- c) Franquicia aduanera del 99% sobre la importación de combustible y lubricantes, excepto de la gasolina, que sean necesarios para producir energía o para utilizarse en cualesquiera otros fines indispensables en la producción de la planta industrial. Esta franquicia cubrirá también las industrias ya establecidas en casos muy calificados y a juicio del Ministerio de Economía y Hacienda. La franquicia aduanera a que se refiere este inciso, se podrá otorgar, para generación eléctrica, solamente en el caso de que dicha energía no pueda ser suministrada adecuadamente, por los servicios establecidos. No se dará franquicia aduanera a la importación de combustible y lubricantes destinados a equipo de transporte;
- d) Franquicia aduanera del 99% sobre la importación de materias primas, productos semielaborados o materiales que entren en la composición o en el proceso de elaboración del producto;
- e) Franquicia aduanera del 99% sobre la importación de empaques y envases que requiera el producto terminado;
- f) Exención de impuestos territoriales durante cinco años. Asimismo, se podrá exonerar de los impuestos municipales que se cobran a las instalaciones industriales, si así lo aprueba previamente, la Municipalidad del lugar donde se localizaren;
- g) Exención de impuestos fiscales del 100% durante la primera mitad y del 50% durante la segunda mitad del plazo que le sea concedido a la planta industrial que pesen sobre el capital invertido y sobre las utilidades obtenidas en la misma para disfrutar de las demás beneficios que concede esta ley. Con respecto a los -

impuestos municipales, que se cobren sobre el capital invertido su concesión estará condicionada a lo dispuesto en el último párrafo del inciso anterior;

- h) Exención del pago de impuestos de exportación sobre los artículos producidos por la planta industrial beneficiaria de esta ley, en los casos que sea necesario, para permitir la competencia del producto en el mercado externo; e
- i) Exención del monto que le corresponda, por concepto del impuesto sobre la Renta, por aquella parte de las utilidades que la empresa reinvierta en mejoras, tanto en la propia industria como en viviendas para sus trabajadores y que compruebe debidamente ante la Tributación Directa.

El uso de materia prima o productos semielaborados nacionales será factor de primordial importancia en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo.

Artículo 20. - El Poder Ejecutivo podrá conceder a las plantas industriales que sean clasificadas como industrias establecidas, solamente las exenciones contenidas en los incisos a), b), d), e), h) e i), del artículo anterior, en un 90%.

Los beneficios contemplados en los incisos a) e i) serán otorgados a las industrias establecidas cuando las ampliaciones o construcciones nuevas sean recomendadas específicamente por la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, urbanísticas o de carácter sanitario laboral, por necesidades de mejoramiento de eficiencia.

Los beneficios concedidos por el inciso d) del artículo 19 en

cuanto a las industrias establecidas, se otorgarán únicamente en caso de que juicio del Ministerio de Economía y Hacienda no se cause con ello perjuicio fiscal.

El beneficio contemplado en el inciso e) será otorgado cuando la competencia obligue a una empresa a importar determinada clase de empaques o envases, a juicio de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial.

Artículo 21. - Las franquicias aduaneras a que se refiere el artículo 19 comprenden los derechos arancelarios y recargos que causen su importación o los que se cobren en razón de ella excepto los que corresponden a tasas, tales como los de muellaje consular, bodegaje y desalmacenaje de mercancías.

Artículo 22. - Para otorgar las exenciones aduaneras a que se refieren los incisos del artículo 19, los beneficiarios presentarán ante el Ministerio de Agricultura e Industrias, la solicitud correspondiente, quien con recomendación razonada, enviará al Ministerio de Economía y Hacienda una lista completa de la clase y cantidad de cada uno de los bienes que el empresario importará al amparo de esta ley, con el objeto de que ese Ministerio compruebe, por los medios que considere adecuados, si se justifica o no, el otorgamiento de esa concesión.

Artículo 23. - Los beneficios contractuales otorgados conforme a esta ley, no podrán traspasarse a terceras personas a menos que los nuevos concesionarios acepten, por escrito, las condiciones del contrato original y reúnan, a juicio del Ministerio de Agricultura e Industrias, buena disposición y capacidad para cum

plir dichas condiciones. El Ministerio de Agricultura e Industrias podrá exigir la renovación o cambio de garantías, si lo considera necesario.

Artículo 24. - Facúltase a las Municipalidades para exonerar el pago de los impuestos, total o parcialmente, y por los mismos plazos que se fijen según los incisos f) y g) del artículo 19, a las industrias nuevas o establecidas que se les conceden las ventajas que otorga esta ley y que se establezcan en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 25. - Para que una empresa industrial goce de los beneficios que establece la presente ley, deberá suscribir un contrato con el Estado a través del Ministerio de Agricultura e Industrias, previa recomendación de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, en el cual se especificarán los requisitos atinentes estipulados, en el artículo 17, consignándose además, los siguientes requisitos:

- a) Especificación de garantías de cumplimiento de sus obligaciones;
- b) Obligación de solicitar oportunamente la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura e Industrias de cualquier modificación a los planes o proyectos iniciales que se propongan llevar a cabo durante el período de goce de los beneficios de esta ley;
- c) Obligación de comunicar al Ministerio de Agricultura e Industria cualquier venta, traspaso o contrato de cesión, arrendamiento

o entrega en administración, permanente o temporal, de la plan
ta industrial o de su explotación;

- d) Obligación de llevar un registro detallado de las mercancías im
portadaas con franquicia aduanera que permita a las autoridades
competentes efectuar el control de su uso y destino; además la -
de facilitar cuantos datos e informes le soliciten sobre el desa-
rrollo, producción y situación financiera de la empresa;
- e) Obligación de presentar, aunque gocen de las exoneraciones —
del pago del Impuesto sobre la Renta, la declaración correspon-
diente;
- f) Obligación de presentar cualesquiera otras informaciones que -
solicite el Ministerio de Agricultura e Industrias o la Comisión
Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial; y
- g) Obligación de implantar en su contabilidad, un sistema que de—
termine el costo de producción de sus artículos.

Artículo 26. - Al estudiar la Comisión Consultiva y de Coordina--
ción para el Fomento Industrial los proyectos de contrato que los
industriales sometan a su consideración de conformidad con el an
terior artículo de esta ley, solicitará al Banco Central la fijación
del plazo, que no podrá ser menor de cinco años y el porcentaje -
de divisas provenientes de la exportación de los productos de esa
industria del cual podrá disponer en el mercado libre de cambio.

El Banco Central deberá pronunciarse al respecto, median--
te un estudio debidamente razonado dentro de un plazo no mayor -
de los treinta días hábiles siguientes a partir de la fecha de reci-
bo de la solicitud.

Los industriales tendrán derecho de pedir revisión del anterior pronunciamiento en cualquier momento que se opere un cambio en las circunstancias que originaron el pronunciamiento del Banco Central.

Artículo 27. - Las nuevas plantas industriales gozarán de las franquicias contempladas en los incisos a), b) y f) del artículo 19 a partir de la fecha en que se publique el respectivo contrato en el Diario Oficial. El período de disfrute de las exenciones indicadas en los incisos g), h) e i), de ese mismo artículo empezará a contarse desde la fecha en que la nueva planta industrial inicie su producción, de acuerdo con los términos del contrato. El período de disfrute de las exenciones señaladas en los incisos c), d) y e) de ese mismo artículo se indicará en el contrato, pero su iniciación no podrá ser anterior a la fecha de publicación del contrato en "La Gaceta" ni posterior a la fecha en que la nueva planta industrial empiece su producción.

En cuanto a las industrias establecidas, este período empezará a contar a partir de la fecha de la publicación del contrato en "La Gaceta". En ningún caso dicho plazo podrá ser superior a diez años.

Artículo 28. - Todo proyecto de contrato antes de ser aprobado definitivamente por el Poder Ejecutivo, deberá enviarse a la Contraloría General de la República, para que ésta compruebe si se han otorgado únicamente los beneficios que esta ley autoriza.

Artículo 29. - Con el objeto de fomentar la instalación y operación de industrias nuevas, especialmente de transformación de produc

tos agrícolas y pecuarios nacionales que usen como materia prima por lo menos un noventa por ciento (90%), el Estado, previa recomendación favorable a la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, podrá dar fianza u otra garantía ante instituciones de crédito nacionales o extranjeras para la financiación de las mismas. Esa garantía queda sujeta a las siguientes condiciones:

- a) Las empresas así garantizadas, deben ser propiedad de costarricenses o en caso de sociedades mercantiles, ser costarricenses sus socios si se tratare de una colectiva; costarricenses — sus socios comanditarios si fuere en comandita y costarricenses de origen o naturalizados, con dos años de residencia en el país después de su naturalización, los accionistas o socios con un — interés no menor del 75% en el capital social, si fueren anónimas o de responsabilidad limitada;
- b) Las fianzas superiores a dos millones de colones ante instituciones de crédito nacionales, deberán ser ratificadas por la Asamblea Legislativa.
- c) Las fianzas de cualquier monto, ante instituciones extranjeras de crédito, deben ser necesariamente consultadas al Banco Central y si son aprobadas por esa institución, deben pasar a la — Asamblea Legislativa para su discusión y ratificación;
- d) La naturaleza y tipo de fianza o garantía será determinada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en cada caso, de acuerdo con el Reglamento que emitirá para el otorgamiento de las mismas; y

e) La fianza o garantía debe ser otorgada, a nombre del Estado, por el Ministerio de Economía y Hacienda, el cual, por medio del Banco Central u otro miembro del Sistema Bancario Nacional, tendrá representación en la dirección de la Empresa con el objeto de vigilar su operación. En cada caso se determinará la forma más conveniente de ejercer esa vigilancia.

CAPITULO IV - Disposiciones Generales

Artículo 30. - Salvo lo expuesto en el Transitorio II, no podrán acogerse a los beneficios de la presente Ley las plantas o actividades industriales que estén regidas por leyes o contratos especiales o que puedan causar efectos antisociales o perjudiciales a la seguridad o economía nacionales. Así mismo, quedan excluidas todas aquellas plantas que pretendan aplicar procedimientos técnicos notoriamente anticuados, que disminuyan su eficiencia, a juicio de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial.

Artículo 31. - Las plantas industriales que se encuentren establecidas en el territorio nacional podrán solicitar en cualquier momento acogerse a la presente ley, pero las que se hayan amparado a ella no podrán gozar por dos veces de sus beneficios en una misma rama industrial.

Artículo 32. - En igualdad de condiciones, se dará preferencia al costarricense que haga solicitud para acogerse a los beneficios de la presente ley.

Artículo 33. - Los beneficios otorgados a una o varias plantas -

industriales, para la iniciación o incremento de determinada rama industrial, se otorgarán en iguales condiciones a todas aquellas - que se dediquen o vayan a dedicarse a producir mercancías iguales o semejantes, siempre que se demuestre que el tamaño del mer- caso permite el funcionamiento económico de varias plantas y siem- pre que los nuevos solicitantes adquieran obligaciones iguales a - las de las plantas establecidas. Por consiguiente, el otorgamien- to de esos beneficios no podrá ser prerrogativas o privilegio que coloque a determinada o determinadas plantas industriales en con- diciones de ventaja o de desventaja, con respecto a las demás pa- ra una misma rama industrial. Si después de calificada y clasi- fica una planta industrial y acordadas las ventajas que le correspon- den como beneficio otorgado a un primer empresario, para la ini- ciación o incremento de determinada rama industrial, se justifica- ren económicamente otra u otras plantas dedicadas al mismo ramo de la producción, se les concederá a estas últimas, las mismas - ventajas otorgadas a aquéllas, imponiéndoles iguales obligaciones por el tiempo que falta para la expiración del contrato de la origi- nalmente establecida.

Artículo 34. - El cumplimiento de lo prescrito por el artículo 46 de la Constitución Política, en aquellos casos en que la explota- ción de una determinada rama industrial, puede colocar de hecho a una planta en situación de monopolio, ya sea por la limitación - del mercado o por otras causas, el Ministerio de Economía y Ha- cienda y la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomen- to Industrial tendrán la facultad de supervisar los costos de pro- ducción y de fijar el precio de venta de sus artículos, lo cual se especificará en los contratos respectivos.

Artículo 35. - Las mercancías que se introduzcan al país con -- franquicia aduanera al amparo de la presente ley, no podrán ser vendidas ni destinadas a otro fin sino únicamente al que dió origen a la franquicia, a menos que se cumpla con las formalidades y requisitos que establece el artículo 19 del Arancel de Aduanas. En caso de que se dé destino indebido a la mercancía importada con franquicia aduanera, se exigirá el pago inmediato de los impuestos y derechos que deberán causar y se impondrá, además, una multa igual al triple de dichos impuestos y podrá cancelársele, inmediatamente, el disfrute de los beneficios de esta ley.

Artículo 36. - Si el empresario o la empresa faltaren al cumplimiento de las obligaciones o usasen mal los beneficios que les corresponden, conforme a los términos de esta ley, salvo lo contemplado en el artículo 35, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura e Industrias, podrá declarar caduco el contrato. En este caso, se exigirá el pago del monto de los derechos aduaneros otorgados sobre las mercancías, materiales o inplementos de construcción importados por la empresa, excepto los que correspondan a materiales gastados en el proceso de fabricación de productos vendidos.

No se podrá dar otro destino a los edificios construidos al amparo de esta ley, sin la previa aprobación del Ministerio de Agricultura e Industrias, oído el parecer de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial.

Artículo 37. - El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de -- Agricultura e Industrias, declarará administrativamente, sin res

ponsabilidad para el Estado, la caducidad del contrato celebrado por medio de la presente ley, cuando previo dictamen de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, se comprueba que la planta industrial beneficiaria ha dejado de reunir, por causas atribuibles a la misma, las condiciones que motivaron su correspondiente clasificación.

Artículo 38. - Tanto el uno por ciento que se cobre por concepto de impuesto de aduana sobre la importación que realicen las plantas industriales nuevas, como el diez por ciento que se les cobre por ese mismo concepto a las establecidas, se usarán para cubrir los gastos que ocasione la aplicación de esta ley.

Artículo 39. - Establécese un impuesto del 1% sobre las utilidades netas a las industrias que gocen de los beneficios de la presente ley, para destinarlo a la promoción de ventas de los artículos producidos por la industria nacional.

La Oficina de Presupuesto, de acuerdo con los cálculos probables, incluirá las partidas correspondientes en el Presupuesto General de la República. Tales sumas serán giradas a la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial a más tardar seis meses después de la aprobación del presupuesto respectivo.

La Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial planeará el destino que se le dará a estos fondos, previa reglamentación al respecto, en exposiciones de productos tanto nacionales como extranjeros, propaganda para la radio y prensa y divulgación de esta ley en el exterior.

Artículo 40. - El Ministerio de Agricultura e Industrias destinará del Presupuesto de servicio de extensión cultural o propaganda, - por lo menos un 33% para la divulgación industrial costarricense.

Artículo 41. - Los productos provenientes de la industria manufacturera no pagarán ningún impuesto de exportación, salvo aquellos que en la actualidad cubren alguna tarifa especial, en virtud de la Ley nº 1738 de 31 de marzo de 1954.

Artículo 42. - Todos los informes o datos que suministren la planta o plantas industriales de acuerdo con el artículo 25, tendrán carácter de confidenciales y sólo podrán ser usados para el fin para el cual fueron solicitados o para propósitos de investigación estadística, al tenor de lo que disponen los artículos 3º y 4º de la Ley nº 1565.

Artículo 43. - Todos aquellos asuntos no previstos en forma expresa en la presente ley serán resueltos por analogía con el espíritu de la misma, por el Ministerio de Agricultura e Industrias, oída la opinión del Ministerio de Economía y Hacienda y previo dictamen de la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial.

Artículo 44. - Todo artículo que se produzca en el territorio nacional deberá ser conocido por nombre claro en castellano y sus leyendas deberán estar escritas en nuestro idioma.

Asimismo, se dirá que el producto es fabricado en Costa Rica

Sin embargo, cuando se trate de productos nacionales para la exportación, la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial, podrá, a petición razonada del industrial intere-

sado, disponer que se omita esa exigencia.

Los artículos manufacturados en el país deberán ostentar en ellos mismos o al menos en sus empaques o envases, la respectiva marca de fábrica. Esta obligación es de carácter general y se refiere no sólo a las industrias que suscriban contratos con el Estado con base en esta ley, sino a todas las que elaboren productos en el país. De igual modo, en la propaganda que las empresas industriales hagan para promover la venta de sus productos, deberán resaltar la conveniencia de consumir el producto nacional.

Artículo 45. - No se les podrá dar a los empleados extranjeros en las empresas beneficiadas con los privilegios de esta ley, prerrogativas o posiciones que se les niegue a los nacionales de igual preparación, así como cualquier ventaja económica o de otra índole que sea otorgada a empleados extranjeros en su contrato de trabajo, quedará automáticamente otorgada a los empleados nacionales que desempeñen o que estén en capacidad de desempeñar las mismas posiciones que aquéllos.

Artículo 46. - El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Economía y Hacienda, podrá prohibir o controlar, cuantitativamente, la exportación de materias primas que sean indispensables para la industria nacional.

Artículo 47. - Las plantas o actividades nacionales establecidas o que se establezcan en el futuro, deberán vender sus productos a precios razonables, que sean de beneficio para el consumidor. Para este fin el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Economía y Hacienda, deberá fijar porcentajes máximos de utilidad y

precios máximos de venta, a los productos industriales que sean objeto de agiotaje y en caso de urgencia, especialmente tratándose de los artículos industriales de primera necesidad.

Cuando sea procedente, el Poder Ejecutivo deberá enviar de inmediato, un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa tendiente a disminuir o eliminar la protección que para esos productos establezca el Arancel de Aduanas, en razón de que se haya establecido un precio de agiotaje por los industriales de una misma actividad. Para todos estos efectos será también aplicable, en lo conducente, la Ley nº 1208 de 5 de octubre de 1950 y sus reformas.

Artículo 48. - Modifícase el artículo 18 del Arancel de Aduanas, Ley nº 1738, de 31 de marzo de 1954, el cual se leerá así:

"Artículo 18. - El fabricante o exportador que vendiere artículos de producción nacional en el mercado extranjero o a empresas que gocen del privilegio de franquicias aduaneras en el país, tendrá derecho a que se le acrediten a su favor las sumas que hubiere pagado por la importación de materias primas, envases y material de empaques extranjeros, excepto si se trata de envases de fibras textiles, empleados en el producto vendido, hecha la deducción de los derechos de muelle y de cualquier otra tasa, siempre que los derechos para devolver no sean inferiores a cien colones.

El Poder Ejecutivo aceptará fianzas o garantías satisfactorias a juicio del Ministerio de Economía y Hacienda, equivalentes al — ciento veinte por ciento (120%) de los derechos que habría de pa—

gar sobre la materia prima o los envases que un industrial importe en el objeto de fabricar productos destinados a la exportación, o recibirá depósito de 100% de dichos impuestos. Si a los doce meses de desalmacenada dicha materia prima o envases, hubiera salido del país la totalidad de los artículos producidos con ellos, el Fisco cancelará la fianza, depósito o garantía, pero si durante ese período la exportación total no se hubiere efectuado, sin que mediare fuerza mayor o caso fortuito, el industrial deberá cubrir inmediatamente el monto total de los impuestos correspondientes a la materia prima o envases que no se hubieren exportado en productos terminados, debiendo quedar el veinte por ciento (20%) del exceso como multa por el incumplimiento. Si la exportación no se hubiere efectuado por haberse vendido los productos en plaza, el industrial pagará una multa de cinco veces el monto de los impuestos que debería haber cubierto y se le privará, por acuerdo especial que deberá dictar el Poder Ejecutivo, de la ventaja que le brinda la presente disposición. Si la venta en plaza hubiera sido motivada por fuerza mayor debidamente comprobada, el Ministerio de Economía y Hacienda eximirá de las anteriores sanciones al industrial, quien sólo deberá pagar los derechos de aduana en descubierto.

Artículo 49. - Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley N. 36 de 21 de diciembre de 1940, el artículo 2º de la Ley nº 641 de 25 de agosto de 1946 y el Decreto-Ley nº 502 de 26 de abril de 1949, y todas otras disposiciones legales en lo que se opongan a la presente ley.

Artículo 50. - Esta ley rige a partir del día de su publicación.

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Reglamento de la Ley nº 2426 de 3 de Septiembre de 1959, Decreto nº 3 del 7 de abril de 1960.

Artículo 1º. - En todos los casos en que el presente Reglamento se dice "la Ley", se refiere a la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, nº2426 de 3 de septiembre de 1959; cuando se dice Comisión Industrial" es a la Comisión Consultiva y de Coordinación para el Fomento Industrial creada por el artículo 14 de la mencionada ley y al Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial, creada por Ley nº 1698 de 26 de noviembre de 1953, cuando dice "el Comité de Normas".

Artículo 2º. - Toda gestión ante dependencias del Poder Ejecutivo relacionada con la aplicación de la Ley, debe ser presentada en papel sellado de la décima clase, con dos copias en papel común, debidamente firmadas por el solicitante. Al iniciar las gestiones el interesado deberá presentar: la cédula de identidad -- cuando sea costarricense, la cédula de residencia cuando se trate de un extranjero residente en el país y el pasaporte o documento equivalente en el caso de extranjeros en tránsito.

Artículo 3º. - Todas las solicitudes e informes al expresar medidas deben indicarlas ajustadas al sistema métrico decimal.

Artículo 4º. - Las peticiones y los informes correspondientes a la aplicación de la Ley que sean dirigidas al Ministerio de Agricultura e Industrias o a sus organismos adscritos - Comisión In-

dustrial o Comité de Normas -, deben ser presentadas ante la Dirección de Industrias para su tramitación en conformidad con lo que disponen la Ley y este Reglamento; las que se dirijan al Ministerio de Economía y Hacienda y su organismos adscrito - Comisión Arancelaria, deben ser presentadas ante la Dirección General de Economía.

Artículo 5º. - La Dirección de Industrias dará la asistencia técnica y administrativa que requiera y le solicite la Comisión Industrial. Para tal fin hará las investigaciones y estudios que - sean necesarios y rendirá los informes que se le pidan.

Para mejor cumplimiento de su cometido, la Dirección de Industrias llevará los siguientes Registros:

- a) El Registro de Industrias establecidas que se inscriban en - cumplimiento del Decreto-Ley nº 508 de 3 de mayo de 1949, si siguiendo la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. En las hojas de Inscripción de las empresas, cuando suscriban - contrato con el Estado para disfrutar de los beneficios que autoriza la Ley, para los efectos del artículo 31 de la misma se - anotarán el número, fecha y término de la contratación.
- b) Un registro de los artículos de producción nacional siguiendo el orden de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centro América (NAUCA), con anotación en cada una de las empresas - registradas que los producen.

Artículo 6º. - Los miembros de la Comisión Industrial antes de entrar en funciones deberán juramentarse ante el Ministerio de Agricultura e Industrias y actuarán de conformidad con las disposiciones aquí contempladas y las que establezca su Reglamento Interno.

Artículo 7º. - La Comisión Industrial deberá reunirse por lo menos cuatro veces al mes, y extraordinariamente cuando la convoque su Presidente por propia iniciativa o en cumplimiento de algún acuerdo tomado por la Comisión. Este acuerdo se tomará por simple mayoría y contra él no cabe recurso de revisión. La convocatoria a sesión extraordinaria se hará por lo menos con veinticuatro horas de anticipación indicando los asuntos de que se va a tratar, no pudiéndose conocer de ningún otro distinto a aquellos que han originado la convocatoria.

Artículo 8º. - El quorum de la Comisión Consultiva estará formado por cinco miembros y sus acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos. Solamente podrán tomarse acuerdos firmes por unanimidad de votos de los presentes.

Artículo 9º. - En la primera sesión de cada período anual la Comisión Industrial elegirá un Presidente.

Artículo 10. - Los miembros de la Comisión Industrial devengarán dietas de ₡ 150.00 por cada sesión a que concurran, siendo entendido que las sesiones remuneradas no podrán ser más de cuatro por mes.

(así reformado por Decreto nº 8 del 15 octubre de 1965)

Artículo 11. - La Comisión Industrial llevará los siguientes libros con todos sus folios numerados y sellados por la Oficialía Mayor - del Ministerio de Agricultura e Industrias:

Un libro de actas de las sesiones; y

Un libro de registro por orden numérico, con anotación de hora y fecha de recibo de las solicitudes de los beneficios de la -

Ley que le remita el Ministerio de Agricultura e Industrias para su estudio y pronunciamiento.

Artículo 12. - Treinta días antes de la expiración del período para el cual fueron nombrados los miembros de la Comisión Industrial, el Ministerio de Agricultura e Industrias solicitará a cada una de las entidades que tienen representación en la misma, que comuniquen los nombres de las personas que desempeñarán sus funciones en el período siguiente, a fin de proceder a su nombramiento y juramentación. Las entidades deben comunicar los nombres de las personas dentro de los treinta días antes citados.

Artículo 13. - Toda persona, física o jurídica, que solicite protección arancelaria para determinada industria, deberá presentar su gestión ante la Dirección General de Economía, indicando claramente la industria y la clase de productos sobre los cuales se origina la petición, las razones en que se fundamenta y los informes que sean necesarios, así como las partidas y aforos del Arancel de Aduanas que solicita modificar.

Con base en esa solicitud, se procederá a pedir a la Dirección de Industrias del Ministerio de Agricultura e Industrias, la realización de un estudio contentivo de los diferentes criterios y factores según sea el caso, que establecen los artículos 12 y 17 de la Ley.

Una vez que esté concluido el estudio será sometido a conocimiento de la Comisión Industrial para que esta dictamine si considera la industria en cuestión conveniente para el país y si en efecto necesita la protección arancelaria.

El estudio referido en el párrafo anterior, junto con una copia del dictamen de la Comisión Industrial, será enviado a conocimiento de la Comisión Arancelaria, la cual emitirá su pronunciamiento con base en él y en los estudios e informes que la obligan a considerar su ley constitutiva y otras disposiciones legales.

Tanto el dictamen de la Comisión Industrial como el de la Comisión Arancelaria serán presentados a consideración del Ministerio de Economía y Hacienda por el conducto que se establece en este Reglamento.

El Ministerio de Economía y Hacienda se pronunciará razonablemente acerca de la solicitud planteada. En caso de que fuese favorable, el Poder Ejecutivo por medio del mismo Despacho, emitirá el Decreto Ejecutivo para hacer efectivo el impuesto que triplica el aforo arancelario que pesa sobre determinada mercadería o presentará a consideración de la Asamblea Legislativa el respectivo proyecto de ley tendiente a proteger determinada industria mediante variaciones en el Arancel de Aduanas.

Artículo 14. - Si con base en los estudios y recomendaciones obtenidas, al Poder Ejecutivo decidiese aplicar el artículo 12 de la Ley, el industrial o interesado tendrá la obligación de presentar ante la Dirección General de Economía una nota en que se certifique los precios de venta al por mayor y detalle de su producto en ese momento. Dichos precios sólo podrán ser aumentados cuando se autorice por Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, previa comprobación de los hechos y circunstancias que justifican la medida.

Artículo 15. - La persona o entidad que solicita la suspensión de

la aplicación de los impuestos que señala el artículo 12, deberá suministrar ante los organismos dichos la información necesaria para que comprueben la desaparición de los factores que la originaron.

Artículo 16. - Cuando se solicite protección arancelaria sobre artículos importados o similares o sucedáneos a los de producción nacional, la petición deberá acompañarse con una certificación del Comité de Normas que indique el artículo de producción nacional reúne los requisitos mínimos exigibles de calidad.

Artículo 17. - El Gobierno de la República, las Instituciones Autónomas y las Municipalidades, cuando por su calidad, tanto los productos nacionales como los extranjeros que les sean ofrecidos satisfagan debidamente las exigencias del uso al cual serán destinados, al efectuar sus compras darán preferencia obligatoriamente a los productos manufacturados por la industria nacional, siempre que su precio no sea superior al de los importados.

Para efectos de comparación de precios se agregarán al — precio de la mercancía de fabricación extranjera, los derechos de aduana y todo otro gasto de internación, aun cuando la entidad compradora esté exenta de pagarlos. Para convertir a colonas, tanto los derechos de aduana como el precio CIF de los productos extranjeros, se tomará el tipo de cambio libre.

De ocurrir una situación de duda o controversia sobre los aspectos relativos a la calidad, deberá consultarse al Comité de Normas, el cual, previo estudio del caso, decidirá privativamente, rindiendo dictamen dentro de las dos semanas siguientes al -

recibo de la consulta, de las respectivas muestras de los artículos de que se trata y de toda información o documentación conexa que fuere indispensable para el efecto.

El Comité de Normas para emitir pronunciamiento sobre la calidad de las materias primas y de los productos nacionales o extranjeros para los efectos de lo que disponen los artículos 6º, 7º, 13 y 15 de la Ley, comprobará que se ajusten a las especificaciones que señalan los reglamentos sanitarios y las normas oficiales.

En los casos en que no hubiere disposiciones nacionales aplicables, el Comité de Normas considerará las especificaciones para que tales productos contengan, si los hubiere, los reglamentos de organismos extranjeros de normalización de reconocida autoridad en la materia, teniendo presente el destino que se le dará a los productos sobre los cuales debe emitir opinión. Cuando no hubiere disposiciones aplicables, el pronunciamiento sobre aspectos sanitarios se basará conforme en el informe que al respecto dé el Ministro de Salubridad Pública.

Artículo 18. - El Ministerio de Agricultura e Industrias es el organismo encargado de dar cumplimiento en forma continuada a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley.

El planteamiento y organización de los programas de asistencia técnica se realizarán con participación del Centro de Cooperación Técnicas Industrial, oficina especializada en la materia adscrita a la Dirección de Industrias, quién se encargará de ejecutarlos o dar asistencia a su alcance para su ejecución.

La Dirección de Industrias velará porque los programas y servicios comprendan la mayor cantidad posible de materias que concurren al mejoramiento de la industria en sus diversos aspectos, ya sean aplicables a la industria en general o a determinadas ramas industriales en particular, y procurará hacerlos llegar hasta donde sea posible a todas las industrias establecidas en el país o por medio de conferencias, seminarios, publicaciones, servicios de laboratorio, atención de consultas y los otros que se consideren más adecuados y efectivos para alcanzar los propósitos de la Ley.

Para la realización de los programas el Ministerio de Agricultura e Industrias solicitará en cuanto sea necesario la colaboración de los organismos internacionales o de sus Agencias especializadas en servicios de asistencia técnica a la industria, velando al mismo tiempo por la coordinación entre los diversos programas que se realicen y por evitar la duplicación innecesaria. Así mismo, procurará que en los programas se ocupen de preferencia los servicios de elementos nacionales especializados en cada materia, de ser posible egresados de la Universidad de Costa Rica, y en los casos en que tales programas estén a cargo de expertos extranjeros, que se faciliten los medios para que sean asistidos en su trabajo por personal capacitado costarricense -- con el propósito de que adquiera los conocimientos y la experiencia necesarios para que tales programas se puedan continuar o repetir.

Artículo 19. - Sin perjuicio de que el Ministerio de Economía y Hacienda actúe por iniciativa propia, quien considere que prácti

cas ajenas a los principios que rigen las relaciones normales - de comercio internacional causen o amenacen causar perjuicio a la producción industrial del país, podrá presentar la denuncia correspondiente ante dicho Ministerio, debiendo indicar las razones en que se basa y comprometiéndose a aportar toda la información que sea necesaria para comprobar que la industria nacional está siendo perjudicada. Las denuncias deberán ser presentadas en formularios especiales que para el efecto elaborará el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 20. - Desde la fecha de presentación de una denuncia y hasta tanto no se haya concluido la investigación respectiva, el Ministerio de Economía y Hacienda, podrá impedir el desalmacenaje de la mercadería objeto de la denuncia.

Artículo 21. - Cuando se trate específicamente de una gestión referente a que una mercadería extranjera ha sido importada a un precio inferior a su valor normal, la Dirección General de Economía solicitará a la Comisión Industrial, de acuerdo con el artículo II de la Ley, un informe acerca de la forma en que afecta - tal situación al establecimiento, la estabilidad o el progreso de la industria nacional.

Artículo 22. - Una vez recibido el informe a que se refiere el artículo anterior de este Reglamento, la Dirección General de Economía procederá a realizar los estudios e investigaciones que - sean necesarios para determinar la veracidad de la denuncia presentada. Si comprueba la existencia del "dumping", recomendará al Ministerio de Economía y Hacienda la aplicación de recargos arancelarios o de prohibiciones a la importación. En caso de

que decida aplicar prohibiciones, el Ministerio de Economía y Hacienda deberá contar de previo con el dictamen favorable de la Comisión Industrial.

Artículo 23. - Cuando el Ministerio aplique cualquiera de esas dos medidas a artículos importados a precios de "dumping", ambas se harán efectivas no sólo para futuras importaciones, sino también para la partida o partidas objeto de la denuncia que se encuentren en Aduanas, sin tomar en cuenta la fecha en que hubiesen ingresado al país.

Artículo 24. - Si se considera conveniente prorrogar el plazo máximo fijado por la Ley para la prohibición de importar determinada mercadería, el Poder Ejecutivo por medio del ministerio de Economía y Hacienda y previa recomendación favorable de la Comisión Industrial, presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley en ese sentido, por lo menos con tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento del período de prohibición que había sido acordada.

Artículo 25. - El Ministerio de Relaciones Exteriores prestará por medio de su Cuerpo Diplomático y Consular, la colaboración necesaria al Ministerio de Economía y Hacienda para obtener los datos que sean necesarios para comprobar la existencia de prácticas de comercio que perjudiquen a la industria nacional.

Artículo 26. - Todas las solicitudes de exención de derechos de aduana para la importación de artículos, deben dirigirse al Ministerio de Economía y Hacienda acompañadas de una certificación de la Dirección de Industrias en que se indique si esos artículos se producen en el país en calidad y cantidad suficientes. En caso de

discrepancias en cuanto a calidades se refiere se consultará al Comité de Normas, que se regirá por las disposiciones reglamentarias del artículo 17 de este Reglamento.

No obstante, que el criterio expuesto en el párrafo primero es aplicable a las materias primas producidas en el país, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá conceder franquicias aduaneras para su importación cuando el Ministerio de Agricultura e Industrias se lo recomiende por haberse comprobado un faltante de la producción nacional, y únicamente por las cantidades necesarias para llenar dicho faltante.

Artículo 27. - La clasificación de las actividades industriales en nuevas y establecidas; según lo establece el artículo 16 de la Ley estará a cargo de la Comisión Industrial, la cual para pronunciarse tomará en cuenta la información que solicite y reciba al respecto de la Dirección de Industrias. Esta a su vez, en los casos que estime necesarios, solicitará el pronunciamiento del Comité de Normas en lo de su competencia.

Artículo 28. - La Comisión Industrial al analizar y dictaminar acerca de las solicitudes que para obtener los beneficios de la Ley formulen los interesados, deberá conceder primordial importancia al cumplimiento de los factores previstos en el artículo 17 de la Ley, con cuya concurrencia se asegure un aporte a la solución de problemas económico-sociales del país. En virtud de lo anterior, se considerarán en primer término los siguientes factores: a) el ahorro de divisas extranjeras que permita la sustitución de importaciones por los productos que producirán las industrias de exportación; b) relación entre el valor de las materias primas, artículos

semi-elaborados y terminados nacionales y el valor del producto final; o que el consumo de esos elementos conduzca a un desarrollo agropecuario o minero de importancia; c) la contribución al ingreso nacional medido a través del rendimiento por hora-hombre de trabajo, tomando como base de comparación el rendimiento promedio de las actividades industriales del país; d) el número de obreros y de ellos especialmente los calificados que ocupará la industria. En segundo término, después de ponderados los factores ya señalados en el párrafo anterior, la Comisión Industrial, dentro de sus facultades de sugerir toda medida que favorezca el progreso industrial, y en atención a la necesidad de elevar constantemente el índice de productividad de las empresas, analizará y considerará: e) la relación que guarde la nueva inversión con la medida de las empresas industriales del país, contemplando de modo especial la participación que tenga el capital costarricense; f) el plan financiero, para cuyo análisis se tomarán como bases las razones de liquidez, solidez y endeudamiento; lo moderno del equipo y su capacidad de producción con relación a las necesidades del mercado; g) los demás factores que no hayan sido cubiertos en los análisis anteriores, entre ellos si la empresa industrial de que se trate, por su ubicación, motivada ésta por la existencia cercana de fuentes de materia prima, por la facilidad en el abastecimiento en el mercado, o por otros factores de conveniencia económico-social, contribuye al desarrollo de una zona geográfica o al ordenamiento urbanístico de la respectiva localidad. Para efectuar la ponderación de todos y cada uno de los factores indicados, la Comisión Industrial podrá elaborar las tablas de evaluación que estime necesarias.

Artículo 29. - Una vez calificada la conveniencia económico-social de la industria, la Comisión Industrial recomendará en el dictamen los beneficios de los artículos 19 ó 20 que pueden concederse, así como también los plazos para el disfrute de cada uno de ellos.

Artículo 30. - Los beneficios que para industrias nuevas se pueden conceder son:

1º. - Franquicias aduaneras del 99% de los derechos arancelarios y recargos, excepto tasas, sobre la importación de:

- a) Materiales de construcción que no puedan ser sustituidos - por productos nacionales. Para tal efecto, el interesado deberá presentar con su solicitud los planes de las obras a - realizar, un detalle de los materiales o implementos impor-tados que se van a consumir y una exposición razonada de la necesidad de su ocupación, todo firmado por un ingenie-ro civil o arquitecto incorporado. En todo caso de discre-pancia según sea el caso, se consultará el parecer del Co-mité de Normas o del Ministerio de Obras Públicas. La concesión de la franquicia no podrá ser por un período mayor que el convenido en el contrato para terminar la edifica-ción de que se trate;
- b) Motores, maquinarias, herramientas, equipo y accesorios que se comprueba ante la Comisión Industrial que se requieren para la instalación o ampliación de las industrias durante la vigencia del contrato. Se considerarán como equipos accesorios de producción los vehículos que se ocupen para el transporte de materiales y productos exclusivamente den

tro de la planta y como parte de la maquinaria y equipo las piezas de repuesto correspondientes a cada una de ellas. Cuando se trate de la importación de maquinarias o equipos usados, el interesado deberá indicarlo en la solicitud y adquirir el compromiso de presentar con la petición de franquicia para su desalmacenaje una certificación de que se encuentran en perfectas condiciones para su uso, extendida por expertos en la materia y debidamente autenticada;

Instrumentos de laboratorio, físico, químico o biológico, que el interesado se comprometa a instalar, previa aprobación del Comité de Normas de que son los necesarios para investigación, fabricación y control de calidad de los artículos que se van a producir y de las materias primas que se van a emplear;

- c) Combustibles y lubricantes, excepto gasolina, en las cantidades que se estime que son necesarias y periódicamente se compruebe que se emplean para el buen funcionamiento y conservación de la maquinaria y equipo de la planta. Cuando se trate de combustible y lubricantes para la producción de energía eléctrica, la solicitud deberá ser acompañada de una constancia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de que los servicios establecidos no están en capacidad de suministrar la energía requerida. No es aplicable este beneficio a los combustibles y lubricantes para equipos de transporte, excepto para los que califiquen como accesorios del equipo de producción para uso dentro de la planta.

- d) Las materias primas, productos semi-elaborados o materiales que entren en la composición o en el proceso de elaboración del producto y que se comprueba que es necesario importar a juicio de la Comisión Industrial.
- e) Empaques y envases para el producto terminado que se demuestre que no se producen en el país, ni pueden ser sustituidos por los de producción nacional. No obstante lo anterior, podrá concederse la exención cuando por razones de competencia se obligue a la empresa a importar determinada clase de empaque o envase a juicio de la Comisión. El plazo de la franquicia se limitará al período en que subsista la exigencia durante la vigencia del contrato. En el dictamen de la Comisión Industrial se indicarán las características propias de los empaques o envases sobre los cuales se recomienda conceder la franquicia aduanera y las razones aceptadas que obligan a ocuparlos.

2º. - Exenciones de impuestos:

- f) Territoriales por un período de cinco años. Para los efectos de esta exención se considera como impuesto territorial el que grave los bienes inmobiliarios. Tal exención solamente será concedida sobre los bienes del beneficiario que sean parte de la planta industrial, la que deberá ser descrita en el dictamen de la Comisión Consultiva.
- g) Que pesen sobre el capital invertido y sobre las utilidades obtenidas en la planta industrial durante la vigencia de la concesión de los demás beneficios que la ley autori-

za conceder. Esta exención será de la totalidad del monto de dichos impuestos durante la primera mitad del término del contrato y del 50% durante la segunda mitad. La concesión de este beneficio no exonera al beneficiario de la obligación de presentar anualmente la declaración ante la Dirección General de Tributación Directa, en la cual deberá indicar el número, fecha y cláusula - del contrato que le exonera de tributar;

- h) De exportación que se regiran por lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley;
- i) Sobre la renta correspondiente a la parte de las utilidades que la empresa reinvierta en mejoras tanto en la propia industria como en viviendas para sus trabajadores, reinversiones que el beneficiario deberá comprobar ante la Dirección General de la Tributación Directa.

Artículo 31. - Los beneficios que se pueden conceder a industria establecidas son las franquicias y exenciones que se detallan en los incisos a), b), c), d), e), h) e i) del artículo anterior en un 90%, para las cuales regirán las mismas disposiciones contenidas en cada uno de los incisos mencionados y además las siguientes:

1º. - Franquicias aduaneras:

- a) Sobre la importación de materiales de construcción solamente se concederán cuando el interesado prueba a juicio de la Comisión Industrial que las construcciones obedecen a mejorar urbanísticas de carácter sanitario o mejoramien

to en la eficiencia de la industria. El solicitante deberá --
presentar con su petición pronunciamientos favorables en
el primer caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urba--
nismo (INVU) y en el segundo del Departamento de Ingenie--
ría Sanitaria del Ministerio de Salubridad Pública.

- b) Sobre motores, maquinaria y los otros artículos que se en--
cuentran en el inciso b) del artículo anterior de este Re--
glamento, cuando la importación tenga por objeto estable--
cer nuevas líneas de producción de la rama industrial es--
tablecida, ampliación de la capacidad de producción de la
industria, modificación del sistema para poder emplear ma--
terias primas nacionales, reducir los costos de producción
mejorar la calidad de los productos o cualquier otro que lo
amerite no contemplado en la enumeración anterior, todo a
juicio de la Comisión Industrial.
- c) Sobre la importación de combustibles y lubricantes sólo en
casos muy calificados a juicio del Ministerio de Economía
y Hacienda, previa recomendación de la Comisión Indus--
trial;
- d) Sobre materias primas y los demás artículos que se indican
en el inciso d) del artículo anterior, solamente se concede--
rán cuando las recomiende la Comisión Industrial y a juicio
del Ministerio de Economía y Hacienda no se cause perjui--
cio fiscal. Para ser considerada la solicitud, el interesa--
do deberá suministrar los elementos de juicio que demues--
tren que se hace necesario el disfrute de la franquicia pa--
ra la subsistencia, desarrollo o mejoramiento de la indus--
tria;

Sobre los empaques y envases se otorgarán únicamente cuando debido a la competencia sea indispensable su importación y que ésta ~~afecte~~ afecte el costo del producto terminado a juicio de la Comisión Industrial.

29. - Exenciones de impuestos:

- f) De exportación que se regirán por lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley;
- g) Sobre la renta, sobre la parte de las utilidades que la empresa reinvierta en mejoras, tanto en la propia industria como en viviendas para sus trabajadores, cuando el interesado haya aportado ante la Comisión Industrial las pruebas que indica el inciso a) de este artículo.

Artículo 32. - La exoneración de los impuestos municipales que - se indican en los incisos f) y g) del artículo 19 de la Ley deberá ser tramitada por los interesados ante la Municipalidad del cantón donde se ubique la industria.

Artículo 33. - Las solicitudes de los beneficios que el Poder Ejecutivo puede conceder a las industrias nuevas y a industrias establecidas, enumerados en los artículos 19 y 20 de la Ley, deben - ser presentadas a la Dirección de Industrias con la siguiente in-
formación:

Nombre o razón social del solicitante;

Definición de la actividad industrial con indicación de los artículos o servicios que produce o se propone producir y el volumen de la producción de la empresa;

Beneficios que solicita y obligaciones que ofrece cumplir;

Fecha aproximada en que iniciará la instalación o ampliación de la planta y fecha en que se compromete a iniciar la producción, ya se trate de la instalación de una nueva planta o de la ampliación de una planta establecida;

Indicación del lugar donde se establecerá la planta y cualquiera otra información que estime conveniente;

La Dirección de Industrias anotará al pie la hora y fecha de recibo y en el término de los tres días siguientes mandará a publicar en el Diario Oficial "La Gaceta" por cuenta del interesado un aviso concediendo quince días hábiles a partir de la fecha de la publicación para que quienes se consideren lesionados en sus derechos, presenten por escrito su oposición;

El aviso contendrá la fecha de recibo de la solicitud, el nombre del solicitante, clase de industria y objetivos de la petición. Expirado el término de quince días hábiles no se recibirán escritos de oposición. Durante el término señalado para oír oposiciones el solicitante deberá presentar la información de carácter confidencial que se enumera en el "Cuestionario para la Evaluación de Proyectos Industriales" que al efecto suministrará la Dirección de Industrias.

El término para recibir oposiciones será de tres días hábiles cuando se trate de industrias establecidas que, al amparo de artículo 33 de la Ley, solicitan los beneficios concedidos a plantas dedicadas a producir artículos iguales o semejantes. En tales casos la información que debe presentar el peticionario será

la necesaria para probar que la planta se encontraba en operación con anterioridad a la fecha en que la Comisión Industrial recomendó la concesión de los beneficios de la empresa.

(Adicionado por decreto nº 4 del 16 de octubre de 1964)

Artículo 34. - Al finalizar los quince días, si ninguna oposición se hubiere presentado, la Dirección de Industrias remitirá a la Comisión Industrial la solicitud y demás documentos con ella relacionados para que le indique la investigación que considera que debe realizarse, así como la información que permita determinar si es una industria nueva o establecida.

Para tal objeto la Comisión Industrial procederá de inmediato a calificar la industria y de serlo como lo indica la solicitud, comunicará a la Dirección de Industrias los aspectos que debe comprender el estudio. En todos los casos en que se trate de industrias con propósitos o posibilidades de exportación de sus productos, solicitará al Banco Central la fijación del plazo y el porcentaje de las divisas extranjeras provenientes de la exportación de los productos de esa industria del cual podrá disponer en el mercado libre de cambio debiéndola acompañar con los datos que indique el formulario que para el efecto suministre dicho Banco.

Artículo 35. - En el caso de que se presente oposición, la Dirección de Industrias la transcribirá al interesado concediendo quince días hábiles para que la conteste. Al recibo de la respuesta adjuntará ambos escritos a la solicitud y remitirá todos los documentos a la Comisión Industrial para que emita pronunciamiento. Si el interesado no contesta la oposición, se tendrá por retirada la solicitud.

Artículo 36. - Los escritos de oposición deben contener los razonamientos o pruebas que permitan estimar el perjuicio que podría causar la concesión de los beneficios que se han solicitado.

Artículo 37. - En el caso en que la oposición se fundamentare en la existencia de un proyecto para establecer la industria en condiciones más convenientes para la economía del país, el opositor deberá dar una garantía en favor del Estado por el monto que reco-miende la Comisión Industrial; dicha garantía lo será de la reali-zación de su proyecto dentro de un término que en ningún caso podrá ser superior a aquel en que el solicitante hubiese prometido establecer su empresa.

Si el solicitante inicial insistiere en que se considere su — proyecto tal como fué presentado, o si ofreciere cumplir con las condiciones propuestas por su opositor, se le exigirá una garan-tía de cumplimiento igual a la exigida a éste y de rendirla su pro-puesta por orden de hora y fecha de presentación se considerará con derecho de prioridad para su tramitación.

No se considerarán como oposiciones las simples solicitudes de los beneficios de la Ley que se presenten durante el término - señalado para oír oposiciones. Tales solicitudes se registrarán de - acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento.

Artículo 38. - Una vez rendidas las garantías a satisfacción del Ministerio de Agricultura e Industrias, éste lo comunicará a la Comisión Industrial, para que proceda a comunicar a la Dirección de Industrias los estudios que debe realizar.

Artículo 39. - La Dirección de Industrias realizará los estudios y presentará su informe a la Comisión Industrial, quien presentará ante el Ministerio de Agricultura e Industrias su dictamen debidamente razonado, el cual deberá especificar los beneficios que se ha determinado que procede conceder, los plazos que recomienda para el disfrute de cada uno de ellos, así como las obligaciones y garantías de cumplimiento de ellas por parte del Contratista. En los casos de oposiciones en que haya exigido garantía, se cancelará una vez conocido el dictamen de la Comisión Industrial la del opositor o solicitante cuya propuesta definitivamente se rechace.

Artículo 40. - Con conocimiento del dictamen, para efectos de la Resolución respectiva, el Ministerio de Agricultura e Industrias consultará el parecer del Ministerio de Economía y Hacienda en lo que le corresponda.

Artículo 41. - De ser favorable la Resolución, la Dirección de Industrias elaborará el proyecto de contrato, el cual para efectos de lo que dispone el artículo 28 de la Ley será enviado a la Contraloría General de la República.

Artículo 42. - Una vez suscrito el contrato, refrendado por la Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", para efectos de aplicación de lo que a los diversos organismos corresponda, la Dirección de Industrias con nota les enviará copia a cada uno.

Artículo 43. - Las solicitudes de exenciones de derechos de aduana deberán contener la siguiente información: número y fecha del contrato que da derecho a ese beneficio; nombre, naturaleza, va

lor, peso neto y bruto de los artículos; clase y cantidad de bultos con indicación de sus números y marcas; país de procedencia; nombre del barco y fecha en que llegó; o indicación de la guía aérea o terrestre; aduana en que se hará el desalmacenaje. Cada solicitud debe ser acompañada de una factura original extendida por la casa exportadora.

Artículo 44. - La Dirección de Industrias, una vez comprobado el derecho de la libre importación de los bienes de que se trate, transcribirá en lo conducente, la solicitud al Ministerio de Economía y Hacienda con la correspondiente recomendación razonada.

Artículo 45. - Para cada empresa que mediante un contrato disfrute de los beneficios de la Ley, la Dirección de Industrias llevará un expediente con la documentación y correspondencia, y por separado un registro con la anotación clasificada de los beneficios de que va haciendo uso.

Artículo 46. - El derecho al disfrute de las franquicias y exenciones que se otorguen a una empresa no podrá ser traspasado a terceras personas ni aún en el caso de venta o arrendamiento de la planta. Para el goce de tales beneficios los nuevos empresarios deberán previamente gestionar ante el Ministerio de Agricultura e Industrias y obtener el traspaso del contrato a su nombre. Para la determinación de la aprobación del traspaso de los beneficios contractuales, el Ministerio tomará en cuenta la capacidad técnica, administrativa y económica de los nuevos empresarios para cumplir con las condiciones del contrato original, y exigirá, si lo considera necesario, la sustitución de las garantías, pudiendo aceptar la simple renovación de las otorgadas en contrato original.

Artículo 47. - En cada contrato de industria nueva se considerarán las fechas en que se iniciará el disfrute de cada uno de los beneficios concedidos que se establecerán, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, en la siguiente forma:

- a) A partir de la fecha en que el contrato debidamente aprobado se publique en el Diario Oficial "La Gaceta"; la franquicia aduanera sobre la importación de materiales de construcción, motores maquinarias, herramientas, equipos, accesorios e instrumentos de laboratorio y la exención de impuestos territoriales;
- b) Apartir de la fecha en que la nueva planta inicie la producción - de acuerdo con los términos del contrato; exención de impuestos de exportación; exención de impuestos fiscales sobre el capital invertido y sobre las utilidades; exención del Impuesto sobre la Renta sobre la parte de las utilidades que se reinvierta en mejoras tanto en la industria como en las viviendas para los trabajadores;
- c) Para la franquicia aduanera sobre la importación de combustibles, lubricantes, materias primas y productos semielaborados empques y envases, se fijará una fecha anterior a la que se convenga para que la planta inicie la producción, pero en ningún caso lo será anterior a la publicación del contrato en el Diario Oficial "La Gaceta".

Artículo 48. - El período de disfrute de los beneficios contractuales que se concedan a industrias establecidas se indicará en el contrato, el cual comenzará a regir a partir de la fecha en que éste - se publique debidamente aprobado en el Diario Oficial "La Gaceta"

Ninguno de los beneficios contractuales se concederá por un período superior a diez años que se contarán a partir de las fechas de iniciación de su disfrute que se consignen en el contrato.

Artículo 49. - Cuando se reciban varias solicitudes para la explotación de una misma industria durante el término señalado para oír oposiciones a la primera, la Comisión Industrial deberá estudiar todas las que se presenten en dicho término. No obstante, si vencido ese plazo, se presentaren nuevas solicitudes y la Comisión Industrial no se hubiere aún abocado al estudio de las pendientes, deberán estudiarse esas solicitudes conjuntamente con las presentadas con anterioridad. Efectuados los estudios del caso, la Comisión Industrial recomendará el otorgamiento de la Ley para aquella o aquéllas solicitudes que se haya determinado que llenan a satisfacción lo estipulado en ella y en este Reglamento. Sin embargo, cuando el tamaño del mercado no permita el funcionamiento económico de varias plantas que se dediquen o vayan a dedicarse a la misma industria, la Comisión deberá recomendar los que reúnan las condiciones más satisfactorias y en el número indispensable para llenar ese mercado.

(Decreto nº 2 de 7 de abril de 1961).

Artículo 50. - Para acogerse a lo que dispone el artículo 29 de la Ley, el interesado deberá dirigirse al Ministerio de Economía y Hacienda, indicando: a) El plan financiero, la cuantía de las inversiones y su distribución, la rama industrial de que se trate, que es propiedad de costarricenses; o en caso de sociedades mercantiles; que son costarricenses sus socios si es una Colec

tiva e igualmente los socios comanditarios si se trata de una Sociedad en Comandita; así como que son costarricenses de origen o naturalizados los accionistas o socios con un interés no menor de 75% en el capital social si fueren sociedad anónimas o de responsabilidad limitada. En cualquiera de los casos se detallará la participación de cada uno de los socios. b) El monto de la fianza que se solicita. c) El nombre de la institución de crédito ante la que se va a presentar la solicitud. d) Las razones por las cuales se presenta la gestión. El interesado deberá también poner a disposición todos los datos e informes que sean necesarios para efectuar el estudio correspondiente. El Ministerio de Economía y Hacienda solicitará a la Comisión Industrial una recomendación al respecto considerando: si se trata de una industria, nueva, el porcentaje de la materia prima nacional que se va a usar y si su instalación es conveniente para la economía del país.

De acuerdo con el pronunciamiento de esa Comisión, el Ministerio de Economía y Hacienda consultará la opinión del Banco Central para efectos de que considere si es procedente el otorgamiento de esa fianza o garantía, de conformidad con la política monetaria.

Oídas las opiniones anteriores, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá otorgarlas directamente al solicitante cuando su monto no sea superior a dos millones de colones (2.000.000,00) y si la solicitud de crédito ha sido presentada ante una institución nacional, las cuales, excepto en casos muy calificados, no podrán ser mayores del 60% de la inversión total.

Cuando se trate de fianzas mayores de dos millones de colo-

nes (\$ 2.000.000,00) o que hayan sido presentadas ante instituciones extranjeras, el Ministerio de Economía y Hacienda también consultará al Banco Central y si son aprobadas por éste, las someterá a la consideración de la Asamblea Legislativa para su debida discusión y ratificación.

Artículo 51. - En el estudio de las solicitudes, la Comisión Industrial analizará si la realización del proyecto puede causar efectos anti-sociales o en perjuicio de la seguridad o economía nacionales si se pretende aplicar en la industria respectiva procedimientos notoriamente anticuados que disminuyan su eficiencia y si están regidas por leyes o contratos especiales. Para determinar las apreciaciones anteriores, la Comisión deberá asesorarse de las oficinas y departamentos técnicos especializados que estime conveniente, lo mismo que para determinar si se trata de una empresa que ya se ha acogido a los beneficios de la ley en una misma rama industrial. De ser afirmativo cualquiera de los casos enumerados, se comunicará al Ministerio de Agricultura e Industrias, para que sea denegada la solicitud en conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley.

Artículo 52. - Para efectos de preferencia en la concesión de los beneficios que indica el artículo 32 de la Ley, en el caso de Compañías o Sociedades, se considerarán costarricenses aquellas que estuvieren domiciliadas y organizadas de conformidad con la Ley - de Sociedades Comerciales del país.

Artículo 53. - Cuando una empresa solicite acogerse a la Ley y no haya suscrito un contrato otra empresa con el Estado para elaborar los mismos productos, el Poder Ejecutivo le concederá los --

misimos beneficios y le impondrá iguales obligaciones pero por el plazo que falte para el vencimiento del contrato originalmente otorgado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no suscribirá el nuevo contrato cuando el tamaño del mercado no permita el funcionamiento económico de otras plantas.

Artículo 54. - Todos los informes y datos que suministren las empresas industriales a la Dirección de Industrias o a la Comisión Industrial tendrán carácter de confidenciales y sólo podrán ser usados para el fin para el cual fueron solicitados o suministrados o para propósitos de investigaciones estadísticas, al tenor de lo que disponen los artículos 3º y 4º de la ley nº 1565.

El funcionario o empleado de los organismos gubernamentales o miembro de la Comisión Industrial que viole la confidencialidad de los informes o datos, será sancionado con las disposiciones penales que sean aplicables.

Artículo 55. - Todos los artículos manufacturados en el país deben ostentar la marca de fábrica directamente sobre ellos, o al menos en sus empaques o envases, y con la leyenda clara de que el artículo es fabricado en Costa Rica. Esa leyenda, así como el nombre correspondiente del producto y cualesquiera otras que se agreguen deberán serlo en castellano. Cuando por motivos especiales sea necesario omitir las exigencias anteriormente indicadas sobre artículos destinados a la exportación, la Comisión Industrial podrá autorizarlo previa consideración de las razones que el interesado exponga en su solicitud.

Artículo 56. - De acuerdo con el artículo 45 de la Ley, toda perso

na que solicite el establecimiento de controles cuantitativos o de prohibiciones a la exportación de determinada materia prima deberá hacerlo ante el Ministerio de Economía y Hacienda, indicando los motivos en que se basa para presentar dicha gestión y -- acompañándola de una recomendación del Ministerio de Agricultura e Industrias.

Artículo 57. - Cuando el Ministerio de Economía y Hacienda compruebe, por los medios que están a su alcance, que se ha establecido un precio de agiotaje para determinado producto de la misma rama industrial, podrá fijar porcentajes máximos de utilidad y precios máximos de venta. Para tal efecto, los industriales deberán suministrar los datos de costos, ventas, gastos y toda otra información que solicite la Dirección General de Economía, los cuales tendrán el valor de declaración jurada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley nº 1208 de 9 de octubre de 1950. Si el industrial se negare a enviar los documentos requeridos o no se ajusten al precio fijado, el Ministerio de Economía y Hacienda aplicará las sanciones contenidas en el artículo 16 de la Ley de Defensa Económica y presentará a consideración de la -- Asamblea Legislativa un proyecto de ley tendiente a disminuir el nivel de aforos que pesan sobre iguales y similares artículos importados. Antes de enviarlo, deberá oír la opinión al respecto de las Comisiones Industrial y Arancelaria.

Artículo 58. - Todo fabricante o exportador de artículos de producción nacional que se acoja a las ventajas que concede el artículo 18 del Arancel de Aduanas, Ley nº 1738 de 31 de marzo de 1954, reformado por el artículo 48 de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, deberá presentar la correspondiente solici--

tud para su trámite a la Contaduría Mayor de la República.

Artículo 59. - La solicitud a que se refiere el artículo anterior debe hacerse en papel sellado de la décima clase con los siguientes detalles:

- a) Nombre y generalidades de ley del solicitante;
- b) Nombre del productor del artículo exportado o vendido con la dirección exacta del lugar donde se encuentra ubicada la empresa;
- c) Nombre, cantidad, peso neto, medida y valor del artículo de producción nacional cuya exportación o venta justifica la solicitud;
- d) Nombre, cantidad, peso neto y medida de cada una de las materias primas, envases y material de empaque extranjeros que se emplearon en la elaboración del artículo de producción nacional con anotación del costo CIF de cada uno;
- e) Anotación del número, fecha y aduana de los pedimentos de desalmacenaje de cada uno de los productos importados;
- f) Anotación del número, fecha y aduana del pedimento de embarque de los artículos de producción nacional exportado;
- g) Calculo detallado y monto total de la suma que se solicita que se le acredite al peticionario.

En la información a que se refieren los incisos c) y d) deberán usarse las unidades de medida expresadas en el Arancel de Aduanas.

Artículo 60. - El interesado deberá acompañar a su solicitud los-

siguientes documentos:

- a) Certificación de la Dirección de Industrias en la que consta que el artículo vendido localmente o exportado es de manufactura nacional, con el nombre del productor, quien debe estar inscrito en el Registro de Industrias que lleva la Dirección de acuerdo con lo que dispone el artículo 1º del Decreto-Ley nº 508 de 3 de marzo de 1949.
- b) Certificación del Comité de Normas haciendo constar la cantidad de cada una de las materias primas, envases y material de empaque importados que se emplearon en los artículos a que se refiere la solicitud, de acuerdo con los elementos de juicio aportados por la Dirección de Industrias al tenor del artículo 68 de este Reglamento o bien obtenidos de otras fuentes
- c) Copia original de la factura firmada por el fabricante o exportador con el nombre y fecha del "permiso de exportación", del Banco Central;
- d) Documento que compruebe haberse efectuado el embarque con destino al exterior cuando se trate de exportaciones; y
- e) Los documentos que la Contaduría Mayor exija para comprobar que los artículos que se detallan en la solicitud fueron importados y pagaron los derechos de aduana correspondientes.

Artículo 61. - Cuando se trate de ventas locales a quienes disfrutan de exención de derechos de aduana para la importación de los productos objeto de la venta, se cumplirán los mismos trámites indicados en este Reglamento en lo que sean aplicables y se acompañará además lo siguiente:

- a) Un documento que compruebe que el destinatario de la mercadería de producción nacional disfruta de libre importación de tales artículos; y
- b) Una copia original de la factura de venta con la declaración jurada del comprador de haberse recibido la mercadería de conformidad con lo consignado en dicho documento.

Artículo 62. - La suma a acreditar se calculará sobre la cantidad neta de las materias primas, envases y material de empaque empleados en elaboración del producto y se autorizará únicamente sobre aquellas que hubieren pagado los derechos que señala la Ley nº 1738 de 31 de marzo de 1954 (Arancel de Aduanas) y sus reformas.

Artículo 63. - Cuando la exportación se refiera a artículos que se importan para ser parcialmente transformados en el país, el importador lo advertirá para que se consigne en el pedimento de de salmacenaje esta condición, a fin de que la aduana deje muestras de las piezas respectivas para acompañarlas al tanto de la póliza que quede en poder de la Contaduría Mayor y conservar -- otras a fin de poder identificar claramente la exportación de estos artículos.

Artículo 64. - Una vez efectuados los trámites anteriormente señalados y si todo estuviere correcto, la Contaduría Mayor remitirá la solicitud con su informe al Ministerio de Economía y Hacienda, para su sanción definitiva. Si ésta fuera favorable, las sumas se acreditarán hechas las deducciones que señala el artículo 18 del Arancel de Aduanas a que se refiere este Reglamento.

Artículo 65. - Cuando los aforos, específico o ad-valorem de un producto hayan sido rebajados, no será aplicable la solicitud de pedimentos de desalmacenaje con el aforo anterior si el fabricante ha desalmacenado el mismo artículo pagando el nuevo aforo noventa días antes o más de la fecha de exportación o entrega de los artículos a que se refiere la solicitud. Se exceptúan los casos en que se compruebe haberse empleado aún los artículos que pagaron el aforo mayor.

Artículo 66. - La Contaduría Mayor deberá pronunciarse para cada caso dentro de los noventa días siguientes a la fecha de recibo de la documentación mencionada en los artículos 60, 61 y 62 de este Reglamento.

Artículo 67. - Las solicitudes dirigidas al Comité de Normas para que certifique la cantidad de cada una de las materias primas envases y material de empaque extranjeros que se emplearon en artículos de producción nacional, para acogerse a los beneficios del artículo 18 del Arancel de Aduanas deben indicar:

- a) Nombre del productor o exportador que hace la solicitud con el número de la correspondiente cédula de identidad o de residencia si es un extranjero, y la dirección exacta del lugar donde se encuentra ubicada la empresa fabricante;
- b) El nombre, cantidad y destino de los artículos de producción nacional en que se emplearon los productos extranjeros;
- c) Nombre y cantidad empleada en cada uno de los productos importados; y
- d) Lugar en que se encuentra la mercadería para ser inspeccionada.

La Dirección de Industrias a su recibo anotará al pie la hora y fecha de presentación y comisionará al personal de su Dependencia para que inspeccione la mercadería, verifique la cantidad y peso neto de los artículos y de los productos extranjeros - que se emplearon en su manufactura, envase y empaque, y tome muestras si fuere necesario analizarlas para determinar su composición. La Dirección de Industrias someterá a conocimiento del Comité de Normas las solicitudes acompañadas de los informes de los inspectores y de los resultados de los análisis que se hayan efectuado. Tales solicitudes deben ser presentadas por lo menos tres días hábiles antes del despacho de la mercadería.

Artículo 68.— Para efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley, la Contaduría Mayor de la República determinará el monto de los impuestos a pagar sobre la importación de envases o materias primas objeto de la gestión, y lo comunicará a la Dirección General de Economía para que ésta con base en él y cualquier otro elemento de juicio recomiende al Ministerio del ramo si encuentra satisfactoria o no las fianzas y garantías ofrecidas a favor del Estado, o si considera más conveniente el depósito en efectivo de los impuestos correspondientes. Si el Ministerio de Economía y Hacienda resuelve la gestión favorablemente, lo comunicará a la Aduana respectiva para que se permita el desalmacenaje de la partida o partidas para las cuales se han rendido y aceptado las fianzas, garantías o depósitos. La Contaduría Mayor de la República tendrá a su cargo el control del uso y destino de las materias primas o envases que se han desalmacenado acogidas a este beneficio, así como hacer efectivas todas las gestiones que se estipulan en el párrafo final del artículo 48 de la Ley.

Artículo 69. - De acuerdo con los artículos 2º y 7º de las Disposiciones Transitorias de la Ley, los contratos vigentes al amparo - de la Ley nº 36 de 21 de diciembre de 1940 y sus reformas y ampliaciones, así como los que se encontraban en trámite al derogarse dicha Ley, podrán reformarse cuando los contratistas así lo soliciten dentro de los doce meses contados a partir del 9 de septiembre de 1959. Tales contratos serán ampliados o modificados en cuanto a los beneficios que los contratistas tienen derecho a disfrutar y a las obligaciones que deben asumir de conformidad con las disposiciones de la Ley y de este Reglamento, pero el término de vigencia del contrato original no podrá ser variado. Para la tramitación de estas solicitudes se omite la publicación de edictos para oír oposiciones y se señalan diez días de término para el estudio por parte de la Dirección de Industrias y diez para el pronunciamiento de la Comisión Industrial.

Artículo 70. - Para conceder a industrias mineras dedicadas a la explotación de vaticinios auríferos, las franquicias aduaneras especificadas en los apartados a), b) y c) del artículo 19 de la Ley - se aplicarán las disposiciones contenidas en este Reglamento para el otorgamiento de tales beneficios a industrias nuevas o establecidas.

Artículo 71. - Este Decreto rige desde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

REGLAMENTO DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE DESARROLLO
INDUSTRIAL

Reglamento para la ejecución del Artículo 9º de la Ley nº 2426 de 3 de Septiembre de 1.959. Decreto nº 4 del 18 de Mayo de 1.960.

Artículo 1º. - Los Ministerios de Agricultura e Industrias, Educación Pública (Departamento de Educación Vocacional) y Trabajo y Previsión Social (Oficina de Capacitación Social y Aprendizaje), por medio del Consejo Nacional de Educación Vocacional, promoverán la capacitación obrera en el campo industrial y seleccionarán aquellos oficios básicos que se consideren de mayor importancia social y económica, de acuerdo con las necesidades de la industria, a fin de ir distribuyendo el apoyo económico, en armonía con los respectivos programas educativos.

Artículo 2º. - Al firmarse un contrato entre el Estado y una empresa industrial que se haya acogido a los beneficios de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial (Nº 2426 de 3 de septiembre de 1959), se consignará la obligación en que esta se encuentra de — procurar la capacitación y adiestramiento de sus obreros y de sus aprendices, estos últimos por un período no inferior a dos años — en centros de capacitación (colegios vocacionales, programas de aprendizaje y adiestramiento en el trabajo), contribuyendo a su — sostenimiento en forma proporcional al número de obreros o aprendices que mantenga en ellos. Se exceptúa de la obligación de enviar a sus trabajadores a estos centros educacionales a aquellas empresas que tengan programas propios de adiestramiento o

capacitación, aceptados por el Consejo Nacional de Educación Vocacional, previo informe del Departamento de Educación Vocacional y de la Oficina de Capacitación Social y Aprendizaje del Ministerio de Trabajo.

Artículo 3º. - Cuando se suscite alguna divergencia en cuanto a si por su capacitación determinados obreros son aprendices, obreros corrientes o calificados, lo mismo que para fijar las normas que determinarán el mínimo de conocimientos que los obreros han tener en cada rama industrial, se recurrirá al pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación Vocacional que podrá requerir informes y asesoramiento de directores de colegios vocacionales, de programas de aprendizaje y de delegados patronales y obreros que correspondan a la rama de que se trate, egresados estos últimos de cualesquiera de los centros de preparación a que se ha venido haciendo referencia.

Artículo 4º. - Ante solicitudes de trabajo formuladas a una empresa por varios obreros que a juicio de ella reúnen iguales o semejantes condiciones, la empresa deberá darle preferencia a los que tengan títulos o certificados especiales, procedentes de colegios vocacionales, de programas de aprendizaje y capacitación en el trabajo, o de escuelas de capacitación industrial conocidas. Cuando hubiere varios solicitantes procedentes indistintamente, de estos cursos de adiestramiento y capacitación, y si la empresa así lo solicita, se escogerá al candidato que alcance la mayor puntuación en pruebas de habilidad y preparación, que reglamentará el Consejo Nacional de Educación Vocacional, y ejecutará una comisión formada por representantes del Departamento de Educación -

Vocacional y de la Oficina de Capacitación Social y Aprendizaje del Ministerio de Trabajo.

Es entendido que la instrucción técnica que se debe impartir a los participantes en programas de aprendizaje y capacitación, estará a cargo y bajo la dirección de los colegios vocacionales.

Artículo 5º. - Este decreto rige a partir desde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? Sí ó no.

SI

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Un mayor desarrollo de los tres sectores principales del país que contribuyen al PNB (agricultura, industria y lo servicios)

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Plan nacional de granos básicos.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud.?

NO, ninguno.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Sí, se puede facilitar el desarrollo si éste se basa en una adecuada planeación.

6. - Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no, por qué?

En algunos aspectos. Problema principal la falta de coordinación entre las instituciones.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente -

te la riqueza? ¿Ha influido el Plan esa mejor distribución?
¿Cómo?

NO, el plan ha tratado de influir por medio de una reforma -
agraria que involucra una adecuada distribución del ingreso.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inver-
siones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si -
la respuesta es positiva.

Las inversiones extranjeras en el país, es uno de los fines
del plan ya que, con ellas, se logra un mayor ingreso de divi-
sas.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo ? ¿Sí ó no?

NO.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal.

Es de esperar que produzca buenos resultados.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Es de esperar que un Plan de este tipo contemple establecer industrias adecuadas y necesarias.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios de Plan se ha acogido Ud. ?

NO, ninguno.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Considero que algunas medidas del gobierno facilitan el desarrollo.

6. - ¿Considera Ud. que el gobierno organiza y estimula la producción o no. Por qué?

El Gobierno estimula y organiza la producción porque es una de sus funciones.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución y cómo?

No conozco la posible influencia del Plan en la distribución de la riqueza es de esperar que sea positivo y adecuada.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Es de esperar que el Plan facilite inversiones extranjeras -- aunque no conozco ninguna empresa en esa situación.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

Conozco que hay unproyecto de desarrollo a nivel nacional, -- más no que se haya puesto en práctica.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

No conozco los beneficios que el Plan ha traído, si es que está en vigencia, pero serían grandes los beneficios que se obtendrían de ponerse en práctica.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

NO.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios -- del Plan se ha acogido Ud.?

No he tenido beneficios y no me he acogido a ningún Plan.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Lejos de facilitar el desarrollo lo ha obstaculizado. Basta ver las protestas diarias del sector agropecuario e industrial.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no. Por qué?

No se estimula en forma alguna. Por el alto costo de produc-

ción insumos, impuestos, cargas laborales, etc. que se han impuesto a los productores.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

Me parece muy mal distribuida la riqueza, el rico es cada vez más rico, goza de más oportunidades, el pobre se empobrece más, sufre el combate del alto costo de la vida.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la -- respuesta es positiva.

No conozco empresa extranjera que haya invertido, a raíz del Plan de Desarrollo que no conocemos a fondo.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

NO.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Ninguno, debido a que el Plan no se ha tocado las fincas todavía, debe ser que es muy nuevo.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

No lo sé, porque no lo conozco todavía, pero si he oído hablar de él.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios -- del Plan se ha acogido Ud. ?

NO, porque como dije anteriormente el Plan Nacional de Desarrollo no lo he estudiado a fondo y por tanto no lo conozco y no me ha llegado.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Debido al paternalismo exagerado del Gobierno ha perjudicado e interrumpido el desarrollo. Paternalismo (Asignaciones Familiares).

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción?

ción o no. ¿Por qué?

Sí, el gobierno intenta estimular la producción por medio del crédito pero les falta divulgación.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? Ha influido el Plan en esa mejor distribución?
¿Cómo?

Creo que en general esta bien distribuida. El Plan no ha influido en la mejor distribución de la riqueza ya que todavía no ha sido efectivo.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

No sé.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

En el Plano nacional fomentando el Cooperativismo.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

En relación con el cooperativismo, promoción para que los Costarricenses ahorremos.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud.?

NO, ninguno.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el Desarrollo o no?

Muy poco.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no, por qué?

Mucho recargo de impuestos en general.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? Ha influido el Plan en esa mejor distribución?
¿Cómo?

NO.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Poco relativamente.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Ninguno, en el plano personal. A nivel nacional no tengo conocimiento.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Ninguno.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud. ?

NO.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo ó no?

No sé si las medidas tomadas se relacionan con el Plan Nacional.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Considera que sí para la estabilidad económica del país.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente

la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución?
¿Cómo?

NO. No conozco el Plan.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Posiblemente si por lo que persigue; no conozco ninguna empresa.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Se ha organizado mejor el país

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Hay más dinero para la agricultura, la industria, etc.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud.?

NO.

5. - ¿De acuerdo a todas las medidas, que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

NO.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no. Por qué?

Sí, ha bajado los intereses y aumentado el crédito bancario.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? Ha influido el Plan en esa mejor distribución?
¿Cómo?

NO.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Creo que sí. No recuerdo ninguna.

ENCUESTA

1. - ¿Sabes Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

Si.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan, a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

En el plano nacional mejor distribución de los recursos y en el plano personal un mejor modo de vida.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Más camino de penetración, una mejor salud rural.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios se ha acogido Ud. ?

Un poco.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el Desarrollo o no?

Si.

6. - Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Sí, estimula la producción con programas específicos como el de granos básicos.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamen-

te la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución?
¿Cómo?

NO, pero el plan influye porque se planifica el desarrollo rural y esto ayuda a abolir la brecha social.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

SI, pero no recuerdo en este momento cuál.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Ninguno, pues no he visto aplicar ninguna de las ideas ú objetos, eso se queda en los papeles.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud.?

No, a ninguno.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

En unas cosas sí, como por ejemplo las importaciones.

6. - Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Sí, tal vez con el nuevo plan agropecuario.

7. - Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución?
¿Cómo?

No, se distribuye adecuadamente, pero no creo que el Plan haya influido pues como he dicho, no he visto aplicar nada.

8. - ¿Cree Ud. que, como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

No hay beneficios directos porque el Plan no funciona bien, podría ser a largo plazo.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Empiezan a verse lineamientos.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud. ?

NO.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

A paso lento.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

A veces sí, pero con ciertas actuaciones lo impide.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

NO.

8. - ¿Cree Ud. que, como consecuencia del Plan, ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Tal vez.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Aumentar la producción en el campo de los granos básicos.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

La producción de granos básicos.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud.?

Un poco. Ningún beneficio.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en plano económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

SI.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

SI.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido en esa mejor distribución el Plan? ¿Cómo?

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna si la respuesta es positiva.

Sí, pero no recuerdo en este momento alguna empresa.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio tanto en el plano nacional como personal?

El establecimiento de prioridades para nuestro desarrollo.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Mejor aprovechamiento de los recursos, mayor coordinación interinstitucional.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud.?

SI he ampliado ni industria, pero no me he acogido a ningún beneficio del Plan.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el Desarrollo o no?

SI.

6. - ¿Considera Ud, que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

SI. Porque se acoge y cumple con las estipulaciones de los -- tratados de integración económica centroamericana cuyo objetivo fundamental es estimular la industria.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

No del todo.

8. - Cree ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? ¿Citaría alguna empresa si la respuesta es positiva?

La inversión extranjera en nuestro país obedece a una necesidad objetiva, nuestras exportaciones no nos permiten financiar nuestro desarrollo.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

- Plano Nacional: Orientación del desarrollo, especialmente económico, con especial atención al aspecto agropecuario, - donde se ha alcanzado un buen nivel logrando el autoabastecimiento y un importante ingreso de divisas.

- Plano Personal: políticas de estímulo según lo anotado arriba, me han permitido desarrollar estimablemente nuestras empresas agropecuarias.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Ampliación de la red de caminos vecinales, superproducción de arroz, ganado, caña de azúcar, apertura de fuentes de trabajo.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios -- del Plan se ha acogido Ud. ?

Sí, facilidades de crédito.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Sí, se facilita.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Si, porque con suficiente y adecuado crédito y otras medidas estimulantes, se puede producir bien.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

En el país existen grandes oportunidades para todos. La mayor parte de la población vive bien, pero podría vivir mucho mejor porque hay una serie de condiciones propias, pero hay que hacer mucho para abolir el subdesarrollo de la propia mentalidad de la gente, que es el principal problema nacional.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

El mejor logro quizás es mantener la paz social. Eso, los estímulos mencionados anteriormente y las condiciones naturales del país, son un atractivo para los inversionistas extranjeros. En el cantón de Abangares, recientemente se han establecido con fincas 2 familias italianas.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI

2. - ¿Qué beneficios ha traído el plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Con este plan se pretende ordenar el empleo de los recursos, canalizándolos mediante el planeamiento, hacia la consecución de metas de desarrollo preestablecidas. Sus beneficios aún no se pueden evaluar ya que son a largo plazo.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Esta pregunta quedó contestada con el criterio expresado en el punto anterior.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios -- del Plan se ha acogido Ud. ?

NO.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Todas las medidas se toman con esos propósitos, pero muchas veces los resultados obtenidos no son los deseados. Ej.:tasas de interés.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la produc

ción o no? ¿Por qué?

Con las últimas medidas tomadas (tasas de interés, restricción financiera, etc.) se pretende estimular la productividad (no la producción). El Plan Nacional de Desarrollo pretende organizar la producción.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

No se distribuye adecuadamente. Mediante el plan se pretende incentivar las actividades agropecuarias y agroindustriales, lo que podría contribuir a la disminución de este problema.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva?

Existe un programa de incentivos a las agroindustrias, lo que ha estimulado las inversiones extranjeras. (CAT, SIEX, CONVENIO INDUSTRIAL).

ENCUESTA

- 1.- ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de desarrollo? ¿Sí ó No?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Ha contribuido a impulsar las exportaciones del renglón agropecuario, fortaleciendo la economía nacional y ayudando a un más acelerado desarrollo económico-social.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

La regionalización de las actividades agropecuarias y la programación de las necesidades nacionales como estrategias para el crecimiento de la producción y el incremento de las exportaciones.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud. ?

NO.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

SI.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

SI. A través de los diferentes programas crediticios de tipo agropecuario e industrial.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

Nuestro país es uno de los de mayor desarrollo socio-económico de Latinoamérica. Sin embargo, podrían ampliarse esas metas alcanzadas, a través de los futuros logros de este Plan, ya que el país cuenta con condiciones intrínsecas y recursos humanos muy propicios para ello.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

Si.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

En el plano nacional ha traído el acercamiento de nuestro país a que se le considere como un país desarrollado, es decir a llenar los requisitos para que así le consideren. En el personal ningún beneficio directo.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del plan?

El único que conozco es que nuestro país ha pasado de país - subdesarrollado a país en vías de desarrollo, que según algunos es un buen avance.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios - del Plan se ha acogido Ud. ?

A ninguno, pues, por el momento, estoy dedicado solo a mis estudios.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en - el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Bueno, es cuestión de criterios, según nuestros gobernantes todas sus medidas son con ese fin; yo, a mi criterio, considere

ro que algunas más bien lo dificultarían, por ejemplo: altas tasas de intereses que se fijaron ultimamente.

6. - ¿Considera Ud. que el gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Creo que si lo está haciendo, aunque muy tímidamente y especialmente en el sector industrial, pues en lo que respecta al sector agrícola el presente gobierno ha mostrado una mayor inclinación o fuerza para estimular este sector productivo.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

No, aunque en comparación con otros países la riqueza en el nuestro, está muy bien distribuida.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Creo que sí, aunque no en gran cantidad. Por ejemplo, la Cabs ha, el Yaohan. El primero se dedica a la producción de chocolates, el segundo es un supermercado creado con gran parte de capital japonés.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí o no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio tanto en el plano nacional como personal?

En realidad no podría hablarse de beneficios concretos ya que en Costa Rica la Planificación es indicativa por que cual podrían medirse los resultados, sólo en un sistema en que la Planificación sea Operativa, esto puede hacerse.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Tal vez en el aspecto de coordinar las inversiones públicas y dar algunos lineamientos con base en la evaluación de Proyectos.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud. ?

Soy profesional, sí he ampliado mi industria pero no podría - indicar a qué beneficios del Plan me he acogido, ya que es difícil precisarlo.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

La creación de corporaciones de Desarrollo, Bancos de Fomento son los instrumentos más adecuados para facilitar el desa-

rrollo. El Gobierno ha propiciado el desarrollo económico a través de algunas instituciones, pero esto no implica desarrollo social necesariamente.

6. - ¿Considera Ud. que el gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Lo hace, pero en cierta forma el sistema no es el más eficiente, porque no hay coordinación entre las instituciones de los distintos sectores de la economía.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

Distribución adecuada de la riqueza, no la hay. No podría decirse que el Plan influye en esto porque los Planes de Desarrollo en Costa Rica siempre descuidan la parte social.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Como consecuencia del Plan Nacional de Desarrollo no conozco casos.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

En el plano nacional mayor ordenamiento en el manejo del aparato estatal. En el plano personal, más ingreso per-cápita.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del plan?

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios -- del Plan se ha acogido Ud. ?

El beneficio del Plan se ha representado en más fácil adquisición de préstamos bancarios para pequeñas industrias y para la agricultura.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

Facilita el desarrollo a la pequeña industria, la agricultura artesanos, líneas de transporte automotor, cooperativas, y otros. No facilita el Comercio de lucro, ni el turismo.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Sí, estimula la producción ya que al haber tasas de interés más bajas para la producción industrial y agrícola al mismo tiempo que períodos de gracia mayores, motiva a los — productores.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuada-- mente la riqueza? ¿Ha influido el plan en esa mejor distribu-- ción? ¿Cómo?

La distribución de la riqueza está más o menos bien distribuí da comparando nuestro país con los 383 restantes estados o gobiernos del Mundo. El Plan ha influido muy poco.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversio-- nes extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la - respuesta es positiva.

Sí ha habido intersiones extranjeras en Costa Rica. Por ejem-- plo, Yaoham, inversión japonesa que ha tenido gran impacto - en Costa Rica.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí ó no?

SI.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el Plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal.

Una mejor organización del sector público para asignación de recursos.

Una mejora en los mecanismos de información y en la información misma sobre la situación del país, para la toma de decisiones.

Previsión de crisis y detección de deficiencias en algunos sectores y proposición de medidas correctivas.

3. - ¿Podrán Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Extensión de servicios públicos y vías de comunicación a zonas rurales (resultado: mejora en calidad de vida en el área rural) Canalización del Crédito bancario a sectores prioritarios (Resultado: Desarrollo de actividades productivas específicas).

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios -- del Plan se ha acogido Ud. ?.

No tengo industria.:

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

El desarrollo es un proceso que involucra muchos aspectos y las medidas de políticas económica son múltiples, por lo que se puede decir que algunos han contribuido a desarrollar unos sectores pero otros, no.

6. - ¿Considera Ud. que el gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

El Gobierno de Costa Rica participa en la producción por medio de estímulos a los sectores productivos, canalizando recursos de distintas maneras. Se puede decir que en un país como el nuestro el gobierno no organiza la producción, pues ésta es característica de los países con planificación central.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

En Costa Rica existen barreras geográficas, sociales y económicas que no han permitido una adecuada distribución de oportunidades y esto incide en una inadecuada distribución de la riqueza. Los Planes de Desarrollo, con los lineamientos de integración del área rural, asistencia social, etc. contribuyen a mejorar parcialmente la inadecuada distribución de la riqueza.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

Sí, las ensambladoras.

ENCUESTA

1. - ¿Sabe Ud. que existe en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sí o no?

Sí, sé que existe un Plan Nacional de Desarrollo.

2. - ¿Qué beneficios ha traído el plan a su juicio, tanto en el plano nacional como personal?

Creo que ha traído grandes beneficios en ambos planos, principalmente por el ordenamiento de la actividad económica. Sin embargo, es algo difícil señalar beneficios concretos, excepto quizá en lo referente al impulso a las actividades agroindustriales y a las industrias de sustitución de importaciones.

3. - ¿Podría Ud. indicarme algún resultado del Plan?

Como mencioné anteriormente, uno de los logros que yo considero más importantes del Plan Nacional de Desarrollo es el impulso que el mismo intenta dar a las industrias dedicadas a la exportación de bienes.

4. - ¿Ha ampliado Ud. su industria después de que el Gobierno ha dictado el Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué beneficios del Plan se ha acogido Ud. ?

Definitivamente que sí, lo difícil en este punto sería determinar en qué grado ha influido el Plan y en qué grado han influido otros factores ajenos al mismo, especialmente en una industria como la muestra que depende en mayor grado del mercado centroamericano.

5. - De acuerdo a todas las medidas que ha tomado el Gobierno en el campo económico, considera Ud. que se facilita el desarrollo o no?

En este campo sinceramente creo que la política económica del Gobierno no es muy congruente, pues, mientras por un lado, se persigue impulsar el progreso y el desarrollo, por ejemplo, con la política fiscal, por otro lado, la política cambiaria del Banco Central y la política monetaria no siempre persiguen el mismo objetivo con lo que a veces los industriales nos sentimos un poco confusos. De todos modos, sería ilógico pensar que el Gobierno pretenda "retrasar" el desarrollo, lo que es distinto de tener unas ideas diferentes a las más sobre lo que debe significar desarrollo para Costa Rica.

6. - ¿Considera Ud. que el Gobierno organiza y estimula la producción o no? ¿Por qué?

Si, creo que la estimula aunque no creo que la organice.

7. - ¿Considera Ud. que en Costa Rica se distribuye adecuadamente la riqueza? ¿Ha influido el Plan en esa mejor distribución? ¿Cómo?

Definitivamente que la riqueza está más distribuida, no solo - en Costa Rica, sino que este es un fenómeno que se presenta en toda América Latina y en general en todo en lo que se ha - dado en llamar el Tercer Mundo. Creo que es muy difícil, por no ser demasiado pesimista, que ningún Plan pueda alterar ese patrón.

8. - ¿Cree Ud. que como consecuencia del Plan ha habido inversiones extranjeras en Costa Rica? Citar alguna empresa si la respuesta es positiva.

No creo que se pueda atribuir en forma directa y exclusiva ninguna inversión extranjera en el país al Plan Nacional de Desarrollo; indudablemente, que un Plan de este tipo da cierta seguridad al inversionista extranjero, sobre la estabilidad socio-económica del país, pero no es factor causante de inversiones per-se.

COMENTARIO AL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS ENTRE 20 EMPRESARIOS COSTARRICENSES EN MARZO DE 1979 (1)

De la totalidad de las encuestas efectuadas se deduce que los entrevistados conocen la existencia del Plan Nacional de Desarrollo.

En términos generales se puede decir que los beneficios del Plan no pueden todavía ser medidos dado que por su naturaleza económica requieren de un tiempo mayor a verificar sus resultados.

Si se desprende de las encuestas que algunos de los entrevistados conocen el objetivo y sentido del Plan, cual es hacer un inventario o diagnóstico global de los recursos existentes en el país incluyendo el sector público y privado con el objeto de usar, distribuir y disponer de los mismos para desarrollar la economía del país en forma más eficiente.

Es obvio, dado lo abstracto y proyección del Plan Nacional de Desarrollo, a la par de que su proyección a largo plazo, en concreto los empresarios entrevistados no conocen de ningún beneficio que haya recibido su empresa del Plan. Es difícil a nuestro criterio que en el futuro los sectores productivos conozcan resultados concretos en razón de que el Plan en sí es una estrategia -

(1) La encuesta por el número de encuestados no tiene más que un valor relativo de carácter indicativo para contrastar algunas opiniones.

superior del uso, disposición y utilización según se dijo. Consideramos, que a lo sumo a corto plazo es en el aspecto de la disponibilidad y distribución de los recursos monetarios donde con mayor claridad se pueden observar los resultados globales del Plan.

La mayoría de los entrevistados coinciden en que en Costa Rica no se reparte equitativamente la riqueza y que el Plan no ha ayudado a mejorar esa distribución.

En relación al estímulo de organización de la producción, la mayoría sostiene que el Estado únicamente la estimula de un sinnúmero de reformas legales que directa o indirectamente inciden sobre la producción; no obstante, lo anterior piensan que el Estado no organiza la producción porque el sistema de la producción y la Planificación indicativa no lo permiten.

A criterio del suscrito, a pesar de la particularidad de los medios de producción, los medios jurídicos de Planificación del Estado, directa e indirectamente, a través de la promulgación de leyes generales y específicas, se estimula, organiza y distribuye la producción nacional y su riqueza. Como ejemplo tenemos: leyes bancarias, leyes del Seguro Social; ley de Protección y de Desarrollo Industrial (2); Ley de Cooperativas; Ley de Asociaciones y desarrollo comunal; Ley de Protección al Consumidor; Ley de Asignaciones Familiares, etc. (3).

(2) Véase capítulo VII de este trabajo.

(3) Véase capítulo VI de este estudio.

En síntesis, considero que el Plan es a corto y largo plazo muy beneficioso para el país. Establece un diagnóstico de la situación económica en general del país, base posterior para el desarrollo de los factores y recursos económicos; incluso con las experiencias posteriores, el Plan se constituirá dentro de un marco más institucionalizado y jurídico, la guía del desarrollo del país, pero es necesario a su vez tratar de hacerle más publicidad a fin de que sea conocido por un sector más amplio, para que se beneficien con todo lo que el Plan les puede dar.

CUADRO Nº VI

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE

--Tasa de crecimiento

--Preliminar

	<u>1958</u>	<u>1959</u>	<u>1960</u>
<u>DUCTO INTERNO BRUTO</u>	<u>4.6</u>	<u>4.3</u>	<u>6.1</u>
agricultura, silvicultura, caza y pesca	5.4	1.3	12.1
industrias manufactureras y explotación minas y canteras	5.5	3.1	4.4
electricidad, gas y agua	-2.1	23.8	11.0
construcción	22.4	6.9	-12.4
comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles	1.4	5.7	6.3
transportes, almacenamiento y comunica- ciones	5.3	11.3	5.6
establecimientos financieros, seguros y otros servicios prestados a las empresas	7.0	7.3	7.6
servicios inmobiliarios	2.8	4.2	4.5
Gobierno General	1.5	2.8	3.1
otros servicios personales	6.6	6.3	8.6

VII

E DE ACTIVIDAD ECONOMICA

ento real anual-

ar-

C	<u>1961</u>	<u>1962</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u>	<u>1966</u>
1	<u>-1.0</u>	<u>8.1</u>	<u>1.8</u>	<u>4.1</u>	<u>9.8</u>	<u>7.9</u>
1	3.7	6.1	-0.3	4.4	2.0	9.0
4	-5.2	7.7	13.4	11.4	20.3	10.1
0	-1.3	-0.3	9.8	13.9	21.3	9.7
4	11.7	12.6	0.3	-10.1	16.7	-0.4
3	-7.0	13.4	4.5	2.8	12.5	9.6
6	-2.9	3.7	2.4	5.2	8.1	7.2
6	2.0	9.5	0.1	6.3	14.2	7.2
5	1.4	5.9	6.2	0.3	3.3	4.8
1	-2.4	4.9	6.4	4.2	8.7	5.7
6	-1.1	12.2	6.3	5.3	10.3	7.2

Conclu

	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>
TO INTERNO BRUTO	<u>5.7</u>	<u>3.5</u>	<u>5.5</u>
ultura, silvicultura, caza y pesca	7.3	9.0	10.4
trias manufactureras y explotaci3n inas y canteras	6.6	14.1	6.6
tricidad, gas y agua	10.4	12.4	10.7
rucci3n	7.3	9.2	0.8
cio al por mayor y al por menor aurantes y hoteles	2.0	7.6	1.3
portes, almacenamientos y comunica- nes	10.7	11.3	8.4
blecimientos financieros, seguros y o s servicios prestados a las empresas	7.8	8.7	1.0
es inmuebles	8.3	5.0	-0.9
rno General	1.0	1.4	8.1
s servicios personales	3.5	4.9	4.5

Conclusión CUADRO Nº VII

<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>
<u>5.5</u>	<u>7.5</u>	<u>6.8</u>	<u>8.2</u>	<u>7.7</u>	<u>5.5</u>	<u>2.1</u>	<u>5.5</u>	<u>7.7</u>
10.4	4.1	4.6	5.4	5.6	-1.7	3.0	<u>0.5</u>	1.5
6.6	3.4	3.1	10.5	10.2	<u>12.7</u>	3.2	<u>5.8</u>	<u>13.0</u>
10.7	14.2	13.1	9.4	6.1	9.3	2.3	8.8	5.5
0.8	4.4	17.2	22.0	3.1	7.8	5.7	<u>20.8</u>	8.5
1.3	13.5	4.5	7.7	3.6	-0.7	-4.2	3.9	15.4
8.4	3.3	11.3	11.6	15.0	<u>14.1</u>	6.2	5.8	6.5
1.0	10.1	9.1	9.1	10.2	<u>16.2</u>	9.2	5.8	2.9
-0.9	1.4	5.0	3.2	7.2	5.1	3.4	3.2	3.1
8.1	9.1	8.2	8.1	5.6	10.0	3.2	3.8	1.2
4.5	4.6	4.7	5.7	4.7	5.3	1.9	3.3	9.9

CUADRO N° XI

INGRESO Y PRODUCTO NACIONAL E

- Colones corrientes

Años	Ingreso nacional disponible Millones de colones	Producto nacional bruto a precios de comprador Millones de colones	Producto interno bruto a precios de comprador Millones de colones	Pob mi
1957	2.375.9	2.445.4	2.500.4	
1958	2.457.4	2.553.5	2.609.0	
1959	2.516.8	2.645.3	2.678.5	
1960	2.695.3	2.837.4	2.860.5	
1961	2.763.3	2.903.0	2.929.3	
1962	2.972.0	3.130.3	3.186.6	
1963	3.198.3	3.353.4	3.404.2	
1964	3.380.5	3.541.2	3.608.2	
1965	3.657.1	3.845.1	3.928.5	
1966	3.989.4	4.195.1	4.288.4	
1967	4.292.8	4.524.6	4.633.9	
1968	4.717.7	5.001.3	5.126.7	
1969	5.220.7	5.548.9	5.655.3	
1970	6.044.5	6.436.9	6.524.5	
1971	6.627.1	7.038.7	7.137.0	
1972	7.491.4	7.962.7	8.215.8	
1973	9.362.0	9.877.6	10.162.4	
1974	12.270.3	12.887.8	13.215.7	
1975	15.451.9	16.261.0	16.804.6	
1976 *	19.038.8	20.048.7	20.675.6	
1977*	24.385.2	25.592.5	26.272.6	

* Cifras preliminares.

XII

E INTERNO Y PER-CAPITA

entes -

Población al 30 de junio de cada año Miles de habitantes	Ingreso nacional disponible per-cápita Colones	Producto nacional bruto per-cápita Colones	Producto interno bruto per-cápita Colones
1.106.4	2.111	2.210	2.260
1.149.2	2.121	2.222	2.270
1.195.5	2.105	2.213	2.240
1.249.7	2.159	2.270	2.289
1.293.2	2.129	2.236	2.256
1.346.7	2.207	2.324	2.366
1.395.1	2.293	2.404	2.440
1.444.9	2.340	2.451	2.497
1.494.7	2.467	2.572	2.628
1.540.1	2.590	2.724	2.785
1.587.0	2.705	2.851	2.920
1.635.2	2.835	3.059	3.135
1.685.0	3.098	3.293	3.356
1.736.2	3.481	3.707	3.758
1.785.0	3.713	3.943	3.998
1.833.9	4.085	4.342	4.480
1.882.7	4.973	5.247	5.398
1.931.6	6.352	6.672	6.842
1.980.4	7.802	8.211	8.485
2.031.9	9.370	9.867	10.176
2.084.7	11.608	12.279	12.603

CUADRO N° XXX

GOBIERNO GENERAL DE C
RELACION CARGA TRIBUTARIA Y SOCIAL

CIFRAS EN TERMINOS A
- Millones de col

<u>Años</u>	<u>Producto nacio nal bruto a pre cios de comprador</u>	<u>Impuestos Indirectos 1/</u>	<u>Impuestos direc tos s/socieda - des de capital</u>	<u>Im to</u>
1957	2.445.4	251.5	36.9	
1958	2.553.5	267.9	41.0	
1959	2.645.3	293.0	29.0	
1960	2.837.4	309.1	26.6	
1961	2.903.0	290.6	27.5	
1962	3.130.3	329.4	49.4	
1963	3.353.4	352.0	36.3	
1964	3.541.2	362.7	56.8	
1965	3.845.1	402.3	57.4	
1966	4.195.1	433.5	65.0	
1967	4.524.6	443.5	72.6	
1968	5.001.8	511.5	95.9	
1969	5.548.9	580.8	111.8	
1970	6.436.9	750.7	128.7	
1971	7.038.7	801.1	134.9	
1972	7.962.7	919.1	165.6	
1973	9.877.6	1.213.8	220.4	
1974	12.887.8	1.688.1	285.9	
1975	16.261.0	2.153.4	320.0	
1976	20.048.7	2.678.4	493.5	
1977*	25.593.5	3.395.9	614.5	

1/ Incluye impuesto territorial

2/ Contiene, además, los impuestos directos sobre empresas individua

3/ Comprende las cuotas obrero-patronales de particulares y las obre
 yen las cuotas del Estado como patrono y del Estado como tal.

* Cifras preliminares.

XII

COSTA RICA

Y EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO

ABSOLUTOS

lones -

<u>Impuestos directos sobre Unid. Fam. 2/</u>	<u>Total de ingresos tributarios del Gob. Gral.</u>	<u>Contribuciones Seguro Social 3/</u>	<u>Total</u>
11.4	297.8	19.2	317.0
13.0	321.9	22.7	344.6
14.0	336.0	30.0	366.0
15.0	350.7	32.9	383.6
15.6	333.7	38.3	372.0
26.6	405.4	44.9	450.3
20.5	408.8	52.9	461.7
30.3	449.8	59.6	509.4
30.6	490.3	69.1	559.4
34.1	532.6	76.1	608.7
42.6	558.7	91.0	649.7
52.0	659.4	106.2	765.6
56.2	748.8	119.8	868.6
64.8	944.2	139.5	1.083.7
75.3	1.011.3	130.3	1.191.6
91.1	1.175.8	257.0	1.432.8
129.9	1.564.1	313.3	1.877.4
147.3	2.121.8	459.0	2.580.8
164.0	2.637.4	659.3	3.296.7
164.8	3.336.7	866.2	4.202.9
204.7	4.215.1	1.093.0	5.308.1

ales y las instituciones s/fines de lucro.

eras de trabajadores del Estado; se exclu

Conclusión CUADRO N°

RELACIONES PORCENTUALES C

<u>Año</u>	<u>Relación de los Impuestos Indi- rectos y PNB</u>	<u>Relación de los Imp. Directos s/ Soc. Cap. y PNB.</u>	<u>Impuestos Direc- tos s/Unid. Fam. y el PNB.</u>
1957	10.3	1.4	0.5
1958	10.5	1.6	0.5
1959	11.1	1.1	0.5
1960	10.9	0.9	0.5
1961	10.0	0.9	0.5
1962	10.5	1.6	0.8
1963	10.5	1.1	0.6
1964	10.2	1.6	0.9
1965	10.5	1.5	0.8
1966	10.3	1.5	0.8
1967	9.8	1.6	0.9
1968	10.2	1.9	1.0
1969	10.5	2.0	1.0
1970	11.7	2.0	1.0
1971	11.4	1.9	1.1
1972	11.5	2.1	1.1
1973	12.3	2.2	1.3
1974	13.1	2.2	1.1
1975	13.2	2.0	1.0
1976	13.4	2.5	0.8
1977*	13.3	2.4	0.8

1/ Se han realizado los redondeos necesarios en los decimales.

* Cifras preliminares.

8 -

- XXXII

S CON EL PNB 1/

rec Fam. .	Relación entre Total de Ing. <u>Trib. y PNB.</u>	Relación de los Contrib. Seg. <u>Soc. y PNB.</u>	Relación entre Ing. Trib. y Contrib. <u>Soc. y P.N.B.</u>
	12.2	0.8	13.0
	12.6	0.9	13.5
	12.7	1.1	13.8
	12.4	1.2	13.5
	11.5	1.3	12.8
	12.9	1.4	14.4
	12.2	1.6	13.8
	12.7	1.7	14.4
	12.7	1.8	14.5
	12.7	1.8	14.5
	12.3	2.0	14.4
	13.2	2.1	15.3
	13.5	2.2	15.6
	14.7	2.2	16.8
	14.4	2.6	16.9
	14.8	3.2	18.0
	15.8	3.2	19.0
	16.4	3.6	20.0
	16.2	4.1	20.3
	16.6	4.3	21.0
	16.5	4.3	20.7

BIBLIOGRAFIA

- ACUÑA VALERIO, Miguel. El 48. Imprenta Lehmann, San José, Costa Rica, 1974.
- AGUILAR BULGARELLI, Oscar. Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. Problemática de una década. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1969.
La Constitución de 1949. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1973.
- ALEJANDRE GARCIA, Juan. Temas de historia del Derecho: Derecho del Constitucionalismo y la Codificación I. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla 1978.
- ANONIMO. Nacionalización Bancaria en Costa Rica. Imprenta La Española, San José, Costa Rica, 1951.
- ARAYA POCHET, Carlos. Historia de los Partidos Políticos: Liberación Nacional. Editorial Costa Rica, San José Costa Rica, 1973.
- ARIAS SANCHEZ, Oscar. La Planificación y el Sistema Bancario Nacional. En Periódico La República, 14 de Diciembre 1973. San José, Costa Rica.
Los Grupos de Presión en Costa Rica. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1974.
- ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. Colección de Leyes y Decretos. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1949. Constitución Política de la República de Costa Rica. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1971.

Antecedentes, proyectos y reglamentos. T. I Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1951.

Actas de la Constituyente, Imprenta Nacional, San José Costa Rica, 1957.

BACKER, James. La Iglesia y el Sindicalismo Costarricense. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1975.

BAKER, Christopher. Asamblea Legislativa de Costa Rica, una evaluación preliminar de su función decisoria, en: Revista de Ciencias Jurídicas nº 18. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1973.

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Imprenta Nacional, sf.
Memoria anual, La Economía Nacional. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1969.

BARAHONA JIMENEZ, LUIS. Las ideas políticas en Costa Rica. Ministerio de Educación Pública, Departamento de Publicaciones. San José, Costa Rica, 1977.

BLANCO SEGURA, Ricardo. Monseñor Sanabria. 2ª ed. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1971.

BENAVIDES, Enrique. Nuestro pensamiento político en sus fuentes. Imprenta Trejos, San José Costa Rica, 1975.

- BIDART CAMPOS, Germán. Doctrina del Estado Democrático. - Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, Argentina, 1961.
- Filosofía del Derecho Constitucional. Editorial - Ediar. Buenos Aires, Argentina, 1969.
- BORRELL J. y MACIA. El intervencionismo del Estado en las - actividades económicas. Bosch. Barcelona, 1946.
- BURDEAU, Georges. La Democracia. 3ª ed. Ariel. Barcelona 1959.
- BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 2ª ed. Editorial Porrúa, 1976.
- BUSEY, L. James. Notas sobre la democracia costarricense. Editorial Costa Rica, San José Costa Rica, 1969.
- CALDERON GUARDIA, Rafael. Mensaje del Presidente de la República al Congreso Constitucional. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1942.
- CARVAJAL HERRERA, Mario. La Planificación en Costa Rica. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica, 1969.
- CARRO ZUÑIGA, Alfonso. Teoría del poder constituyente, teoría de la constitución y la constitución política - costarricense. En: Revista de la Universidad de Costa Rica, nº 13. San José, Costa Rica, 1956.
- CASARES, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española. 2ª ed. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1977.

- CERDAS CRUZ, Rodolfo. La crisis de la democracia liberal en Costa Rica, EDUCA, San José, Costa Rica, 1972.
- CESPEDES, Víctor. Costa Rica: la distribución del ingreso y el consumo de algunos elementos. Escuela de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Económicas.
- CONESA SANCHEZ, Fernando. Libertad de Empresa y Estado - de Derecho. Ediciones Rialp, S. A. Madrid, 1978.
- DENTON, Charles. La Política del desarrollo en Costa Rica. Novedades de Costa Rica, S. A. San José, Costa Rica 1969.
- DIAZ, Elias. Estado de Derecho y Sociedad democrática. 5ª ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973.
- DUVERGER, Maurice. Introducción a la Política. 3ª ed. Ariel, -- Barcelona, 1970.
- ENTRENA CUESTA, Rafael. Curso de Derecho Administrativo, 3ª ed. Tecnos, Madrid, 1970.
- FACIO BRENES, Rodrigo. La Constitución Política de 1949. En: Revista de la Universidad de Costa Rica, nº 13, San José, Costa Rica, 1956.
- Planificación económica en régimen democrático. Imprenta Lehmann, San José, Costa Rica, 1959.
- Estudio sobre la Economía Costarricense. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica, 1972.
- FERNANDEZ GUARDIA, Ricardo. La Cartilla histórica. Imprenta Lehmann, San José, Costa Rica, 1944.

FIGUERES FERRER, José. La Asignación familiar que se propone en Costa Rica. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1973.

Estos diez años. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1958.

La pobreza de las Naciones. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1973.

FORSTOFF, Ernst. Tratado de Derecho Administrativo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.

FUNDACION FOESSA. Efectos sociales queridos y no queridos - en el desarrollo español. Ediciones Euroamérica, Colección Síntesis. Madrid, 1968.

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos) En: Revista de la Administración Pública nº 38, Mayo-Agosto 1962.

GARCIA ESCUDERO, José María. Libertad de empresa y planificación, en periódico YA sección editoriales y colaboraciones, Madrid, 25 noviembre 1978.

GARCIA PELAYO, Manuel. Derecho Constitucional Comparado. - Edición mimeografiada, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica, 1970.

GIL PACHECO, Rufino. Ciento cinco años de vida bancaria en - Costa Rica. S. c. e. San José, Costa Rica, 1958.
La nacionalización bancaria. Editorial Eloy Morúa

Carrillo. San José. Costa Rica, 1962.

GIL ROBLES QUIÑONES, José María. Libertad de emisión del Pensamiento. Nueva enciclopedia jurídica, t. XV, SEIX, Barcelona, 1974.

GONZALEZ FLORES, Alfredo. La crisis económica de Costa Rica. Imprenta Trejos, San José, Costa Rica, - 1936.

GORDILLO, Agustín. La Planificación y el Poder Legislativo, en: perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX. Madrid, 1969, III.

GUIER ESQUIVEL, Fernando. La función presidencial en Centroamérica. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1973.

GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos. Libertad, Derecho y desarrollo político. En: Revista de ciencias Jurídicas nº 1 Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho, 1963.

Costa Rica, Constitución Política anotada, Equidad de Centroamérica S. A. San José, Costa Rica, 1975.

HERNANDEZ VALLE, Rubén. Lecciones de Derecho Constitucional Costarricense. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica, 1974.

JELLINEK Walter. Alemania como Estado de Derecho. En: Revista de Administración Pública nº 6 Septiembre-Diciembre 1951. Madrid.

JIMENEZ DE PARGA, Manuel. Los regímenes políticos contemporáneos. Editorial Tecnos. Madrid, 1974.

JIMENEZ ORTIZ, Manuel. El problema constitucional de Costa Rica. Imprenta La Nación, San José, Costa Rica, - 1949.

JIMENEZ, MARIO. Obras completas. 2 vols. Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1962.
Desarrollo constitucional de Costa Rica, 2ª ed.
Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1973.

JIMENEZ, Mario y otros. ¿Una nueva Constitución? Ediciones Juricentro S. A. San José, Costa Rica, 1977.

JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPUBLICA. Proyecto de Constitución Política. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1949.

LA GACETA. Ley de Impuestos sobre la Renta. Imprenta Nacional. San José, Costa Rica, 1971.

LANGE, Oskar. Ensayos sobre planificación Económica, Ariel. Barcelona, 1970.

LARES MARTINEZ. Estado de Derecho y democracia social en Venezuela. En: Perspectivas de Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX. Madrid, 1969. III.

LASALLE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución? 2ª ed. ariel, Barcelona, 1976.

LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. El Estado de Derecho en: Revista - de Administración Pública, nº 6. Sept. Dicbre. 1951. Madrid.

Socialización, administración. Desarrollo. Instituto de Estudios Políticos. Biblioteca de cuestiones actuales, Madrid, 1971.

LIZANO, Eduardo. Comentarios sobre la economía nacional. Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica. 1971.
El mercado común y la distribución del ingreso. EDUCA, San José, Costa Rica, 1970.

LOMBARDO, Heracleo. Análisis de una economía agrícola en la meseta central de Costa Rica. Editorial Costa Rica San José, Costa Rica, 1965.

LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Ediciones Ariel Barcelona, 1964.

MARTIN RETORTILLO, S. Presupuestos políticos y fundamentación constitucional de la planificación administrativa. En: Perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX. Madrid, 1969.

MELENDEZ CHAVERRI, Carlos. La Constituyente de 1949. En: Antología de Historia de las Instituciones de Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Departamento de Publicaciones. San José, Costa Rica, 1969.

MERSAN. Perspectivas del Derecho Público en la Segunda Mitad del siglo XX. Madrid, 1969.

MOMIGLIANO, Franco. Sindicatos, Proceso técnico, Planificación Económica. Ediciones Península. Barcelona, 1969.

MONGE ALFARO, Carlos. Historia de Costa Rica. 13ª ed. Imprenta Trejos. San José, Costa Rica, 1974.

MONTEALEGRE, Mariano. Café: piedra angular de la estructura económica, política y social de Costa Rica. En: Revista del Instituto de Defensa del café, nº 17. San José, Costa Rica, 1947.

MUÑOZ AMATO, Pedro. Introducción a la administración pública. 4ª ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1966.

OBREGON LORIA, Rafael. El Poder legislativo en Costa Rica. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1966. Conflictos militares y políticos de Costa Rica, Imprenta La Nación, San José, Costa Rica, 1951.

OFICIAL. Colección de Leyes y Decretos. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1974.

OFICINA DE PLANIFICACION. El desarrollo económico-social - de Costa Rica en el período 1978-1982 sce. San José, Costa Rica, 1978. (Previsiones y recomendaciones)

Plan Nacional de Desarrollo, Diagnóstico. Presidencia de la República, San José, Costa Rica, 1977. Plan Nacional de Desarrollo, Sectores Productivos Presidencia de la República, San José, Costa Rica 1977.

Plan Nacional de Desarrollo, Sector Público, Presidencia de la República, San José, Costa Rica, 1977. Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia y plan global, Presidencia de la República, San José, Costa Rica, 1977.

ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Costa Rica: Estado social de Derecho.

En: Revista de Ciencias Jurídicas, nº 29. Mayo-Agosto 1976, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica.

Los privilegios de la Administración Pública. En: Revista de Ciencias Jurídicas nº 23, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, - Costa Rica, 1974.

De la descentralización pública. En: Revista del - Colegio de Abogados, nº 128. San José, Costa Rica, 1956.

ORTUÑO SOBRADO, Fernando. El Monopolio Estatal de la Banca en Costa Rica. Imprenta Trejos. San José, Costa Rica, 1963.

OULES, Fermín. Democracia y Planificación económica. Ediciones Mensajero, Biblioteca de Fomento Social, Bilbao, 1971.

PACHECO LEON. Evolución del pensamiento democrático en Costa Rica. En: Revista Combate nº 15, San José, Costa Rica, 1961.

PERALTA, Hernán. Las Constituciones de Costa Rica. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962.

PERIODICO LA NACION. San José, Costa Rica.

PERIODICO LA REPUBLICA, San José, Costa Rica.

PREBISCH, Raúl. Comercio, ayuda al exterior y desarrollo. Agencia de información de los EE. UU., San José, Costa Rica.

Rica, 1971.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, 19ª ed. Editorial Espasa Calpe, S. A. Madrid, 1970.

SABINE, Georges. Historia de la teoría política, 5ª reimpresión. Fondo de Cultura Económica, México, 1972.

SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Estado de Derecho y Hacienda Pública: en Revista de Administración Pública, nº 6, septiembre-diciembre. 1951, Madrid.

SANCHEZ AGESTA, Luis. Curso de Derecho Constitucional Comparado. 6ª ed. revisada, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, Madrid, 1976.

La Antítesis del desarrollo, constitución, desarrollo, planificación. Biblioteca de cuestiones actuales Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1976.

Principios de Teoría Política. 6ª ed. revisada. Editora Nacional, Madrid, 1976.

Historia del Constitucionalismo español. Centro de Estudios Constitucionales, 3ª ed. revisada, Madrid 1978.

Documentos Constitucionales y textos políticos, Editora Nacional, Madrid, 1975.

SISTEMA BANCARIO NACIONAL. Comentarios sobre el sistema bancario nacional. Comisión de coordinación bancaria, San José, Costa Rica, 1967.

SOLEY GUÉLL, Tomás. Historia económica y hacendaria de Costa Rica. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1947.

STONE, Samuel. La Dinastía de los Conquistadores, la crisis de poder en la Costa Rica contemporánea, 2ª ed. EDUCA, Colección seis, San José, Costa Rica, 1976.
Los Cafetaleros. En: Revista de ciencias Jurídicas nº 13, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica, junio 1969.
Algunos aspectos de la distribución del poder político en Costa Rica. En: Revista de ciencias Jurídicas nº 17, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica, Julio-1971.

TORRES, Edelberto. Interpretación del desarrollo social Centroamericano. EDUCA, San José, Costa Rica, 1970.

TREJOS FERNANDEZ, José Joaquín. Ocho años de la política Costarricense. Editorial Hombre y Sociedad, San José Costa Rica, 1973.

WEISENFELD, Lorin. La Ley de protección industrial. En: Revista de Ciencias Jurídicas, nº 14. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica, 1969.

ZELEDON, Marco Tulio. Breve resumen de las innovaciones introducidas en la Constitución de 1949. En: Antología — de la historia de las instituciones de Costa Rica. Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1962.

Historia Constitucional de Costa Rica en el bienio 1948-49. Imprenta La Nación, San José, Costa Rica, 1950.

La Constitución Política de 1949, Ensayo de Derecho Político, S. C. E. San José, Costa Rica, 1949.
Lecciones de ciencia Constitucional y Constitución Política de Costa Rica. Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1945.

ZUMBADO, Fernando. Asignaciones Familiares en Costa Rica. Universidad de Costa Rica, CESPO, San José, Costa Rica, 1974.

— INDICE GENERAL

	<u>Pág.</u>
INTRODUCCION	1
PRIMERA PARTE: <u>Fundamentos doctrinarios del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica.</u>	7
CAPITULO I: <u>Antecedentes históricos del artículo 50</u>	8
A) Evolución del artículo 50 de la Constitución Política hasta el año 1942.	9
B) Desde las reformas de 1942 hasta el presente	21
CAPITULO II: <u>Análisis dogmático del artículo 50 de la Constitución Política</u>	33
A) La moderna concepción de la Constitución	39
B) La naturaleza de las normas Constitucionales	41
C) Posibilidad de calificar a Costa Rica simultáneamente como Estado de Derecho y Estado Intervencionista con base en el artículo 50 de la Constitución.	47
1. - Postulados del Estado de Derecho y su consagración positiva en nuestra Constitución.	53
2. - Principios del Estado Intervencionista y su consagración en la Constitución Política	65
SEGUNDA PARTE: <u>La aplicación y actuación del artículo 50 en nuestra Praxis Constitucional</u>	75
Introducción	76

CAPITULO III: <u>La Nacionalización Bancaria en Costa Rica</u>	79
A) Antecedentes históricos	80
B) Fines y Fundamentos doctrinarios de la nacionalización bancaria.	83
C) Alcances, realizaciones y proyecciones de la Banca Estatal Nacionalizada	93
CAPITULO IV: <u>La Planificación en Costa Rica</u>	104
Introducción	105
A) Aspectos Generales	108
1. - Concepto de la planificación	108
2. - El Procedimiento de la Planificación en Costa Rica	115
a) Formulación del plan.	116
b) Discusión y aprobación del Plan	117
c) Ejecución del Plan	119
d) Control y evaluación de los resultados del Plan	119
3. - Antecedentes históricos de la Planificación en Costa Rica.	120
B) La Planificación en el Derecho Positivo Costarricense	124
1. - Planificación, Constitución y Autonomía Institucional	124
2. - Algunos aspectos importantes de la Ley de Planificación.	128
3. - Plan Nacional de Desarrollo	133
CAPITULO V: <u>La distribución del Ingreso y la Estructura Impositiva Costarricense</u>	146
A) Aspectos Generales de los Impuestos	147

Introducción.	147
Progresividad y regresividad de los Impuestos	151
B) El problema de la distribución de los ingresos	153
1. - El impuesto sobre la Renta en Costa Rica	155
a) Antecedentes históricos	155
b) Evolución de la aplicación del principio de progresividad del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica	156
2. - Algunos aspectos jurídicos importantes de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente	158
C) Gráfico de las escalas del impuesto sobre la — Renta en Costa Rica	163
CAPITULO VI: <u>Las Asignaciones Familiares en Costa Rica</u>	165
A) Fundamentos doctrinarios de la Ley	166
B) Análisis de la Ley	173
C) Objetivos y aspectos básicos del Plan de Asigna- ciones Familiares	176
D) Problemas y objeciones al Plan	179
E) Las Asignaciones como medida redistributiva	183
CAPITULO VII: <u>La Ley de Protección y de Desarrollo Industrial</u>	185
Introducción	186
A) Objetivos de la Ley de Protección y de Desarrollo Industrial	193
B) Aspectos relevantes de la Ley de Protección y de Desarrollo Industrial	195

<u>CONCLUSIONES</u>	206
<u>APENDICES</u>	215
1. - Proyecto de Ley presentado por el Sr. Diputado Genaro Valverde Marín, a la Asamblea Legislati <u>v</u> va para la reforma de unos artículos del Código de Comercio.	216
2. - Ley de Planificación	230
3. - Ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Di- rectivas de las Instituciones Autónomas	242
4. - Reglamento de la Ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas de las Instituciones Autó <u>m</u> nomas.	251
5. - Ley de Protección y Desarrollo Industrial	257
6. - Reglamento de la Ley de Desarrollo Industrial	282
7. - Encuesta realizada a 20 Empresas costarricenses	320
8. - Comentario a las encuestas	361
9. - Cuadros Económicos (Crecimiento de la Agricultu- ra e Industria; Cargas Tributarias y Renta)	364
<u>BIBLIOGRAFIA</u>	369